(PRIMER PREMIO DEL "CONCURSO ESCOBARI" DE 1915)

I.--LAS FINANZAS COLONIALES

II.--ORGANIZACION DE LAS FINANZAS DE LA REPUBLICA ::

III.--DE BELZU A DAZA - - - -

TALLERES GRAFICOS "MARINONI"
:: :: DE ANDRES CHIOCCHETTI :: ::

LA PAZ = BOLIVIA
:: :: AÑO MCMXVI :: ::

332.1084
R741h
54

HISTORIA FINANCIERA

DE

BOLIVIA

PROLOGO

Al llamamiento que hizo la Universidad de La Paz para el primer certamen científico, instituído por el que fué Dr. Macario D. Escobari, se presentaron numerosos trabajos científicos, literarios y artísticos, entre los que mereció el primer premio la obra sobre historia financiera boliviana que contiene esta edición.

Ningún prólogo a la obra premiada será más oportuno y legítimo que el dictamen del jurado, compuesto del catedrático de Economía Política y Finanzas de la Facultad de Derecho de La Paz, Dr. Luis Zalles Calderón, y del Director del Colegio Nacional «Ayacucho», Dr. Felipe Esprella, a quienes tributa el autor, en estas líneas, su reconocimiento por la bondadosa crítica que contienen los informes que se leerán a continuación. Asimismo, rinde sus homenajes al Consejo Universitario, cuyo alentador veredic-

to importa la más grata recompensa a que puede aspirarse.

Permitirá también el lector que, a estas líneas, añada el favorecido otras, no menos sinceras, de gratitud y afecto al hogar intelectual que supo guiar sus primeros pasos, al noble campanario que le amparó en horas inolvidables, y le dirige hoy, por órgano de sus más autorizados representantes, una delicada frase de aliento contenida en este despacho telegráfico:

«A nombre de Cochabamba, felicitamos por brillante triunfo obtenido en concurso científico «Escobari».—*Rodolfo Montenegro, Prefecto accidental; Jorge Galindo, Presidente del Concejo Municipal; Rafael Canedo C., Rector de la Universidad*».

INFORME DE LOS MIEMBROS DEL JURADO EN EL CONCURSO «ESCOBARI»

La Paz, a 19 de abril de 1915.

Al Señor Rector de la Universidad de La Paz,

Presente.

Señor Rector:

Favorecido con la honrosa comisión de abrir dictamen como miembro del jurado, en los trabajos

de carácter financiero presentados en el concurso «Escobari», me es grato expresar a usted que en aquella calidad he estudiado con la atención que el caso requiere la obra verdaderamente meritoria titulada «Ensayo de Historia Financiera de Bolivia», por Caro.

Raras veces se presentan trabajos de esta naturaleza referentes a la Economía y a las Finanzas nacionales: el trabajo de Caro puede reputarse, y en mi concepto es así, el estudio más completo que hasta la fecha se haya hecho al respecto. Sin quitar su mérito a las diferentes publicaciones existentes en la República acerca de sus finanzas, el «Ensayo de Historia Financiera de Bolivia» es un estudio completo que abarca la organización incaica, la de la época del coloniaje y la de la República hasta la administración del general Daza inclusive.

La parte de las finanzas de la época incaica, como es fácil comprender, es deficiente, tanto por razón de la escases de documentos referentes a la época, cuanto porque en ese régimen de comunismo agrario, en que las tierras pertenecían por derecho divino al inca, y en que la principal forma de impuesto era la prestación personal, las leyes económicas que rigen el mundo moderno constituído sobre la base de la libertad y de la propiedad individuales, no han podido tener su desenvolvimiento completo. Sin embargo, el «Ensayo» contiene un resumen de la organización primitiva comprendiendo cuanto conocemos del Tahuantinsuyo.

Con mayores datos y mejores documentos, la parte relativa al coloniaje se presenta en la obra de

Caro en una forma más completa y científica, comprendiendo cuatro capítulos referentes a la minería y al régimen monetario, al régimen social y agrario, al comercio y a los impuestos y, finalmente, a la administración financiera. La época incásica y la del coloniaje, han sido contempladas por Caro en la primera parte de su obra, abarcando aquélla el capítulo primero, y ésta el segundo, tercero, cuarto y quinto.

El estudio de las fiinanzas de la República, ha sido dividido en el Ensayo en dos partes: Organización de las Finanzas de la República, y de Belzu a Daza.

Para cada una de las administraciones que desde la fundación de la República se han sucedido hasta la del general Hilarión Daza, el autor del «Ensayo de Historia Financiera de Bolivia» ha hecho un estudio del movimiento económico y financiero correspondiente, con precisión y con abundancia de datos verdaderamente encomiable. No se detiene en minuciosidades, pero tampoco se le escapa ninguno de los hechos salientes que por su carácter económico y por la influencia que han podido ejercer en la marcha financiera de esas administraciones, sea digno de mencionar.

Cada administración ha sido examinada por Caro en lo tocante al presupuesto, a la deuda pública, a las obligaciones contraídas por el Estado, al comercio, al régimen y a los derechos aduaneros, al sistema monetario, etc. Es principalmente en lo que se refiere a los distintos sistemas monetarios que desde la época del coloniaje hasta la guerra del Pacífico nos han regido, donde Caro ha hecho gala de conocimientos fundamentales en la materia.

El «Ensayo de la Historia Financiera de Bolivia» no contiene simplemente la relación o enumeración de los actos legislativos o gubernamentales o de los hechos producidos con relación a las finanzas nacionales; contiene también apreciaciones sobre los fenómenos económicos que se han producido y, a mi juicio, tales apreciaciones se hallan conformes con la verdad científica.

Tal es el informe que tengo el honor de presentar acerca del «Ensayo de Historia Financiera de Bolivia» de Caro; es la traducción fiel de la impresión favorable que su lectura me ha causado. Sin embargo, he de permitirme dos observaciones que, si bien no afectan al fondo mismo ni a la bondad de la obra, sería de desear que el autor las tomara en cuenta:

1ª—Al tratar de la moneda y de las diversas reformas que se han introducido en el sistema monetario, Caro se atiene constantemente al sistema español que es el de origen. Es verdad que al comienzo de su obra ha establecido la equivalencia y hecho la reducción al sistema decimal; pero sería de desear que toda vez que se indica el peso o ley en las monedas de acuerdo con el sistema genuino, se indique entre paréntesis la equivalencia con el sistema decimal: esto facilitaría la lectura y evitaría la frecuencia de cálculos, que aunque sean mentales, son siempre incómodos para determinar el equivalente. (1)

2ª—Se advierte que la aridez de la materia ha fatigado al autor al final de la obra, y así se ve que

(1)—Ha sido llenada en el texto la acertada indicación hecha.

en el *capítulo octavo* de la tercera parte, se han incorporado apreciaciones que mejor habrían estado fuera de ella. Me refiero a los párrafos que Caro dedica, con razón o sin ella, al Ministro Salvatierra, y especialmente a la nota de la página 373: nada aprovechan las finanzas nacionales y desdice de la rigidez inherente a trabajos de esta índole, la inserción del soneto corriente en la página 373. (1)

Al concluir creo que el «Ensayo de Historia Financiera de Bolivia» por Caro, es una obra de mérito

---

(1)—Con todo el respeto que nos merece la opinión del Dr. Zalles, haremos notar en este punto, que el conocido soneto del Sr. Ricardo Bustamante, es un documento revelador del criterio de la época, que ningún cronista sabría desdeñar. Y es tanto más valioso este documento, cuanto que, junto con una extensa crónica del banquete dado en honor del Ministro Sr. Salvatierra, sirvió de prólogo a la Memoria de Hacienda de 1877. Dadas estas condiciones, se ha creído cumplir un deber de estricta fidelidad histórica al insertar el soneto en una nota fuera del texto.

Por lo demás, el verso del Sr. Bustamante no será un caso único en las áridas páginas de un libro de finanzas. René Stourm en su libro *Les Impóts*, trascribe el siguiente verso tomado de «Las Dos Reinas de Francia», 4º acto:

LE JONGLEUR

Mais cela va de soi! C'est la loi de l'impót!
L'impót ressemble fort au chiendent! Dans un pot,
En plein champ, au soleil, au froid, á la rafale,
Il prospére partout..... grandit partout..... s'étale
En toute climature!..... Un ennemi survient?
L'impót monte! L'on part pour la croisade?
Impót!..... On en revient? Impót!..... Le temps malade
Fait tout sécher? Impóts! Fait tout moisir? Impóts!
Guerre! inondation! grand trouble! grand repos!
Impóts! Impóts! Impóts! Et le beau, dans l'espéce,
C'est qu'une fois monté jamais l'impót ne baisse;
La *cessante causá* perd son droit en ce cas,
Et la cause cessant, l'effet ne cesse pas!
C'est comme une cométe á lumiére constante,
Ou ce qu'on nomme un arbre a feuille persistente!
Bourgeons l'été! l'hiver, bourgeons du haut en bas!
Les jeunes poussent, mais les vieux ne tombent pas!
Flot de séve incessante! éternelle verdure!
Et cela dure ainsi depuis que l'Etat dure!
Nos ancétres l'ont vu jadis, et nos enfants
Le reverront, je gage, encore dans cinq cents ans!

(Les Deux Reines de France, 4e. acte).

y formulo mis votos porque los poderes públicos subvencionen, si el autor no dispone de medios para hacerlo, la edición de la obra a fin de divulgar en la República conocimientos que hasta hoy han quedado como privilegio de unos pocos.

Ofrezco a usted, señor Rector, las seguridades de mi más distinguida consideración, y me suscribo su muy atento y

S. S.

Luis Zalles C.

La Paz, 26 de marzo de 1915.

Al Señor Rector de la Universidad,

Presente.

Señor:

He leído con la atención que se merece la obra «Ensayo de Historia Financiera de Bolivia», presentada al «Concurso Escobari» por Caro.

Dicha obra merece ser considerada para la asignación del «Premio Escobari», teniendo en cuenta las siguientes razones:

1ª—La materia tratada en dicha obra es netamente nacional.

2ª—Es un primer y feliz ensayo de historia de las finanzas bolivianas.

3ª—Su importancia es indiscutible, si se tiene en cuenta, lo trascendental de la materia.

4ª—Contiene datos preciosos para las finanzas nacionales.

Por lo demás, me hallo de acuerdo con la opinión ilustrada del profesor del ramo, Dr. Luis Zalles C.

Atto. y S. S.

J. Felipe Esprella.

INTRODUCCION

No es tarea fácil escribir sobre historia política o financiera cuando no se tienen los materiales acumulados de antemano por una concienzuda investigación. En Bolivia falta esta labor preparatoria y fundamental, particularmente en materia de finanzas, que es la que menos atracción ha ejercido en el espíritu de nuestros hombres de letras. En estas condiciones, toda obra de síntesis histórica tiene que ser deficiente; y el que estas líneas escribe no se hace ilusiones acerca de la importancia de su trabajo: reconoce que las deficiencias son mayores, por lo mismo que él abarca una época relativamente lejana, y de la que no ha llegado a nuestros tiempos ni mucha ni muy importante documentación.

Empero, cualesquiera que sean los defectos de esta obra, nueva en su género, válgale la bue-

na intención que la ha inspirado. Será un punto de partida para trabajos ulteriores, y sus datos servirán, en modesta escala, de material acumulado para facilitar la tarea de los que quieran estudiar las finanzas bolivianas, buscando las causas que han influído en su desarrollo, o han determinado sus extravíos y estancamiento.

«Para comprender bien la historia de los pueblos, ha dicho Guizot, es preciso sentarse largo tiempo al borde de su cuna, y seguirles paso a paso hasta su ingreso al camino común».

No sería completo el estudio financiero de un país si sólo se refiriera a la actualidad viviente, que, en suma, no es sino el fruto del pasado muerto, o del pasado que supervive. Fuerza es, por tanto, conocer el proceso histórico que desde la cuna ha seguido su organización financiera, para comprender mejor el presente y eslabonarlo al porvenir.

La fuente común de las instituciones políticas y financieras de Bolivia está en la antigüedad colonial. Apenas habrá en nuestros tiempos alguna fórmula de administración, algún método financiero o sistema rentístico, que no tenga sus orígenes en la dominación española o en los primeros años de la República. Por lo mismo es preciso estudiar esa época para apreciar las cau-

sas, las razones, los impulsos, las finalidades y hasta las idiosincracias personales que determinaron el manejo de la hacienda pública.

La ley de la solidaridad forma una maraña inextricable en la vida humana. «Todos los sistemas financieros de los Estados modernos—ha dicho Etienne Martin—son el producto de múltiples y variadas experiencias, frecuentemente dolorosas. Y los procedimientos fiscales que se encuentran actualmente en un pueblo, tienen casi siempre sus orígenes en una de las medidas, más o menos empíricas, adoptadas en el curso de su desenvolvimiento histórico». (1). Y Bastable ha agregado en su *Public Finance:* «La revolución más violenta no puede romper realmente ese ligamen con el pasado».

Este pequeño ensayo financiero es una confirmación de tales verdades. La República no ha podido romper las líneas que le sujetan al coloniaje. El militarismo, el populacherismo y el caudillaje, han persistido al través de todas las evoluciones, apesar de que sus corifeos habían dejado ya la escena política.

Tres períodos bien caracterizados comprende esta obra: El primero se refiere a las finanzas

---

(1)—Etienne Martin.—«Histoire Financiére et Économique de l' Anglaterre». —1912.

del coloniaje, fuente común de las instituciones de la América española. Le sigue el período de organización republicana durante los gobiernos de Sucre, Santa Cruz y Ballivián. Después viene el caudillaje con pequeños intervalos de buen sentido, y termina con Daza en la terrible expiación de 1879.

Un segundo libro contendrá las finanzas contemporáneas.

C. R.

La Paz, Enero de 1915.

PRIMERA PARTE

LAS FINANZAS COLONIALES

CAPÍTULO I

DEL COMUNISMO A LA ESCLAVITUD

El régimen agrario del Tahuantinsuyu.—Rescate de Atahuallpa.—Las primeras monedas.—Repartimientos, encomiendas y tercios de la corona.

El régimen económico y financiero del Tahuantinsuyu, estaba fundado en un comunismo agrario, que había asegurado la subsistencia holgada de los súbditos del Sol.

Las tierras pertenecían al inca por derecho divino. Él las mandaba distribuir equitativamente cada año entre los jefes de familia, de modo que nadie quedara sin parcela.

La prestación personal era la principal forma de impuesto. Los súbditos cultivaban las tierras del trono y las del Sol, y concurrían a los trabajos públicos, recibiendo, en cambio, ropa y alimentos de los almacenes fiscales.

En ellos se guardaban las cosechas para el consumo de la corte, de los sacerdotes y del ejército. De allí se distribuían los víveres al pueblo cuando la producción había sido menguada, y también las semillas que necesitaban los nuevos jefes de familia en las reparticiones anuales que seguían a los matrimonios, los cuales eran obligatorios para los púberos y se realizaban en determinadas épocas del año.

Las comarcas productoras de oro, plata y cobre, daban tributo al inca en especie, «y lo sacaban cada uno de su tierra sin ir a la ajena.....» (1).

No era conocida la moneda, y las transacciones se hacían mediante el trueque directo de especies, a cuyo fin se realizaban ferias periódicas, que siendo la característica del régimen comercial de los pueblos primitivos, era la única forma en que podían satisfacerse las escasas necesidades del cambio en una sociedad de cultura embrionaria y sin aspiraciones, que contaba con todo lo necesario para su subsistencia animal.

Este comunismo patriarcal, cuya moral privada y pública estaba condensada en la fórmula negativa de la salutación de las gentes al encontrarse—*Ama-llulla, ama-kella, ama-suhua* (no seas mentiroso ni perezoso ni ladrón)—había asegurado la vida material del pueblo que, libre de cuidados, se entregaba a las faenas de la tierra con mansedumbre de acémila; pero también, al haber suprimido el aguijón de la propia necesidad, había anulado el desarrollo de las fuerzas

(1) Biblioteca Nacional de Madrid. Volumen J. 133 Num. 2010.—Documento publicado en el tomo VIII del Alegato peruano en la cuestión de límites con Bolivia.

creadoras del individuo, imposibilitando todo progreso económico y social.

La conquista de los dominios del inca, no tuvo el brillo de las proezas guerreras. Fué una tarea fácil de apropiación de las tierras y riquezas en nombre de los reyes de España, y una sumisión inconsciente de los conquistados que, en verdad, tenían escasa aptitud para darse cuenta de su nueva situación política y social.

Apresado Atahuallpa en Cajamarca, ofreció para su rescate tanto oro cuanto cupiera en la prisión donde se hallaba. Descartada la parte de novela que los cronistas españoles alimentaron para ponderar la importancia de este primer botín de guerra, resulta que en junto el rescate alcanzó a 3.000.000 de pesos de á ocho reales, de los que correspondió la quinta parte al rey de España. (1).

Según otros cálculos, fueron 40.865 marcos de plata y 971.125 pesos oro (2), los que reducidos a pesos castellanos de 450 maravedises, usados en aquella época bajo la denominación de "ensayados", arrojarían 1.267.084 pesos 9 reales 16 maravedises, o sean 2.096.279 pesos 6 reales y 30 maravedises, tomando por unidad de cálculo el peso de ocho reales, corriente en el siglo XVI conforme a las pragmáticas de Felipe II.

---

(1)—La prisión de Atahuallpa medía 17 pies y medio de ancho y 22 de largo por 9 de altura, que se colmó de metales preciosos. Deducido el quinto real, se calcula que cada soldado recibió alrededor de 9.000 pesos, sumando 1.528.500 pesos el rescate total, según los datos del Diccionario Espasa, o sean 3.122.000 pesos de 8 reales.

(2)—"Historia de Bolivia" por Ordóñez López y Crespo.

Dueños Pizarro, Almagro y los suyos de estos cuantiosos caudales, siguieron con más tesón sus fabulosas conquistas, y pronto descubrieron las tierras del Collao, que Almagro las cruzó de parte a parte, sin haber encontrado a la vista, los montones de oro con que soñaba su imaginación de aventurero, avivada por las fantásticas referencias de los indios.

Poca o ninguna fué la moneda que trajeron de España los conquistadores. El botín de Cajamarca acrecentado por los saqueos del Cuzco, de los templos del Sol y de las "huacas", constituyó en realidad su primera riqueza metálica, que a falta de cuños fué puesta a la circulación en lingotes o barras con las iniciales de Pizarro. Más tarde, para regularizar el cobro de los *quintos* del rey, se hicieron a martillo los tejos, que llevaban la cruz de Malta por único sello.

En aquellas sociedades de aventura, tres o cuatro millones de pesos puestos de golpe en circulación, debieron haber ocasionado un grave trastorno económico, o creado un régimen de derroche forzado, haciendo honor a la teoría cuantitativa de la moneda.

Los cronistas de la época confirman esta presunción. Francisco de Xerez asegura que "vió comprar un caballo por 1.500 pesos, que no era el precio común de ellos, una capa por 100 y 120 pesos, una espada por 40 o 50 pesos".

"La cosa llegó a que si uno debía a otro algo, le daba un pedazo de oro a bulto sin pesar, y aunque

le diese el doble de lo que le debía, no se le daba nada, y de casa en casa andaban los que debían con un indio cargado de trozos de plata y oro, buscando a los acreedores para pagar lo que debían". "Nadie cuidaba de entregar la cantidad precisa, importándole poco al deudor pagar demás y al acreedor recibir de menos" (1).

Regularizada la situación política de los conquistadores mediante títulos, nombramientos y adjudicaciones otorgados por Carlos V, comenzó la apropiación de las tierras en grandes extensiones, según la importancia de las conquistas realizadas o de los descubrimientos hechos.

A esas apropiaciones se dió el nombre de *repartimientos*, que son el origen del régimen agrario de la época colonial y, por consiguiente, de la constitución de la propiedad territorial de nuestros días.

No sólo fueron repartidas las tierras, sino también los indios bajo el nombre de *encomiendas* y *tercios de la corona.*

La "encomienda" consistía en una cantidad de aborígenes entregados a determinadas instituciones o personas particulares para su servicio, so pretexto de protección y educación de esos infelices, que de modo tan pérfido pasaban a la esclavitud más dura.

Los "tercios de la corona" fueron también reparticiones de indios para los quehaceres del servicio público o de los funcionarios de la administración.

A los generosos empeños de Bartolomé de Las Casas se debió la supresión, siquiera aparente, de es-

(1)—"Verdadera relación de la conquista del Peru" por Francisco de Xerez.

ta especie de contribución de sangre y de aquella descarada esclavitud, que junto con las *mitas* que posteriormente se establecieron, constituyen la ignominia más grande de la conquista española.

Se ha dicho, es verdad, que los métodos coloniales de la Gran Bretaña fueron más inhumanos porque estaban fundados en el exterminio de las razas autóctonas. La comparación de ambos sistemas serviría apenas para medir sus grados de monstruosidad, mas no para deducir una disculpa en favor de ninguno. Y, después de todo, no se sabría decir si era preferible exterminar a los indios, o esclavizarlos durante tres siglos.

CAPITULO II

LA MINERIA Y EL REGIMEN MONETARIO

Carácter precario y forzado de la obra colonizadora.—Descubrimiento de las minas de Potosí.—La «mita» y los «mingas». —Los quintos de oro y plata.—Las "huacas" o tesoros.— El derecho de Cobos.—"Banco de San Carlos".—La Casa de Moneda.—Derecho de señoreaje y costo de acuñación.—El monto de la producción de la plata.

La causa eficiente de las exploraciones y conquistas de las tierras del Collao, que después formaron la Audiencia de Charcas y actualmente la República de Bolivia, fué la codicia de oro que dominaba a los conquistadores y a los que después les siguieron atraídos por la fama de las riquezas de las Indias Occidentales y, particularmente, de las de la Villa Imperial de Potosí, cuyas explotaciones mineras tuvieron influencia mundial en la economía de aquellos tiempos.

No fué el propósito de colonizar, de establecerse en estas tierras, de formar en ellas un hogar y una nueva patria trasunto de la nativa, lo que atrajo a los españoles del siglo XVI, y sucesivamente hasta

principios del XIX. Fué simplemente el afán de «hacer su América» del modo más rápido, de recoger a manos llenas las onzas de oro y los tejos del Potosí, sembrados en los campos de la leyenda, y regresar de prisa, con la preciosa carga, a la tierra castellana para vivir holgadamente, y volver después a las «Indias», si acaso quedaban menguados los primeros caudales.

Fácil es suponer que con este criterio no podía realizarse obra propiamente de colonización. No venían los gallegos, andaluces y asturianos a colonizar, sino a enriquecerse y marcharse en seguida a la tierra nativa.

Se nota la influencia perniciosa de este criterio en todas las instituciones de la época. La organización social, el régimen agrario, los trabajos mineros, todo cuanto se hizo durante la dominación española, o tenía un carácter precario, o no llevaba otro fin que el de sacar el mayor provecho presente, sin vistas al porvenir, esquilmando las minas lo mismo que las gentes.

Y como las instituciones financieras y económicas de la República, han evolucionado lógicamente continuando el proceso de la época colonial, no han podido substraerse por completo a la acción de su viciosa génesis, y han seguido casi siempre los viejos moldes del virreinato y de la audiencia.

Si no todas, la mayor parte de las instituciones actuales de Bolivia en lo económico y financiero, tienen, pues, sus orígenes en los tres siglos de dominación española. Fuerza es, por lo mismo, estudiar esa época para comprender mejor el presente, y

conocer los impulsos, las situaciones, las finalidades a que obedecieron las diversas medidas de la corona, siguiendo el proceso económico, casi siempre doloroso, de los súbditos del Sol y de los mestizos y criollos, que hubieron de compartir la suerte común a despecho de todos los prejuicios de casta, estrechamente vinculados por la suprema ley de la solidaridad económica.

Fué, pues, la minería la causa de la conquista de las tierras del Collao, y aun puede decirse que fué esa la única razón de existencia de los pueblos que después se formaron y han constituído la República de Bolivia.

Entre los hechos industriales del siglo XVI que ejercieron influencia decisiva en la economía y la suerte de estas comarcas, merecen citarse los descubrimientos de los lavaderos de oro del Chuquiapu, Chuquiaguillo y otros ríos, y de los ricos minerales de plata de Oruro, Porco y Tupiza.

Muy especialmente, el descubrimiento de los portentosos filones de plata del cerro de Potosí, el año 1545, se impuso como un hecho fundamental para determinar el desarrollo de las provincias de Charcas, dando nacimiento a un gran centro de actividad económica, como fué la Villa Imperial de Potosí, que llegó a tener hasta 160.000 habitantes, cifra que no han alcanzado aún las ciudades actuales de Bolivia no obstante de que su prosperidad está basada en factores múltiples de primer orden.

El censo mandado levantar por el virrey Toledo el año 1573, arrojó 120.000 habitantes. El año 1611

se hizo un empadronamiento esmerado por el licenciado Bejarano, y se cifraron 150.000 almas. El presidente D. Francisco de Nestares y Marín mandó levantar otro censo en 1650, que hizo subir la población a 160.000 habitantes. Esta cifra había bajado a 60.000 el año 1705, en que escribió su historia de Potosí D. Bartolomé Arzay Sánchez y Vela.

Cuenta la tradición que un pastor indígena—Diego Huallpa—al preparar su alimento en las faldas del cerro, notó que reverberaba entre las cenizas una sustancia extraña, que no era otra que la plata nativa puesta en fusión por el calor de la lumbre.

Otros cronistas aseguran que al arrancar un arbusto el indio Huallpa, quedó en descubierto un maravilloso filón, que algún tiempo explotó a hurtadillas este novelesco personaje, a quien debía habérsele erigido una estatua de plata en la cumbre del mismo cerro.

Al año siguiente fué fundada, la ciudad que llegó a tener fama universal y harto bien merecida. De las entrañas de aquel cerro prodigioso, hecho todo él de plata por un capricho de la geología, salieron millones inagotables para alimentar los derroches de la «siempre urgida corona de España».

La ciudad de Potosí mereció el dictado, concedido por Carlos V, de «Villa Imperial», que pueblo alguno alcanzó en los vastos dominios del siglo de oro de España, «donde no se ponía el sol».

Si fué maravilloso el descubrimiento del Cerro

Rico (1), que así se le llamó por antonomasia, si fué grande su influencia económica en los dominios españoles, también fué la causa para que redoblaran los sufrimientos de la raza indígena y fuera aún más dura su esclavitud.

Para subvenir a los trabajos de las minas de Potosí, cada vez más importantes, el virrey D. Francisco de Toledo estableció la *mita* en las «Ordenanzas de Minería» promulgadas el año 1570.

La mita que tomó su nombre de los montones de metal extraído en determinado tiempo de trabajo, era una prestación personal que los indígenas tenían que satisfacer forzosamente por turnos, que resultaron nominales, mudándose por tercias partes cada año, debiendo corresponder de esta manera sólo cuatro meses de trabajo a cada individuo. En la práctica no fué así. Los indios arrastrados por la mita eran tratados como bestias, y generalmente no volvían más a sus *aillos;* porque o perecían en las faenas forzadas, o quedaban indefinidamente en las minas, o preferían abandonar sus comarcas para escapar a la acción de sus verdugos.

Así quedó abandonada la agricultura y se despobló rápida y espantosamente el populoso imperio de los incas.

La mita forzada para las minas comprendía todos los pueblos hasta 150 leguas a la redonda. A Potosí se le asignaron 13.500 «mitayos», que según las ordenanzas originales debían sacarse a razón de

(1)—Desde la época de los incas se le conocía con el nombre de «Sumac-orcco», Cerro Hermoso o Cerro Rico.

la séptima parte de cada pueblo, sin excluir mujeres y niños, o sea un 14,28 % de la población.

El sistema de mitas fué una organización completa de trabajo forzado, que abarcaba todos los órdenes de la actividad industrial de la época. Había mitas para las minas, para el cultivo de la coca, de la caña de azúcar, de la vid, para el servicio de las postas, para las manufacturas de tejidos (obrajes), &, &. El transporte del azogue de las minas de Huancavelica, tenía también número considerable de «mitayos» para abastecer a las necesidades de la amalgamación de los minerales de plata y oro.

No es exagerado calcular que el sistema de mita empleaba anualmente más de 80.000 indígenas. De esta manera la mano de obra no sólo era abundante, sino también en gran parte gratuita, lo que explica sobradamente el despilfarro con que se hacían los trabajos y el provecho que rendían explotaciones mineras hoy abandonadas, especialmente de oro, a causa del subido costo de su laboreo actual.

Fuera de los mitayos, trabajaban en las minas otros indígenas contratados de grado o por fuerza bajo la denominación de *mingas* o *minccas*, con el salario, las más veces nominal, de 4 reales por mita o turno de 12 horas de trabajo.

El trabajo de la mita abarcaba 36 horas seguidas. El mitayo ganaba 2 pesos y ½ semanales (4 reales diarios); había otros que ganaban menos. Tomando un término medio, los indios de cédula o mita ordinaria, ganaban 2 pesos semanales. Los «aventureros», que se contrataban libremente en los trabajos

de minas, ganaban hasta 9 pesos semanales y procedían de todas partes del mundo.

De la «Descripción de Potosí» el año 1603, extractamos las siguientes notas acerca de los trabajadores indígenas y de los salarios corrientes en esa época:

Indios de repartimiento a 4 reales diarios:		
En las minas del Cerro.....	4.000	
En los ingenios.....	600	
En las salinas.....	180	4.780
Indios mingados a 7 reales jornal:		
En las minas del Cerro.....	600	
En los ingenios.....	4.000	
En las salinas.....	1.000	5.600
Mujeres y niños 1 real jornal:		
«Pallas» y beneficio de lamas....		4.400
Arrieros, conductores de víveres, combustible, madera, &, &.....		13 220
Total de indígenas trabajadores		28.000

La extracción de minerales causaba un derecho fuerte en favor de la corona, bajo la denominación de *quinto real.* También se cobraba el mismo derecho sobre los *tesoros* o *huacas* descubiertos en los enterratorios de los indios, fuera de que la mitad correspondía al tesoro real.

«Mandamos, decía la ley que creó el quinto, que todos los vecinos y moradores de nuestras Indias que

cogieren o sacaren en cualquier provincia o parte de ellas oro, plata, plomo, estaño, azogue, hierro u otro cualquier metal, nos hayan de pagar y paguen la quinta parte de lo que cogieren y sacaren neto sin otro ningún descuento..... Porque nuestra voluntad, agregaba la ley, es hacerles merced de las cuatro partes para que cada uno pueda disponer de ellas como cosa suya, propia, libre, quita y desembargada en consideración a las costas y gastos que hicieren..... Y ordenamos que del oro, plata y metales, perlas, piedras y ámbar habidos en entradas y rescates, se nos pague el quinto en la misma forma» (1).

Las materias preciosas ganadas en batallas, entrada de pueblos, rescate de príncipes prisioneros y casos semejantes, se hallaban también sometidas al quinto real; pero en tales circunstancias, la magnanimidad real asignaba dos tercias partes de lo cobrado a los soldados, en recompensa de los esfuerzos y peligros corridos. Cuando el cacique o príncipe de las tierras conquistadas era muerto, sólo correspondía una mitad del botín ganado a los soldados, salvo que la muerte tuviere lugar en la batalla o por ajusticiamiento legal, en cuyo caso procedía el tercio, pero siempre con deducción previa del quinto real.

El mercantilismo en boga en aquellos tiempos hacía consistir la riqueza de las naciones en la posesión de la mayor suma de metales preciosos, concepto que se halla proclamado en las recomendaciones que la corona hacía a las autoridades coloniales «porque la riqueza y abundancia de plata y oro, es el ner-

(1)—Ley 1, Título X, Libro VIII de la Recopilación.

vio principal de que resulta la de aquellos y estos reynos»; lo que explica sobradamente el carácter del quinto real.

Este 20 % *ad valorem* fué rebajado para el oro desde 1726 al 10 %, con el fin de evitar el contrabando y fomentar la producción de este metal. Más tarde se redujo al 5 %, y posteriormente sólo regía el 3 % (1779).

El derecho de ensaye, llamado «Derecho de Cobos», era del 1 y ½ % sobre el valor de la plata y del oro ensayados en la Casa de Moneda. Este gravamen fué originariamente una concesión graciosa del monarca en favor del ensayador real D. Diego de los Cobos, marqués de Camaraza, a cuya muerte se consolidó en favor de la corona con el mismo nombre de su fundador.

Estaba prohibido, bajo penas severas, el comercio libre de metales preciosos. «El Banco Real de San Carlos» tenía el monopolio de rescate de pastas y piñas de plata y de barras y pepitas de oro por cuenta de la corona de España, pagando precios oficialmente establecidos, fuera de los derechos arriba mencionados. Impropiamente llamado Banco, no era sino una oficina de estanco. Al principio se denominaba «Real Compañía». Sólo el 8 de agosto de 1779 fué incorporada a la corona, bajo la denominación de «Banco Real de San Carlos» por el gobernador D. Jorge de Escovedo, época en que se inició el «Real Socavón».

La extraordinaria producción de pastas dió pron-

to lugar a la fundación de una Casa de Moneda en Potosí el año 1572.

Conforme a las ordenanzas reales de Felipe II, la Casa acuñó pesos de 8 reales (272 maravedís) que tenían la ley de 11 dineros y 4 granos, o sean 931 milésimos fino (930,555 equivalencia exacta).

Como monedas fraccionarias se acuñaron los *cuatros* de 136 maravedís, los *doses* o *pesetas* de 68 maravedís y los *reales* de 34 maravedís.

El nombre de la unidad monetaria fué *cruz* en los primeros tiempos; después se le llamó *macuquina*.

Con relación a los modernos sistemas monetarios, podría establecerse la siguiente equivalencia métrica de las primeras monedas coloniales acuñadas originariamente a mártillo en Porco, y después en la Casa de Moneda de Potosí, ya en mejores condiciones técnicas, aunque cortadas y esquinadas:

Un peso «cruz» o «macuquina» igual a 28,50 gramos de plata a ley de 931 milésimos;

Un «cuatro» igual a 14,25 gramos;

Una «peseta» con 7,12 gramos.

Un «real» con 3,56 gramos.

El peso «boliviano» adoptado por la ley de 1872, sólo era de 25 gramos con 900 milésimos de fino, y la ley monetaria de 1908 que ha adoptado el patrón de oro, ha reducido el peso a 20 gramos con 833 milésimos de ley.

Se cobraba derecho de *señoreaje* por la acuñación de la moneda a razón de un real por cada marco.

Además, la Casa retenía dos reales por costo de acuñación.

Deducidos ambos derechos, de los 68 reales de ley de 931 milésimos acuñados en cada marco, se entregaban 65 reales al interesado, o sea con un gravamen de 4,41%.

Sumados los diversos derechos que pagaba la plata (quinto, cobos, señoreaje y acuñación), resultaba un impuesto elevado del 25,91%, fuera del diezmo que independientemente se cobraba, y del *braceaje* que cobraban los empleados de la hornaza y fundición a razón de 40 maravedís por marco de plata y de 155 maravedís por el oro.

Más tarde, cuando se redujo la ley de la moneda a 11 dineros (916,66 milésimos), el señoreaje subió virtualmente a 5,79%, de donde el impuesto total sobre la plata resultó ser del 28,29%; y esta elevada tasa alcanzó aún al 28,62% cuando por cédula reservada de 1786 se rebajó hasta 902,77 milésimos el fino de la moneda (10 dineros 20 granos). (1)

Durante la época del coloniaje se conocieron varias monedas de cuenta como los *pesos ensayados* de 13 reales 8 maravedís (450 maravedís) que también se llamaban *pesos de minas*. Más tarde, las ventas de azogue, bulas, etc., se computaban en pesos de 12 reales y medio (425 maravedís).

——

(1)—Para facilitar los cálculos, he aquí la equivalencia de los antiguos dineros de ley con milésimos:

12	dineros	=	1.000	milésimos
11 ½	«	=	958,330	«
11 ¼	«	=	937,498	«
11	«	=	916,666	«
10	«	=	833,333	«
9	«	=	750,	«
8	«	=	666,666	«
7	«	=	583,333	«
6	«	=	500,	«
1	«	=	83,333	«
1 dinero		=	24 granos.	
1 grano		=	3,472 milésimos.	

BIBLIOTECA DEL BANCO

Las diversas monedas del coloniaje fueron las siguientes: (1)

Peso de oro castellano 14 reales 14 maravedís	490	maravedís.
Peso ensayado de 13 reales 8 maravedís	450	id.
Peso de 12 ½ reales	425	id.
Ducados o pesos de 11 reales 1 maravedí	375	id.
Pesos de 9 reales	316	id.
Pesos de 8 reales	272	id.

Entre las varias falsificaciones de moneda ha llegado hasta nuestros días la tradición de los *rochunos*, nombre que proviene del contratista Francisco Gómez de la Rocha, que había reducido la ley de las monedas a cerca de su mitad, por lo que fueron depreciadas oficialmente en esa misma proporción. (2)

Sería difícil determinar el monto exacto de la producción de plata en la época colonial, comprendiendo, además de las barras, la empleada en moneda, en las artes y aun la exportada clandestinamente en piña.

Se calcula generalmente en más de 800 millones de pesos de ocho reales los acuñados en la Casa de Potosí desde 1572 hasta principios del siglo XIX, lo que arroja un promedio anual de 3 millones de pesos; pero no hay datos completos y uniformes para fijar

(1)—«La Moneda en el Perú» Alejandro Garland.

(2)—Rocha fué ajusticiado en Potosí el año 1651 por monedero falso. Ofreció en rescate de su vida 400.000 pesos fuertes, y prometió pagar mil pesos diarios por el tiempo que tardase una instancia de súplica dirigida al Rey. (Isidoro Aramayo—1874).

las cantidades empleadas en orfebrería, que llegó a tener grande importancia, pues estaba generalizado el uso del metal blanco en adornos, muebles, utensillos, vajilla, &, &, de que han llegado a nuestros tiempos valiosos ejemplares primorosamente labrados.

Fuera de la moneda y la orfebrería, la mayor producción se exportaba en pastas. El «Banco de San Carlos» rescataba la plata piña y la remitía a la Península. Los datos a este respecto son contradictorios o poco precisos.

En la Historia de Bolivia por Cortez se consigna la cifra de 1.655.721.572 pesos, cantidad producida por sólo el Cerro de Potosí desde su descubrimiento hasta el año 1846. Reducida esta cifra a marcos, arroja un total de 194.790.775, cuyo promedio anual sería de 647.145 marcos.

Los derechos de la corona llegaron a producir hasta tres millones de pesos en un año, lo que correspondería a una producción minera de 1.764.705 marcos anuales.

En los últimos tiempos de la colonia mermó considerablemente la renta de la corona, debido a causas múltiples, de las que son dignas de señalarse la falta de método en los trabajos, la inundación de 1626, la epidemia de fiebre en 1712, la disminución de trabajadores por la despoblación violenta que produjo la mita, el alzamiento general de indios promovida en los años 1780 y siguientes por los Catari y Tupaj-Amaru, la crisis del azogue en 1802 ocasionada por la guerra de España con Inglaterra, y la seca, el hambre y las pestes que asolaron el país en 1804.

Según los datos insertados por Dalence en su Bosquejo Estadístico, la renta real de Potosí en los últimos tiempos estuvo en plena quiebra, alcanzando apenas a 1.220.000 pesos anuales, que corresponderían a una producción de 717.644 marcos por año.

D. José de Almendaris, marqués de Castelfuerte, virrey del Perú en 1724, refiriéndose al Cerro Rico de Potosí, dice en su memoria:

«La insigne mina es el mayor ejemplo de los que puede gastar quien hace magnanimidad de consumir, pues hasta el año 1585, en cuarenta que habían corrido desde su descubrimiento, había producido 111 millones de pesos ensayados, que hacen 183.639.705 pesos corrientes, fuera de lo extraviado y quintado en otras cajas; y lo que consta que importaban los reales quintos en aquellos tiempos, llegaba cada año a cerca de millón y medio; y lo que cada día se sacaba a 30.000.....»

«De esta manera producía cada año la de Potosí, 10.950.000 pesos, fuera de lo que no se sujetaba al quinto».

El Dr. Modesto Omiste publicó en 1877 un interesante cuadro de la producción minera del Cerro de Potosí, con datos extractados de las informaciones suministradas por los visitadores de los libros reales, por las memorias de Francisco de Toledo, por las de Humbolt, Bernardo de la Vega, José de Acosta, Astete de Ulloa y varios otros cronistas y visitadores reales.

La reconstitución del monto producido según estos datos, que comprenden épocas diferentes, desde 1545 a 1834, arroja los siguientes promedios:

Producción general del Cerro.....	$ 3.897.215.286
Derechos recaudados por la Corona...	$ 779.444.057
Promedio de la producción anual....	$ 13.485.174

El peso total de esta fantástica producción de plata, se cifra así:

Producción total.....	458.496.000 marcos.
Promedio anual.....	1.586.400 id.

O sean 105.454 toneladas métricas de plata de 931 milésimos fino.

Estos datos están corroborados por los minuciosos cálculos que hizo D. Vicente Ballivián y Roxas, comprendiendo la producción desde 1545 al 31 de diciembre de 1864, que alcanzó a un total general de *3.630.928.362 pesos.*

CAPÍTULO III

REGIMEN SOCIAL Y AGRARIO

La evolución de la propiedad rural.—La agricultura y la trata de negros.—Caciques, curacas y comunarios.—Composición con la Corona de España.—La tasa y el tributo.—Jamemes, jatunrunas y otras cargas personales.—Los laureados de Carlos III.—Diezmos y veintenas.—Capellanías, censos y mayorazgos.

La tierra es la base social por excelencia. De la forma en que se halla distribuída y constituída para su aprovechamiento, de las cargas que pesan sobre ella, de las condiciones de transferencia y «comerciabilidad» que son exigibles, dependen en gran manera el progreso de los pueblos y el grado de su independencia y prosperidad.

Los fisiócratas atribuyeron a la tierra la calidad de ser la única riqueza, siendo las demás simples derivados de esa riqueza madre. Mucho ha avanzado la ciencia económica después de los fisiócratas, reivindicando el puesto propio que en el mundo de las riquezas tienen todos los productos del trabajo humano

y del capital; pero no ha podido menos que reconocerse que en el errado absolutismo de los padres de la ciencia, había un gran fondo de verdad, si se considera la tierra, no como la única riqueza, sino como la condición fundamental de todo desarrollo sociológico.

El medio físico imprime carácter a los pueblos. La forma en que se halla organizado el aprovechamiento de ese medio, en sus diversos componentes, llámense tierras de agricultura, minería, navegación, fuerzas naturales, etc., etc., suministra al sociólogo y al economista la clave de las leyes que presiden el desarrollo social, político y económico de las entidades colectivas.

La propiedad de la tierra ha seguido al través de los siglos la misma evolución, correspondiendo a tal grado de cultura o de desarrollo social, tal o cual forma de régimen agrario.

La primera etapa ha correspondido a los pueblos nómades, en los que la apropiación de la tierra ha sido nula. Después, a medida que han sido más sedentarias las tribus, se ha impuesto el régimen de comunidad con distribuciones periódicas de las tierras cultivables.

Más tarde se ha localizado y estabilizado la tierra en provecho de cada familia, y el espíritu de independencia individual ha operado lógicamente la disgregación del acervo común.

Este proceso natural presidido por la ley de diferenciación, pasando de lo homogéneo a lo heterogéneo, se ha interrumpido a menudo por la influencia de causas sociológicas externas, que han obrado en

forma de conquista de unos pueblos por otros, quedando los conquistadores dueños eminentes de las tierras conquistadas, y convertidos en siervos sus primitivos poseedores.

Después ha seguido el proceso de este nuevo punto de partida. El esclavo se ha manumitido. El siervo ha comprado la tierra al señor, y ha llegado a constituir la propiedad individual, base de su independencia política y social y de la prosperidad común.

La Edad Media es el ejemplo más elocuente de esta última etapa de la evolución agraria. Los siervos del feudalismo consolidaron sus tierras, pasando sucesivamente de la «gleba», la «corvea» y la enfiteusis, al régimen de la propiedad libre, que a su vez sigue en nuestros tiempos su marcha evolutiva, con menos trabas cada día y con tendencias más y más acentuadas hacia la *mobiliarización*, esto es, a la valorización de los títulos sobre la tierra para ser transferidos como simples efectos del comercio o de las finanzas, en calidad de títulos al portador o de acciones nominativas.

La conquista española sobre el imperio de los incas, se operó en la segunda etapa de la evolución agraria. Las tierras se cultivaban en común, periódicamente distribuídas por la autoridad real. Era el momento del sueño de Rousseau: «Los frutos de todos, la tierra de nadie», con la sola diferencia de que la tierra pertenecía al Sol, cuyo representante era el inca.

Del comunismo pasó lógicamente a la esclavitud como consecuencia inevitable de la conquista. Las tie-

rras fueron declaradas por derecho divino, esto es, por derecho de conquista – confirmado a mayor abundamiento por el papa Alejandro VI — propiedad absoluta de los reyes católicos. Los comuneros del Tahuantinsuyo fueron convertidos en siervos y repartidos juntamente con sus tierras en favor de los conquistadores y primeros pobladores.

Después ha venido el histórico proceso del feudalismo, que todavía no ha acabado de pasar para el triste descendiente de aquellos pueblos que formaron un día el vasto Imperio del Sol.

Los repartimientos, las encomiendas, el tributo, la mita, el postillonaje, los jamemes, la composición, etc., etc., no han sido sino las mismas cargas y modalidades del feudalismo, empeoradas por la diferencia de raza y de cultura.

Un rápido examen de ellas y el conocimiento de las limitaciones de la propiedad, caracterizarán mejor el estado social y agrario de la época colonial, que es la fuente común de las instituciones modernas de la América española.

La actividad económica de la colonia, principalmente contraída a la explotación minera, hizo poco en favor de la agricultura. Los productos regionales decayeron en su cultivo por falta de brazos, y algunos artículos importados de la Península, no prosperaron mucho ni se substrajeron a la rutina de su tiempo.

El cultivo de ciertos productos europeos, como la vid, fué severamente prohibido en los primeros

tiempos para no perjudicar los intereses del monopolio de comercio establecido bajo el nombre de «Casa de Contratación de Sevilla».

Las tierras usurpadas a los aborígenes, fueron repartidas a los conquistadores en grandes extensiones, juntamente con los indios («encomiendas») que las poseían y cultivaban.

Para el cultivo de las regiones tropicales y aun para la minería, fueron importados negros del Africa. Inglaterra obtuvo el derecho de comerciar con ellos, estableciendo un activo tráfico de esclavos.

La trata de negros fué un renglón de ingresos para la corona, pues se cobraba el impuesto de dos pesos por la importación de cada uno, quedando así caracterizado, hasta en sus detalles aduaneros, este ignominioso tráfico, como un verdadero comercio de cosas.

Anualmente se internaban a Potosí, para los trabajos mineros, un promedio de 450 negros del Brasil. El precio de cada uno de ellos era de 250 pesos ensayados, o sean 375 pesos corrientes de ocho reales (1).

Se mantuvo a los caciques y curacas, autoridades de institución incaica, en calidad de jefes hereditarios de determinadas circunscripciones, asignándoles, en cambio de los servicios que prestaban a la corona en el reclutamiento de mitayos, distribución de cargas, etc., etc., algunas extensiones territoriales, que poseían a título gracioso del rey.

En cuanto a la generalidad de los indios, las

(1)—«Descripción de Potosí—1603».

tierras por ellos poseídas eran con carácter precario, pues todas pertenecían a la corona en nombre del dominio eminente que se atribuyó el rey.

Los indios fueron establecidos en comunidades por el virrey Toledo para evitar el decaimiento de la agricultura a causa de las frecuentes deserciones que ocasionaba la mita.

Este régimen, parecido al de las tradicionales comunidades domésticas de Aragón, se hallaba fundado en la constitución de un usufructo perpetuo sobre las tierras, equitativamente repartidas al efecto, según la mayor o menor importancia de los grupos que las poseían y cultivaban. A cada comunidad estaba vinculado un grupo familiar denominado el *ayllo* (la parentela), cuyo patrimonio común era indivisible e inalienable, por lo mismo que el monarca conservaba el dominio directo y sólo se cedía el dominio útil, en cambio de compensaciones de grueso provecho que revestían formas variadas y odiosas, ya en calidad de prestaciones personales, o ya de tributos en dinero y en especie, como se verá más adelante.

La comunidad, a pesar de las razones económicas y jurídicas que pudieran aducirse en su contra, fué una institución salvadora y humanitaria. Sin ella, la suerte de los indios habría sido más cruel, la miseria más espantosa, y la agricultura y la ganadería, habrían desaparecido, o poco menos, contraídas como se hallaban todas las energías de los conquistadores a la explotación minera. Y esta misma habría sufrido las graves consecuencias de la falta de recursos y de la rápida desaparición de la raza indígena.

De otro lado, el grado ínfimo o nulo de cultura de los indios, y su escasa o ninguna preparación para el régimen de la propiedad libre, impusieron la comunidad como la única forma compatible con el estado social de aquellos tiempos, habiéndose evitado, de esta manera, la apropiación fraudulenta de las tierras, mediante usurpaciones o especulaciones fáciles, atenta la ignorancia de los conquistados.

Algunas tierras ya constituídas en comunidad, se adquirieron por compra que se denominó «Composición con la Corona de España», título de propiedad que tienen la mayor parte de las antiguas comunidades de indios, quedando así exvinculadas, y libres sus propietarios de varias cargas personales. La venta de tierras a título de «composición», fué un importante ingreso de las cajas reales, no obstante el pequeño precio que se pagaba por los comunarios a los visitadores y comisarios especiales nombrados por el rey.

La renta más considerable que se recaudaba en provecho de S. M. Católica, era el *tributo*. Como su nombre lo dice, tenía por fundamento el derecho de conquista, en cuya virtud los súbditos del extinguido reino de los incas debían pagar tributo al monarca español, dueño y señor absoluto.

Para hacer efectiva esta contribución, se empadronaba a los indígenas, mediante revisitas, fijándose la *tasa* correspondiente a cada tributario, «como justa señal y manifestación de vasallaje debida por estos naturales al Soberano».

La «tasa» variaba entre 8 y 10 pesos para los indígenas con tierras, y entre 4 y 6 pesos para los que carecían de ellas. Los forasteros o agregados y los *urus*, estaban tasados hasta en 3 pesos de tributo anual, en consideración a su estado miserable.

Independientemente del tributo que, como se ha visto, no era sino una contribución personal fundada en la calidad de indígena y a título de vasallaje, sin consideración a ninguna base financiera, había otras cargas personales, ya en favor de la corona o ya de los particulares, como las conocidas con las denominaciones de *jamemes*, *yanaconas*, *jatunrunas*, y las contribuciones de *cacicazgos*, *cabezones*, *etc.*, *etc.*

Los «jamemes» tenían la obligación de conducir a espaldas las cargas del rey o de los mineros. Los «yanaconas» eran indígenas puestos al servicio de los españoles en calidad de criados.

Las otras contribuciones afectaban a los indios exentos del tributo por razón de su cargo o situación de relativa libertad con respecto a los comunarios.

Merecen citarse por su singularidad, entre las contribuciones personales, los derechos que pagaban los laureados con la orden de Carlos III, que, como es de suponer, eran raros en la Audiencia de Charcas. Esta contribución, en cierto modo nobiliaria, era la única personal que afectaba a uno u otro español de alta valía. Más tarde se establecieron los derechos de consumo, almojarifazgos y alcabalas, que por su generalidad natural y su carácter de impuestos indirectos, comprendieron tanto a los indígenas como a los españoles.

Después del tributo, la contribución más importante era la de los diezmos y primicias, extraídos de todos los productos naturales y agrícolas, y que por lo mismo afectaban en gran escala al indio agricultor. Los productos mineros pagaban también el diezmo, independientemente del real quinto.

El papa Alejandro VI concedió los diezmos y primicias a los reyes católicos, al mismo tiempo que en nombre de Dios les adjudicó los reinos del Nuevo Mundo. En cambio de estas concesiones pontificias, contrajeron los monarcas la obligación de proveer a los presupuestos del culto, poniendo de sus arcas lo que faltare.

Los diezmos no sólo alcanzaban para sustentar un clero nutrido y bien remunerado, sino que dejaban importantes sobrantes, de los que dos «novenos», denominados mayor y menor, retiraba la corona, y lo demás se distribuía en obras de instrucción, de beneficencia y del mismo culto.

Según las leyes de Indias, el diezmo debía pagarse en la siguiente forma:

«De diez medidas una, y si hubiere alguna cosa que no haya de medir, pague el diezmo de las dichas cosas de diez una, el cual dicho diezmo se pague enteramente, sin sacar primero la simiente ni la venta ni otro gasto alguno».

Este impuesto, justamente execrado por la ciencia, afectaba al capital y al trabajo, y muchas veces los absorvía, como sería en caso de una mala cosecha que no rindiese sino una parte de la semilla empleada. Trabajo y capital redundaban en tal evento sólo

en provecho de las cajas reales, y el agricultor quedaba con una mínima parte de la simiente recogida.

Los impuestos exaccionados sobre los ganados, se denominaban «veintenas», y «huasiveintenas» eran los que recaían sobre las aves de corral y demás animales domésticos. Esta última contribución se cobraba en dinero proporcionalmente al número de los animales, y giraba entre uno y dos reales.

Las propiedades rurales y urbanas estaban afectas en una proporción considerable a diversas vinculaciones y limitaciones de la propiedad, denominadas capellanías, censos, mayorazgos, etc. Estas vinculaciones, fomentadas por el fanatismo religioso y por las deficiencias económicas de la época, fueron la rémora más grande contra los progresos de la agricultura.

Las capellanías eran vinculaciones instituídas sobre una finca rural o urbana a condición de que el capellán, a cuyo poder pasaban los bienes, celebrase tal número de misas a la memoria del fundador, o las mandase celebrar, si era lego el favorecido: todo en conformidad a la respectiva tabla de fundación. A la muerte del capellán pasaba la finca al llamado por la tabla con las mismas obligaciones, y así sucesivamente sin poder transferirse en forma libre.

Las más importantes capellanías fueron instituídas en favor de la iglesia o de los conventos.

Los censos eran gravámenes que, temporal o perpetuamente, en dinero o especie, reconocían las fincas en favor de una persona física o moral. Estos gravá-

menes ya procedían de la entrega de un capital, en cuyo caso no se trataba sino de una imposición de renta vitalicia o perpetua, o ya se fundaban en el traspaso de la misma propiedad, y en tal caso el gravamen reconocido era un canon o pensión anual sobre los frutos.

En el primer caso, el censo se llamaba *consignativo*. El segundo era *enfitéutico* si la transferencia de los bienes sólo comprendía el dominio útil, y *reservativo* si la transferencia comprendía ambos dominios, el útil y el directo. Los principales censíticos producían el 2% sobre bienes urbanos, y el 3% sobre los rústicos.

El erario real cobraba una contribución sobre los censos, lo que equivale a un impuesto sobre la renta.

Los mayorazgos, como su nombre lo indica, eran instituciones de linaje en favor de los primogénitos. Requerían una concesión especial del rey para instituirse, y estaban reservados a los que se habían distinguido por sus hazañas o servicios. Constituían el primer escalón de la aristocracia, y devengaban también un pequeño impuesto en favor de las arcas reales.

CAPITULO IV

EL COMERCIO Y LOS MONOPOLIOS

Régimen monopolista.—La «Casa de Contratación de Sevilla».—Almojarifazgo y derecho de aduana.—Avería de la Armada, tonelaje y almirantazgo.—Consulado de Comercio.—Estancos de plata, azogue, tabaco, lana de vicuña, solimán, naipes, etc.—Apertura del comercio inglés.—Resumen del comercio de Potosí el año 1603.

El temor de perder las colonias por la ambición de otras potencias, y el deseo de sacar el mayor provecho de su explotación, indujeron a la corona de España a establecer un completo régimen de monopolios desde los primeros momentos del descubrimiento. A partir de las concesiones hechas a Colón, la muralla China estaba erigida para el comercio del Nuevo Mundo.

Al principio no tuvo influencia adversa este régimen. Pocos eran los artículos que necesitaban las colonias apenas establecidas, y su comercio de retorno era aún de escasa importancia.

Además, la España del siglo XVI era señora de los mares, y dueño de los secretos de la manufactura arábiga.

Dadas estas condiciones, el monopolio, lejos de ser perjudicial, fué beneficioso, y aun puede decirse que era necesario en aquella época en que la piratería inglesa infectaba los mares, y podía causar graves daños al tráfico de las nacientes poblaciones.

El comercio estaba circunscrito a muy contados artículos. Alguna cantidad de paños de León, bayetas y cera de Castilla, sombreros y pieles adobadas de Córdova, aceite y vinos de Sevilla, armas de Toledo. La plata y el oro iban de retorno. Mas, este comercio adquirió pronto importancia considerable a medida que aumentarón las explotaciones coloniales, principalmente en las minas.

Todo el tráfico se hacía por el istmo de Panamá. Una o dos veces al año llegaban las naves mercantes a Portobello, debidamente protegidas por buques de guerra de la armada real. Las mercancías se distribuían entre Nueva Granada, Perú y Chile. Las provincias del Río de La Plata, que estaban prohibidas de comerciar directamente por el puerto de Buenos Aires, tenían que acudir a la Villa Imperial de Potosí en busca de los artículos de ultramar que necesitaban para su consumo. (1)

De esta manera, Potosí que, con el extraordinario desarrollo de la minería, había llegado a constituir un gran centro de actividad económica, fué

(1)—"Las Finanzas de Buenos Aires", por Juan Carlos Rébora--1911.

también obligado centro de aprovisionamiento comercial para abastecer a las provincias del Río de la Plata y del Alto Perú.

D. Bartolomé Arzáy Sánchez y Vela, en su «Historia de la Villa Imperial de Potosí» (1705), da una idea del incremento comercial que alcanzó la citada metrópoli, consignando la siguiente nomenclatura de los países que le enviaban todo cuanto había de útil, hermoso y rico en la producción natural y en la manufactura de su época:

Granada, Prieyo y Jaén, le abastecían con tafetanes, y todo género de sedas y tejidos;

Toledo con medias y espadas;

Segovia con paños y sayas;

Valencia y Murcia con rasos y sedas;

Córdova con sedas, mantas, y otros tejidos;

Vizcaya con hierro;

Portugal con rico hilo, y otros tejidos;

Francia con todos los tejidos, puntas blancas de seda, oro y plata, estameñas, sombreros de castor y de todo género de lencería;

Flandes con tapicerías, espejos, láminas, ricos escritorios, cambrayes, puntas, encajes, indecibles géneros de mercerías;

Olanda con lienzos y paños;

Alemania con espadas y todo género de acero, y mantelería;

Génova con papel;

Calabria y la Pulla con sedas;

Nápoles con medias y tejidos;

Florencia con sayas y rasos;

Toscana con paños, preciosos bordados y tejidos de admirable primor;

Milán con galanas puntas de oro y plata, y telas ricas;

Roma con relevantes pinturas y láminas;

Inglaterra con bayetas, sombreros y todo género de tejidos de lana;

Venecia con cristalerías y vidrios;

Chipre, Candia y las costas de Africa con cera blanca;

La India Oriental con grana, cristales, careys, marfiles, y preciosas piedras;

Ceylán con diamantes;

Arabia con aromas;

Persia, el Cairo y Turquía con alfombras;

Terrenate, Malaca y Goa con todo género de especerías, almizcle, algalia;

Loza blanca la China, y ropa de seda;

Cabo Verde y Angola con *negros*, etc., etc. (1).

Para regularizar el tráfico comercial, y bajo la influencia de aquellas razones de codicia y de temor, se encomendó la alta dirección de este vasto plan monopolista a un organismo especial establecido el año 1503 bajo la denominación de «Casa de Contratación de Sevilla». Más que una simple repartición fiscal, fué ésta una gran entidad económica y financiera de su tiempo.

Si en lo político y administrativo el Consejo Supremo de Indias, era el poder centralizado de la jerarquía colonial, la Casa de Contratación de Sevilla

(1)—Boletín de la Sociedad Geográfica de Potosí, No. 5—1913.

era en lo económico y financiero la suprema directora de la gran explotación de los reinos del Nuevo Mundo.

Nada podía expedirse a las colonias españolas o recibirse de ellas, sin la venia del citado establecimiento. Los géneros del comercio, lo mismo que los barcos y las personas, todo tenía que pasar por Sevilla ante los ojos de la Casa para dirigirse a las Américas.

La Casa otorgaba pases para los barcos, vendía mapas de navegación a subido precio, mantenía escuela de timoneles para aquellos mares, cobraba los derechos de aduana y almojarifazgo, recibía y leía la correspondencia colonial dirigida al rey, suspendía las órdenes que estimaba perjudiciales, y, en fin, era el supremo poder financiero de las colonias.

Posteriormente y para mejor atender sus múltiples y delicadas funciones, la Casa de Sevilla mudó su asiento a Cádiz en 1720, desde donde siguió reinando sobre el comercio de la América hasta los últimos días de la dominación española.

De acuerdo con los principios exclusivistas que informaban el régimen colonial, el proteccionismo más exagerado, cuando no la simple y llana prohibición, se puso en vigor con el cobro de los derechos de *almojarifazgo* o derechos de aduana introducidos en España por la dominación morisca.

Las mercancías extranjeras al ingresar en la Península pagaban un fuerte derecho de aduana, y al ser reembarcadas para las colonias satisfacían un nuevo derecho en Sevilla, al igual de los productos y

manufacturas nacionales, lo que propiamente se denominaba almojarifazgo.

Los diversos centros de producción colonial se hallaban entre sí sistemáticamente aislados en su comercio, para evitar que se llevaran géneros y mercancías de un punto a otro «en grave daño y perjuicio del comercio de Sevilla». A este fin se establecieron aduanas internas reputadas «puertos secos», que constituían barreras insuperables opuestas al tráfico intercolonial. Así se erigió en la ciudad de Córdova del Tucumán una Casa de Aduana con el propósito de restringir o impedir en lo absoluto el comercio de las provincias del Río de la Plata con las del Perú. La Aduana de Córdova debía cobrar, según leyes de excepción dictadas por la corona, «cincuenta por ciento de derechos demás de lo que se hubiere cobrado, así en Sevilla como en el puerto de Buenos Aires, de las mercaderías que de él se llevaren y pasaren al Perú; y si pareciere haberse llevado algo sin haberse pagado esos derechos y los de almojarifazgo y demás impuestos que se cobran en Sevilla y en el Perú, o que los sacaren de las dichas provincias del Paraguay o del Río de la Plata, sin llevar consigo registro (que precisamente han de hacer ante los Oficiales Reales de las dichas porvincias), se aprehenda y dé por perdido, donde quiera que se hallare, y aplique la tercia parte a nuestra Cámara y Fisco, y las dos al Juez y denunciador por mitad». (1)

Este impuesto prohibicionista hacía imposible o sumamente oneroso todo tráfico, pues su elevada tasa del 50 % *ad valorem*, se liquidaba sobre el valor

(1)—Ley I, Título XIV de la Recopilación de Indias.

del artículo en el lugar de destino, capitalizados para el aforo los impuestos ya pagados y los fletes hasta la plaza de consumo, lo que recargaba el artículo en un 500 o 600 % de su costo primitivo. (1)

Este orden de cosas que no podía ser más perjudicial a las provincias altoperuanas, quedó modificado en virtud de la Real Cédula de 1778, llamada del *Comercio Libre*, que suprimió las barreras aduaneras intercoloniales, quedando sólo en vigencia los derechos de almojarifazgo que gravaban el tráfico ultramarino.

En los primeros tiempos el almojarifazgo gravaba toda clase de géneros y mercancías con una tasa uniforme del 10 % que se cobraba una parte en Sevilla y otra en el Perú. Posteriormente se rebajó la tarifa al 5 % sobre los artículos extranjeros, y al 3 % sobre los españoles.

La exportación de los productos coloniales reconocía también un derecho general del 3 ½ %, que quedó suprimido en virtud de la citada Real Cédula del Comercio libre de 1778.

Aparte del almojarifazgo de exportación, las monedas de plata y barras de oro, pagaban un derecho especial del 1 %, que puede equipararse al seguro marítimo de nuestros tiempos. Se le llamaba «Avería de la Armada», y correspondía a la custodia de las naves y a los embarques hechos en los galeones del rey, para su reparación de los desperfectos que ocasionaba la larga travesía de los mares. Desde 1514, autorizada por la reina doña Juana, regía en España esta gabela, que era más bien de economía privada

(1)—Mitre, Historia de Belgrano.

que de derecho público, pues a su pago se hallaban obligados los inscritos en las hermandades, corporaciones o universidades comerciales, como la de Burgos, para gozar del derecho de protección, y se cobraba sobre todos los géneros embarcados por los asociados, bajo la denominación de «avería».

También se cobraba otra contribución llamada «tonelaje» sobre la capacidad de los barcos, y un derecho de «almirantazgo» en provecho del jefe de la flota que amparaba la navegación.

Siguiendo los modelos institucionales de su época, el comercio estaba organizado en corporación, del mismo modo que los mineros y azogueros, y se regía por las «Ordenanzas de Bilbao» formadas por la universidad o corporación de comerciantes de esta villa y autorizadas más tarde oficialmente por Felipe V en 1737.

Los juicios de comercio y cuanto a él se refería, estaban sometidos a la jurisdicción del Consulado de Comercio, creado por el virrey Francisco de Borja y Acevedo, príncipe de Esquilache, en 1619. Esta institución que ha persistido durante algún tiempo en la época independiente, recaudaba derechos especiales para su sostenimiento, que son el origen de las contribuciones que se cobran en nuestros tiempos con el nombre de derechos consulares.

Dentro del régimen general de monopolio, algunos productos estuvieron sujetos a estanco especial.

Las pastas de plata, como se ha visto en el capítulo II, se rescataban exclusivamente por el «Banco de San Carlos», que habilitaba con azogue a los mineros. El azogue, que tenía considerable consumo en

los procedimientos de amalgamación de los minerales de oro y plata, constituía también monopolio fiscal.

El tabaco, la lana de vicuña, la sal y el salitre, se regían igualmente por el estanco. La sal fué posteriormente declarada de libre tráfico, y se tuvo por «merced no pequeña, por la necesidad y gran consumo de este género en aquel reino».

El solimán, afeite o pintura de perfumería en su época, mereció un tratamiento muy duro, porque como estaba destinado a realzar artificiosamente los encantos femeninos, era «digno de contarse entre los géneros superfluos y viciosos, por ser en envidia y enmienda de la naturaleza y con fin de muchas de agradar y complacer», según reza en las ordenanzas reales.

La pimienta no era tampoco de libre tráfico, porque se consumía «por el vicio de los hombres, y no por la necesidad del humano alimento».

Los naipes se hallaban asímismo sustraídos al tráfico libre para evitar «fullerías» con la introducción de barajas falsas. Además, como no podían hacerse los naipes con relativa perfección en las colonias, era menester traerlos de la metrópoli.

No era, sin duda, insignificante el provecho que alcanzaban las cajas reales de este comercio. Por lo que hace sólo a la Villa Imperial, en la descripción que de ella se hizo el año 1603 se lee este dato revelador: «Gástanse todos los días del año, uno con otro, dentro del pueblo (Potosí), 60 barajas, que es al cabo del año 21 mil 900, que a peso y medio corriente son 32 mil 850 pesos, y son ensayados 21 mil».

El exclusivismo comercial de la metrópoli se mantuvo rígido e intransigente hasta el año 1720 en que España celebró el Tratado de Comercio con Inglaterra. Antes de dicho año sólo las naves españolas, pasando por el obligado contralor de la Casa de Sevilla, podían comerciar con las colonias. En virtud del citado pacto, Inglaterra obtuvo el derecho de comerciar, aunque con severas restricciones, iniciando una nueva corriente económica que, unida al régimen del Comercio libre de 1778, influyó decisivamente en la suerte de la América española.

Una idea del movimiento comercial de la época del coloniaje dará el siguiente cuadro extractado de la «Descripción de la Villa y Minas de Potosí, año 1603». (1)

Aunque los datos sólo se refieren a esta ciudad, su importancia es manifiesta por lo mismo que Potosí era en aquellos tiempos el centro de la mayor actividad económica del Alto Perú.

He aquí el cuadro:

MOVIMIENTO COMERCIAL DE POTOSÍ EL AÑO 1603

Artículos	Cantidad	Precio	Valor en pesos ensayados
Harina de maíz para chicha....	50.000 fanegas		1.024.000
Harina de trigo para pan.....	91.250 «		1.210.900
Maíz en grano.....	50.000 «	5 $	250.000
Vino.....	50.000 botijos	10 $	500.000
Ganado vacuno.....	4.000 cabezas	7 $	28.000
Carneros de Castilla.....	50.000 «	16 reales	64.000
Carneros de la tierra (llamas).	100.000 «	4 $	400.000
Carneros de consumo (pacos).	40.000 »	3 $	120.000
Coca.....	60.000 cestos	6 $	360.000

(1) «Colección Muñoz.—Biblioteca Real de la Academia de la Historia».—Boletín de la Sociedad Geográfica de Potosí. 1914.

Artículos	Cantidad	Precio	Valor en pesos ensayados
Dulces	6.000 arrobas	8 $	48.000
Ají	14.000 cestos	4 $	56.000
Conserva del Cuzco, Chuquiago y Chuquisaca	3.000 arrobas	10 $	30.000
Miel de caña	2.000 botijos	8 $	16.000
Quesos de Paria	20.000	10 tomines	25.000
Manteca de puerco	25.000 botijuelas	4 $	100.000
Jamones, tocinos, lomos y lenguas de puerco de Tariia y Paria			30.000
Charqui	30.000 arrobas	1 ½ $	49.000
Pasas de Arequipa	200 quintales	25 $	5.000
Higos	1.000 «	12 $	12.000
Pescado salado de la mar	6.000 arrobas	4 $	24.000
Pescado de la laguna Chucuito			30.000
Pescado de río (zábalos y dorados)			12.000
Aceitunas	2.000 botijos	10 $	20.000
Aceite	3.000 «	8 $	24.000
Vinagre	8.000 «	4 $	32.000
Paja y yerba			91.250
Hortalizas			21.900
Fruta fresca			109.500
Chuño	20.000 fanegas	6 $	120.000
Papas	40.000 «	3 $	120.000
Ocas	40.000 «	3 $	120.000
Ropa de Castilla			400.000
Lienzo de Tucumán para el servicio de negros, indios y gente de trabajo,			64.000
Paños de Quito, Guánuco y México (cordelletas y bayetas de Guánuco) para la gente pobre y el servicio			100.000
Sayal	30.000 varas	6 reales	14.500
Sombreros	14.000 sombros.	13 $ corrientes	116.480
Ropa abasca para los indios	18.000 piezas	7 $ ensayados	126.000
Cumbes o chumbes del Cuzco, piezas de cuero (¿sogas?)			8.000
Pillos (adornos de lana para llautas o tocados)	4.000	3 $	12.000
Sacos o costales	100.000 a	1 $ corriente	64.000
Cordovanes	1.880 docenas	3 $ ensayados	54.000
Barajas	21.900 juegos	1 ½ corrientes	21.000
Herrajes	3.816 docenas	7 $ ensayados	26.712
Cera	200 quintales	130 $ «	26.000
Hierro en bruto	2.000 «	32 $ «	64.000
Candelas			161.126
Leña	179.000 cargas	1 $ corriente	115.136
Carbón	85.655 quintales	2 $ «	137.047
Yareta y ucha	800.000 cargas a	4 reales	257.000
Sal para beneficio de metales	630.000 quintales	6 tomines ensayados	247.500
Azogue	5.700 «	70 $ corrientes	402.500
Cobre	60.000 «	4 $ ensayados	24.000
Paja para techos			70.000
Negros y negras del Brasil	450 a	250 $ « cada uno	112.500
			7.667.051
Salarios en los ingenios			153.600
Salario de 5.000 indios a 2 $ semanales y de 1.000 aventureros a $ 9			632.000
Salario de llameros			59.900
Acarreo de metales			337.500
		Total..... $	8.850.051

Reducida esta suma a pesos corrientes de 8 reales, arroja la de $ 13.843.830. (1)

Apesar de que en estos datos se hallan englobados artículos de comercio extranjero y local, así como salarios y gastos de elaboración minera, muestran elocuentemente la capacidad económica de la Villa Imperial de Potosí a principios del siglo XVII.

---

(1)—En la «Descripción» aparceen 8.862.349 pesos ensayados, que importarían 13.847.420 pesos corrientes.

CAPÍTULO V

EL SISTEMA TRIBUTARIO

El derecho patrimonial de la corona.—Alcabala y unión de armas.—Papel sellado.—Ventas y renunciación de oficios, y juros de heredad y vitalicios.—Medias annatas, sínodos, espolios, etc.—Bula de la Cruzada.—Temporalidades.—Una síntesis del sistema tributario del coloniaje.

Desde que España había tomado posesión de las tierras americanas a título de conquista, sus reyes eran señores y dueños absolutos por derecho divino. La bula del papa Alejandro VI lo expresaba claramente, al haber hecho donación a los monarcas españoles, en nombre «del Omnipotente Dios», de todas las tierras descubiertas, sobre las que la bula pontificia decía: «Por el tenor de la presente, las damos, concedemos y asignamos perpetuamente a Vos y a los Reyes de Castilla y León, vuestros herederos y sucesores, y hacemos, constituímos y deputamos a Vos y a los dichos vuestros herederos y sucesores, señores de ellas, con libre, lleno y absoluto poder, autoridad y jurisdicción». (Bula de 4 de Mayo de 1493).

Bajo el prestigio de esta donación casi divina, los vastos dominios de la América española constituyeron patrimonio de derecho privado de los reyes católicos. Y no sólo por esto, sí que también por el absolutismo reinante en la época, la administración de las colonias no se hizo en bien de ellas, sino en el mayor beneficio posible de la corona.

Al influjo de causas tan fundamentales, no hubo propiamente administración política y financiera en el concepto que la ciencia y la práctica modernas asignan a las relaciones de derecho público entre la colectividad y sus órganos representativos. Fué simplemente una gran explotación patrimonial acorde con las ideas absolutistas del derecho divino y con las concesiones otorgadas en la bula pontificia.

De ahí que el sistema tributario de la época colonial, se hallase caracterizado por una regalía perfecta. Los quintos de oro y plata, los derechos metálicos, el tributo, la mita, los monopolios, los almojarifazgos, etc., etc., no fueron sino las diversas formas del derecho patrimonial ejercitado por los dueños y señores de las tierras conquistadas.

La misma contribución agraria, denominada diezmo, no fué un impuesto de economía pública, sino un derecho patrimonial de la iglesia cedido al poder temporal en cambio de que éste proveyera a las expensas del culto; como las gabelas que han de examinarse a continuación no obedecieron tampoco a otro concepto que al fundamental de regalía, que, en suma, fué la característica de todo el sistema colonial.

Con el nombre de «alcabala y unión de armas» existía en España, y bien pronto se trasladó a América, una odiosa contribución indirecta que pesaba sobre el consumo, el cambio y la circulación interna de toda clase de bienes muebles, semovientes e inmuebles, gravándolos con un tantos por ciento sobre su precio de transferencia.

Al principio la tasa adoptada por la ley de 1574, sólo fué del 2%, que sucesivamente subió al 4, al 6 y al 10%, a medida que el gravamen ganaba en antigüedad.

Fué siempre resistida y odiosa la exacción de la alcabala, sobre todo tratándose de artículos de primera necesidad, cuyo encarecimiento afectaba a las clases más desvalidas. Por eso mereció la execración general, y los primeros gobernantes de la República trataron de suprimir las alcabalas, proclamando que los impuestos indirectos eran opuestos a los principios de igualdad y justicia de las cargas públicas. Sin embargo, reapareció en diversos períodos de la época independiente, y más de una revolución se fundó en el propósito de destruir la odiosa carga.

La prosperidad de España fué minada por la alcabala, y sus colonias no hicieron sino sufrir, con mayor intensidad, los graves errores financieros de la metrópoli.

Tenía tal carácter de universalidad la alcabala, que no había riqueza alguna que escapara a su acción matadora.

«Todas las personas, decía la ley, han de pagar alcabala de todas las cosas que se cogieren y criaren,

vendieren o contrataren, de labranza, crianza, frutos y granjería, tratos y oficios o en cualquier otra forma».

Para los efectos de la alcabala, estaban obligados a llevar cuenta y razón de sus transacciones los encomenderos y hacendados, los mercaderes, traperos y roperos, los viandantes, los plateros (que pagaban 5 maravedís de alcabala por marco de plata), los boticarios, silleros, freneros, herreros, buhoneros, «y en efecto, todas las demás personas y de todas las cosas que sin embargo de no estar declaradas por leyes de este título, no se hallen por ellas exceptuados».

Para completar esta noticia, he aquí una nomenclatura consignada en las leyes de Indias, acerca de los efectos sobre los que se cobraba la alcabala, según la ley XXV de la Recopilación:

«Del vino de Castilla, y de la tierra, que sevendiere en grueso o por menudo, aceite, vinagre, frutas verdes y secas y cosas de comer;

De las sedas, brocados, paños y lienzos, y otro cualquier género de mercadería, que fueren de estos reinos, se ha de pagar alcabala de la primera y de las demás ventas, excepto de las armas y libros, conforme se declara;

Del trigo, cebada y las demás semillas que no se vendieren en los mercados, y alhóndigas, para provisión de los pueblos, se ha de cobrar guardando lo resuelto;

De la carne viva y muerta, corambre al pelo, curtido y adobado, pieles cervunas y de leones, tigres y otras selvaginas;

Sebo, lana, azúcar, miel, jabón y coca;

Sedas crudas, tejidas y de otra cualquier forma;

Mantas, algodón, azogue, plomo, cobre, acero, hierro, alambre, pescados, paños, frazadas, sayales, bayetas, jergas, cáñamo y lino;

Cañafístola, gengibre y otras drogas y especias;

Añil, zarzaparrilla y palo;

Cera, todas suertes de plumas y cosas hechas de ellas;

Piedras, perlas, aljófar y vidrio;

Loza, jarros, tinajas y otras vasijas de barro;

Madera, tablas y cosas hechas de ella;

Sal, piedra y arena;

Casas, heredades, estancias, chozas, esclavos y censos;

Ajuar de casa, tapicerías, vestidos y todo lo demás que se venda o trueque en cualquier forma;

De los frutos y esquilmos de las heredades y huertos y otros bienes;

De todas las cosas de labor de manos que se vendieren;

De recuas de mulas, de machos, caballos, carneros, todas bestias de carga;

Y de las demás cosas no exceptuadas aunque no se hallen especialmente comprendidas en esta ley».

El uso del papel sellado estaba severamente reglamentado, y su falta en los despachos e instrumentos públicos, era motivo de nulidad.

Había cuatro clases de papel: el sello primero valía 24 reales, o sean 3 pesos corrientes; el segundo era de 6 reales; el tercero de 1 real, y el último sólo valía un cuartillo, o sean 8 maravedís y medio.

Este sello de valor ínfimo estaba destinado a los despachos de oficio y de pobres de solemnidad, así como de los indios, «públicos o particulares». El tercer sello correspondía a todas las tramitaciones judiciales. El segundo se empleaba en el primer pliego de las escrituras públicas, de los testamentos y contratos en general. En el papel de primera clase debían extenderse todos los despachos de gracia y mercedes que se hicieren en las Indias.

Los empleos públicos se otorgaban por simple merced o a título oneroso, produciendo en este caso una renta apreciable en beneficio de la corona.

Se vendían en remate público los oficios de alguaciles, escribanos, notarios, tesoreros de moneda, balanzarios, tallas, ensayadores, contadores, etc., etc. Estos ingresos se denominaban «ventas de oficios».

La vara de alguacil mayor de Potosí, según los manuscritos de la «Colección Muñoz» de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, valía 100.000 pesos; el ensayador mayor de la Casa de Moneda, 50.000 pesos; el tesorero, 50.000; el ensayador, 30.000; el fiel ejecutor perpetuo, 25.000; el alferez real, 25.000; el depositario general, 24.000; el escribano de minas, 20.000; el de difuntos, 8.000; los procuradores, 4.000.

Todos los funcionarios reales que renunciaban su cargo, o lo transferían en favor de tercero, estaban obligados a pagar una contribución que alcanzaba a la mitad del valor del empleo la primera vez, y en las veces sucesivas o transferencias ulteriores, a razón de la tercia parte de dicho valor.

Una especie de censo, bajo la denominación de *juros de heredad* y *vitalicios*, reconocían las cajas reales en favor de algunas personas a quien el rey había señalado una pensión vitalicia en recompensa de servicios o por simple merced. También procedían los juros, como los censos, de los créditos de un capital entregado a las arcas, o bien de dineros que éstas adeudaban y pagaban en forma de una renta vitalicia o perpetua.

En los juros de heredad y de por vida, deben verse los orígenes de las rentas perpetuas, vitalicias y montepíos del régimen fiscal moderno. También son el origen en Bolivia de la llamada «Deuda española», junto con las ventas de oficios.

Entre las rentas eclesiásticas y otras contribuciones, fuera de los diezmos, merecen citarse los derechos de medias annatas, sínodos reales, vacantes mayores y menores, espolios, etc.

Las annatas o derechos de colación para optar un beneficio, título, pensión o empleo, han llegado hasta nuestros días en forma de timbres que se cobran en los títulos rentados y en los diplomas y grados universitarios. En el régimen colonial, la media annata debía pagarse sobre «todas las mercedes, títulos, oficios y rentas que se dieren por Nos o Nuestros Consejos, Virreyes, Capitanes Generales y otros Ministros .....regulándose este derecho por la mitad de lo que el primer año importare el verdadero valor de los sueldos, gajes, casas, propinas, luminares y demás emolumentos».

En caso de vacancia de una sede episcopal, sus rentas pertenecían a la corona, y se remitían a España para los pensionados de Carlos III, Colegio de Nobles de Madrid y Universidad de Salamanca.

Los bienes adquiridos por los prelados como emergencia de las rentas de la mitra, se denominaban *espolios*, y pasaban a la muerte de sus poseedores a beneficiar los establecimientos de caridad y al socorro de los desvalidos.

De los diezmos que se recaudaban para sufragar el servicio del culto, se deducían dos novenos para el rey. De los sueldos y emolumentos correspondientes a los clérigos, se retenía también una parte con el nombre de «mesada eclesiástica».

Habían muchas otras contribuciones de menor importancia, unas pertenecientes a las cajas reales, otras al clero y a los cabildos o ayuntamientos, tales como las de pesas, sisa, pulperías, lanzas, etc., etc., que no merecen una referencia especial.

El expendio de la *Bula de la Cruzada* que estaba destinado al presupuesto del clero, era una práctica inmoral, porque el poseedor de una bula gozaba de inmunidad por ciertas faltas y delitos.

Durante algún tiempo se recaudó este derecho en la época independiente, asignándose su producto al servicio de la Propaganda Fide, si bien no gozaban ya de privilegio penal los poseedores de la bula.

Después de la expulsión de los jesuitas, los cuantiosos bienes que éstos dejaron en Mojos y Chiquitos, donde tenían importantes cultivos, ganados y esta-

blecimientos manufactureros, pasaron a poder de la corona, y figuraban en los rendimientos reales con el nombre de «temporalidades». Además, los jesuitas de Mojos y Chiquitos tenían valiosas imposiciones censíticas en Pisco, Ica y Trujillo, alcanzando a $ 145.925, y también sobre las haciendas de viña de Umay con un capital de $ 138.207,1½. Merecen también citarse las temporalidades de Chuquisaca, situadas en el Obraje y hacienda de Pichuichuru en el Perú, cuyo principal alcanzaba a $ 48.795.

Con las noticias que quedan consignadas en este y los precedentes capítulos, acerca de las contribuciones y regalías de la época colonial, puede ensayarse la fijación de un cuadro de conjunto que dé una idea esquemática de su régimen financiero. Aunque todos los recursos exaccionados correspondían a un concepto puramente patrimonial, asimilaremos algunos de éllos a las tasas y contribuciones modernas de derecho público, según sus grados de semejanza o tendencias, a fin de formar una clasificación conveniente.

RENTAS DE ECONOMÍA PRIVADA

1 Quintos de oro y plata;
2 Productos de la Casa de Contratación de Sevilla;
3 Estancos de plata, azogue, tabaco, naipes, etc.;
4 Novenos, mayores y menores, mesada eclesiástica, espolios, vacantes, etc.;
5 Temporalidades y bula de la Cruzada.

TASAS O CONTRIBUCIONES

1 Tributo de los indígenas;

2 Señoreaje, ensayaje, braceaje y derecho de Cobos;
3 Avería de la armada, consulado de comercio, tonejale y almirantazgo;
4 Medias annatas;
5 Ventas y renunciación de oficios;
6 Censos sobre comunidades y contribuciones de mayorazgos, censos y laureados de Carlos III;
7 Papel sellado;
8 Varias prestaciones personales: mita, tercios de la corona, etc.

IMPUESTOS

1 Diezmos, primicias, veintenas y huasiveintenas;
2 Alcabala y unión de armas;
3 Almojarifazgo y derechos de aduana en «puerto seco».

CAPÍTULO VI

LA ADMINISTRACION FINANCIERA

El caos del coloniaje.—Jerarquía funcionaria y derecho presupuestal.—Rentas de la corona y del clero.—Algunas cifras.—En vísperas de la revolución de Mayo.—Durante la guerra de los quince años.—¿Cuánto costaron las guerras de la independencia?

Por lo mismo que las finanzas coloniales no obedecían a plan alguno—si ha de excluirse el de sacar el mayor provecho—el reconstituirlas es tarea poco menos que imposible. En este ramo, como en todos los de la administración colonial, reinaba el caos más inextricable.

Leyes contradictorias, atribuciones diversas, recaudaciones variadas, unas veces en tal cuantía, otras en mayor proporción; destino variable de las rentas, afectaciones y especializaciones de servicios; unas veces las cajas reales y la dirección de las rentas, estaban bajo la autoridad del virrey, superintendente nato de la real hacienda; otras había un intendente general

que las manejaba con absoluta independencia, y casi siempre las rentas especiales quedaban a cargo de funcionarios también especiales de la corona, que nada tenían que ver con las demás autoridades.

Sin embargo, en principio legal, la jerarquía funcionaria y el derecho presupuestal se hallaban establecidos del modo siguiente:

En el monarca residía el supremo poder absoluto. Le asesoraba el Consejo Supremo de Indias, a quien le estaba facultado expedir, a nombre del rey y con su beneplácito, las leyes, pragmáticas, ordenanzas y provisiones, que reclamase el régimen colonial.

Al mismo Consejo de Indias le correspondía la alta administración de la real hacienda. Los virreyes, presidentes y gobernadores, dependían directamente de dicho Consejo, que cada año dictaba los presupuestos a que debían sujetarse las autoridades coloniales.

Ningún dinero podía gastarse sino conforme a presupuesto, y sólo en casos extraordinarios de guerra podía el virrey, asesorado de un consejo de notables, decidir alguna erogación fuera de ley, destinada al levantamiento de milicias.

Antes de la creación de las intendencias en 1782, la fijación de las contribuciones, su cobro y custodia, corrían a cargo de funcionarios especiales en cada provincia, denominados oficiales reales y ministros de la real hacienda, cuyo superior jerárquico era el virrey.

El sistema de gestión anual y especialización de recursos para determinados servicios, se seguía con la mayor severidad. Ningún servicio podía pagarse sino

con dineros recaudados en el año en que él había sido devengado. Tampoco podían destinarse los excedentes de una recaudación para cubrir las fallas de otra caja. Pagados los servicios, se remitían los sobrantes a la Península con una estrictez matemática que no admitía el menor quebranto.

La Ordenanza de Intendentes de 1782 dió una nueva organización a la planta de los recaudadores y pagadores de la real hacienda, quitando a los virreyes, presidentes, gobernadores y oficiales reales, las atribuciones que hasta entonces habían ejercitado en materia tan delicada. Este cambio obedeció a las revelaciones secretas presentadas por el visitador D. Antonio de Ulloa, acerca de los malos manejos hacendarios del régimen colonial.

Conforme a la citada Ordenanza, los intendentes y los subdelegados por éllos nombrados, fueron los únicos funcionarios encargados de recaudar las rentas y de supervigilar su empleo. Como estas funciones daban cierto carácter de superioridad a los intendentes sobre los virreyes, con desmedro de las facultades y prestigios de éstos, bien pronto nacieron recelos y rivalidades que hubieron de imponer la modificación del régimen establecido, volviéndose a encomendar a los virreyes la superintendencia de la real hacienda, función que desempeñaban cuando sobrevinieron los trascendentales sucesos de la emancipación.

El virrey ganaba en los últimos tiempos coloniales, 60.000 $ al año, cuyo valor monetario, según los métodos de interpretación de los valores históricos, daría el siguiente resultado:

$ 60.000 de 11 dineros 20 granos de ley, con 272 maravedís, corresponderían a $ 65.517,06 de 25 gramos a ley de 900 milésimos. El poder adquisitivo de la moneda en el siglo XVIII era, según d'Avenel, como 3 es a 1 con relación al siglo XIX. Por consiguiente, los 60.000 pesos que ganaba el virrey, representarían hoy día Bs. 196.551,18 o sean Bs. 16.380 de sueldo mensual.

Este dato servirá para apreciar la importancia de los valores presupuestos que se indicarán más adelante.

Entre las rentas reales y las del clero, había una división fundamental, pero también no dejaban de haber intromisiones y participaciones en variadas formas y cuantías.

El clero y los conventos gozaban de saneadas y cuantiosas rentas. Fuera de los diezmos y primicias y las demás contribuciones y derechos de estola, de pie de altar, etc., etc., eran dueños de la mayor parte de las fincas rústicas y urbanas, o gozaban de censos y capellanías de mucha importancia. Tenían una mina inagotable en el fanatismo religioso de su época.

En 1796, las rentas de la corona sólo superaron en 16.000 pesos a las del clero, según se ve por los siguientes datos consignados en el «Bosquejo Estadístico» de Dalence:

Rentas reales.....	$ 1.255.760
Rentas del clero.....	$ 1.239.000
Diferencia.....	$ 16.760

Estas cifras se refieren sólo a las provincias del Alto Perú. Las del virreinato alcanzaban a.....
$ 4.833.507 de ingresos, y los ingresos sumaban
$ 3.400.843,1.½, dejando la suma de.....

$ 1.432.663,6.½ como superávit para la corona. (1)

A principios del siglo XIX, las rentas reales y municipales del Alto Perú, ascendieron a 2.306.060 pesos distribuídos del modo siguiente:

	RENTA REAL	ID. MUNICIPAL
Intendencia de Potosí.....	1.435.140	22.000
« La Plata.....	333.560	18.500
« La Paz.....	340.600	9.700
« Cochabamba y Santa Cruz.....	70.400	3.760
« Mojos,en especies	44.000	
« Chiquitos « «	28.400	
	2.252.100	53.960
Total.....$ 2.306.060		

Con motivo de la crisis del azogue, estas rentas disminuyeron en una mitad a partir de 1806. El último dato de la época española que registra Dalence y que puede estimarse tomado en la víspera de la gran revolución de 1809, alcanza a 1.853.990 pesos, que se descomponen así:

(1)—Datos de P. Dancuart.—Anales de la Hacienda Peruana. Tomo I.

Potosí	1.220.200
La Paz	351.360
La Plata	210.430
Cochabamba con Mojos y Chiquitos	72.000
Total	$ 1.853.990

La bancarrota de la corona iba a precipitarse, pero el grito de independencia dió una expresión más radical al problema.

Durante la guerra de los quince años, el caos financiero del coloniaje desaparece ante la fuerza de las circunstancias, y se simplifica el sistema de exacciones de un modo espantoso. Son los jefes militares que dictan la ley del momento para arrancar del pueblo los recursos que necesitan. La confiscación de los bienes de los patriotas, los empréstitos forzosos, las requisiciones, los saqueos, todo contribuye a mantener repletas las insaciables cajas militares.

De su parte los ejércitos patriotas, propios y extranjeros (1), las guerrillas, los levantamientos, viven también a merced del cupo forzoso, o de la prestación voluntaria y, casi siempre, del suministro generoso de un pueblo hambriento de libertad, capaz de todas las abnegaciones, resuelto a todos los sacrificios de la redención.

Los jefes realistas crearon impuestos exorbitantes sobre los artículos de primera necesidad, dando una elasticidad abrumadora a la alcabala. Con estos

(1)—«En Potosí tomó Castelli de las arcas una ingente suma, y aumentó sus recursos en Chuquisaca».—Pueyrredón abandonó Potosí dejando siete piezas de artillería; pero llevó consigo 600.000 pesos. (Historia de Bolivia por Cortez).

y otros recursos ordinarios y extraordinarios, las rentas se mantuvieron alrededor de 3 millones de pesos anuales. (1) Y como las tropas patriotas vivían también a costa de las provincias, es prudente calcular que éllas soportaban una carga extraordinaria y abrumadora de más de cuatro millones de pesos anuales, suma que salía, sino por entero, siquiera en parte considerable, del menguado capital del pueblo, ya que la minería, única industria que alimentaba la economía nacional, estaba paralizada, y la agricultura, deficiente y rutinaria, carecía de brazos, y a menudo eran devastados los pocos campos de cultivo.

Cegadas las principales fuentes de producción, no había en realidad de dónde derivar la más débil corriente de renta financiera: todo o la mayor parte del dinero necesario al mantenimento de la administración colonial y al sostenimiento de numerosos ejércitos, movilizados en todas las provincias, para hacer frente al formidable empuje libertario de la América entera, tenía que salir forzosamente del mismo capital, y consumirse gran parte de él en quince años de lucha sin precedente en los fastos humanos.

Ante la magnitud del esfuerzo desplegado de una y otra parte de los contendores en la guerra terrible; al frente del hecho incontestable de una dualidad abrumadora en la recaudación financiera durante un espacio de tiempo tan largo; y, en fin, ante la pavorosa realidad de hallarse estancadas las fuentes productoras, y de tener, por lo mismo, que recaer el cupo forzoso sobre el capital formado para ser consumido en la insaciable hoguera de la guerra, ¿sería posible

(1)—Dalence.—Bosquejo Estadístico.

encerrar en una sola cifra el monto de los sacrificios económico-financieros que consumaron las provincias rebeldes, como precio de la libertad que alcanzaron tras otro enorme e incalculable tributo de heroísmo y de sangre?

Los campos eran a menudo talados, las poblaciones eran devoradas por el incendio, los prisioneros rescataban su vida a peso de oro, los bienes se confiscaban en provecho de las cajas militares, y, en fin, el cupo forzoso, el pillaje, la devastación, eran la ley inexorable de todos los días durante quince años.

La magnitud misma del desastre hace que su estimación cuantitativa escape a todo cálculo, se substraíga a toda posibilidad de medirse con un criterio ponderal, y que, en resumidas cuentas, resulte innecesaria la cifra ante la grandeza y santidad de los resultados.

De otro lado, las prestaciones voluntarias del pueblo en favor de los ejércitos patriotas, los suministros generosos para alentar a los guerrilleros, forman un renglón considerable, cuyo monto no se sabría fijar, pero puede, en cambio, admirarse el gran influjo moral que todo ese noble desprendimiento de vidas y haciendas ejerció en la constitución de una patria libre. Baste anotar que los donativos, muchas veces de sumas insignificantes, de caballos, armas, objetos de escaso valor, llevaban casi siempre la anotación de que el donante daba eso «*y su persona*». (1)

Empero, concretando el cálculo al aspecto puramente financiero de las guerras de la patria, prescin-

(1)—Las Finanzas de Buenos Aires.—Rébora—1911.

dencia hecha de sus grandes desastres económicos, podría fijarse el monto de su costo alrededor de cien millones de pesos, en los que sólo los presupuestos anuales estarían representados por sesenta millones, y el resto correspondería a los empréstitos, confiscaciones, cupos, rescates, donativos, etc., etc. Esta suma representa en su totalidad pequeños capitales destruídos por la guerra y arrebatados a una población económicamente miserable, y que, según todos los cálculos, no pasaba de 900.000 habitantes.

Pero la libertad no tiene precio.

SEGUNDA PARTE

ORGANIZACION DE LAS FINANZAS DE LA REPUBLICA

CAPÍTULO I

LA ASAMBLEA NACIONAL DE 1825

Al declararse la independencia.—La moneda de la «República Bolívar».—Monto de lo acuñado hasta 1830.—El primer empréstito.—Los primeros recursos.—La población el año 1825.

Bolivia surgió del caos del coloniaje después de una guerra de quince años, que había empobrecido al país en términos incalculables.

La población había quedado en extremo reducida. Las minas habían sido abandonadas, desde que faltó el azogue, primero, y siguieron después los acontecimientos bélicos.

Los campos yermos y las poblaciones devoradas por el incendio, atestiguaban una situación de espantosa miseria, de que ya en 1816, al ingresar a las provincias altoperuanas, quedó vivamente impresionado el general realista La Serna, no obstante de que acababa de dejar los campos de batalla de la guerra na-

poleónica, para ponerse a la cabeza de los ejércitos españoles de esta parte de América.

El saqueo, la confiscación, los empréstitos forzosos y las contribuciones exorbitantes, habían secundado la obra del fuego y de la destrucción vandálica, comprometiendo las bases mismas de la riqueza pública y particular.

En estas deplorables condiciones económicas, comenzó la vida de la nueva entidad política, que bajo el nombre de *República Bolívar* asumió su personería de Nación Soberana el 6 de Agosto de 1825, mediante el Acta de Independencia sancionada por la primera Asamblea Nacional reunida en Chuquisaca.

Sin embargo de que con esto sólo estaba llenada la gloriosa misión del primer Congreso boliviano, contraída a fijar el porvenir político de las provincias altoperuanas, dejando para ulteriores asambleas las delicadas funciones constitutivas y orgánicas, fijó también, en lo económico, las bases de la moneda nacional, como el signo tangible y expresivo de la naciente entidad soberana.

No hizo, es verdad, ninguna innovación fundamental en la materia. Adoptó simplemente el régimen tradicional en cuanto al diámetro, peso y ley de las monedas de oro y plata, concretándose a legislar sobre los emblemas y sellos de las nuevas piezas. Sin duda, porque habían desaparecido los archivos de la Casa de Moneda de Potosí, o porque no se tuvo dónde consultar de pronto las características monetarias de las piezas «usadas hasta el presente», por lo que la ley, en materia tan delicada, se concretó a consagrar

en una fórmula vaga, el sistema existente en los hechos.

Conservó a la unidad monetaria la denominación de *peso*, dividido en 8 *soles* en lugar de *reales*, nombre ingrato ante la democracia ambiente.

El régimen tradicional a que se refería la ley, no era otro que el estatuído por la cédula reservada de 1786, que redujo a 10 dineros 20 granos (902,77 milésimos) la ley de la moneda de plata de 272 maravedís, que pesaba 542 granos (27 gramos).

La de oro debía tener, como las onzas de la metrópoli, 21 quilates de ley que corresponden a 875 milésimos fino, con peso ponderal de 542 granos, o sean 23 gramos 625 milésimos de oro puro.

En cuanto a los emblemas y leyendas, la ley de 17 de agosto de 1825, los fijó de esta manera:

«La moneda de plata en su anverso llevará grabado el cerro de Potosí, y un sol nacido sobre su cima, y a los costados del cerro irá expresado en un número y una letra mayúscula, el valor de la moneda. En la circunferencia se verá, en el costado izquierdo, la palabra REPÚBLICA, y en el derecho BOLÍVAR».

«En el reverso se grabará, en el centro, el árbol de la libertad, y cinco estrellas coronándole: al pie del árbol de la libertad aparecerán dos alpacas sentadas y enfrentadas, pero con el cuello levantado, y la vista fija en la copa del árbol. En la circunferencia se leerá: CON UNIÓN, FIRMEZA, ORDEN Y LEY».

«La moneda de oro no tendrá en su cuño otra diferencia de la plata, que llevar grabado en el rever-

so el escudo de armas de la República, con dos pabellones a los costados, y trofeos militares al pie de dicho escudo».

Con arreglo a esta ley, la Casa de Moneda de Potosí acuñó, desde 1825 a 1827 inclusive, la suma de 4.561.827 pesos 7 soles (reales) de plata, distribuídos en la forma siguiente:

AÑO	PESO	LEY	CANTIDAD
1825	542 granos	10 d. 20	$ 1.345.232,3
1826	« «	« «	« 1.583.057.
1827	« «	« «	« 1.633.538,4
			$ 4.561.827,7

No hubo acuñación de oro, que no comenzó sino en 1831.

El Congreso Constituyente, por ley de 20 de noviembre de 1826, modificó los emblemas de la primera moneda «bolivariana», reemplazándolos con el busto del Libertador «a la heroica», la inscripción de *República Boliviana* y la leyenda «Libre por la Constitución», así para las monedas de oro como de plata. En el cordón debían inscribirse las palabras: «Ayacucho.—Sucre.—1824».

No obstante de que se ordenó la acuñación de estas nuevas piezas desde el 1º de enero de 1827, sólo se hizo a partir del año siguiente, en que la Casa de Moneda de Potosí lanzó 1.369.928 pesos fuertes, y los años 1829 y 1830—año este último en que comenzó la acuñación de moneda sencilla—se emitieron $

1.549.456 y $ 1.789.305, respectivamente, formando un total de $ 4.708.689 en los tres años.

Del mismo modo que la primera ley monetaria, la de 1826 no señaló concretamente el peso y la ley de las piezas adoptadas, dejando en vigencia la práctica usada en el sistema colonial.

Para seguir el curso del régimen monetario desde sus orígenes coloniales, será oportuno anotar las diversas variaciones que hubo de sufrir hasta el momento de proclamarse la independencia de la República.

Después de las primeras monedas hechas a martillo y cortadas, que llevaban la *cruz* como único emblema, se emitieron las de «dos columnas» (*Plus-ultra*) conforme a la cédula de 1651, con la ley de 11 dineros 4 granos (931 milésimos), y la talla de 67 piezas por marco.

En 1728 se redujo la ley de la plata a 11 dineros (916,666 milésimos), debiendo sacarse 68 reales por marco de plata. La misma cédula real fijó para el oro 22 quilates de ley (916,666) y señaló en 68 escudos la talla por cada marco.

En 1786 se rebajó, mediante cédula reservada y confiada al secreto juramentado de todos los ensayadores de moneda de América, a 10 dineros 20 granos (902,77 milésimos) la ley de las monedas de plata, y a 21 quilates de las de oro.

Esta fué la ley monetaria adoptada por la Asamble Nacional de 1825 y por el Congreso Constituyente de 1826.

Corresponde también a la Asamblea Nacional la iniciación del primer empréstito boliviano, mediante

autorización que confirió al Libertador Presidente Bolívar para negociarlo por la suma de un millón de pesos, afianzando su pago con los fondos generales de la República.

Esta suma estaba destinada a premiar los servicios del Ejército Libertador que concurrió a las batallas de Junín y Ayacucho, y no llegó a realizarse sino más tarde, junto con otras sumas destinadas a indemnizaciones de guerra, como se verá en el siguiente capítulo.

Ninguna medida adoptó la Asamblea en cuanto a los recursos ordinarios y los gastos de la administración. Continuó el régimen colonial en todo lo compatible con el nuevo orden de cosas, cobrándose las contribuciones establecidas y pagándose al ejército y a los funcionarios el sueldo usual, que los títulos expedidos por el nuevo gobierno lo señalaban a mayor abundamiento.

«En los primeros años de la existencia de Bolivia se ignora el monto de sus rentas; pero es muy probable que no alcanzasen a 1.600.000 pesos», dice el señor Cortez en su «Historia de Bolivia». Sin embargo, Sucre anunció a la Asamblea que las rentas sólo llegaban a 1.500.000 pesos, y los gastos pasaban de 1.800.000 $.

Los principales recursos que tuvo el gobierno fueron los provenientes de la contribución indigenal, los diezmos, el derecho metálico o quinto, la alcabala de enajenaciones y de artículos de consumo, la venta de algunas minas y de las propiedades pertenecientes a los conventos extinguidos y a los jesuitas expulsa-

dos en la época colonial, que la potestad civil aprovechaba bajo el nombre de «temporalidades».

Además, la parte a que tenía derecho el patrono nacional sobre los diezmos y primicias, en calidad de «noveno mayor y menor».

No fueron, sin duda, muy importantes los derechos metálicos, porque la minería estaba paralizada por falta de capitales y de azogue. Otro tanto cabe decir de los derechos de almojarifazgo o derecho de aduana, que entonces eran del 30% sobre los avalúos de plaza, porque estaba poco desarrollado el comercio internacional, y los aguardientes y licores peruanos habían sido declarados libres de derechos en homenaje a la confraternidad dominante en aquellos primeros momentos.

Un dato que sería muy interesante conocer para fijar la importancia y capacidad económica y financiera de la República en sus orígenes, es el relativo a la población. Desgraciadamente, faltan elementos de información certera y directa que pudieran satisfacer plenamente las exigencias de una concienzuda investigación.

Empero, hay bases de cálculo y elementos de criterio que son capaces de suministrar probabilidades muy aceptables, que a falta de datos directos deben tenerse como inducciones estadísticas aproximadas a la verdad.

Los cálculos hechos por Dalence en su «Bosquejo Estadístico», tomando como punto de partida el censo levantado el año 1846, que arrojó una población

de..... 1.373.896 sujeta
a las leyes, y..... ..... 760.000 de tri-

bus salvajes, formando un total de 2.133.896 habitantes, asignan a los primeros tiempos de la República un total de 997.427 almas.

Este cálculo debe tenerse por muy aproximado, tanto por los factores estadísticos que han servido a establecerlo, cuanto porque está dentro de las leyes generales del crecimiento vegetativo de la población en centros de normal desarrollo.

Según los resultados del censo de 1846, la población indígena representaba el 51,6%, y la blanca y mestiza el 48,4%. Aplicando la misma proporción al año 1825, se tendrían 482.000 blancos y mestizos, y 514.000 indígenas.

Con estos elementos étnicos y con una renta fiscal calculada en 1.500.000 pesos fuertes, comenzó su existencia la República de Bolivia.

CAPITULO II

LA OBRA DE BOLIVAR, SUCRE Y EL CONGRESO DE 1826

I.—El derecho de propiedad de los indígenas y la abolición del tributo.—Obstáculos opuestos a la reforma.— Repartimiento de tierras en Santa Cruz.

II.—Orígenes del derecho financiero.—Impuesto directo sobre las rentas.—La contribución personal y sus resistencias.—Nuevas bases tributarias.—Patentes comerciales, industriales, profesionales y suntuarias.—El fracaso del nuevo sistema impositivo.

III.—Crédito público.—Emisión de billetes de la renta nacional del 6%.—Indemnizaciones de guerra.—Vales del empréstito de 1826.—Gratificación al ejército libertador.—Reconocimiento de la Deuda española y consolidación de la Deuda patriótica.

IV—.La minería.—Negociación de las minas del Estado.—Rebaja de los derechos metálicos.—Protección al azogue, estaño y cobre.—Oficinas de rescate de minerales.

V.—Régimen aduanero.—Habilitación del puerto La Mar.—Los primeros derechos «ad valorem».—Represión del contrabando.—Corredores de comercio.

VI.—El primer presupuesto de la República.—La contaduría general.—Centralización de los diezmos.—Fondos de instrucción y beneficencia.—Papel sellado y oficina de hipotecas.—El servicio de guerra.

I

Los primeros actos del Libertador Bolívar fueron en favor de la raza indígena. Puso en vigencia

los decretos dictados en Trujillo y el Cuzco los años 1824 y 1825 ordenando la repartición de las tierras llamadas de comunidad entre los indígenas poseedores, «asignándose siempre más al casado que al que no lo sea, de manera que ningún indio pueda quedarse sin su respectivo terreno».

Declarados propietarios los indígenas a razón de un «topo» de cinco mil varas cuadradas por persona, en terrenos regados y pingües, y de dos topos en los estériles, debían venderse los sobrantes por cuenta del Estado en una tercia parte menos de su tasación.

Extinguidos los cacicazgos, que había fomentado el régimen colonial, los caciques y recaudadores que indebidamente poseían tierras, estaban obligados a devolverlas, excepto los caciques de sangre, a quienes se asignaría en propiedad a razón de cinco topos por persona.

Los indígenas despojados de sus tierras el año 1814 por su adhesión a la causa de la patria, recibirían un tercio más de sus propiedades primitivas.

Ningún servicio personal podía exigírseles en lo sucesivo sin previo contrato, y los jornales debían ser pagados en dinero.

Quedaron prohibidos las mitas, las encomiendas, los pongueajes y todos los servicios personales forzados que habían impuesto los españoles.

Estas liberaciones fueron coronadas con la abolición del «tributo», que debía llevarse a la práctica luego de vencido el tercio de diciembre de 1825, creándose en cambio una contribución general directa, como se verá más adelante.

«Estaba fuertemente persuadido (el Libertador) —dice el Dr. Manuel María Urcullu en sus «Apuntes para la Historia de Bolivia», refiriéndose al tributo— de que era el escándalo y la injusticia mayor conservar en esa especie de vasallaje a los originarios dueños de esta tierra, que acababan de hacer tantos y tan costosos sacrificios por la causa de la libertad. El Gobierno de Buenos Aires los había librado de esa carga, y lo que era más todavía, las Cortes de Cádiz declarando a los americanos y españoles iguales en derechos, declararon también con fecha 13 de marzo de 1811, exentos del tributo a los indios y demás castas de las provincias de América. Abrogó, pues, las leyes relativas al tributo y dispuso se estableciera una contribución personal moderada, que no pasaba de tres pesos al año, repartida entre todos los bolivianos, bajo las bases y con las modificaciones contenidas en la instrucción para el empadronamiento de indios».

Por desgracia, las más de las nobles declaraciones del Libertador y de la diputación permanente que le asesoraba, quedaron simplemente escritas, no obstante la sinceridad de los esfuerzos desplegados para ponerlas en ejecución.

En medio de las penurias que es fácil suponer tendría el naciente fisco boliviano, no era posible renunciar a una renta cuantiosa y saneada como la del tributo, ni era fácil implantar los nuevos sistemas impositivos sobre la renta sin una larga preparación de padrones y una minuciosa avaluación de las rentas imponibles.

Tampoco era factible organizar de inmediato la propiedad individual del indio, sin un censo previo que sirviera de base de distribución, y sin revisitas y alinderamientos cuidadosos, indispensables para no herir derechos adquiridos, so pena de consagrar irritantes injusticias y alimentar fraudes, que habrían hecho impopular y peligrosa la reforma agraria.

Al influjo de causas tan fundamentales, fué provisionalmente restablecido el pago del tributo bajo el nombre de «contribución indigenal», mientras llegaran a formarse los padrones de la nueva contribución directa general; y quedó igualmente en suspenso la repartición de tierras mientras se estudiasen mejor en su extensión, calidad y aprovechamiento, y se supiera exactamente el número de indígenas que tenían derecho de ocupación o de composición sobre ellas.

De esta manera quedaron diferidas para mejores tiempos ambas reformas; y desde entonces al presente, si hemos de exceptuar la sustitución del nombre del tributo colonial con el de «contribución territorial», y la confirmatoria, en principio, del derecho de propiedad en favor de los comunarios, no aparece haberse hecho gran cosa por constituir la propiedad individual y libre del indio, y someter las tierras de comunidad y las exvinculadas por título de composición con la corona de España, al régimen moderno del impuesto sobre la renta predial.

Tuvieron en cambio mejor éxito las medidas dictadas para el régimen agrario de las comarcas orientales, ya porque la población, más apta para incorporarse a la corriente civilizadora, era relativamente

escasa ante la enorme extensión y la pingüe calidad de las tierras, o ya porque no habiéndose implantado en ellas el sistema de comunidades que, en la parte occidental, había creado el virrey Toledo, cuidadoso de mantener arraigado en la «sayaña» al bracero indígena para el trabajo de las minas, no ofrecía allí dificultad alguna la distribución individual de las parcelas de cultivo. Es así que, en favor de los naturales del departamento de Santa Cruz, se ordenó sin el menor obstáculo que la distribución se hiciera a razón de una fanegada por persona en lugares pingües, y el doble en tierras mediocres, manteniéndose sólo la comunidad de los pastales.

II

Entraba en el lógico encadenamiento de los ideales consagrados por la guerra de la independencia, el cambio radical del régimen financiero. Había que destruir en este orden, siguiendo lo que se había hecho en lo político y social, el sistema de privilegios e injusticias del coloniaje, a fin de hacer práctico el principio de igualdad y proporcionalidad de las cargas públicas, en consonancia con la «Declaración de los Derechos del Hombre» que lanzara la Revolución francesa como el nuevo evangelio de la humanidad.

De patrimonial y regalista que fué el carácter de la dominación española, tenía que convertirse al moderno ideal del derecho financiero, el manejo de los intereses de la flamante República. Ya no era el derecho absoluto y divino del monarca hispano, el fundamento de la tributación exaccionada al pueblo, «como

justa señal y manifestación de vasallaje debido por estos naturales al Soberano». Tampoco el servicio público y la satisfacción de las necesidades colectivas, habían de tenerse en lo sucesivo como graciosas mercedes emanadas de la magnanimidad del dueño y señor de las tierras conquistadas en nombre del Dios Omnipotente. Un principio hasta entonces ignorado venía a completar, en lo financiero, el conjunto de los ideales que se habían cristalizado en la hoguera de las guerras de la patria. Era el pueblo soberano, árbitro y señor de sí mismo, que al asumir la responsabilidad de sus destinos, se echaba la carga inherente al mantenimiento de su propia vida. Esta reclamaba la creación de servicios públicos, indispensables para la tutela de los derechos, la defensa colectiva, el progreso moral y material de la Nación, y quien tenía que constituir el capital financiero para hacer frente al gasto público, era el mismo pueblo, en justa proporción a la importancia de las capacidades individuales y en la medida estricta de las exigencias del bien colectivo.

Con la destrucción del régimen de factoría colonial, nació, pues, recién el verdadero derecho financiero americano, cuyas líneas fundamentales, por lo que hace a las provincias altoperuanas, fueron trazadas por el decreto del Libertador, de fecha 22 de diciembre de 1825, que contiene el siguiente considerando en que se basa la contribución directa sobre la renta:

«Que la contribución directa distribuída entre todos los ciudadanos, *con proporción* a las propiedades que poseen, a las ciencias o artes que profesan, y

a la industria de cada uno, los hace *concurrir* de un modo *equitativo e igual al sostenimiento de las cargas del Estado*».

De acuerdo con estos principios, se estableció la contribución directa dividida en tres categorías; a saber: 1ª contribución personal; 2ª contribución sobre las propiedades; 3ª sobre las rentas anuales que produzcan las ciencias, artes e industrias.

La contribución personal era una capitación de 3 pesos anuales, que debía pagar todo hombre entre los 18 y 60 años de edad, con excepción de los militares en servicio, los religiosos enclaustrados y los absolutamente inválidos que no fueran propietarios.

La contribución sobre las propiedades estaba clasificada del modo siguiente:

El 4% debían pagar las propiedades rústicas sobre el canon del arrendamiento, y sólo el 3% si la tierra fuese directamente cultivada por el propietario. Los bienes urbanos, el 3% sobre su renta, si estaban alquilados, y sólo el 2% sobre el arrendamiento avaluable, si sus dueños los habitaban.

Las contribuciones de la tercera categoría se detallaban así:

Los empleados públicos debían sufrir un descuento proporcional y progresivo entre el 1% y el 5%, y a los profesionales se les debían avaluar sus ganancias.

Se fijó para los abogados, médicos y boticarios el 4% sobre 500 pesos de ganancia anual que se les calculaba.

A los maestros mayores de oficios, se les señaló

el 2% sobre 200 pesos de ganancia, y a los oficiales y artesanos en general, la misma cuota sobre 100 pesos.

Los almaceneros de efectos ultramarinos, debían pagar el 6% sobre 6.000 pesos; los tenderos igual porcentaje sobre 1.200; el 3% sobre 300 pesos los que vendían efectos del país; y la misma cuota los simples pulperos, pero sólo con relación a ganancias calculadas en 200 pesos.

Quedaban suprimidas toda clase de contribuciones coloniales llamadas tributo, alcabala, sisa, etc.

Según este plan, un almacenero de efectos ultramarinos, debía pagar 360 pesos anuales sobre sus probables ganancias, más tres pesos por el impuesto personal. La cuota en junto alcanzaba al 6,05%.

En cambio, el artesano que ganaba un jornal entre 6 y 8 reales, estaba acuotado con la misma capitación de 3 pesos, más 2 pesos por concepto de sus ganancias anuales, resultando pagar 5% en suma.

Para los pulperos la situación era más favorable que para los artesanos: 3 pesos de capitación, más 6 pesos por impuesto sobre su renta, sumaban 9 pesos anuales, o sean sólo 4,50% sobre sus ganancias de 200 pesos calculados, mientras que los menestrales, como se ha visto, pagaban el 5% sobre ganancias menos probables.

Con todo, el sistema de impuesto directo estaba lanzado, y su perfeccionamiento vendría con la práctica y el mejor estudio de las condiciones económicas del país.

La capitación de tres pesos fué sin duda un recurso pasajero para suplir el déficit de la supresión

del tributo. Debieron haberla aconsejado las circunstancias de absoluta penuria en que se hallaba el apenas nacido fisco republicano, en calidad de subsidio inmediato, mientras normalizarse la recaudación de las otras rentas, que antes de entrar en vigencia necesitaban una laboriosa preparación. Por eso también Bolívar dió a su decreto la vigencia de un solo año, hasta que el Congreso Constituyente, convocado para mayo de 1826, fijara definitivamente el sistema rentístico de la República.

Mas, hay una observación fundamental que hacer al plan financiero del Libertador: La desmesurada extensión que dió a la base del impuesto, buscando hasta las rentas problemáticas y mínimas de simple alimentación para gravarlas con cuotas demasiado altas para su época.

Ni por sus condiciones sociales ni por su desarrollo económico, estaba habilitado el país para pasar de golpe, del maremágnum del coloniaje y de la guerra, a las esmeradas perfecciones del impuesto general sobre la renta, cuya implantación presupone siempre un grado superior de cultura política y un relativo perfeccionamiento del utillaje económico. Ambas condiciones faltaban. El país se debatía en la miseria, y largo tenía que bregar aún para reconstituir la riqueza pasada, que tampoco había sido importante.

Si el impuesto se hubiera contraído a gravar las rentas principales sobre fincas rústicas y urbanas, los réditos de los capitales y las ganancias del comercio mayorista, la reforma habría podido prosperar, cundiendo después sobre todo el organismo económico.

Por desgracia no fué así, y apesar de las liberaciones que consagraba en favor de la raza indígena y las clases desvalidas con la supresión del tributo y de la alcabala, grandes resistencias despertó, y fué ésta, indudablemente, la causa de los descontentos que se levantaron contra Bolívar y Sucre.

En la contribución personal se vió disimulado el *tributo*, considerado como baldón de ignominia del indio originario; y las clases populares y elevadas encontraron altamente ofensivo a su rango y a sus preocupaciones sociales, el que los nuevos gobernantes trataran de generalizar la vergonzosa carga, convirtiendo en parias a los ciudadanos libres de una República..... Era tan profunda la división de razas y tan odioso el tributo colonial, que repugnaba de modo invencible a los blancos y mestizos el equipararse a los indios de origen y cédula para resignarse a pagar la *tasa*, aunque se le diera el nombre de «contribución personal» que aparecía en el decreto bolivariano. Fué general la protesta, reagravada con las demás contribuciones directas, sin que la supresión de la alcabala y las otras gabelas indirectas, fuera bastante a demostrar la justicia y conveniencia del nuevo sistema.

El Congreso Constituyente suprimió la capitación y adoptó nuevas bases para el impuesto directo, restringiéndolo del modo siguiente:

Los comerciantes pagarían el 1% sobre su capital en giro, los fabricantes y los dueños de predios urbanos, el 3 por mil, y los hacendados, labradores y capitalistas, el 2 por mil. El monto del capital se fijaría anualmente por declaración propia, averigua-

ble por peritos en caso de duda. Quedaban exentos los capitales colocados en fondos públicos.

Seguirían pagando los indígenas la contribución de costumbre, la cual sería única, aun cuando les fuesen adjudicadas a perpetuidad las tierras, mientras con mejor conocimiento se les fijase la cuota anual que habían de pagar como propietarios graciosos, cesando el pago de la contribución indigenal. Entre tanto, los indígenas podían pedir la adjudicación de las tierras poseídas y aun de las baldías.

Así habría quedado facilitada la implantación del nuevo régimen, aunque su base «capitalista» y el mantenimiento del tributo, no eran recomendables; pero se comprometió la situación con la ley de patentes comerciales, profesionales, industriales y suntuarias, hiriendo de rechazo la popularidad del gobierno del Mariscal de Ayacucho y de sus ministros Facundo Infante y Juan de Bernabé y Madero, que aparecían ante los ojos del pueblo como propiciadores de un sistema tributario que, si bien racional y legítimo en el fondo, hería intereses económicos y preocupaciones sociales, que los descontentos y logreros políticos iban a explotar a maravilla.

Fueron de siete clases las patentes decretadas:

La primera clase con 52 pesos, gravaba a los comerciantes mayoristas, médicos y propietarios con más de siete criados.

La segunda con 28 pesos, comprendía las tiendas y boticas, los tambos, billares y personas que tuvieran hasta seis criados.

Con 20 pesos, las tiendas de bayetas, de coca,

ají y algodón, y a los abogados y poseedores de cinco criados.

Pagaban 12 pesos las confiterías, panaderías, chicherías, las casas de comercio mayorista por cada dependiente, los mayordomos de fondas y cafés, los corredores de comercio y los que tuvieran cuatro criados.

La quinta clase con 8 pesos, comprendía a los talleres céntricos y a los dependientes de casas de menor importancia.

Por quemar «castillos de cohetes» y por cada oficial de taller, se fijaba 4 pesos de patente.

La última clase, con 2 pesos, catalogaba a los talleres alejados del centro, los caballos de paseo, cada «salva de camaretas», el uso de las campanas por cada cinco minutos que excediera a las pragmáticas de la iglesia, y por salir con traje distinto al usual a pretexto de función cívica o religiosa.

En las provincias se rebajaría una cuarta parte de las cuotas fijadas.

El detalle de la patentación desacreditó la reforma y la hizo impopular, sin haber logrado tampoco incrementar las rentas nacionales.

«La hacienda pública—dijo Sucre en su último Mensaje—no ha recibido mejoras en el cambio del sistema de impuestos. Los directos, sustituyendo a los indirectos del régimen anterior, han producido descontentos y dejan comparativamente un considerable déficit».

Y D. José María Dalence, refiriéndose al defectuoso sistema financiero que ha persistido en Bolivia, decía con su habitual acierto lo que sigue:

«El año 1826 procuró corregir este defecto esencial otro sistema racional según las luces del siglo; pero genios ambiciosos que aspiraban por medios ilegales al supremo mando, se aprovecharon de esta delicada circunstancia, pervirtieron y descarriaron la opinión de las masas, y haciendo odioso el nuevo sistema, causaron bajo este y otros pretextos la revolución del año 28». (1)

«El Congreso de 1827—agrega otro historiador—atemorizado por las resistencias que se opusieron a la recaudación de los nuevos impuestos, autorizó al gobierno para que en los departamentos o provincias en que no fuese posible realizar el nuevo sistema tributario, restableciese las contribuciones indirectas existentes en enero de 1825. El gobierno consultó a los departamentos, dejando a su elección el pago de los impuestos. Excepto el departamento de Cochabamba, los demás desecharon las nuevas contribuciones, y por este paso de debilidad, ha quedado estacionaria la hacienda pública». (2)

III

Corresponde a las iniciativas del primer ministro de hacienda de Bolivia, D. Juan de Bernabé y Madero, la fundación del Crédito Público que sancionó el Congreso Constituyente, autorizando la emisión de tres millones de pesos en rentas del 6% anual para pagar las indemnizaciones de la guerra de los quince años.

---

(1)—Dalence.—Bosquejo Estadístico de Bolivia.
(2)—Cortez.—Historia de Bolivia.

Este empréstito interno, inspirado en las rentas francesas y consolidados ingleses, estaba garantizado con la hipoteca de los bienes nacionales. Debía emitirse en billetes que devengaran 6 y 60 pesos de renta pagadera por cuatrimestres, bajo la denominación de «Fondo público del 6%».

Para la amortización se fijó el 1% o sean 30.000 pesos, que unidos a los 180.000 pesos de la renta, formaban 210.000 anuales, que debían empozarse por tercias partes anticipadas en la «Caja de Amortización» creada al efecto.

Fueron expresamente afectados al pago de este servicio, la renta de los predios rústicos y urbanos y la mitad del producto de la venta de las propiedades fiscales y minas.

Posteriormente se agregaron la renta del papel sellado, las patentes, los diezmos en la parte perteneciente al Estado, y los impuestos sobre productos mineralógicos.

Dos diputados, el ministro de hacienda y cuatro propietarios y comerciantes elegidos por voto popular, debían correr a cargo de la administración.

Se estableció la pena de muerte para los falsificadores de los títulos de la renta.

La amortización debía hacerse por compra de los títulos al tipo de su cotización del día, empleándose al efecto los fondos asignados.

Con los billetes del crédito público podían comprarse a la par los bienes nacionales, y redimirse censos y capellanías.

El mismo Congreso decretó las indemnizaciones

de guerra que debían pagarse con los tres millones de billetes del crédito público, en la siguiente forma:

A los empleados emigrados se les reconocieron cinco años de sueldo, y las dos terceras partes a las viudas e hijos de los que hubiesen muerto. Los herederos de los fusilados tendrían la renta de un capital de mil pesos.

Los emigrados del año 1809 que no hubiesen sido empleados, gozarían de una renta sobre capital de cuatro mil pesos; de tres mil los del año 1813, y de dos mil los del año 1815.

Los que hubiesen sufrido saqueo o rescatado su vida con dinero, serían indemnizados con un 4% más.

El pago de las indemnizaciones, fué un desastre financiero, que habría sido mayor sin las modificaciones que obtuvo el ministro Madero a tiempo de discutirse la ley por el Congreso.

Se leen en el Mensaje del general Sucre estas palabras que revelan la falta de equidad con que fueron decretadas dichas indemnizaciones:

«La ley de indemnizaciones, es no sólo defectuosa, sino injusta. Se han dado recompensas indebidas, y privado de ellas a personas que merecían la más alta consideración por sus padecimientos y servicios. Sin las reformas que esa ley tuvo por las observaciones del Ejecutivo, las indebidas indemnizaciones habrían hecho subir hoy la deuda interior a más de diez millones de pesos, mientras los tres habrían bastado, si llenando los objetos que se propuso el Ejecutivo al presentar el proyecto, no hubiera recibido tanta extensión».

Autorizó además, el Congreso Constituyente, la contratación de un empréstito de dos millones de pesos al 60% mínimum, 6% de renta y 1% de amortización, revalidando así el primer empréstito votado por la Asamblea Nacional para premiar al Ejército Libertador, que no llegó a contratarse, y para pagar al Perú la deuda que se le había reconocido.

El gobierno convocó a propuestas para la contratación de este empréstito, que no se realizó por falta de interesados.

Como la deuda al Perú, liquidada en 240.000 pesos, había sido transferida a los cuerpos colombianos existentes en Bolivia, en pago de sus haberes atrazados por los años 1823 y 1824, hubo de echarse mano de los fondos ordinarios por más de 100.000 pesos para cubrir en parte esta obligación premiosa y la de las gratificaciones decretadas.

Además, se acordó la emisión de un millón de pesos en «Vales del Empréstito» autorizado por el Congreso Constituyente, ya que no habían podido negociarse, ni dentro ni fuera del país, los dos millones fijados.

Los vales sirvieron para pagar las gratificaciones al ejército, y se emitieron al 60% con el interés del 6%.

Del mismo modo que los billetes del crédito público, fueron habilitados los vales para comprar a la par los bienes del Estado y de la beneficencia y para redimir los censos y capellanías.

No llegaron a ponerse en circulación sino quinientos mil pesos en los vales citados, sumando con

los billetes, tres millones y medio de pesos, que fué la deuda interna al año 1828. (1)

Bien intencionados fueron sin duda ambos empréstitos, pero no respondían en manera alguna a servicios urgentes, sino a obligaciones que podían postergarse para mejores tiempos.

Con estos empréstitos no se hizo sino malbaratar el patrimonio del Estado, vendiendo valiosas propiedades en precios ínfimos, pagados a la par con vales y billetes emitidos al 60% y cotizados en plaza a 12 y 15 pesos.

De esta manera, más de ocho millones de pesos en que fueron avaluados los bienes fiscales, quedaron agotados con tres y medio millones de los títulos de la deuda interna. (2)

En cuanto a la deuda española anterior al 25 de mayo de 1809, el Congreso Constituyente la reconoció y dispuso su pago con billetes del crédito público del 3% de renta a partir de 1827. En esta consolidación fueron comprendidas las indemnizaciones por «ventas de oficios» y «juros de heredad y vitalicios», con rebaja de una tercera parte y de una mitad,

---

(1)—En la Memoria de Hacienda del Ministro D. José María de Lara, se consignan los siguientes datos:

Billetes emitidos	$	2.995.306
Vales del empréstito	«	613.700
	$	3.609.006

Al año 30 quedaban en circulación;

Billetes	$	1.853.502
Vales	«	187.433
	$	2.040.935

(2)—Dalence.—Bosquejo Estadístico de Bolivia.

respectivamente, de los capitales que representaban.

Bajo el nombre de «Deuda patriótica», se ordenó la consolidación de los empréstitos, auxilios y suministros de víveres hechos a los ejércitos patriotas y a las guerrillas, cuyo monto debía liquidarse y cubrirse con billetes del crédito público del 4%. Los réditos vencidos al 31 de diciembre de 1826, se capitalizarían e incluirían en los billetes a partir de enero de 1827.

Se ordenó también el cobro de las deudas reconocidas en favor del fisco, las que podían pagarse en billetes del crédito público, y, en caso contrario, devengarían intereses del 4% desde el año 1828.

IV

Fueron declaradas propiedad del Estado, las minas derrumbadas, aguadas y abandonadas, que eran denunciables según las ordenanzas coloniales. Se ordenó la venta o arrendamiento de dichas minas para adjudicar su valor a los acreedores del Estado en pago de sus créditos calificados.

En más de cinco mil se computaron las bocaminas que debían venderse, habiéndose ofrecido en junto, por diversas compañías, el precio de dos millones y medio de pesos. Desechó el Libertador las propuestas, y pidió otras a los capitalistas de Europa y América sobre la base de un mínimum de tres millones de pesos, ofreciendo la decidida protección del Estado en favor de la empresa negociadora.

Encomendada esta gestión a los ministros peruanos residentes en Europa, se instruyó posteriormente al Dr. José Mariano Serrano, ministro acreditado cer-

ca del gobierno argentino, la negociación de las minas en Buenos Aires e Inglaterra. No dió ningún resultado el llamamiento hecho a los capitalistas e industriales.

Con ánimo de hacer eficaz la protección a la industria minera, qne había sufrido considerables quebrantos, se redujo a medio real el impuesto de 2 reales y medio sobre marco de plata, que cobraba el Banco de San Carlos, asignándose su producto a los fondos de instrucción.

Antes no podía exportarse el oro sino en moneda sellada, lo que ocasionaba un fuerte contrabando. Rebajóse el derecho de amonedación al 3%, del 6% que se cobraba. De esta manera podía exportarse el oro en barras o pepitas, pagando 3% por la amonedación, 3% por «derecho de quinto» y 2% como impuesto de exportación de la moneda.

Para facilitar el ingreso del oro en las arcas fiscales, se fijó la equivalencia de 17 pesos por cada onza de oro o doblón.

Fueron declarados libres de derechos el azogue, el hierro, la pólvora, la madera para minas, las maquinarias y los materiales para ingenios, y se señalaron premios para los que importasen o descubriesen el azogue, que mucha falta hacía para impulsar la minería. Se declaró libre la exportación de minerales de estaño y cobre, con el fin de fomentar esta nueva industria.

Un decreto del general Sucre ordenó que los jornales a los trabajadores de minas se pagasen en dinero, fuese libre el abastecimiento y quedase suprimido el azote.

El Congreso Constituyente, tan fecundo en leyes importantes, autorizó la fundación de oficinas de rescate de metales de oro, plata, cobre, estaño, etc., en La Paz, Potosí, Oruro y Tupiza, quedando abolido el Banco de San Carlos. Iniciadas con un capital de 30.000 pesos dichas oficinas, en poco tiempo alcanzaron más de 200.000 pesos de activo, dando fuerte impulso a la minería.

Conociendo Sucre que la minería es la industria madre de Bolivia, no omitió esfuerzo para arrancarla de la postración en que había quedado después de la guerra.

«Como resultado de esta administración ordenada e inteligente, se duplicaron los capitales para la explotación de las minas, y los ingenios para los trabajos se elevaron, de doce que era el mayor número que había habido antes de la revolución, a treinta y dos, según lo muestran los apuntes estadísticos de esta industria». (1)

V

Se mantuvo el régimen aduanero existente con oficinas recaudadoras en cada departamento.

Para evitar las hostilidades y gravámenes que sufría el comercio por los puertos peruanos, se habilitó el de Cobija con el nombre de La Mar, en homenaje al héroe de la independencia.

Los impuestos aduaneros que antes habían sido del 30%, se fijaron en 8% *ad valorem*, rebajándose

(1)—«Vida de D. Antonio José de Sucre» por Laureano Villanueva.

al 6% para los artículos peruanos; pero las importaciones que se hicieran por La Mar sólo debían devengar el 2%, a fin de atraer el comercio internacional por esa vía.

Fueron exencionados de todo impuesto durante tres años los habitantes del nuevo puerto, y se ofrecieron tierras, herramientas y ganados a los que fueran a establecerse en Atacama.

Manteniéndose en 2% los derechos de importación por La Mar, se elevaron desde enero de 1828 al 10% las internaciones por las fronteras terrestres.

En aquella época estaban en uso los derechos de tránsito, de modo que el comercio boliviano que se hacía por Arica resultaba fuertemente gravado. A tal punto llegó esto, que las mercaderías de ultramar pasaban por los puertos peruanos, pagando hasta el 90%, y los productos bolivianos se exportaban con un impuesto del 16%. (1)

El primer arancel boliviano es de fecha 23 de diciembre de 1825, y comenzó a regir desde el 1º de enero de 1826 durante ese solo año. Sobre la base de un derecho único del 8% *ad valorem*, se aprobó la siguiente tarifa de avalúos:

Reglamento de los aforos de efectos para las Aduanas de la República de Bolivia, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 1826.

---

(1)—Memoria de Hacienda del Ministro Lara.

LINO

	P.	R.
Bretañas anchas superfinas, pieza	6.	
Idem angostas « «	4.	
Idem finas anchas « «	5.	
Idem angostas « «	3.	4
Idem contrahechas « «	3.	4
Royales « «	11.	
Coletas de colores « «	8.	
Brin « «	12.	
Linón ordinario « «	2.	
Listados « «	5.	
Crea « «	8.	
Cotines, yarda		3
Bramantes «		6
Clarín «		3
Estopilla, vulto	6.	
Olán «	16.	
Irlanda fina «	22.	
Idem corriente «	16.	
Hilo, número ocho a ochenta	4.	

SEDAS

Fondos, vara	3.	
Terciopelos colores «	5.	
Trajes tul, uno	25.	
Pañuelos idem	10.	
Idem chicos, idem docena	18.	
Guantes «	12.	
Pañoletas «	12.	
Chales, tul ordinario «	24.	
Ceñidores «	36.	
Suspensores «	18.	
Razos todos colores, vara	3.	
Sargas idem »	1.	4
Seda de coser, libra	6.	
Medias de la patente inglesas, docena	30.	
Idem, idem, mujer, idem »	24.	
Idem, idem, idem, lisas, idem «	18.	
Idem, hombre, idem, idem «	22.	
Pañuelos colores de siete och. «	12.	
Idem corrientes «	10.	
Para mujer, de ocho cuartas, uno	10.	
Idem, idem de seis cuartas, idem	7.	
Sintas razo Nos. 1, 1 y medio, 2, 3, 4, pieza	2.	4
Medios listones «	2.	
Cuartos idem «	1.	4
Enteros idem «	2.	2
Trama y figura «	2.	
Vestidos espumilla, uno	9.	
Chales idem, ocho cuartas, idem	7.	

ALGODONES

	P.	R.
Cocos anchos finos	6.	
Idem angostos	4.	
Modapollanes finos de 50 yardas	14.	
Royales	5.	
Cocos teñidos de 12 yardas	3.	
Medias de hombre, docena	8.	
Idem de mujer, »	7.	
Ovillos de hilo Nº 12 á 80 lb	2.	
Pañuelos madrast, docena	5.	
Idem ordinarios «	2.	
Idem muselina «	1.	4
Panas finas, yardas		4
Idem corrientes «		3
Cotonias colchadas «		5
Idem medias « «		4
Idem ordinarias listadas «		3
Pieles sargadas «		4
Idem corrientes «		3
Chales de coco y gasa de ocho cuartas, docena	18.	
Idem, idem, de cuatro a seis cuartas «	8.	
Mahones angostos, pieza	1.	
Idem anchos	1.	2
Nanquines		2
Sarasas finas, pieza	7.	
Idem corrientes, idem	6.	
Suspensores punto, docena	2.	4
Percalas finas, pieza	9.	
Olán, idem	5.	
Garras de catorce varas, idem	5.	
Bafetas de doce yardas, idem	6.	
Zarampores 38 yardas, idem	20.	
Sanas y Casas 22 yardas, idem	7.	
Vestidos sarasa, uno	2.	
Idem blancos bordados, idem	4.	
Idem gasa ordinarios, idem	2.	
Musolina lisa 12 yardas	5.	
Dichas bordadas, idem	8.	
Idem caladas, idem, idem	6.	
Idem labradas, idem, idem	4.	
Cotines colores, yardas		2
Bramantes anchos »		3
Irlandas, pieza	6.	

LOZA

Platos ingleses,	docena	6.
Platillos	«	4.
Tazas	«	9.
Jarras grandes y chicas	«	12.
Palanganas	«	18.
Bañadores para cara	«	36.
Fuentes de 22, 30, 36 y 40 pulgadas	«	36.

LANAS

		P.	R.
Paños superfinos	vara	7.	
Idem fino	«	5.	
Idem entrefino	«	4.	
Idem segundo estrella	«	1.	4
Bayetones	«	1.	1
Bayetas pellón,	pieza	75.	
Idem de cien hilos	«	25.	
Idem fajuela	«	32.	
Casimires, la vara		2.	4
Idem segunda, idem		2.	
Paño, tercera, idem		1.	
Casinetes corrientes, idem			5
Pañete primera ancho, idem			3
Bayetilla, pieza		20.	
Medias de hombres, docena		10.	
Chales casimir de 6 a 8 cuartas, uno		4.	4
Lanillas colores, vara			4

MERCERÍAS

Cuchillos de mesa, blancos, docena		3.	4
Id. id. id. negros	«	2.	
Idem marca mayor y menor	«	1.	2
Tijeras finas	«	10.	
Idem entre finas	«	5.	
Idem ordinarias	«	1.	2
Puntillas finas	«	7.	
Entre finas	«	5.	
Ordinarias	«	1.	2
Agujas de todos números, millar		14.	
Alfileres, libra		2.	
Instrumentos de carpintería a 2 y 3 pieza			
Fierro,	quintal	25.	
Acero Milán	«	30.	
Idem Suecia	«	20.	
Sables, uno		10.	

CRISTALERÍA

		P. R. M.
Vasos para agua	docena	6.
Idem, vino	«	4.
Copas grandes	«	10.
Idem medianas	«	7.
Idem chicas	«	5.
Botellas para agua	«	24.
Idem chicas	«	18.
Dulceras	«	12.
Jarras	«	20.
Frasquitos de olor	«	7.
Jabones	«	3.

EFECTOS DEL PAÍS

	P.	R.	M.
Coca, cesto	6.		
Algodón, id	1.	4	
Bayeta cedillo, vara		4	
Idem Chorrillo «		1	½
Barracán lana «		2	
Idem algodón «		1	½
Tocuyo fino «		2	
Idem ordinario «		1	
Frazadas, una		4	
Costales, id		4	
Azúcar, arroba	8.		
Tabaco de Homerec, por ciento	8.		
Valle Grande id.	5.		
Yerba mate, arroba	8.		
Cacao «	18.		
Pepita de Mojos «	14.		
Idem Guayaquil «	4.		
Jabón, quintal	10.		
Sebo «	9.		
Sombreros finos, docena	48.		
Dichos corrientes «	36.		
Ordinarios «	10.		

CALDOS

Vino dulce de la costa, arroba	12.
Idem Cinti «	7.
Áspero id, «	5.
Aguardiente moscatel «	20.
Idem ordinario «	16.
Aceite id. «	8.
Vinagre id. botija «	4.
Aceitunas en caldo «	4.
Licores de ultramar, docena	18.

Azogue, quintal	60.
Naipes, docena	1.
Te, libra	2.
Café, arroba	4.

Libros, grabados, pinturas, imprentas, lanas y peleterías para fábrica, bordados de oro y plata, relojes de id. id. de faltriquera, coches, tiros, armas, piedras de chispa, muebles, espejos, y los demás artículos no constantes en el reglamento, se avaluarán a precio de plaza.

Elevados al 10% los derechos aduaneros generales por el Congreso Constituyente, y fijado en 12% el impuesto especial sobre los lienzos ultramarinos que tenían similares en la manufactura nacional, se aprobó una nueva tarifa de avalúos que rigió desde el 1º de enero de 1827.

Esta tarifa, mucho más detallada que la de 1825, dividió el comercio internacional en seis grandes grupos; a saber: I.—Algodones; II.—Lienzos de hilo; III.—Lanas; IV.—Sedas; V.—Mercería, cristalería y lozas; VI.—Caldos.

Completaba la tarifa una nomenclatura de artículos libres, tales como azogue, acero, hierro, máquinas, herramientas, instrumentos, libros, mulas, y cobre y estaño de Bolivia.

El gobierno hizo esfuerzos para combatir el contrabando. A fines del año 1825 se expidió un decreto dictatorial, imponiendo la confiscación del contrabando y la expulsión del contrabandista. «Los empleados que tomen parte en el fraude—decía el decreto—serán irremisiblemente *pasados por las armas*». No obstante, el fraude disminuyó en muy poco, lo que decidió al ministro Hilarión Fernández en 1829 a dictar nuevas medidas para reprimirlo.

Merece anotarse en esta época la creación de corredores de comercio y la reglamentación de las letras de cambio. Aquéllos fueron los únicos autorizados para intervenir en la negociación de fondos públicos, letras y mercaderías, cobrando ½% de comisión a cada parte, y sólo ¼% sobre especies metálicas, y el 2 por mil sobre las letras de cambio.

VI

El primer presupuesto de gastos de la República fué formulado por el ministro de hacienda D. Juan de Bernabé y Madero, y rigió durante los años 1826, 1827 y 1828.

No se votó un presupuesto especial de ingresos. El Congreso autorizó al gobierno para gastar hasta dos millones de pesos en conformidad al proyecto de gastos presentado. Las rentas no alcanzaron a esta suma, y el gobierno tuvo que hacer prodigios de economía para atender el servicio público. con un millón y medio de pesos. Los impuestos directos ocasionaron un fuerte déficit.

Es muy interesante anotar el resumen del presupuesto de gastos de aquella época, que es el primero de las finanzas nacionales:

Servicio del Congreso	$	50.000
Id. del Supremo Gobierno	«	72.000
Id. de la Corte Suprema	«	34.000
Id. de la Dirección de Rentas	«	8.000
Id. de Relaciones Exteriores	«	52.000
Id. de Guerra, comprendiendo E. M. G., Escuela Militar, Artillería, 9 escuadrones de caballería y cinco batallones	«	1.314.000
Servicio departamental	«	323.805
Crédito público, intereses y amortización de los billetes	«	210.000
Servicio de instrucción y beneficencia	«	185.958
Id. del culto	«	100.000
Total	$	2.349.763

La creación de la contaduría general reglamentada con el nombre de Dirección General de la Renta, fué un paso avanzado hacia la regularización de las finanzas.

Del mismo modo, la centralización de la renta de diezmos y primicias, que antes se recaudaba con intervención del clero, fué una reivindicación acertada, en cambio de que el tesoro fiscal se encargó de cubrir los presupuestos del culto.

Fueron especializados los fondos destinados a la instrucción pública y a la beneficencia, adjudicándose a estos servicios las capellanías y los bienes de los conventos extinguidos, el impuesto sobre harinas y pastas de plata, las rentas de la mitra, que antes se remitían a España para el Colegio de Nobles, la Universidad de Salamanca y los pensionados de Carlos III. Los «novenos» sobre la masa de diezmos fueron adjudicados a los hospitales.

Corresponde también a esta época la creación del papel sellado. Habilitado al principio el del régimen colonial, el Congreso Constituyente fijó los sellos que debían usarse desde 50 pesos a ½ real de valor.

El gobierno regularizó la oficina de hipotecas para la toma de razón de las escrituras de gravamen e imposición sobre los inmuebles, con lo que comenzó el registro de la propiedad inmueble.

No dejará de llamar la atención el fuerte importe del servicio de guerra. Sobre dos millones de ingresos calculados, absorve un millón trescientos mil, esto es, un 65%.

El pre del soldado que hizo las guerras de la pa-

tria, no pasó de 10 pesos mensuales, de los que un peso dejaba para ropa blanca, cinco pesos para rancho y los cuatro pesos restantes se le daban a razón de un peso semanal, que correspondía a poco más de un real por día.

La fuerza pública contemplada en el presupuesto del año 1826, alcanzaba a 5.217 plazas, y las más eran fuerzas colombianas.

La brigada de artillería constaba de 205 plazas, los nueve escuadrones de caballería sumaban 1.000, y la infantería era de 4.012 hombres.

Motivo de los primeros celos del Perú fué el mantenimiento de las tropas auxiliares, y aunque fueron embarcadas a Colombia, no detuvieron la invasión de Gamarra, que después de una serie de cobardías y de traiciones de algunos hombres públicos de aquella época, obtuvo el humillante pacto de Piquiza, en cuya virtud impuso Gamarra su voluntad al país, y se apoderó de la renta de los departamentos de Oruro y La Paz.

Esta momentánea perturbación, causó recelos y desconfianzas al despertar económico de la República; pero la obra financiera de Bolívar, Sucre y los dos primeros congresos nacionales, había cimentado ya la futura prosperidad de Bolivia, que en breve iba a pasear triunfantes sus banderas por los campos de batalla de la confederación perú-boliviana, y más tarde había de sepultar en los compos de Incahue al implacable enemigo de Bolivia, el «Gran Mariscal de Piquiza». (1)

---

(1)—Dictado oficial que se atribuyó Gamarra después del pacto de Piquiza.

CAPITULO III

EL GOBIERNO DE SANTA CRUZ

I.—Preparando el porvenir.—Hacia la independencia económica. —Fomento del puerto de Cobija.—Primas a la exportación.
II.—Política comercial.— Aranceles proteccionistas.—Derechos de alcabala.—La tarifa mínima de Cobija.—Habilitación de vías comerciales.—El tratado de Arequipa.—Comunidad aduanera de Arica.—Tratado de comercio con Francia.
III.—La minería.—Reducción y supresión de los diezmos y «derecho de Cobos».—Reenganche de trabajadores.—Oficinas de rescate de metales.—Tarifas oficiales para el oro y la plata.—Impuestos de exportación.
IV.—La moneda.—Acuñación del oro.—Los «corbatones» de 1830. —Graves consecuencias del fraude monetario.—Monto de la acuñación de la moneda feble.
V.—Fomento industrial.— Los telares de Cochabamba y Mojos.— Ineficacia de la protección fiscal.—Premios industriales.— Monopolio de la cascarilla.— Prohibición de la caza de chinchilla.
VI —El primer Banco de circulación y descuento.—Banco de Refacciones.—La Caja de Montepíos.
VII —La cuestión agraria.—Irrigación de Cochabamba.—Venta del dominio fiscal.—Extinción de vinculaciones.
VIII.—Presupuesto para 1835.—Equivalencia militar con el Perú.—Descuentos de guerra.—Deuda de la confederación.— Impuesto sobre herencias.—Apreciación de la obra financiera de Santa Cruz.

I

Durante los primeros cuatro años de la administración del Mariscal D. Andrés Santa Cruz, Bolivia

recibió un vigoroso impulso en las principales esferas de su actividad.

Acababa de salir el país del primer turbión de las convulsiones internas, complicadas con la torpe invasión de Gamarra y el pacto de Piquiza, que pusieron a prueba la vida misma de la Nación.

Venía del Perú el nuevo presidente, rodeado del doble prestigio de una gloriosa carrera militar hecha en las guerras de la patria, y de una ausencia brillantemente empleada en el desempeño de altas funciones políticas y administrativas que le encomendara la Nación peruana. Era de esperar que el eminente personaje, en quien habían fijado la mirada angustiosa los que, con no poca razón, temían por la salud de la República, pusiera al servicio de ella, junto con sus prestigios, la extensa experiencia gubernativa que había acumulado.

Y así fué por suerte para la tambaleante nacionalidad, que encontró en el Mariscal el conductor de pueblos que necesitaba para consolidar su independencia y atravesar gloriosamente las primeras etapas de su vida.

Lleno de grandes iniciativas, acariciando ideales de gloria y poderío, alimentados de tiempo atrás, hallábase Santa Cruz convencido de que, para llevar a feliz término la ardua empresa, era menester, de antemano, afianzar el orden público, y labrar después, a su sombra, la prosperidad económica y financiera de Bolivia,que había de colocarla en situación espectable, asignándole rango prominente en esta parte de América.

Familiarizado con los métodos políticos y admi-

nistrativos de su época, sabía bien dónde está el secreto del poder de las naciones y por cuales rumbos debía conducir la República en pos de sus destinos.

Un buen ejército necesita buenas finanzas, y éstas para ser prósperas requieren bases económicas firmes. A labrar estas bases para incrementar aquéllas y llevar después el ejército por los campos de la gloria, se contrajeron los esfuerzos del genial político, que a la noble ambición castellana, capaz de todas las audacias caballerezcas, unía la astucia y la terquedad del indígena, dispuesto a agotar todos los recursos conducentes al fin deseado.

Los primeros cuidados de Santa Cruz se dirigieron a consolidar la independencia económica de Bolivia que la pusiera a cubierto de las hostilidades de los países vecinos en su intercambio comercial. Con este pensamiento declaró puerto franco el de Cobija o La Mar, a fin de atraer allí las naves mercantes desviando el comercio nacional de importación y exportación que hasta entonces se hacía por Arica.

Las naves de todas las banderas podían cargar y descargar libremente en el puerto boliviano, sin causar ningún derecho, y depositar las mercancías en los almacenes fiscales, ya sea para reembarcarlas a otras destinaciones, o ya para internarlas a la República, pagando sólo en este caso, el único derecho del arancel especial que se había dictado con tasas mínimas.

Se autorizó al gobernador para levantar un empréstito de cien mil pesos, destinados a la construcción de almacenes fiscales, caminos, postas, aguadas, fortificaciones y demás establecimientos indispensables a

la existencia y seguridad del puerto. A fin de hacer posible la operación, se señaló el 1% de interés mensual, pagadero con los derechos aduaneros, y se ofreció a los prestamistas el privilegio de exportar el cobre de Atacama sin pagar derechos durante dos años.

A consecuencia de la crisis internacional de 1831 que estuvo a punto de encender la guerra entre Bolivia y el Perú, el gobierno y el congreso redoblaron sus esfuerzos para mejorar el puerto de Cobija en previsión de cualesquiera emergencias ulteriores. El congreso de 1832 lo declaró «completamente franco», y ordenó para mayor eficacia la traslación de la aduana a Calama. Además, a fin de dar mayor impulso a la organización y mejora del puerto, se acordó el viaje del presidente, quien a fines de 1832 hizo una detenida y provechosa visita a la provincia de Atacama, en unión del vicepresidente, general Velasco.

Como resultado del viaje presidencial, se ordenó la habilitación de un camino carretero de Potosí a Cobija, la adquisición de herramientas y de taladros para perforar pozos artesianos, la distribución de ganados y la edificación de escuelas.

En orden a la defensa militar del puerto, se mandó la construcción de una fortaleza con 20 cañones gruesos, un cuartel para 300 hombres y una batería de 12 cañones en el Morro Blanco.

Se decretó el premio del 2% por la exportación de lanas, cacao, café, cascarilla y estaño, con el propósito de que esta prima sirviera para compensar la larga travesía del desierto de Atacama.

Más tarde, el año 1836, cuando fué necesario

trabajar un muelle, se creó el impuesto de muellaje a razón de un real por bulto, y de siete pesos por embarcación mayor que tocara al puerto.

Así vivió Cobija, trabajosa y artificialmente a causa del inmenso desierto que le dislocaba del organismo nacional, hasta que, establecida la confederación peruboliviana, la aduana común de Arica acabó por darle golpe mortal.

II

La política comercial del gobierno Santa Cruz, está caracterizada por un proteccionismo decidido en favor de las industrias nacionales. En obedecimiento a esta política fueron hechos los aranceles de aduana, que también son los primeros que aparecen adoptando tasas diversas según la importancia de los artículos del comercio.

Sobre la base de la nomenclatura de los dos primeros aranceles de 1825 y 1827, el de 1829 que se hizo bajo la dirección del Ministro de Hacienda D. José María Lara, aparece clasificado en la siguiente forma:

DERECHOS DE IMPORTACIÓN

Tejidos de lino y seda, mercería, cristalería, loza, relojes, alhajas y piedras preciosas, el 5% *ad valorem*.

Efectos de algodón 7%;

Artículos de cuero, ropa cosida, sombreros, muebles, licores, 10%.

Se prohibe la internación de tocuyos, madapolanes, *pouverlón* y cuantas telas ordinarias pudieran

perjudicar a los tocuyos que se fabricaban en la República.

Se declaran libres de derechos el azogue, el acero, el hierro, las maquinarias y los libros.

Este arancel se complementó y modificó poco tiempo después, elevándose algunos derechos en la siguiente proporción:

Efectos de algodón en general, excepto tocuyo, madapolán, etc., que quedaron prohibidos como en el anterior arancel, el 20%;

Licores de ultramar, 30%;

Aguardientes de los países vecinos, 12%;

Vinos de ultramar, 20%;

Vinos de los países vecinos, 10%;

Ganado caballar, 10%; y de tránsito, 3%;

Derecho general de tránsito, el 3%.

Quedaron subsistentes las prohibiciones y liberaciones del anterior arancel, destinadas a proteger la manufactura nacional, y a fomentar la industria minera.

La internación de libros fué libre hasta 1838, en que se votó el impuesto del 3%, aplicando su producto al sostenimiento de las bibliotecas.

El comercio interno de productos nacionales, estaba gravado con la alcabala en la proporción siguiente:

Venta de aguardientes, el 6%;

Id. de vinos, el 4%.

Ambos impuestos fueron rebajados al 3% por el Congreso de 1838, fijándose el avalúo de 10 $ por quintal de vino o aguardiente.

La coca pagaba 4% de alcabala, y como impuesto de extracción, 4 reales por cesto.

Las manufacturas del país, tocuyos, listados, macanas, bayetas, pañetes, sombreros, etc., se declararon libres de alcabala y de todo otro impuesto.

El comercio interno del azúcar de Santa Cruz, fué gravado por el Congreso de 1838 con 3%, avaluándose en 20 reales la arroba.

Siguiendo el plan proteccionista que desarrolló el gobierno para incrementar el tráfico comercial por el único puerto boliviano, se adoptó una tarifa aduanera mínima para los internaciones por Cobija, rebajando al 5% los derechos sobre alhajas, tejidos de lino y seda, y artículos de cristalería. Los vinos de cualquier procedencia, estaban sometidos al mismo impuesto del 5%, y los licores al 10%. Se declaró libre la internación de ganado por esa vía.

La prohibición del comercio de tocuyos y madapolanes extranjeros, con el propósito de favorecer la industria del país, que en esa época libraba todavía alguna cantidad de tejidos burdos de algodón para el consumo de las clases populares, tuvo una excepción en la tarifa mínima de Cobija. Sólo por la aduana de este puerto podían internarse los tocuyos, pagando el 10% de derechos.

Poco tiempo duró esta exclusiva. La fatal influencia de las leyes económicas, obligó al gobierno a levantar la prohibición vigente en las aduanas terrestres de la frontera peruana, ya que, siendo cada vez más escasa y rutinaria la manufactura nacional, no

era posible prohibir por más tiempo el consumo de la mercancía extranjera, so pena de causar daño al pueblo y abrir inevitablemente las puertas al contrabando.

En el nuevo arancel que se formuló para las internaciones por las fronteras terrestres, se permitió el comercio de tocuyos con el fuerte gravamen del 30%, que igualmente regía sobre todos los efectos de algodón.

Como el propósito era asegurar la protección aduanera del puerto de Cobija, dándole tarifas mínimas, tuvieron que elevarse las que debían regir en las aduanas dependientes de la vía de Arica. Con este criterio se elevaron al 20% los derechos sobre las mercaderías en general, que, como se ha visto, no pasaban del 5% en Cobija. Al 30% se subieron los derechos al vino y a las manufacturas de algodón, contra 5 y 10%, respectivamente, que se cobraban en la aduana marítima.

Por primera vez se fijaron impuestos restrictivos del 40% sobre los licores, ropa cosida, calzado y muebles. La cristalería fué tarifada al 15%, y las alhajas al 8%.

No obstante la considerable diferencia de derechos entre las internaciones por Cobija y por la frontera terrestre, las ventajas que esta última ofrecía no fueron fácilmente abandonadas por el comercio, que con preferencia siguió sirviéndose de la vía de Tacna, aunque no dejó de incrementarse la vida comercial de Cobija.

Constante preocupación de los gobiernos ha sido la represión del contrabando, y generalmente con re-

sultados nugatorios. A fin de hacer efectiva la vigilancia aduanera y evitar en lo posible el contrabando, se declaró que los únicos puertos habilitados para el comercio internacional, eran el puerto de Cobija o La Mar, el puerto del Desaguadero, las balzas de Nazacara y la Joya y la Aduana de Tupiza.

Como la exportación de pastas y barras de plata se hallaba prohibida, como se verá en la parte pertinente, el contrabando se castigaba con la confiscación del producto y con cinco años de presidio al delincuente.

Las relaciones comerciales con el Perú tuvieron muchas vicisitudes. Era irritante la hostilidad que ese país ejercía en el puerto de Arica sobre el comercio boliviano de importación y exportación, gravando con el 16% de derecho de tránsito los productos nacionales, y hasta con el 90% las importaciones.

El tratado de comercio suscrito en Arequipa en 1832, adoptó bases más equitativas, fijando el derecho recíproco del 6% sobre los artículos de uno y otro país, y declarando libres los víveres y ganados.

Como derecho de tránsito de efectos extranjeros destinados a Bolivia, se fijó el 3% mínimum y el 20% máximum. Y por la exportación de productos bolivianos, se redujo al 2% la gabela de pasaje.

Fueron declarados libres de derechos de tránsito las maquinarias, herramientas, libros, aparatos e instrumentos científicos destinados a Bolivia, y por reciprocidad gozaron de igual franquicia los ganados argentinos en tránsito para el Perú.

Los artículos extranjeros introducidos por los puertos de uno u otro de los países, debían pagar a lo más el impuesto del 30% en las fronteras respectivas de la Nación en que se consumieran. Esta limitación tendía claramente a evitar la guerra aduanera contra el tráfico comercial por Arica.

En la historia de las relaciones boliviano-peruanas, forma un punto de partida muy importante el citado tratado de 1832. Sin embargo, fué combatido en su tiempo por algunos políticos (1), y no han faltado historiadores que, sin examinar debidamente sus diversas cláusulas y relacionándolas con las ideas de la época y los antecedentes políticos y comerciales que influyeron en la negociación, han condenado el pacto de Arequipa.

Antes del expresado ajuste comercial, el Perú gravaba a su antojo los productos bolivianos que salían por Arica, llegando a imponer hasta el 16% sobre la cascarilla y el 6% sobre otros productos, lo que hacía imposible todo tráfico. Las mercaderías de ultramar destinadas a Bolivia, que pasaban por el citado puerto, se aforaban como si fuesen para el consumo peruano, y a su ingreso a Bolivia tenían que pagar, naturalmente, otros derechos de aduana. De esta duplicidad resultaba que los artículos extranjeros llegaban a valer en Bolivia más del 250% de su costo de compra en Europa. (2)

---

(1)—D. Casimiro Olañeta escribió un panfleto, criticando duramente el tratado de Arequipa de 1832.

(2)—Calcula el Ministro Lara en $ 500.000 anuales la contribución que Bolivia pagaba al Perú por el tránsito comercial antes del tratado de 1832.

Cuando se fijó en 3% el derecho de tránsito de las exportaciones bolivianas, y se limitó al máximum del 20% el de las importaciones, obteniéndose varias liberaciones sobre artículos destinados a la industria nacional, se aligeró considerablemente la carga que pesaba sobre el pueblo boliviano, que hasta entonces había sido tributario comercial del Perú.

El ideal habría sido la supresión absoluta del derecho de tránsito; pero este principio, que después ha sido proclamado, no era aún aceptado en aquellos tiempos, y para imponerlo habría sido necesario invocar los derechos de la victoria.

El régimen establecido por el tratado de 1832, subsistió hasta el año 1836, en que, ya establecida la confederación y a pretexto de fraudes cometidos en Arica con la falsificación de guías de internación para Bolivia, se estableció la aduana común de dicho puerto.

La medida fué perjudicial, porque si bien simplificaba las operaciones y la fiscalización, le quitaba a Bolivia su autonomía aduanera y le restaba buena parte de sus ingresos. Más fácil habría sido, y estaba en manos del Protector de la Confederación el hacerlo, habilitar el puerto de Arica para el servicio exclusivo del comercio boliviano, ya que sólo de él vivía y era además un agregado artificial a la geografía peruana. Las actas de espontánea adhesión enviadas a Santa Cruz manifestando la voluntad de los ariqueños para pertenecer al Estado boliviano, no fueron sino el natural resultado de un largo proceso económico, que el Protector contrarió atendiendo, sin duda, al propósito de no perjudicar la obra de la Confede-

ración, que habría encontrado un obstáculo más en la desmembración de Arica.

No fué nueva la idea de anexar este puerto a la nacionalidad boliviana. En los dos tratados de *Federación Boliviana* y de Límites, suscritos en Chuquisaca a 15 de noviembre de 1826, entre el plenipotenciario peruano, Dr. D. Ignacio Ortiz de Zeballos, y de parte de Bolivia el ministro de relaciones exteriores, coronel Facundo Infante, y el vocal de la Corte Suprema Dr. D. Manuel María Urcullu, se fijó la línea divisoria en «el *morro de los Diablos o cabo de Sama o Laquiaca*, situado a los 18 grados de latitud, entre los puertos de *Ilo* y *Arica* hasta el pueblo de Sama; desde donde continuará por la quebrada honda en el valle de Sama, hasta la cordillera de Tacora: quedando a Bolivia el puerto de Arica y los demás comprendidos desde el grado 18 hasta el 21 y todo el territorio perteneciente a la provincia de Tacna y demás pueblos situados al sur de esta línea». (1)

En cambio del puerto y litoral de Arica, Bolivia cedía al Perú los territorios de Copacabana, y la provincia de Apolobamba o Caupolicán y su respectivo territorio, obligándose además a satisfacer «en indemnización del aprecio que le merecen los puertos y territorios que la del Perú le cede en la costa desde el grado 18 hasta el 21 de latitud en el Pacífico..... la cantidad de cinco millones de pesos fuertes a los acreedores extranjeros del Perú, en los plazos y con los gravámenes que esta República haya pactado». (2)

(1)—Artículo I del Tratado de Límites de 15 de Noviembre de 1826.—Colección Aranda,—Tomo II.—Lima.

(2)—Artículo X del Tratado citado.

El ministro de relaciones exteriores del Perú, D. José María Pando, en nota a su negociador fechada a 18 de diciembre de 1826, se encargó de trasmitirle que el Consejo de Gobierno del Perú, presidido a la sazón por el general Santa Cruz, en ausencia de Bolívar, había adoptado «el desagradable partido de no ratificarlos (ambos pactos) en su presente forma». Entre otras razones se adujo la de que Bolivia «en compensación de puertos y territorios que son en sumo grado necesarios para fomentar su comercio y prosperidad, tan sólo se promete amortizar cinco millones de la deuda extranjera del Perú»; promesa que se califica de ilusoria «aunque no fuese tan mezquina». Además, como el Perú renunciaba en el tratado a toda otra indemnización, en que naturalmente quedaban comprendidas las de la guerra de la independencia, que venía reclamando, la nota de la cancillería declaró que jamás consentiría «en aceptar los *inconvenientes* territorios de Apolobamba y Copacabana como indemnización de un crédito tan considerable».

Quedó suspendida la ratificación hasta consultar a Bolívar los dos pactos de noviembre, que fueron virtualmente desechados por la fuerza de los sucesos posteriores, y tuvieron su epílogo en el pacto de Piquiza.

A Santa Cruz se le ha culpado de no haber ratificado, como jefe del Consejo de Gobierno del Perú, la cesión de Arica a Bolivia. Esta es, a todas luces, una apreciación errónea. Los Tratados de 1826 fueron complejos, y se hallaban encaminados a trascendentales soluciones de política continental, propendiendo a la formación de una gran federación boliva-

riana, sueño audaz y brillante, que careció de bases firmes capaces de sostener el grandioso edificio. En esta genial concepción, el puerto de Arica fué una condición subalterna, y hubo de quedar anulada con el fracaso de la proyectada «Federación Boliviana». Ni Santa Cruz ni nadie habría logrado la ratificación de una mínima parte de ese gran todo que era de suyo inconsistente.

Las circunstancias de 1836 fueron mucho más favorables. Entonces habría podido resolverse, por medio de una simple medida aduanera, lo que las concepciones políticas no lograron hacerlo.

El año 1834 se celebró el primer tratado de comercio con Francia que inició prácticamente las relaciones de Bolivia con Europa. No pueden ser, sin embargo, más desatinadas sus cláusulas fundadas sobre el principio de la nación más favorecida y de una reciprocidad absoluta, que no podía menos que ser irrisoria para la naciente República.

Entre las cláusulas especiales, se acuerda tarifa diferencial a los vinos franceses, que sólo pagarían el 10%, y a las sederías que se aforarían en la mitad de lo que pagasen las procedencias de la China. A título de reciprocidad, Francia se comprometía a mantener los derechos vigentes en aquella época sobre la quina, el cacao y el estaño de procedencia boliviana, que fuesen directamente embarcados para los puertos franceses.

III

Durante el gobierno de Santa Cruz, tomó mayor

BIBLIOTECA DEL BANCO

incremento la minería siguiendo el impulso que le diera Sucre.

Los impuestos vigentes eran onerosos. La falta de caminos, de brazos y de capitales, imposibilitaba la explotación de numerosas minas, cuyo rendimiento no era bastante para cubrir los gastos y pagar las contribuciones elevadas.

Medidas muy oportunas expidió el gobierno en este orden.

Por decreto de 15 de octubre de 1829 abolió el tradicional «derecho de Cobos» que gravaba con el 1 ½% el valor de las pastas ensayadas.

El impuesto de diezmos que tenía la virtud de recaer sobre todos los productos naturales e industriales, con una generalidad implacable, fué reducido al 8 ½%, único derecho que en lo sucesivo debía cobrarse sobre las pastas de plata en las cajas de fundición. Posteriormente se suprimió el diezmo metálico, y quedó establecido el único impuesto del 5%.

Como consecuencia de estas reducciones, se elevó en dos reales el valor oficial del marco de plata en las oficinas de rescate, de modo que por leyes superiores a 11 dineros y 20 granos (986 milésimos), debían pagarse 7 pesos 5 reales en Oruro y La Paz, rigiendo la misma tarifa para la vajilla y chafalonía.

Para el oro se mantuvo «el moderado impuesto del 3%» que después fué suprimido (1830). A falta de ensayo debían avaluar las oficinas fiscales a razón de 15 o 14 $ la onza, según la calidad del metal, avalúo que se hacía sólo para los efectos del impuesto.

El oro fundido y quintado se recibiría por la Casa de Moneda en cambio de oro sellado, o se pagaría

su valor a 16 pesos por onza, que después se subió a 17 pesos.

Los considerandos del decreto de 1829 anotan observaciones y principios de una justicia perfecta. Atribuye la ruina de la minería al desequilibrio entre el valor del producto y los gastos de explotación, y agrega que para explotar los minerales de baja ley, es preciso que los impuestos sean moderados, porque a causa de las excesivas cargas una inmensa cantidad de plata queda en las entrañas de la tierra. «La experiencia manifiesta—concluye—que en la balanza de la minería, todo aumento o disminución de los impuestos, causa efecto contrario en las cantidades de plata extraídas». Una conclusión indiscutible.

Otro decreto de la misma fecha tuvo por objeto aumentar el número de trabajadores, que mucha falta hacían, solicitando reenganches voluntarios en todos los departamentos. Apesar de que las condiciones ofrecidas de salario y gastos de viaje eran favorables, y se garantizaba plenamente al obrero con el «Reglamento Orgánico del Trabajo Minero» que acababa de publicarse, no tuvieron éxito favorable los empeños del gobierno para organizar el ejército de trabajadores.

Los recuerdos de la «mita» estaban todavía frescos, y el bien intencionado llamamiento fracasó ante los recelos y desconfianzas de la sufrida raza indígena.

La institución de las oficinas de rescate de metales por cuenta del Estado, ha sido un recurso importante de la hacienda pública desde la época colonial en que se fundó el Banco de San Carlos, hasta

que la caída de la plata en los tiempos ulteriores extinguió virtualmente su monopolio.

Después del auge que había tenido en los años anteriores el Banco de Rescates de Potosí, se hallaba en decadencia y carecía de capital para responder a las necesidades de su creación. El gobierno entregó la administración del Banco al Tribunal de Minería organizado en corporación al igual del Consulado de Comercio, y le anticipó 30.000 pesos que serían devueltos con 6% de intereses, creando al mismo tiempo el impuesto de 1 real sobre las pastas de plata para la formación de un fondo dotal del Banco. Poco tiempo después fué suprimido este impuesto.

Al Banco de Rescates de La Paz, especialmente contraído a la adquisición de oro, le aumentó su capital con 25.000 pesos provenientes de la contribución indigenal, y fijó una importante tarifa para la compra de metales que merece consignarse.

El oro fundido se cotizó a 5 reales ¾ el quilate en onza, lo que importa 17 pesos 2 reales la onza de oro puro;

El de Tipuani-hacienda en pepitas—se fijó en 16 $ 4 reales;

El oro de rescate, de la misma procedencia, en 16 pesos;

El de Camaniqui a 14 $ 4 reales;

El de Ananea, en charque, 13 $ 4 reales; en pella 13 $;

El de Chungamayu y la chafalonía antigua, a 14 pesos;

El de Chuquiaguillo y la chafalonía moderna, a 12 pesos.

Habiendo resultado bajos los precios oficiales, fueron poco después modificados, elevándose a 17 pesos el oro de Tipuani, a 15 y 16 pesos los demás según calidad, y a 13 y 14 la chafalonía.

La equivalencia legal entre el oro y la plata, se fijó en 17 pesos.

Siempre con el propósito de fomentar el oro para emplearlo en moneda, se suprimió el impuesto del 3%, creado en 1829.

Más tarde, en 1831, cuando ya podía acuñarse el metal amarillo en Potosí, quedó prohibida la exportación de pepitas, barras y tejos.

Para el rescate de la plata se fijó la tarifa de 7 pesos 5 reales por marco en piezas mayores a 30 marcos, rebajándose las menores hasta 7 $ y 6 $ 4 reales. La chafalonía fué cotizada a 6 $ 2 reales.

En el arancel aduanero de 1829, se creó una sección especial de derechos de exportación sobre los siguientes productos nacionales:

Plata amonedada, el 3%;

Oro amonedado y tejos quintados, el 2%.

Fué declarada libre la exportación de minerales de estaño y cobre, así como la de los demás productos naturales e industriales.

Quedó absolutamente prohibida la extracción de plata piña o en barras, bajo pena de comiso y presidio. Sólo podía exportarse en especie monetaria el metal blanco, cuyo rescate obligatorio se hallaba establecido en calidad de monopolio fiscal.

Los derechos del arancel de 1829 tuvieron una

tarifa mínima para las exportaciones por Cobija, siguiendo el espíritu de protección que primó en la política del gobierno Santa Cruz. Se rebajaron al 2% los derechos a la plata amonedada, y al 1% los que gravaban la exportación del oro, quedando vigentes los derechos del 3% y 2%, respectivamente, en las aduanas terrestres.

El Congreso de 1838 dictó nuevas tarifas uniformes para el comercio de metales, fijando las siguientes cuotas de exportación:

Oro quintado,	3 reales por onza.
Oro labrado,	2 « « «
Oro amonedado,	1% *ad valorem.*
Plata labrada,	4 reales por marco.
Plata amonedada,	3% *ad valorem.*

Se mantuvo la prohibición de exportar plata piña, en pastas o barras.

IV

La cuestión del rescate del oro que con decidido empeño llevó a cabo el gobierno, estuvo relacionada con la acuñación de este metal, a cuyo fin se destinaron 100.000 pesos de capital.

Durante dos años se hizo un hábil drenaje de oro fomentando las explotaciones del departamento de La Paz. Reunido el stock necesario del metal amarillo, comenzó en 1831 a acuñarse la nueva moneda «con los sellos de ley», que no fueron otros que los adoptados por el Congreso Constituyente de 1826.

Empero, la ley o título legal de las piezas de oro, que pesaban 542 granos, se fijó en 22 quilates

(916,666 milésimos), siendo de notar que las onzas españolas sólo tenían 21 quilates (875 milésimos).

De 1831 a 1839 inclusive, la Casa de Potosí entregó a la circulación en oro, la suma de $ 1.079.942, anualmente distribuídos como sigue:

1831.....	$	122.944
1832.....	«	148.478
1833.....	«	99.824
1834.....	«	80.240
1835.....	«	184.008
1836.....	«	82.824
1837.....	«	185.912
1838.....	«	84.456
1839.....	«	91.256
$ oro		1.079.942

La acuñación del oro siguió hasta 1857, en que se hizo la última emisión por la suma de $ 16.917.

El monto de lo acuñado, desde 1831 a 1857, alcanzó a $ 2.437.604. Cabe advertir que a partir de 1845 la ley monetaria se rebajó a 21 quilates. (1)

Si el gobierno llevó hasta el éxito más plausible su empeño por dotar al país de circulante oro, no fué correcta su actitud con relación a la moneda de plata, que se alteró clandestinamente en su ley el año 1830.

(1) RELACION DE QUILATES DE ORO A MILÉSIMOS DE LEY

Ley de	24	quilates	=	1.000	milésimos
Id. «	23	«	=	958.333	«
Id. «	22	«	=	916.666	«
Id. «	21	«	=	875.	«
Id. «	20	«	=	833.333	«
Id. «	19	«	=	791.666	«
Id. «	18	«	=	750.	«

Regía en el país el peso fuerte tradicional de 10 dineros 20 granos de ley, que según pragmáticas reales a que se sujetaba la Casa de Moneda, tenía 272 maravedís.

De cada marco se acuñaban 68 reales, o sean 8 pesos 4 reales sin deducir los impuestos vigentes. De esta manera, el peso fuerte tenía 542 granos de peso, lo que daba 489,4 granos de metal fino.

En términos modernos: la moneda fuerte tenía el peso ponderal de 27,19 gramos, y su fino alcanzaba a 902,77 milésimos, o sean 24,45 gramos de plata pura.

A pretexto de mandar acuñar moneda fraccionaria (tostones, pesetas y reales), el gobierno disminuyó la ley y aumentó el feble o liga para mantener a las nuevas piezas su peso ponderal justo.

Esta disminución se hizo en proporciones desastrosas. Se fijó en 8 dineros el fino (666,6 milésimos).

De esta manera, la moneda fuerte que debía tener y tenía..... ..... 24,45 gramos
de metal fino, fué rebajada en la sencilla o feble a..... .... 18,05 gramos,
resultando un quebranto de..... 6,40 gramos
de metal fino en cada peso.

Esta enorme proporción de fraude fiscal que pasa del 26%, produjo naturalmente desastrosas consecuencias en la economía nacional, y se extendió a la del Perú por efecto del activo intercambio comercial de sus poblaciones del Sud, y posteriormente por la Confederación.

Los pesos fuertes y el oro fueron buscados para ser exportados en pago de las obligaciones del comercio; las pastas de plata salieron de contrabando; los precios se elevaron considerablemente, y, bajo el imperio fatal de la ley de Gresham, no quedó en el país sino la moneda feble, cuya depreciación fué agravada posteriormente con las grandes cantidades de la acuñación.

Se emitieron en estas especies, de 1830 a 1859, alrededor de 34 millones de pesos, de los que 10 millones se infiltraron en la economía peruana, donde se denominaban «corbatones». El gobierno del Perú hubo de proveer a la conversión de esta gruesa suma, mediante el empréstito externo de 1860, perdiendo en la operación más del 30%. (1)

En el tratado de paz firmado con el Perú el año 1848 se estipuló que no se emitiría moneda cuya ley no llegase a 10 dineros 20 granos. Diversas medidas adoptó a su vez el gobierno de Bolivia para corregir el fraude monetario de 1830, de las que habrá oportunidad de ocuparse en el lugar correspondiente.

El decreto monetario que autorizó la acuñación de moneda feble, se mantuvo en estricta reserva. Sólo se conoce una copia de este documento, cuyo original no existe en ningún archivo.

He aquí su texto, que don Pedro H. Vargas publicó en 1863 en los anexos de un folleto muy raro sobre moneda feble:

---

(1)—EMISION DE MONEDA FEBLE

De 1830	al	39	$	3.520.501
« 1840	«	49	«	9.176.724.5
« 1850	«	59	«	21.250.214.3
			$	33.947.440

EMISION DE MONEDA FUERTE

De 1830	al	39	$	16.466.692.4 reales.
« 1840	«	49	«	11.211.974
« 1850	«	59	«	2.487.982.1 «
			$	30.166.648.5 reales.

Plácido Orosco.—«Cuestiones Financieras».—Cochabamba—1877.

«El Presidente de Bolivia;

Por más que se multiplica y aumenta el cuño de plata menuda para facilitar los cambios en el comercio interior de la República, la extracción de ella por su buena ley de calidad, ha agotado casi enteramente la que circulaba en años anteriores. Todas las provincias se resienten de la falta de estos signos tan necesarios. Sería incongruente remedio aumentar con multiplicados gastos y dispendios esta clase de numerario, si no se pone dique a la extracción que la experiencia ha acreditado con tanto perjuicio del Estado.

En consecuencia, ha venido en decretar y decreta:

Art. 1º—Que en la Casa de Moneda de Potosí, se labre en lo sucesivo la moneda menuda desde tostón abajo con la ley de 8 dineros justos, sin alterar el peso ni la estampa que corresponde a cada clase. El Gobierno fijará la cantidad que gradúe necesaria para el giro interior de la República.

Art. 2º—Esta moneda circulará con el valor que representa: será recibida indistintamente como las demás en las tesorerías nacionales en pago de las sumas que se deban al Estado: del mismo modo se satisfarán con ella los créditos pasivos sin diferencia.

Art. 3º—Las utilidades que resulten de esta amonedación se destinan para fondos de la Casa al preciso objeto de poner en corriente las labores del oro, de que resultan tantos bienes al Estado y al comercio.

Art. 4º—Este decreto será sometido oportunamente al conocimiento y deliberación de la próxima legislatura.

Art. 5º—El Ministro de Estado del despacho de

Hacienda, cuidará de la ejecución de este decreto, y lo hará imprimir, publicar y circular. Dado en Potosí, a diez de octubre de mil ochocientos veintinueve.—Diez y nueve.—Es copia.—Lara».

«Es copia legal de la que existe en la contaduría de esta Casa, a la cual me remito; y por prevención del señor Contador de ella, la autorizo y firmo de oficio por duplicado, en esta Casa de Moneda de Potosí, a cuatro de enero de mil ochocientos treinta años, siendo testigos a la corrección don Martín Castro, y don José Mariano Araujo, de este vecindario—Leandro Osio—Escribano de Moneda».

«Es conforme con el testimonio de su contexto, a que me remito, y de orden verbal de S. S. el Visitador de la Casa Nacional de Moneda, signo y autorizo el presente. Potosí, mayo diez y seis de mil ochocientos sesenta y tres—Hay un signo—Pacífico Paz, Actuario de Moneda».

Si el propósito del gobierno de Santa Cruz hubiera sido crear una moneda de vellón, la cosa no habría tenido mayor trascendencia, a menos que se abusara en la cantidad de la emisión; pero el sigilo con que se alteró la ley monetaria y la extraña concepción económica que revelan los considerandos del decreto, manifiestan claramente que en los cálculos del Protector entró por mucho la idea de obtener recursos fáciles a costa de la riqueza general. Grave y funesto error que compromete la reputación financiera del gobierno de la Confederación.

La gravedad del caso no reside precisamente en el monto de lo acuñado durante la administración que

inició el fraude de 1830. Las cantidades lanzadas hasta 1839 no pasaron de tres millones quinientos mil pesos. Tal gravedad consiste en el abuso que posteriormente ejercitaron los gobiernos, siguiendo la lógica fatal de aquel funesto error.

De 1840 a 1849 la emisión pasó de nueve millones; de 1850 a 1859 fué superior a veintiún millones de pesos, y de 1865 a 1871, último período de la emisión en la época de Melgarejo, giró alrededor de seis millones de bolivianos.

Para completar estas referencias, he aquí un cuadro de la acuñación de moneda, fuerte y feble, de 1830 a 1839:

		LEY 10,20		LEY 8 d.
1830	$	1.583.082,4	$	206.218,4
1831	«	1.678.750	«	211.242
1832	«	1.555.049,4	«	306.909,4
1833	«	1.640.355,4	«	313.891,4
1834	«	1.652.400	«	309.400
1835	«	1.471.069,4	«	509.090,4
1836	«	1.644.129,4	«	303.186,4
1837	«	1.768.510	«	301.573
1838	«	1.565.496	«	492.005,4
1839	«	1.887.850	«	566.905
	$	16.446.692,4	$	3.520.512

V

Esfuerzos muy apreciables, aunque ineficaces, hizo el gobierno por fomentar las pocas industrias de aquella época.

Los telares de Cochabamba y Mojos, favorecidos por la protección aduanera, libraron todavía al consumo importantes cantidades de tocuyo y de otros tejidos y manufacturas de algodón.

Esta industria implantada en el país desde la época del coloniaje, tuvo mucha importancia en aquellos tiempos, y hacía vivir holgadamente una numerosa población obrera, especialmente de mujeres que se dedicaban a la industria del hilado a mano.

Sin embargo, los telares de Cochabamba que, en los tiempos de la colonia, habían llegado a producir hasta un millón de varas de tocuyo, no llegaban ya ni al 25% de esta cifra.

El fenómeno tenía una explicación sencilla: Era en extremo escasa y costosa la materia prima; y la protección fiscal, que hasta fines del siglo XVIII había tenido toda la eficacia del monopolio mediante la Casa de Contratación de Cádiz, no fué ya tan benéfica durante la República que colocara la industria nacional en condiciones de satisfacer el consumo y de competir con los productos europeos, que habían llegado a un considerable grado de perfeccionamiento y baratura.

La prohibición de internar tocuyo y la liberación de algodón en rama, detuvieron artificialmente la ruina por poco tiempo, pero no incrementaron la manufactura del país, que carecía de capitales, de mejoras técnicas y de materia prima barata y abundante. Si el proteccionismo aduanero se hubiera completado con la protección seria del cultivo del algodón, con la introducción de maquinarias y la preparación

técnica del personal, acaso no habría perdido el país sus importantes factorías de Cochabamba, Mojos y Chiquitos.

Además, el gobierno, convencido de la ineficacia de la prohibición aduanera que consagró el arancel de 1829, permitió el comercio de tocuyos ingleses gravándolos con el 30%, y protegió su internación por Cobija rebajando al 10% los derechos.

Mal organizada, atrasada y falta de capitales y de materia prima, la industria fabril languideció irremediablemente, y, poco a poco, cedió su puesto a las manufacturas de Manchester y Massachussets. Los listados, las macanas, los manteles con bordado y encaje, las sábanas con blonda, los guantes, los cordoncillos, las hamacas, el lienzo fino, las sobremesas, los ponchos, las medias, las servilletas, toda esa manufactura nacional que alimentaba una gran población obrera que hacía prodigios de habilidad manual a falta de otras condiciones técnicas, desaparecieron ante el «maquinismo» moderno a despecho de las artificialidades administrativas de los gobernantes.

Ofreciéronse en vano premios pecuniarios a los que cultivasen un mínimum de 300 arrobas de algodón.

También se fijaron otros premios para las plantaciones y cultura del añil, la explotación del zinc «para fabricar latón», el establecimiento de fábricas de cristal fino, loza, pañetes, tejidos de algodón, ingenios de azúcar, minas de cinabrio, etc. Todo fué inútil, y todo quedó en nada ante las guerras de la Confederación, que por su misma trascendencia absorvieron por entero la acción política y administrativa del gobierno.

La extracción de la cascarilla, producto que fué descubierto en el Alto Perú el año 1692 durante la administración del virrey conde de Chinchón, llegó a tomar importancia considerable. El gobierno inició el establecimiento del monopolio fiscal de este producto en atención a su rareza, y proyectó al efecto la formación de una sociedad anónima con 300.000 pesos de capital y con privilegio de 10 años. La compañía administradora del monopolio debía pagar cinco pesos de impuesto de exportación por quintal.

No se organizó la sociedad, ya por falta de capitalistas o ya por los trastornos de las guerras del año 35. Más tarde, en 1837, el gobierno se vió obligado a suspender durante cinco años el corte de la cascarilla, para evitar el envilecimiento de su precio ocasionado por la superproducción que fomentaron las altas cotizaciones.

En aquellos tiempos, como en nuestros días, la caza de la chinchilla se hacía en condiciones de exterminio de la rarísima especie de roedores que proporcionan piel tan fina y delicada. Para proteger la conservación de esta riqueza natural, propia y exclusiva de las estepas de Carangas, que crían las clases más hermosas de la chinchilla reina, y de los Lípez y Atacama, que poseen clases menos selectas, prohibióse su caza y exportación bajo penas severas, durante siete años.

Bien inspirada la prohibición en principio, no tuvo éxito satisfactorio en los hechos, pues si fué cumplida por los hijos del país, no dió otro resultado que

perjudicarles, en mayor provecho de los cazadores extranjeros, que burlaban fácilmente las órdenes del gobierno al amparo del desierto que hacía imposible toda vigilancia.

A poco tiempo de vigencia quedó suspendido el decreto ante la imposibilidad de su ejecución y ante la amenaza de que, elevados los precios de la chinchilla por efecto de la misma prohibición fiscal, la caza clandestina habría de tener mayores incentivos para apresurar el exterminio de la valiosa especie.

VI

Data del año 1834 la creación del primer banco de emisión y descuentos bajo el nombre de «Banco de Circulación», domiciliado en Potosí.

Se fijó en un millón de pesos el capital dividido en 50.000 acciones de a 200 pesos cada una.

El Banco estaba autorizado para hacer las siguientes operaciones:

Descontar letras y papeles de comercio pagaderos en la República, con un plazo máximo de tres meses y una fianza «aval» de dos personas. El tipo del descuento no podía ser mayor al 1 y ½% mensual;

Anticipar fondos sobre prendas de oro y plata;

Recibir depósitos y otorgar préstamos;

Emitir *cédulas* de circulación (así se denominaban los billetes), de los cortes de 5 pesos hasta 1.000, en pago de las letras y los documentos descontados. Las «cédulas» no se emitirían sino hasta el monto de los fondos efectivos del Banco, y serían pagaderas en moneda metálica a la vista y al portador.

Debía tener el Banco privilegio por diez años, y muchas otras prerrogativas que aseguraban sus intereses.

Esta institución proyectada sobre las mejores bases del moderno régimen bancario, no llegó a realizarse a causa de la guerra de 1835, que fué la liquidación final de todo ese brillante conjunto de iniciativas con que ilustró los primeros cuatro años de su gobierno el Mariscal Santa Cruz.

Otro establecimiento de crédito, fundado en 1833 bajo el nombre de «Banco de Refacciones», tuvo por objeto habilitar a los mineros para sus explotaciones. Cinco años funcionó el citado Banco minero, con resultados poco apreciables; por lo que se liquidó en 1838, pasando sus operaciones a la Oficina de Rescate de Metales de Potosí.

Merece también citarse, como la primera y acertada manifestación del espíritu de cooperación y previsión social, el establecimiento de una «Caja de Montepíos» con el aporte de pequeñas cuotas de los empleados públicos y la asignación íntegra del sueldo de los puestos vacantes.

Bajo el gobierno del general Ballivián se perfeccionó y tomó mayor incremento esta institución.

VII

La cuestión agraria no preocupó mucho al gobierno Santa Cruz. Se ordenó la distribución gratuita de las tierras baldías a condición de que sean cultivadas al año siguiente o que se pongan ganados, quedando sus productos eximidos de los diezmos.

Fueron anuladas, por defectuosas, las revisitas de las tierras de los comunarios mandadas practicar por el anterior gobierno, y se ordenó el levantamiento de nuevas operaciones. En cambio se declaró propietarios a los caciques e indígenas que tuvieran más de diez años de posesión.

El gobierno se preocupó de dotar a Cochabamba de las aguas de las lagunas de Larati y Llachocmayo para incrementar la agricultura. Nada práctico se hizo en este importante proyecto, quedando como una simple iniciativa.

En defensa de los bienes del Estado, cuya venta en valores fiscales fué autorizada por leyes anteriores, se dispuso el pago de una mitad en dinero, admitiéndose sólo por la otra mitad los vales del empréstito y billetes del crédito público de 1826.

A fin de acelerar la extinción de las capellanías y mayorazgos, se ordenó la partición de los bienes vinculados entre el actual poseedor y su sucesor inmediato, reforma que hubo de ser derogada el año 1833.

La contribución sobre herencias data del año 1836, en que se estableció bajo una forma doble. Los testadores sin herederos legales sólo podían disponer de las cinco sextas partes de sus bienes, quedando una sexta parte en favor del Estado. Además, todo testador debía asignar, en calidad de manda forzosa, tres pesos para la Nación.

VIII

El primer presupuesto de gastos de la República fué redactado por el primer ministro de hacienda, don

Juan de Bernabé y Madero, con un total de 2.349.763 pesos. Desde 1826 a 1832, rigió este presupuesto con pequeñas modificaciones hechas dictatorialmente. Empero las rentas no alcanzaron sino a 1.500.000 pesos. (1)

Para el ejercicio financiero de 1833 se votó el segundo presupuesto de la Nación, con un total de pesos 2.033.577,3½, que fué también adoptado para el año 1835 y cuyo resumen por servicios es el siguiente:

Servicio Legislativo	$	57.809
« del Supremo Gôbierno	«	71.200
« de Relaciones Exteriores	«	100.000
« del Consejo de Estado	«	22.600
« de la Corte Suprema	«	34.100
« de la Contaduría	«	18.800
« del Crédito Público	«	2.899
Departamento de Chuquisaca	«	153.458,2½
« « La Paz	«	198.786,1½
« « Potosí	«	166.930,1
« « Cochabamba	«	86.278,2
« « Oruro	«	101.746,7
« « Litoral	«	16.054,6
« « Tarija	«	16.503,3½
Gastos extraordinarios (Cobija)	«	100.000
Ejército: 4 batallones, 2 regimientos y una brigada de artillería	«	746.192,4
Importe del servicio nacional	$	1.891.358,3½
Servicio de Instrucción	«	142.219
Total	$	2.033.577,3½

(1)—El año 1830 la recaudación no alcanzó sino a $ 1.537.702, a causa de la invasión de Gamarra que expolió y saqueó militarmente el país.—Lara.

No entraba en las prácticas de aquellos tiempos votar un presupuesto especial de ingresos, por lo que no se conoce su importancia; pero es de presumir que éstos no excedieron a los gastos presupuestos.

El ejército quedó reducido a unos dos mil hombres en conformidad al tratado de equivalencia militar firmado con el Perú el año 1833, como consecuencia de los recelos del año anterior que estuvieron a punto de encender la guerra.

Mas, los acontecimientos de 1835 elevaron la cifra del ejército a 5.000 hombres, con los que Santa Cruz inició la campaña sobre el Perú y organizó la Confederación.

El único recurso extraordinario que se votó para subvenir a los gastos de guerra, fué el de los descuentos a los empleados públicos en una proporción progresiva del 10% al 30%.

Conforme a la convención de auxilios y subsidios, suscrita en La Paz el 15 de junio de 1835, el ejército boliviano debía movilizarse y se movilizó llevando su caja militar para cubrir los gastos de tres meses por lo menos, declarándose el Perú responsable de todos los que ocasionare la campaña.

Disuelta la Confederación después de la batalla de Yungay, el gobierno de Bolivia suscribió el tratado de 1840 obligándose a pagar la cuarta parte de los gastos ocasionados a Chile por la campaña de la Restauración.

Esta célebre deuda fué liquidada en la batalla de Ingavi.

La obra financiera del gobierno Santa Cruz, ha sido contradictoriamente juzgada.

Los «restauradores» embargados por la pasión política que llevó el alarde del odio a Santa Cruz al extremo de felicitar al vencedor de Yungay, desconocieron en lo absoluto el mérito indiscutible de aquella administración. D. José María Dalence, el ministro de hacienda del gobierno de la Restauración, dice en su «Bosquejo Estadístico», hablando del ministro D. José María Lara, que «sólo se ocupó en zurcir el sistema español engrosando los ingresos del tesoro, para el fin que después desenvolvió Santa Cruz, con la moneda baja que se introdujo por nuestra desgracia». «Los subsiguientes ministros no han hecho más que trillar la rutina de Lara, sin pensar jamás en arrancar de raíz el mal». Se refiere al sistema tributario.

Sin embargo, Lara fué el ministro que hizo fructificar el programa financiero del Congreso Constituyente de 1826, que Sucre y su ministro D. Juan de Bernabé y Madero no tuvieron tiempo de desarrollarlo plenamente. Bajo el ministerio de Lara se adoptó una política comercial bien definida, que el mismo ministro Dalence continuó el año 1840 con alguna exageración. La industria minera recibió todo el impulso compatible con las estrecheces económicas y técnicas de su tiempo, y fué aligerada de los impuestos que la abrumaban. La cuestión bancaria fué planteada con una claridad perfecta de vistas, y si no llegó a realizarse, lo mismo que el monopolio de la quina, culpa fué de la insuficiencia del medio económico, de la mediocre capacidad financiera de la época, y de los

acontecimientos internacionales de 1835, que no de la insuficiencia o la rutina de los hombres del gobierno.

El único cargo serio, y también el más grave, que puede hacerse pesar sobre el ministerio de 1830, es la clandestina reducción de la ley de la moneda nacional. Estuvo el mal en no haberse acometido francamente la reforma, creando una moneda de vellón, si era preciso hacerlo; en no haberse sometido el decreto a la consideración del congreso, manteniéndolo más bien en sospechosa reserva; en no haberse dado a la moneda sencilla la función subsidiaria que nacía de su propia naturaleza, limitándola a facilitar los trueques caseros, sin abrigar la torcida y funesta pretención de querer retener la plata haciéndola inservible por su baja ley.

El enorme absurdo monetario de 1830 fué fruto del error mercantilista, muy generalizado en aquellos tiempos y que aun prevalece en el criterio rutinario de nuestros días. Se olvidó, como suele olvidarse ahora mismo, que la moneda es una de las infinitas formas de la riqueza humana sometida a la ley común de la economía política, y no la suprema y única riqueza a cuya adquisición se deben sacrificar las demás. Se olvidó también, como ahora mismo ocurre a menudo entre nosotros, que el signo monetario representa un valor intrínseco y no una fórmula convencional o una abstracción jurídica que puede modificarse según las necesidades o conveniencias del momento.

Los países no son más ricos ni más pobres porque tienen mucha o poca moneda. Su capacidad económica se mide por el volumen de la riqueza produci-

da o la posibilidad de producirla, y no por las dimensiones de una caja de caudales cuidadosamente guardada.

En el mecanismo de las transacciones internacionales, los productos se pagan con productos. Cuando éstos no son bastantes, la diferencia se cubre con otro producto, la moneda, cuya escasez determina automáticamente un menor consumo y una producción mayor, hasta alcanzar la situación de equilibrio, que es la suprema ley económica.

La ausencia de estos principios elementales indujo al gobierno de 1830 al error monetario que tantos males causó a la riqueza nacional.

Por lo demás, la obra del gobierno Santa Cruz pudo y debió ser más provechosa a la República si sólo a ella se hubiera contraído; pero tuvo una orientación audaz, mal comprendida en su época o defectuosamente planteada, que pugnó por crear una vigorosa entidad política en el continente, capaz de asegurar la prosperidad y grandeza de dos pequeñas naciones, que solas valían bien poco, y unidas en una estrecha comunidad internacional, habrían alcanzado los más brillantes destinos.

La historia es una permanente confirmación de que sólo los grandes organismos políticos aseguran la prosperidad de sus pueblos. Las pequeñas entidades están expuestas a graves peligros; y para substraerse a su fatal influencia deben propender a agrandarse, si no por la unión de razas e intereses—que algún día reclamarán sus fueros en esta parte de América—por el robustecimiento de su personalidad moral y económica.

CAPITULO IV

DURANTE LA RESTAURACION

I.—El nacionalismo.
II.—Política comercial.—Proteccionismo y prohibicionismo.—Los nuevos aranceles.—Fomento de Cobija.—Los fraudes aduaneros y la «balanza comercial».
III.—Relaciones con el Perú.—La desaprobación del pacto del Cuzco.—El tratado de 1840.
IV.—Impuesto a la cascarilla.—Presupuesto para 1841.

I

A la caída de Santa Cruz todo el empeño de los hombres del gobierno de la Restauración se contrajo a desenvolver un «nacionalismo» excluyente, como para borrar los recuerdos de la comunidad política que había implantado la Confederación. Se pretendía haber conquistado segunda vez la independencia de Bolivia, y era consiguiente que la política, al influjo de este convencimiento, por uno de esos fenómenos naturales de reacción, se hubiera encaminado con todo ahinco a afianzar la independencia readquirida.

El nacionalismo de la Restauración, que un año después tuvo en la batalla de Ingavi una razón más

para imponerse a la conciencia del pueblo, caracterizó, pues, toda esa época, imprimiendo vida y acción a las instituciones nacionales para consolidar la obra de 1825.

Cuando se examina la historia de esos tiempos de formación nacional, no puede menos que reconocerse la verdad que entraña la ley del crecimiento político de las sociedades por virtud del peligro externo. El peligro que ha desarrollado en los animales el instinto de la conservación y el órgano de la defensa, ha obrado también en las naciones con idéntica eficacia. Los pueblos más amagados por el enemigo externo o por los peligros y dificultades de su propio suelo, son los que más han acelerado su crecimiento y su nacionalización, obligados, a pesar suyo, a crear los órganos de defensa común, lo que implica necesariamente la aceleración del desarrollo económico.

II

Las ideas de la Restauración imprimieron rumbos definidos a la política comercial. El mismo proteccionismo, que llevó a la práctica el anterior gobierno, tuvo un desarrollo más amplio bajo las inspiraciones del ministro de hacienda, D. José María Dalence, tocando a los extremos del prohibicionismo como el medio más sencillo de hacer eficaz la protección.

Con este criterio se prohibió la importación de tocuyos, sillas de montar, calzado de hombre, ropa cosida y sombreros de lana y de seda.

En cambio se declaró libre la internación de algodón en rama, que lo era siempre, se suprimió el

impuesto que pesaba sobre las harinas nacionales, y se ordenó a los prefectos que no omitan esfuerzo para fomentar el cultivo del algodón y el establecimiento de telares.

Se proyectó la adquisición de 100 a 200 telares destinados a Oruro y Paria para tejer bayetas de lana, que no llegó a realizarse por falta de recursos y por los peligros internacionales que desviaron la atención del gobierno.

Adoptados provisionalmente los aranceles del año 1829 para las importaciones por las fronteras terrestres, y fijados en 10% los derechos por la Aduana de Cobija, se rebajó la exportación de plata sellada por este puerto al 2%, manteniéndose el 3% para las vías terrestres.

A fines de 1841 se sancionaron los nuevos aranceles para Cobija y para las aduanas terrestres, que en resumen comparativo ofrecen las siguientes diferencias:

IMPORTACION

Nomenclatura	Por Cobija.	Por tierra.
Joyas y relojes	3%	8%
Artículos de algodón.....	5%	20%
Artículos de seda, lino, lana, encajes.....	6%	20%
Cueros manufacturados, madera labrada.....	7%	30%
Muebles, licores, naipes, tabaco, perfumes, baules, calzado de mujer.....	10%	30%

Nomenclatura	Por Cobija.	Por tierra.
Derecho de consulado.....	½%	½%
Libros.....	2%	4%
Armas, artículos similares de la industria nacional, ropa hecha, *excepto camisas de lino*.....	Prohibidos	Prohibidos
Animales, azogue, máquinas, herramientas, estatuas, música impresa, monedas y barras de plata.....	Libres	Libres
Efectos en tránsito para la Argentina y lo mismo que la exportación de plata procedente de dicho país.....	Libres	Libres
EXPORTACION		
Plata amonedada.....	1%	2%
Oro amonedado.....	1%	1½%

Siguiendo el plan de fomentar el puerto de Cobija, se votaron treinta mil peso para varias obras públicas, restableciéndose la aduana, y se proyectó la construcción de un muelle, la creación de postas en el camino y la apertura de pozos artesianos.

Para evitar los fraudes que se consumaban contra el tesoro, con la exportación clandestina de pesos fuertes y pastas de plata, el ministro Dalence ordenó que los importadores afiancen no sólo los derechos de internación, sino también los de extracción de la mo-

neda en pago de las mercaderías internadas. «Compruébese de lo contrario, decía la orden, que el importe de los efectos extranjeros se ha invertido en efectos del país, los que deben ser guiados y aforados en la frontera».

Las ideas mercantilistas de aquel tiempo hicieron formular a Dalence una sencillísima balanza comercial, cuyo enorme saldo pasivo le decidió a expedir la medida en referencia. Decía el ministro que las importaciones pasaban de un millón y medio de pesos, y las exportaciones no arrojaban sino 200.000. El saldo debía haberse exportado en moneda, que no aparecía legalmente extraída.

En parte tenía razón; pero no todas las importaciones constituyen pasivo y que por tanto han de pagarse precisamente con productos de retorno o con moneda en su caso, ni las importaciones y exportaciones son correlativas en cada año, esto es, que lo importado en el año debe pagarse justamente con lo exportado el mismo año.

El comercio internacional es mucho más complejo para poderse guiar con sólo las conclusiones de la balanza mercantilista.

Por eso, la orden de garantizar las exportaciones, fué sencillamente impracticable, y a poco tiempo tuvo el gobierno que suspenderla.

III

Las relaciones con el Perú tuvieron nuevas complicaciones. D. Eusebio Gutiérrez, extralimitándose de sus poderes de ministro residente, había suscrito

en el Cuzco una convención preliminar de paz obligando a Bolivia a dar solemnes satisfacciones al Perú por las pretendidas ofensas de la intervención armada del año 1835, a pagar indemnizaciones de guerra, a proceder a la demarcación de fronteras tomando por base el Desaguadero, y a otras cláusulas más, depresivas al honor nacional, y onerosas e injustificadas en sumo grado.

En lo comercial, estipulaba el establecimiento de una aduana común en Arica, obligándose Bolivia a declarar sin efecto cualesquiera resoluciones que estuvieran en oposición a los intereses de la aduana común, lo que importaba obligarse a la anulación definitiva del puerto de Cobija.

El Congreso Constituyente de 1839 desaprobó el pacto, lo cual puso al país en peligro de guerra.

Nuevas gestiones realizadas en Lima condujeron al tratado preliminar de paz de 1840, menos humillante que el del Cuzco.

Se estipuló en dicho tratado la vigencia del de comercio suscrito el año 1832, o sea la reducción de derechos de tránsito al 2% sobre exportaciones, y entre el 3% y 20% sobre las importaciones, manteniéndose en 6% los derechos sobre los artículos naturales de los países contratantes.

La estipulación onerosa fué la de haberse obligado Bolivia a pagar la cuarta parte de los gastos que reclamaba Chile por haber destruído la Confederación.

Como consecuencia de este tratado quedó suspendido el descuento de guerra, que los empleados pú-

blicos pagaban en un 50% de sus haberes, y se licenciaron las tropas que habían llegado a 9.000 hombres.

IV

No habiéndose organizado la sociedad monopolizadora de la cascarilla, se decretó su libre extracción, debiendo cobrarse los siguientes impuestos:

Para La Paz, 20 $ por quintal si se exportaba por las fronteras terrestes, y sólo 5 pesos por Cobija.

Para Santa Cruz, 12 y 5 pesos en la misma forma.

La extracción quedaría prohibida cuando llegara a fabricarse sulfato de quinina en el país.

El presupuesto de 1835 fué declarado vigente, y para 1841 se aprobó otro por $ 1.810.253,5½ que con pequeñas diferencias es igual a aquél.

Las escuelas pasaron al cuidado de las municipalidades, y el presupuesto de guerra alcanzó a..... 750.000 pesos o sea más del 40% de los egresos.

Tampoco se señalaron los ingresos, que tuvieron un recurso más en la vigencia de la ley de patentes de 1826, a cuyo efecto se mandó levantar el padrón de contribuyentes de las tres primeras clases, que comprendían con 52 pesos anuales a los comerciantes mayoristas y propietarios con más de siete criados; con 28 pesos las tiendas, boticas y billares y personas que tuvieran hasta seis criados, y con 20 pesos las tiendas de efectos del país, a los abogados y personas que tuvieran cinco criados.

El gobierno de la Restauración pasó breve como una llamarada de patriotismo, sin dejar huella de su acción en las finanzas públicas. Como todo régimen provisional y de transición, abundó en buenos propósitos, pero no tuvo tiempo de ponerlos en práctica.

CAPITULO V

DESPUES DE INGAVI

I.—Política internacional.—La invasión al Perú.—Esterilidad de los esfuerzos de Ballivián.—Paz de Puno.—El tratado de 1848.—Libre tránsito.

II.—El militarismo.—Creación de colonias militares.—Recursos para la reforma militar.—Caja de Ahorros.—Comisaría de Guerra.

III.—El huano, la cascarilla y la coca.—Los contratos del huano.—Banco de Rescates de la Cascarilla.—Licitación de la exclusiva.—El Banco de la Coca.

IV.—Política aduanera.—Los aranceles proteccionistas.—El tratamiento del algodón, de los fósforos y de la pólvora.

V.—La producción de plata.—Rebaja especial del impuesto.—Reorganización de los Bancos de Rescate.—El contrabando de pastas.

VI.—La reglamentación de la moneda.—Características monetarias del Reglamento Torrico de 1848.

VII.—Fomento industrial.—Hacia el Oriente.—La compañía belga.—Organización de un «falansterio».—Navegación del Pilcomayo.—La cuestión del puerto.—Del Desaguadero al Pilcomayo.—Mojos industrial.—La decadencia fabril.—Monto de la producción nacional.—Tocuyo, jabón, pólvora, vidrio, &, &.—El proceso del fracaso industrial del país.

VIII.—Crédito público.—La renta del 6%.—Venta de bienes fiscales.—Caja Civil de Ahorros.

IX.—Progresos del derecho presupuestal.—Fondos de instrucción.—Varios impuestos.—El Presupuesto para 1845-46.—Las cifras de 1848.—Ley de impuestos que motiva una revolución.

I

Apesar de haberse aprobado y ejecutado lealmente por parte de Bolivia el tratado de 1840, Gamarra movilizó sus ejércitos sobre la frontera pretextando que los pronunciamientos revolucionarios en favor de Santa Cruz, constituían un peligro para la independencia del Perú. No bastó a satisfacer al engreído generalísimo ni el hecho de haber subido al poder el general José Ballivián, amigo leal del Perú y adversario franco de la política protectoral. Ningún gobierno podía dar a la vecina República mayores garantías de paz y de confraternidad; y sin embargo, continuó la invasión de Gamarra, hasta que en los campos de Ingavi, el 18 de noviembre de 1841, pagó bien cara su osadía el Gran Mariscal de Piquiza.

Ballivián llevó después la guerra al Perú, aunque no con la celeridad ni el vigor que habrían aconsejado las circunstancias para evitar la reorganización del ejército derrotado. Invadió Puno y Moquegua, y el 8 de diciembre se apoderó de Arica.

Pertenece a la historia política la apreciación de las causas que esterilizaron el triunfo de Ingavi e hicieron desastroza la campaña sobre Puno. Aquí cabe únicamente tomar nota de los incidentes financieros que fueron su consecuencia.

Durante la breve ocupación de Arica, se ordenó la recaudación de los impuestos aduaneros en ese puerto, y fueron declarados libres los productos bolivianos introducidos al territorio ocupado.

La política interna que reclamaba con urgencia la vuelta de Ballivián, y el ardor de las guerrillas

peruanas amenazando destruir al ejército invasor, dislocándolo de su base de operaciones, precipitaron los arreglos de paz, habiéndose firmado en Puno el tratado preliminar a 7 de junio de 1842. Su estipulación fundamental fué la mutua renuncia de indemnizaciones de guerra y el reconocimiento del principio de libertad fiscal para el régimen del comercio de ambos países.

Ingavi y la campaña sobre Puno resultaron en lo financiero como una derrota.

Mucho más tarde, en 1848, sin que mediara campaña costosa ni una batalla ganada al enemigo, se obtuvo una ventaja considerable para el intercambio comercial por Arica, cuyo tránsito fué declarado libre, sin más gravamen que los derechos de puerto (anclaje, muellaje, faro y almacenaje). La libertad de tránsito, si bien con algunas restricciones, estaba proclamada en pacto solemne.

Para llegar a este resultado, Bolivia hubo de extremar las represalias comerciales que había iniciado el Perú, y llegó a declarar la interdicción absoluta de comercio y de tránsito personal con esa República, movilizando al mismo tiempo sus tropas para hacer la guerra, que fué autorizada por el Congreso extraordinario de aquel año.

II

Como consecuencia de las seguidas campañas y revoluciones, aumentó extraordinariamente la clase militar, constituyendo un serio peligro para el orden público y un perjuicio para la capacidad productora del

país que se veía obligado a mantener una numerosa clase parasitaria. El gobierno procuró poner remedio a la situación, creando colonias militares en los departamentos del Beni y Santa Cruz, mediante distribuciones gratuitas de tierras fiscales.

Los jefes debían tener 16 topos, los capitanes 8 y los individuos de tropa, 4 topos. Gozarían del sueldo de su clase durante un año, y además el gobierno les daría herramientas y ganado. Apesar de los esfuerzos del gobierno, no se realizó la colonización militar.

Parte de los fondos emitidos en 1843 bajo el nombre de «billetes del crédito público», y los 600.000 pesos emitidos en 1846 con el nombre de «vales del crédito», fueron destinados a pagar el retiro de los militares, a quienes se reformó entregándoles para su subsistencia un pequeño capital en dichos fondos.

También se votaron 100.000 pesos en vales para premiar a los soldados que hubiesen cumplido correctamente sus servicios durante un tiempo determinado.

Era tal el aumento de la clase militar en aquellos tiempos, que por encima de las leyes orgánicas de la institución, había un general para cada 102 soldados, un jefe para 14 y un oficial para 6 hombres. (1)

Una importante institución financiera militar fué creada en 1844 para desenvolver el espíritu de ahorro en el ejército. Se la denominó «Caja Militar de Ahorros», a la que debían contribuir con 2 reales mensua-

(1)—Dalence.—Bosquejo Estadístico de Bolivia.

les los soldados, con 4 reales los cabos y con un peso los sargentos. Los jefes y oficiales debían señalar libremente la cuota que desearan imponer en el ahorro.

Comenzó con unos mil pesos, y antes de concluir el período del gobierno Ballivián, la Caja contaba con cerca de 200.000 pesos, la mayor parte en vales y billetes del crédito público que devengaban 6% de intereses.

La prosperidad de esta institución determinó poco después la fundación de la Caja del Ahorro Civil de que se da una noticia especial en el párrafo VII.

El ejército se administraba en sus finanzas por una Comisaría de Guerra, que dió lugar a frecuentes malversaciones.

Su efectivo en tiempo de paz giró alrededor de 3.000 hombres, con un presupuesto de 864.932 pesos en los años 1845 y 1846; y con 914.294 pesos en el bienio 1847–48, incluyendo guardia nacional, jubilaciones y montepíos. El promedio del costo del ejército representaba cerca del 45% sobre los ingresos fiscales.

III

El huano y la cascarilla llegaron a tomar importancia considerable.

Se suscribió el año 1842 un contrato de sociedad entre el gobierno y los señores Sanzetenea, Myers Bland & Cª y otros, para la explotación de las huaneras situadas entre el Paposo y el Loa.

Las principales cláusulas de este contrato, modificado en 1844, consignaban la exclusiva de la ex-

portación por parte de los contratistas y la participación del Estado en un 70% de las utilidades líquidas. El gobierno recibió a cuenta de éstas un anticipo de 300.000 pesos. Para las liquidaciones del negocio se adoptó el cambio de 48 d. o sean 5 pesos por libra esterlina, y se fijó en 17 pesos 2 reales el precio de las onzas de oro.

Cuando en 1848 terminó el contrato, la casa Gibbs que había quedado con todo el negocio, obtuvo una nueva concesión para pagarse del saldo que, probablemente, hecha la liquidación, resultaría a deberle el gobierno. Una comisión *ad hoc* acordó con el representante de la casa Gibbs, las siguientes cláusulas:

1ª—La casa contratista explotaría las huaneras bolivianas, con derecho exclusivo, pagando 7 pesos 6 reales por tonelada de registro;

2ª—El precio de las toneladas exportadas, se abonaría en cuenta al gobierno para pagar su deuda por el anterior contrato;

3ª—La explotación se limitaría a las huaneras de San Francisco;

4ª—El mínimum de la exportación sería de 6.000 toneladas anuales.

No se puso mayor cuidado en el manejo de esta riqueza, que habría podido ser un importante recurso financiero. El gobierno procedía a suscribir nuevos contratos sin liquidar siquiera los anteriores, y sobre la base de un probable saldo deudor.

La cascarilla o quina obtuvo más éxito en sus rendimientos.

No habiendo logrado sacarse en remate el im-

puesto de extracción fijado en 20 pesos por quintal, corrió la cobranza por cuenta del gobierno hasta 1844, en que se ordenó la fundación de un Banco de Rescate en La Paz. Mientras el establecimiento de este nuevo régimen, se sacó en licitación el negocio sobre las siguientes bases:

1ª—Derecho exclusivo de exportación y rescate de quina;

2ª—Limitación a 4.000 quintales el derecho de exportación anual;

3ª—Base mínima de la licitación, 60.000 pesos;

4ª—En caso de establecerse el Banco de Rescate, se rescindiría el contrato pagándose 2 pesos más del precio corriente por cada quintal que se expropiase al contratista.

Obtuvo la buena pro la sociedad Jorge Tezanos Pinto y Cª por la suma de 119.000 pesos anuales durante 5 años, a partir de 1845.

En 1848 los propietarios de Muñecas reclamaron contra el régimen del monopolio de la quina y pidieron la declaración del comercio libre; pero el gobierno arreatado por el contrato vigente con Tezanos Pinto y Cª, no pudo acceder a esta justa petición.

La liquidación del contrato fué desastrosa según un historiador, pues «se entregó el negocio a una sociedad, que sin ofrecer ninguna garantía, porque tampoco se le exigió, acabó por una bancarrota».

La coca tuvo un período de resurgimiento bajo el gobierno Ballivián. Según las necesidades del erario, unas veces fué gravada su extracción con el impuesto llamado patriótico de 4 reales por cesto; otras

veces quedó reducido este gravamen a la mitad, y después suprimido, fuera de la alcabala de dos reales que quedó vigente por algún tiempo.

Se protegió la extracción al Perú asignándose el premio de 3 reales por cesto, que no ejerció ninguna influencia en el comercio cocalero.

Inspirado en los métodos de monopolio fiscal establecido con provecho para el rescate de metales, proyectóse el «Banco de Coca» por la acción privada de los propietarios de Yungas para regularizar el comercio de ese artículo sobre la base de un monopolio de compra y de exportación.

El acuerdo de los propietarios, que mereció la aprobación del gobierno, contenía las siguientes cláusulas fundamentales:

1ª—El Banco rescataría toda la coca que se le presentase, al precio de 6 pesos 2 reales por cesto de 24 libras;

2ª—Los propietarios que vendiesen sus productos a personas particulares, pagarían 2 pesos de multa por cada cesto;

3ª—El Banco se organizaría con un capital de 250.000 pesos y podría ser también de préstamos y descuentos.

Esta iniciativa, a pesar de haber sido propiciada por los principales productores, no llegó a realizarse.

IV

El régimen aduanero fué el que más cambios tuvo en los primeros años de la República. Sin embar-

go, no perdió su carácter proteccionista bajo la dirección de los ministros Madero, Lara, Aguirre, Dalence, Frías, Torrico y Fernández, que son los organizadores de la hacienda pública.

Obrando con la plena libertad fiscal acordada en el tratado de Puno, el Congreso votó el año 1844 un arancel de derechos aduaneros para las internaciones por tierra, imponiendo por primera vez tasas superiores al 30%, como se verá por el extracto que sigue:

40% Licores, cacao, arroz;

36% Perfumes, tocuyo, calzado de mujer, relojes;

28% Artículos de seda, lino, lana, lamas y lamillas;

24% Artículos de algodón;

18% Loza y cristalería;

8% Alhajas y quincallería.

Se declaró libre la internación de algodón en rama, lana, hilados y víveres, quedando autorizado el gobierno para rebajar los derechos sobre los artículos de las naciones vecinas, siguiendo el principio de la reciprocidad.

Con el propósito de establecer fábricas de fósforos y pólvora, se prohibió la internación de estos artículos, medida que quedó subordinada a su fabricación en el país, la que no llegó a realizarse. La industria de pólvora establecida de tiempos atrás, se mantuvo en sus condiciones primitivas.

Convencido el gobierno de que la prohibición de internar tocuyo no dió ningún resultado favorable para el fomento de la manufactura nacional, por fal-

ta de materia prima, y a fin de evitar los males que sufrían las clases populares por la carencia de ese tejido, permitió su internación por Cobija gravando con el 10% cada yarda avaluada en un real, y con el 40% (antes del arancel de 1844) por las aduanas de tierra. Después se redujo al 36% esta tasa y subió al 15% aquélla.

V

La diferencia de más del 26% que había entre el peso fuerte y la moneda sencilla, continuó fomentando el comercio clandestino de las pastas de plata. En 1842, el ministro de hacienda constató con las cifras del rescate de metales en los años 1840 y 1841, un «espantoso déficit de 37.962 marcos».

No poca parte tenía en este desastroso resultado, la franquicia acordada al comercio argentino de tránsito por Cobija, que conforme a anteriores disposiciones aduaneras no pagaba ningún derecho por la exportación de la plata. Fácil fué a los defraudadores del fisco, hacer pasar las pastas bolivianas por mercaderías argentinas. Se recomendó mayor vigilancia a las autoridades, pero el fraude no disminuyó por eso.

Con un criterio candoroso se dictó una ley el año 1843 rebajando al 1% el impuesto de exportación de plata sellada en caso de hacerse el transporte sobre barcos con bandera boliviana. No hay para qué agregar que esta protección cayó en el vacío.

Se autorizó la reorganización del Banco de Rescates de Tupiza mediante el aporte de un capital de

30.000 pesos de parte del gobierno y de otra suma igual de parte del proponente señor Yáñez.

En 1846 se anunció una extraordinaria boya de plata en Corocoro, y el gobierno para fomentar su explotación autorizó el establecimiento de un Banco de Rescates en La Paz, ya que la oficina creada por Santa Cruz había sido liquidada anteriormente. Mientras el nuevo Banco se fundara, los extractores de plata pagarían el 20% sobre cada marco, avaluado al efecto en 8 pesos 2 maravedís. El monto de las ganancias del fisco se aplicaría a la fabricación de moneda.

El Congreso aprobó el decreto del gobierno, subiendo al 22% el impuesto, y más tarde el Ejecutivo señaló el 1º de enero de 1847 para la inauguración del citado Banco, la que no pudo realizarse sino un año después bajo el gobierno transitorio de Velasco.

Tarea de nunca acabar fué la represión del contrabando, especialmente de pastas de plata y pesos fuertes, fomentada por la diferencia de ley en la moneda sencilla.

La extracción de los pesos fuertes se gravó con el 8% y se declaró libre la exportación de la plata sencilla, lo mismo que la del oro amonedado.

El gobierno expidió medidas severas contra los defraudadores, penando con la pérdida de la mina a los nocionales reincidentes en el contrabando, y con el extrañamiento a los extranjeros, fuera de que, a la primera falta, el gobierno debía poner un interventor fiscal en las minas defraudadoras.

VI

Pertenece al ministro de hacienda D. Andrés María Torrico, la reglamentación de la Casa de Moneda de Potosí el año 1848. Ese documento que en realidad es la carta orgánica de la moneda, hace honor a los talentos del secretario general del Protector de la Confederación perú-boliviana.

Abarca el reglamento, con una precisión admirable, no sólo el complicado mecanismo administrativo de la Casa, sino su régimen financiero y técnico.

Después de definir el derecho de batir la moneda que pertenece al Estado a título de soberanía nacional, fija las características monetarias, que no llegó a señalar el Congreso del año 1825.

He aquí sus bases esenciales:

MONEDA DE ORO

Ley: 21 quilates (875 milésimos).

Denominación y división de las piezas:

I.—Onza o doblón, de 8 escudos;
II.—Medio doblón, de 4 escudos;
III.—Cuarto doblón, de 2 escudos;
IV.—Escudo.

Peso ponderal:

El doblón con 7 ½ ochavas, 2 granos y 2|17 avas de grano (27,10 gramos);

El escudo con 67 granos, 13|17 avas de grano (3,388 gramos).

Talla: 8 ½ doblones en cada marco de oro, o 68 escudos.

Tolerancia en el fuerte y el feble: En el doblón, 1 ½ granos; en el medio doblón, 1 grano; en el cuarto doblón y el escudo, ¾ de grano.

MONEDA DE PLATA

Ley: 10 dineros 20 granos (903 milésimos).

Denominación y división de las piezas:

I.—Peso de ocho reales;
II.—Tostón de cuatro reales;
III.—Tomín de dos reales;
IV.—Real, y medio real.

Peso ponderal:

El «peso de ocho reales», lo mismo que el «doblón» de oro, con 7 ½ ochavas, 2 granos y 2|17 avas, (27,10 gramos);

El real de plata con 67 13|17 granos (3,388 gramos).

Talla: 8 pesos y medio de cada marco, o sean 68 reales.

Tolerancia en el fuerte y el feble: Para la pieza mayor 4 granos, 3 granos en el tostón, 2 granos en el tomín, menos de 2 granos en el real y hasta 1 grano en el medio real.

En cuanto a los diseños, conservó los aprobados por la ley de 1826 con el aumento de las estrellas departamentales a nueve.

Para las compras de oro y plata se fijaron las siguientes cotizaciones:

El oro reducido a 22 quilates (916,666) se pagaría a 128 pesos 32 maravedís el marco.

La plata a ley de 11 dineros (916,666), se cotizaba en 8 pesos 2 maravedís.

Establecida la equivalencia conforme a la relación del oro y la plata en aquel tiempo, resultaba un marco de oro de 22 quilates, igual a 16 marcos de plata de 11 dineros, o sea la relación de 1 a 16.

Como durante la administración Santa Cruz se había abusado en la emisión de moneda sencilla, el Reglamento Torrico restringió de 12 a 15 mil marcos anuales su acuñación, lo que daba 127.500 pesos máximum de moneda fraccionaria por año.

El decreto de 1848 sirvió de base para el saneamiento monetario, de que se preocuparon los gobiernos siguientes, como se verá en la parte respectiva.

VII

La necesidad de ensanchar el horizonte económico del país, de buscar salidas hacia el Atlántico, renunciando a dominar el desierto de Atacama, llegaron a formar convencimiento en los hombres públicos de la época a que se refiere esta reseña. Durante la administración del general Ballivián, el Noroeste y el Oriente merecieron una atención decidida. Se organizó el régimen político y administrativo del Beni, se procuró cuanto se pudo el fomento de la colonización de sus extensas y ubérrimas tierras, y en servicio de este patriótico y trascendental pensamiento, se negoció con un sindicato belga la organización de un vasto plan colonizador, que, por fortuna, no se llevó a la

práctica, no obstante las condiciones leoninas en que fué estipulado, como se verá por el resumen de sus principales cláusulas.

La «Compañía Belga de Colonización» se obligaba a formar una «Comunidad Agrícola, Industrial y Mercantil», según las bases de otra «Comunidad» ya establecida en el distrito de Santo Tomás en Centro América. Al efecto se le concederían un millón de acres de tierras en uno o más lotes, para cuya explotación, fijada en 90 años, la Compañía traería cada año 50 familias, las que formarían la expresada «Comunidad Boliviana».

El gobierno se comprometía a pagar el premio de 500 pesos por cada obrero y 1.000 pesos por cada maestro de taller.

Para los primeros gastos de la Compañía y la introducción de las primeras 50 familias, el gobierno mandaría entregar en Europa unos 100.000 pesos, y más tarde garantizaría un empréstito para el desarrollo de la Comunidad.

Por el primer buque o vapor que llegare a uno de los pueblos de Chiquitos o Mojos, se daría a la Compañía belga un premio de 20.000 pesos.

La Compañía gozaría de privilegios y exenciones en general para la navegación, el comercio, la industria, etc., por el tiempo de 15 años.

Durante la vigencia del contrato quedaría prohibida la adjudicación de tierras a otra compañía.

Después de estas cláusulas constitutivas, se hizo una minuciosa reglamentación referente a la administración, la vida social y política de la Comunidad,

con todas las características de un «falansterio». No parece sino que el inventor de esta célebre Comunidad, se hubiera inspirado en las teorías de Fourier y Saint–Simon, muy en boga en aquella época, para sacar a su amparo las mayores ventajas sin correr el más pequeño riesgo, ni aportar capital alguno.

Para la repartición de utilidades, el mecanismo del negocio estaba combinado de la siguiente manera:

La Compañía belga, la «Comunidad Boliviana» y el Estado, formaban en realidad la empresa colonizadora, cuyo capital efectivo ponía el Estado, además de las tierras, los privilegios, los premios y los empréstitos del porvenir. La Compañía belga aportaba de su parte las familias de colonos, a razón de 50 por año, y los individuos de éstas, cuya introducción debía ser pagada a razón de 500 y 1.000 pesos por cada obrero, eran a su vez socios individualmente, fuera de que el conjunto o sea la Comunidad, lo era también por derecho propio.

En resumidas cuentas, la misma Compañía belga, bajo diversos nombres, formaba la casi totalidad del negocio, y le daba al Estado todas las obligaciones y una mínima participación en las ganancias problemáticas del porvenir.

Acordadas las bases sociales, la distribución de los provechos debía hacerse de esta manera:

Un 40% se apartaba para la Comunidad, correspondiendo el 5% de esta suma a la Renta de viudas y ancianos y el 35% a la Caja de la Comunidad.

El 60% restante debía distribuirse en la siguiente proporción:

15% para el Estado;

15% para los tenedores de títulos o acciones de la Comunidad;

15% para la Compañía belga;

15% restante para los trabajadores de la Comunidad.

Era el ideal en materia de distribución comunista. «A cada uno según sus méritos, a cada mérito según sus necesidades».

La Compañía proclamaba como base humanitaria de la empresa, que tenía por objeto asociar el capital y el trabajo a la propiedad del suelo, asegurando por este medio el porvenir social y económico de los indígenas y los colonos.

El contrato que había sido suscrito *ad referendum* en París por el Cónsul honorario de Bolivia en Londres, mereció la aprobación del Congreso de 1844 con muy pocas modificaciones, entre ellas la reducción del plazo a 60 años. No obstante, la Compañía belga descuidó su ratificación y así quedó frustrado, por suerte para el país, este célebre «falansterio», que no era sino una indigna explotación del patriotismo candoroso y de la buena fe de los hombres de aquella época, deseosos de abrir nuevos horizontes a la República.

Se dice a menudo que la historia no se repite. Sin embargo, en 1869 un Mr. Piper obtuvo una gran concesión, y medio siglo después se firmó otro contrato para el arrendamiento del Acre. Estas negociaciones, si bien no se inspiraron en las ideas de Saint-Simon, lo fueron en las del hebraísmo más puro.

Siguiendo las ideas dominantes de la época, que tendían a buscar nuevas vías de comunicación internacional, ya que hasta entonces habían sido estériles los esfuerzos desplegados para vincular al país el Litoral de Atacama, venciendo el largo desierto que lo interceptaba, el gobierno del general Ballivián dirigió su mirada hacia el Atlántico y trató de abrir la navegación del Pilcomayo.

Fueron votados 200.000 pesos para esta importante empresa, provenientes de las utilidades cifradas en el contrato del huano. Se vislumbra al través de esta misma asignación financiera, que el pensamiento era cambiar la orientación comercial de la República, empleando los recursos provenientes del Pacífico en abrir comunicaciones permanentes y fáciles al Plata.

La empresa no tuvo éxito favorable. Los reconocimientos mandados practicar no fueron satisfactorios.

D. José María Dalence que en aquellos días escribió su importante libro «Bosquejo Estadístico de Bolivia», resume el pensamiento dominante de su época en estas palabras: «Volvamos la vista al naciente y naveguemos nuestros ríos».

Agrega después estas reflexiones: «Ciertamente la falta de un buen puerto propio, es un mal, pero no carece de ventajas. Esta falta debió ya inspirarnos el pensamiento de crear o ensanchar nuestras industrias fabril y agraria, para dar mayor actividad y amplitud al comercio interior, que nos vale 20 veces más que el exterior: la misma falta de puerto nos pone a cubierto (y este no es su menor beneficio), con-

tra las insultantes amenazas y reclamaciones injustas de algunas potencias trasmarinas, evitándonos además los inmensos gastos que nos ocasionaría la conservación y defensa del puerto».

Una idea audaz y no desprovista de fundamentos serios, expone el Dr. Dalence en su citado libro al hablar de las posibilidades de la navegación de los ríos y las mejoras y modificaciones que el esfuerzo humano podría aportar a su mayor aprovechamiento.

Las «cachuelas» a su juicio podrían salvarse abriendo canales laterales, y los ríos inundadizos como el Pilcomayo, se encauzarían fácilmente mediante diques o «reparos» portátiles colocados con arte, siguiendo en todo el plan desenvuelto en Rusia y Alemania, donde se habían hecho navegables o siquiera flotables, torrentes impetuosos y ríos que antes no ofrecían ninguna utilidad.

Empero, la mayor originalidad del pensamiento de Dalence está en la posibilidad de unir el río Desaguadero con el Pilcomayo, de modo que pudiera navegarse sin interrupción desde el Titicaca al Plata.

Del lago de Poopó, que recibe el depósito de las aguas del Desaguadero, no sería difícil, según él, abrir un corto canal hacia Yotala, donde se encuentran los orígenes del Pilcomayo, canal que atravesaría terrenos fáciles de altiplano, sin mayores obstáculos que pequeñas colinas, las cuales no demandarían mucho esfuerzo para ser salvadas.

Las industrias establecidas en Mojos desde la época colonial, pagaban impuestos en especie. De la importancia de esas industrias se juzgará por la si-

guiente nomenclatura de artículos y el avalúo fijado para los efectos de la recaudación:

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Goma elástica, libra	$	—.2	reales
Algodón, arroba	«	1,2	«
Copaiba, libra	«	2.—	
Aceite de almendras, libra	«	1,6	«
Tamarindo, arroba	«	5.—	

TEJIDOS

Cordoncillo blanco, mollado, vara.	«	—.3	«
Colonia	«	—.3	«
Frazadas, cada una	«	2.—	
Guantes, el par	«	—.2	«
Hamacas con encaje	«	7,4	«
« sin encaje	«	6.—	
Lienzo tocuyo, vara	«	—.1 ½	
« fino	«	—.2	reales
Listado, el corte	«	2.6	«
Macana llana y asargada, vara	«	—.2 ½	
Manteles finos de 3 varas	«	3.—	
Medias, docena	«	3,6	reales
Paños de mano de 3 varas	«	1,4	«
Paños finos	«	2.—	
Ponchos, cada uno	«	4.—	
Sábanas con blonda, el par	«	8.—	
Sobremesas	«	5.—	
Servilletas finas de 1 vara cuadrada, docena	«	3.—	

OTROS PRODUCTOS

Hilado de algodón, arroba.....	«	15.—
Baules, el par.....	«	8.—
Bueyes, cada uno.....	«	8.—
Caballos, cada uno.....	«	10.—
Canastas, docena.....	«	1,4 reales
Catres.....	«	10.—
Petacas, el par.....	«	5.—
Jabón, la libra.....	«	—.1 «
Velas, 2 por.....	«	—.—.½.

Los productos de Chiquitos eran iguales en su avalúo.

Con estas cotizaciones, el monto de la producción de Mojos y Chiquitos en artículos de algodón, alcanzaba a 22.000 pesos anuales. Antes había sido más importante, pues pasaba de 60.000 pesos.

Cochabamba iba también perdiendo cada vez más su importancia fabril. El año 1840 no había librado al consumo más de 240.000 varas de tocuyo, y el total de sus artefactos de algodón apenas alcanzaba a unos 35.000 pesos.

La decadencia fabril de la República iba a pasos agigantados, sin que lograran detenerla las protecciones fiscales contraídas a sólo el régimen aduanero.

Corresponden a la obra de Dalence los datos siguientes sobre la producción nacional en 1846, tomados del censo de dicho año:

Tejidos de algodón	$	66.000
Id. de lana	«	138.000
Pieles curtidas	«	81.000
Alfarería	«	138.000
Loza y vidrio	«	43.000
Azúcar y miel	«	69.000
Aguardiente y vino	«	362.000
Chicha	«	579.000
Materiales de construcción	«	93.000
Jabón y almidón	«	215.000
Salinas	«	109.000
Pólvora	«	34.000
Carbón	«	243.000
Sala de artesa	«	1.351.000
Mistelas	«	4,000
Cigarros de hoja y papel	«	120.000
Total	$	3.958.907

El número de telares para el tejido del algodón, según los datos del censo de 1846, alcanzaba a 389, distribuídos en la siguiente forma:

En Cochabamba	102	telares
« el Beni	92	id.
« Santa Cruz	86	id.

Los telares de lana eran más numerosos, como que ellos respondían a las necesidades de un consumo generalizado de tejidos de lana en la indumentaria de la clase indígena y de las clases populares. Había en aquella época unos 3.572 telares de sistema primitivo, pero que atendían bien a su numerosa clientela.

La mayor cantidad de estos telares estaban en el departamento de La Paz donde se contaban hasta 1.120. Le seguían Potosí con 940, Chuquisaca con 604 y Cochabamba con 450.

La industria del jabón estaba muy generalizada y relativamente adelantada. En Cochabamba se fabricaban productos de primera calidad, pero era La Paz donde había más número de jabonerías. De los 8.442 pequeños establecimientos censados en 1846, pertenecían 8.000 a La Paz, 193 a Cochabamba y el resto a Potosí y Chuquisaca.

Pudo prosperar la industria de la pólvora que tenía gran mercado en los trabajos mineros. Con este pensamiento el Congreso prohibió la importación del artículo extranjero, lo mismo que de los fósforos, prohibición que debía tener efecto una vez implantadas grandes fábricas nacionales. Como éstas no llegaron a organizarse, la prohibición quedó escrita, y siguió fabricándose la pólvora en forma primitiva.

Con 43.000 pesos figuraban los artefactos de loza y vidrio. Esta producción correspondía exclusivamente al departamento de Cochabamba, y en él al cantón del Paredón, hoy villa de Anzaldo en homenaje a un célebre guerrillero de la independencia. Había en el Paredón varios hornos de vitrificación en los lugares denominados Panduro, Trancas y Guajini. El vidrio aunque se elaboraba en condiciones primitivas, satisfacía plenamente las necesidades del consumo departamental. Su especialidad eran las damajuanas, pomos, mantequilleras, vasos y demás utensillos hechos con arte y buen gusto.

La industria de la carne salada alcanzaba a más de 60.000 quintales con un valor de 1.351.000 pesos.

Al examinar la vida económica en aquellas primeras épocas, se llega al convencimiento de que el país se bastaba a sí mismo, sin tener que recurrir a los mercados extranjeros para proveerse de los artículos generales de consumo. Casi no había una industria, un producto industrial o agrícola, que no tuviera vida propia en el primer cuarto de siglo de la República. Los artículos nacionales, fruto de una industria embrionaria, no eran sin duda una maravilla de perfección; pero respondían satisfactoriamente a las necesidades del país, y sus precios estaban al alcance de todos. Con una acción eficaz de parte de los poderes públicos—acción económica y técnica, sobre todo—encaminada a renovar y dar nuevas orientaciones, se habrían salvado esas pequeñas industrias y convertídose en otras mayores. El simple proteccionismo aduanero o el prohibicionismo absoluto, únicos recursos de que echaron mano los gobernantes, no produjeron sino el encarecimiento o la falta absoluta de los artículos protegidos, y no tuvieron la menor influencia sobre la industria agonizante, cuya decadencia obedecía a causas económicas y técnicas, y los remedios, para ser eficaces, debían ser también de igual naturaleza.

Durante los gobiernos de caudillaje que vinieron a partir de 1848, el fracaso industrial no hizo sino precipitarse, hasta que las emergencias de la guerra de 1879 le dieron muerte definitiva bajo la acción fa-

tal del tratado de tregua de 1884, que ha sido en lo económico la espiación más grande que puede haber sufrido país alguno, no obstante de haber consumado el supremo sacrificio de una guerra injusta.

Francia después del «año terrible», cuya liquidación le costó dos provincias y cinco mil millones de francos, no quedó tan mal como Bolivia, que no había pactado sino una tregua indefinida y una entrega en rehenes de su Litoral. El tratado de tregua fué peor que todas las derrotas, más oneroso que todas las indemnizaciones que hubiera tenido que pagar, peor aún que la desmembración territorial misma.

No es este, sin duda, lugar oportuno para reflexionar sobre los desastres de una guerra ocurrida treinta años después del período que comprende la narración; pero es imprescindible relacionar los fenómenos, siquiera de paso, con la triste finalidad que hubo de depararles el error de los hombres o el desacierto de los políticos, el desbarajuste del caudillaje o el proceso económico en sí mismo, o todo esto junto a la vez.

VIII

El crédito público hizo una nueva tentativa en 1843 sobre las mismas bases votadas por el Congreso Constituyente de 1825.

Se autorizó la emisión de 3 millones de pesos en billetes del crédito público con el 6% de interés, aplicándose al pago de las siguientes obligaciones:

Pago de los billetes del fondo público emitido en 1826, que habían quedado pendientes por la suma de 600.000 pesos;

Cancelación de los diversos descuentos de guerra hechos a los empleados públicos con motivo de los conflictos con el Perú;

Pago a los militares que tuvieran que ser retirados conforme a la ley de reforma militar;

Pago de montepíos, pensiones y jubilaciones vigentes, siempre que los interesados admitieran esta forma de pago.

El saldo se emplearía en cancelar la deuda flotante. Los descuentos de guerra se pagarían con un aumento del 25%.

Debiendo responder el nuevo fondo a tan múltiples obligaciones, era de prever que no alcanzaran los tres millones votados. Así fué. La reforma militar reclamó en 1846 una emisión especial por 600.000 pesos, y además se asignaron 100.000 pesos para el retiro de los soldados.

La clase militar en los gobiernos de fuerza, nunca se acaba de pagar. Es la institución que más cuesta a los países convulsionados.

Como en 1826, para valorizar los nuevos billetes, se admitió que las tres cuartas partes de la compra de los bienes fiscales, se pagaran en dichos billetes y el resto en dinero.

Alcanzaron los billetes cotizaciones superiores al 30%, y el gobierno decretó su admisión a este tipo en la fianza de los puestos públicos.

Los intereses fueron pagados puntualmente hasta noviembre de 1847, en que los revolucionarios se apoderaron de los fondos destinados a este servicio. El gobierno dispuso, una vez debelada la revolución,

el pago de lo devengado juntamente con los cuatrimestres posteriores de marzo y julio de 1848.

La venta de bienes con la experiencia de años anteriores, se sujetó a un nuevo procedimiento. El interesado en alguna finca urbana o rústica, debía presentarse al prefecto manifestando su voluntad de adquirirla y nombrando perito al efecto para que en unión del designado por la prefectura hicieran el justiprecio del inmueble. Sobre esta base se sacaba en remate público y se adjudicaba al mejor postor.

Con esto se evitaron muchas especulaciones.

En vista del buen resultado obtenido con la organización de la Caja Militar de Ahorros, se autorizó la formación de la Caja Civil de Ahorros en todas las capitales de departamento. Todos podían ser admitidos a depositar sus ahorros en la Caja a partir de 2 reales mensuales. Con los fondos depositados se comprarían billetes del Crédito público, y los depositantes ganarían 6% de interés anual capitalizable.

IX

El derecho presupuestal, apenas esbozado en las anteriores administraciones, alcanzó un progreso evidente con una nueva reglamentación de la contaduría general y del tribunal de valores, la fijación del presupuesto de ingresos y la implantación del sistema de partida doble, llamado «método Vega», en la contabilidad del Tesoro Nacional.

Los fondos de instrucción fueron concretamente fijados, y se asignaron a las municipalidades, manejadas por juntas de propietarios, algunos arbitrios de patentes comerciales e industriales.

Una de las causas de impopularidad del gobierno Ballivián en sus últimos días, fué justamente la implantación de las contribuciones municipales, que tuvo que suspenderlas para evitar mayores resistencias del pueblo.

El tesoro de instrucción fué formado de los siguientes recursos:

½ real sobre marco de plata;
Bienes raíces y rentas de conventos extinguidos;
Derecho sobre las harinas;
Sisa de Cinti;
Chicherías de La Paz e Inquisivi;
Impuesto de cueros en Cochabamba;
Vales y billetes propios;
Pensiones escolares.

Cochabamba que optó por los impuestos directos del año 1828, volvió al régimen de los indirectos sobre harinas, arroz, tabaco y papas a razón de un real por carga, quedando abolida la cotribución de predios rústicos y urbanos.

La contribución personal establecida en Santa Cruz el año 1835, lo mismo que la de predios, fué reemplazada con impuestos indirectos sobre el azúcar (2 reales por arroba), la harina (4 reales por carga), el tabaco (4 reales por 250 mazos), 3% sobre la sal, 3% sobre efectos extranjeros y 4% de descuento a los empleados.

El impuesto sobre sucesiones se rebajó al 5%, suprimiéndose la «manda forzosa» de 3 pesos para la nación.

Para el bienio 1845–46 el presupuesto fué votado con las siguientes cifras anuales:

Gastos	$	2.076.505
Rentas	«	1.977.139
Déficit	$	99.366
Agregando el quebranto en la recaudación aduanera, calculado en..	$	30.000
el déficit real fué de	$	129.366

que debía cubrirse con la economía de los gastos.

Los principales ingresos provenían de los siguientes impuestos:

Contribución indigenal	$	792.000
Diezmos	«	198.000
Aduanas	«	450.000
Derechos sobre la plata, el 5%	«	90.000
Utilidades de la moneda	«	111.000
Exportación de moneda fuerte, 6%	«	84.000
Varias contribuciones	«	252.139
Total	$	1.977.139

Los gastos principales fueron presupuestos en las cifras que se anotan a continuación:

Crédito público	$	215.000
Congreso	«	54.930
Gobierno	«	75.860
Consejo Nacional	«	14.305
Ejército	«	164.932

Para el bienio 1847-48 los ingresos fueron calculados en..... $ 2.131.298
y los egresos en..... « 2.293.979

Déficit..... $ 162.681

Figuran los egresos principales más o menos con las mismas cifras del año anterior, siendo de notar los siguientes:

Crédito público.....	$	216.000
Ejército.....	«	840.000
Guardia Nacional.....	«	41.402
Jubilación militar.....	«	11.259
Montepío militar.....	«	21.499

El presupuesto de ingresos fué calculado de esta manera:

Contribución indigenal.....	$	828.000
Utilidad de la moneda.....	«	200.000
Derechos metálicos.....	«	86.000
Extracción de moneda fuerte..	«	80.000
Utilidades del Banco de Rescates.....	«	10.000
Cascarilla.....	«	119.500
Coca.....	«	150.000
Papel sellado.....	«	28.000
Diezmos.....	«	200.000
Contribución indirecta.....	«	50.000
Aduanas.....	«	210.000
Licores.....	«	73.000
Productos del Beni.....	«	16.000
Descuento de sueldos.....	«	74.000
Patentes.....	«	5.000
Almacenaje.....	«	1.548
Total.....	$	2.131.239

En el primer período de la República, que va corrido de 1825 a 1848, las rentas nacionales aumentaron de 1.600.000 pesos a 2.131.298. No es muy importante el crecimiento, pero en cambio es evidente que se avanzó bastante en la formación del derecho presupuestal.

Un hecho digno de notarse ocurrió a fines de 1848. El Congreso aprobó un nuevo plan de recursos financieros, señalando concretamente los únicos impuestos y contribuciones que en lo sucesivo se recaudarían, quedando abolidos los demás. Este proceder que, sin duda, obedecía al sano propósito de reducir las cargas públicas en beneficio del pueblo, suprimiendo especialmente las alcabalas y demás contribuciones indirectas, fué una de las causas que invocó el general Belzu para levantarse en armas contra el gobierno, y una vez triunfante la revolución en Yamparáez, lo primero que hizo el presidente provisorio fué declarar vigentes los impuestos anteriores al Congreso de 1848, acompañando su decreto con estos célebres considerandos:

«Que la heroica revolución confiada a los esfuerzos del Ejército Libertador, tuvo por principal objeto destruir la influencia siniestra de un Congreso insensato que no supo corresponder a la confianza pública;

«Que entre las medidas absurdas que abortó, ocupan prominente lugar los cálculos financiales, que descantillando considerablemente las rentas naturales de la Nación, arrastraron la hacienda pública al borde de una bancarrota».

Es la única vez, seguramente, que para hacer una revolución se haya invocado el haberse rebajado los impuestos, cuando lo que suele acontecer es precisamente lo inverso.

TERCERA PARTE

DE BELZU A DAZA

CAPITULO I

BELZU Y CORDOVA

I.—Relaciones con el Perú.—Alrededor de Arica.—El tratado de 1848.—La deuda peruana.—Interdicción comercial.

II.—Fomento industrial.—Navegación del Beni, Mamoré, Pilcomayo y Bermejo.—La proclamación del principio de libertad fluvial.—El «populacherismo».—Su perniciosa influencia.

III.—El negocio de la cascarilla.—Banco de Quina.—La propuesta Aramayo. — Competencia colombiana. — Contrato Myers, Bland & Cª sobre huano.

IV.—Comercio y aduanas.—Contra los comerciantes extranjeros. —Nuevo arancel de aduanas.—Derechos específicos.

V —El decreto monetario de Bustillo.- Hacia la unificación del circulante.—Casa de moneda en La Paz.—Protección a la minería.—El impuesto al cobre.—Prohibición de exportar barrilla de estaño.—El problema de la industria metalúrgica.

VI.—Depreciación de los billetes del Crédito público. -Rebaja de intereses.—Suspensión de pagos.

VII.—El Presupuesto de 1850.—Alcabala de enagenaciones e impuestos sobre herencias.

VIII.—Las cifras del censo de 1854. -Proporción del crecimiento vegetativo de la población.

I

La política comercial externa de Bolivia en el primer cuarto de siglo de su vida independiente, está

por entero reducida a las relaciones con el Perú. Siendo Arica el puerto obligado del intercambio comercial boliviano, era natural que el régimen a que debía sujetarse el tránsito por dicho puerto, fuera el objetivo constante de la política de ambos países, buscando el uno las mayores franquicias, y oponiendo el otro los mayores obstáculos.

Bolívar en cuyas manos estuvo la suerte de ambas fracciones del Perú colonial, pudo y debió completar la suerte del Alto Perú con la asignación de un puerto propio. Sucre que se dió cuenta cabal de la defectuosa complexión geográfica de Bolivia, en vano trató de corregirla estipulando un tratado con el Perú el año 1826 para la cesión de Arica en cambio de una indemnización de cinco millones de pesos. Santa Cruz, al servicio del Perú en aquella época, no pudo, obrando lealmente, poner nada de su parte para la realización del pensamiento de Sucre, que de otro lado estaba complicado con trascendentales problemas de política continental; y más tarde, cuando las campañas 1835 lo hicieron árbitro de los destinos boliviano-peruanos, desoyó Santa Cruz las espontáneas manifestaciones de Arica, y sacrificó la integración geográfica de Bolivia al egoismo de su grande obra política.

Ballivián que no supo o fué impotente para extender las consecuencias internacionales de la batalla de Ingavi, quiso más tarde reparar la ocasión perdida y pugnó por sacar provecho de la crisis de 1847, aprestándose vigorosamente a la guerra a que le provocaba el Perú.

Los ardores bélicos de ese año se resolvieron en el tratado de amistad y comercio suscrito en Arequipa, que al año siguiente se modificó y complementó en Sucre siguiendo el espíritu liberal de sus primitivas estipulaciones.

Toda la política comercial de ese período está, pues, circunscrita a las relaciones con el Perú, y entre éstas al tráfico por Arica.

No obstante de que el puerto de Valparaíso comenzaba ya su predominio, y allí estaba monopolizado el comercio boliviano, ningún acuerdo diplomático se originó todavía de esas relaciones económicas, que más tarde habían de complicarse con las cuestiones de límites y las riquezas de Atacama.

Por el lado de la Argentina, el comercio de tránsito del ganado y las naturales relaciones fronterizas, dieron pocos cuidados a la diplomacia, y las tentativas de navegación del Pilcomayo y de los ríos del Beni, fueron simples espectativas que aun no podían entrar bajo los dominios de la diplomacia económica.

De aquí se sigue que el interés de Bolivia en aquella época, estuvo lógicamente encaminado hacia el Perú, y por lo mismo merecen atención especial las relaciones comerciales que mantuvieron ambos países.

El tratado de 1848 que no fué ratificado y canjeado sino al año siguiente, sometió al arbitraje de Nueva Granada la cuestión de deudas de la guerra de la independencia que el Perú reclamaba, y Bolivia le oponía la fundadísima razón de haber hecho a su vez ingentes gastos para sostener a los ejércitos patriotas durante la larga epopeya.

Ya en 1831 fué planteada esta cuestión de la deuda peruana por el ministro de hacienda D. José María Lara, quien anunció al país que el Perú demandaba, armas en mano y con un poderoso ejército, la cantidad de 725.804 $ 1.½.

«Quién lo creyera, agregaba el ministro, que por una suma tan ridícula se hayan roto las vinculaciones de la más estrecha amistad entre dos Repúblicas hermanas que juntas han militado por su libertad e independencia.

«Pero lo más raro, señor, es que Bolivia nada debe al Perú, y que el Perú debe a Bolivia».

En apoyo de sus asertos, el ministro Lara hacía los siguientes cálculos:

La liquidación del 1º de agosto de 1826 hecha entre el Intendente General del Perú y Comisario Ordenador, y el Director General de Rentas de Bolivia, arrojó a cargo de esta República el alcance de..... ... 207.667 $ 2 reales; pero no se incluyeron en las cuentas 75.636 $, que las cajas de Cochabamba y Oruro habían erogado a favor de los cuerpos peruanos y cuyos certificados no se remitieron a tiempo de practicarse aquella liquidación. En consecuencia, el saldo adeudado no era sino de 132.031 $ 2 reales.

Además, el Perú había cedido el alcance liquidado, en favor de los cuerpos de Colombia que estaban en Bolivia, para pagarles los sueldos devengados por los años 1823 y 24. De modo que el Perú no tenía propiamente derecho de reclamar esta suma, que debía ser motivo de arreglos directos con Colombia.

Por otra parte, el congreso peruano del año 28 había ordenado que se exigiese de Bolivia el excedente pagado sobre un millón de pesos a los vencedores de Junín y Ayacucho, pues Bolívar que había tenido la intención de formar una caja común con el millón de pesos que cada uno de los dos países había decretado para premiar al Ejército Libertador, ordenó pagos por 1.518.136 pesos 7 reales y ½ sobre el tesoro peruano. De aquí deducía el congreso de ese país, que Bolivia debía reintegrarle el excedente pagado. Pero Bolivia, a su vez, había hecho las gratificaciones ordenadas, directamente, cubriendo cerca del millón de pesos que autorizó la Asamblea de 1825.

Con razón decía Lara en su memoria al congreso de 1831, que este cargo estaba fundado «en puras intenciones».

Reclamaba también el Perú los gastos de la independencia, como si toda la América no los hubiera hecho por la causa común.

Lara sostenía que más bien el Perú le adeudaba a Bolivia por las siguientes cuentas:

Censos en Trujillo, Pisco e Ica de los jesuitas de Mojos	$ 145.925
Censos en Umay	« 138.207,1.½
Más un tercio	« 94.610,5.½
Réditos de 22 años al 3%	« 278.710
Obraje y hacienda de Pichuichuru (temporalidades de Chuquisaca)	« 48.795
	$ 706.247,7

	$ 706.247,7
Además, según la liquidación de la Contaduría General.....	« 428.724,2
Total (1)	$ 1.134.972,1

Esta era, pues, la cuestión de deudas que encomendó el tratado de 1848 al arbitraje de Nueva Granada.

En lo económico y comercial, se estipuló la prohibición de emitir moneda feble, y la liberación del tránsito comercial por Arica y su recíproca del tránsito de ganado argentino para el Perú. También se acordó la prohibición de los derechos de consumo sobre los productos de uno y otro país.

Bolivia se comprometió a no alzar los derechos sobre los artículos de algodón y lana internados por Arica más allá del 15% con relación a los derechos fijados en el puerto de Cobija; y en cuanto a los licores, se obligó a gravarlos con los mismos derechos que el Perú.

Bajo este tratado liberal se rigieron las relaciones comerciales a partir de 1849, con evidente ventaja para el Perú, que ensanchó su mercado de Bolivia gracias a la liberación de los impuestos de consumo, cuya reciprocidad no fué sino nominal para los productos bolivianos, que eran pocos y de escaso consumo allende el Titicaca.

El año 1853, Belzu expulsó al encargado de negocios y al cónsul del Perú, a pretexto de que propalaban rumores alarmantes e «interpretaban siniestra-

(1)—Según las referencias del ministro Lara, esta suma alcanzaba a..... $ 1.186.272,2.

mente todos los pasos del gabinete boliviano». Esta medida imprudente fué obra de las sugestiones del general Castilla que conspiraba contra el gobierno del Perú, a cargo entonces de Echenique, y dió lugar a la ocupación de Cobija por las fuerzas peruanas y a una serie de hostilidades contra los productos bolivianos y el intercambio comercial por Arica.

Siguiendo el ejemplo del año 1847, Belzu declaró la absoluta interdicción comercial con el Perú, bajo penas severas; y la falta consiguiente de productos de ese país, cuya internación, gracias a las franquicias del tratado de 1848, había alcanzado a dominar los mercados de La Paz y Oruro, trató de suplir el gobierno con artículos nacionales traídos a la fuerza de los departamentos del interior. Con el mismo pensamiento, a fin de fomentar el comercio con Chile por Cobija, que había decaído considerablemente, mandó acuñar los antiguos pesos fuertes que constituían un importante artículo de retorno para saldar las cuentas internacionales.

Hasta el 12 de diciembre de 1854 continuó esta situación violenta, que más males causó al país que al enemigo. En esa fecha se suspendió la interdicción, gravándose con el 40% los artículos peruanos y con un impuesto adicional del 5% los artículos de ultramar traídos por Cobija.

II

Poco éxito alcanzaron los propósitos de fomento industrial del gobierno Belzu. Las criculares que pasó a los prefectos con motivo de la interdicción con el

Perú ordenando se incite a los productores para que lleven sus artículos de venta a La Paz y Oruro, fueron no sólo atentatorias sino sencillamente impracticables.—«Que traígan—decía el gobierno por órgano de su ministro de hacienda D. Joaquín de Aguirre—los caldos de Cinti, las melazas y empanizados de Mojotoro, los aguardientes de Turuchipa y Mataca, el azúcar, el arroz y los licores de Santa Cruz, el ají de Mizque, los tejidos burdos de Cochabamba, empleando si fuere preciso la fuerza».

En otra orden se incitaba el celo del prefecto del Beni para que mande a Cochabamba el algodón, y que los cosecheros se pongan de acuerdo con los tejedores a fin de que se monten los telares de lienzo, barracanes y panas que se elaboraban en el país. Agregaba el ministro de Belzu: «Esta industria no volverá a morir, y el gobierno restituirá ese grande y antiguo comercio que levantó a Cochabamba y cuya caída lo ha empobrecido notablemente».

El gobierno predicaba en todos los tonos haber llegado la hora de la emancipación comercial de Bolivia, pero todo se reducía a una literatura burocrática, inspirada en los dictados del mejor patriotismo, pero totalmente desprovista de sentido práctico.

Evidentemente, era menester emancipar al país; mas, había que echar las bases económicas y técnicas de la industria nacional, y no contentarse con crear mercados de «deva forzosa», mandando el reclutaje de los productos nacionales, escasos para el consumo local o faltos ya en lo absoluto como el algodón.

Como el medio más eficaz de fomento industrial,

el gobierno mandó poner en vigencia una ley de premios de la época de Santa Cruz. Aprovecharon de las ventajas pecuniarias de esta medida, un cura y un músico de Cochabamba, ambos inventores acreditados: aquél había fabricado un «reloj de ancla para iglesia», y éste había trabajado un «forte–piano».

Mejor inspirado el gobierno del general Córdova pidió propuestas a Norte América para un vapor destinado a la navegación fluvial, y encargó a su ministro en Europa, que lo era el ex–presidente Belzu, la remisión de un presupuesto de dos máquinas para tejer tocuyo y paño, y de los operarios que supieran manejarlas y enseñar su oficio a los hijos del país.

El congreso de 1851 autorizó al gobierno para proteger la navegación de los ríos Beni, Mamoré, Kaka, Pilcomayo y Bermejo y fomentar la industria en esas regiones, ya sea suscribiéndose a la expedición científica que debía remontar el Amazonas y el Madera, o ya de alguna otra manera. Nadie respondió al llamamiento patriótico que hizo el gobierno para suscribir fondos en favor de aquella empresa, a pesar de que el presidente encabezó la lista con una importante suscripción voluntaria.

Digna de anotarse como el origen del derecho internacional sudamericano en materia de libre navegación fluvial, es la declaración de la cancillería boliviana de 1853, que abrió al comercio mundial los ríos que desembocan en el Plata y el Amazonas, principio que fué más tarde reconocido por los países de esta parte del continente.

Tan importante declaración, fechada el 27 de enero de 1853, fué suscrita por el ministro de Relaciones Exteriores D. Rafael Bustillo, que era el hombre de más vasta preparación de cuantos colaboraron al gobierno del general Belzu.

En la circular con que pasó el decreto a las prefecturas, decía Bustillo: «De este modo, el principio fecundo de la libertad de los mares aplicado a nuestros ríos, será el medio más liberal y proporcionado para promover esa acción constante, activa e inteligente (la navegación), de que depende toda la civilización y porvenir de las vastas y fértiles comarcas de Chiquitos, Guarayos, Mojos, Yuracarés y Caupolicán».

Y en los considerandos de su decreto, decía: «Por la ley de la naturaleza y de las naciones, confirmada por las convenciones de la Europa moderna, y aplicada al nuevo mundo a la navegación del Missisipi, Bolivia como poseedora del Pilcomayo, de los afluentes y de la parte superior del Madera, de la orilla izquierda del Iténez, desde su unión con el Sararé hasta su desembocadura en el Mamoré, de la costa oriental del Paraguay desde el marco del Jaurú hasta los 26° 54' de latitud Sud y de la parte superior y orilla izquierda del Bermejo, tiene derecho de navegar estos ríos desde el punto en que en su territorio fueren susceptibles de ello, hasta su embocadura en el mar, *sin que potencia alguna pueda arrogarse soberanía exclusiva sobre el Amazonas y el Plata*».

Para alentar la navegación fluvial, el decreto ofreció tierras baldías y el premio de 10.000 pesos por el primer barco a vapor que remontara el Paraguay o el Amazonas hasta alguno de los puertos bolivianos.

Un raro socialismo desenvolvió en su política el gobierno, ejerciendo actos de adulación peligrosa de las clases populares en detrimento de la unidad social del país. Más propiamente pudiera llamarse «populacherismo» el sistema implantado por Belzu y seguido, aunque con menos suerte, por su sucesor el general Córdova.

La manía de Belzu de echar monedas al populacho y de arengarle en tono indigno de un jefe de Estado, halagando las más perversas pasiones de la canalla contra los pretendidos «aristócratas» del partido rojo, no sólo abrieron un abismo social, sino que causaron un grave daño al desarrollo de la riqueza pública y privada, por la holgazanería y el vicio fomentados, por las constantes amenazas de saco y pillaje, por las hostilidades al comercio y, en fin, por los despilfarros y desaciertos financieros del poder.

Degeneración de todas las democracias ha sido y es el culto del populacho. A fuerza de halagar al «pueblo soberano» para fines electorales o de buscar su apoyo en favor de gobiernos tambaleantes, se ha llegado a los excesos de la adulación más innoble, y, lo mismo en Bolivia que en los demás países de régimen democrático, las frases convencionales de «artesanos pobres», «clase desvalida», «parias del trabajo», etc., etc., no han servido para mejorar esa pretendida condición miserable, sino para deprimir la moral y la dignidad misma de los factores más capacitados y eficientes de la economía nacional, al extremo—a lo menos en otros momentos de la historia boliviana—de convencer a esos mismos artesanos que realmente

son miserables y, lo que es peor, que lo son en forma irremediable.

De esta errada concepción económica del trabajador, se han derivado en todo tiempo innumerables males en lo social, en lo económico y en lo político, influyendo decisivamente en las leyes financieras, a las que a menudo se ha dado una orientación de filantropía y de beneficencia pública, antes que de justicia y de bien general.

Lo mismo la oposición que el gobierno cuando «hacen política», que así suele llamarse al extravío democrático de rendir culto al populacho, proceden de idéntica manera, inspirando sus actos en los dictados de una caridad interesada e hipócrita.

Estos sistemas de fraude político no pueden conducir sino a la retardación del progreso económico y financiero de un país.

Se hace preciso reaccionar. El artesano no es un ente miserable que necesite de la caridad política para vivir. Es la fuerza económica más completa y más independiente que tiene la Nación. Su porvenir está asegurado y no depende sino de su propia voluntad. Si empleara más tiempo en trabajar, si dedicara menos días a las diversiones y a las festividades religiosas, y si se le hiciera creer menos que es «pobre y menesteroso», llenaría mejor su función económica, y probaría que no necesita del tratamiento filantrópico que le brindan los negociantes en elecciones, sino de la justicia distributiva, a ley de igualdad democrática, para ser la primera fuerza social del país.

El populacherismo de Belzu y el militarismo de

Ballivián, han sido dos obstáculos igualmente funestos al desarrollo de la riqueza privada y fiscal. Son dos grandes lecciones de historia patria que debieran servir para mostrar a los hombres que, en el gobierno y en la oposición, están llamados a tener influencia en la suerte de la República, que no puede realizarse obra financiera fecunda al bien público, si no hay la más grande sinceridad en todos. Al «populacherismo belcista», debe reemplazar el sincerismo financiero, que no busque sino la satisfacción de las necesidades colectivas con el concurso de todos y cada uno de los componentes sociales en la medida de su propia capacidad y bajo los dictados del principio de economicidad.

III

Fenecido el contrato Tezanos Pinto para el monopolio de la quina, el gobierno optó por crear un banco monopolizador mediante suscripción pública de quinientos mil pesos de capital. Convocó al efecto a propuestas sobre las siguientes condiciones:

Privilegio de diez años para la compra y exportación de cascarilla a razón de tres mil quintales los dos primeros años, cuatro mil el tercer año y cinco mil los siguientes;

Precio de compra, 30 pesos en La Paz, y 25 y 26 pesos en provincias;

Impuesto de exportación por aduanas terrestres, 30 pesos la quina Calisaya y 16 pesos las clases inferiores, y por Cobija 10 pesos y 8 pesos, respectivamente.

La mitad de los impuestos se pagaría en dinero y la otra mitad en vales del crédito público.

Fué aceptada la propuesta de la sociedad Aramayo Hermanos, que suscribió cien acciones del «Banco de Quina», que así se llamó la institución proyectada, y ofreció las cuatrocientas restantes en todos los departamentos, reservándose el derecho de tomar a su cargo las que no fuesen suscritas.

Aramayo Hermanos tendrían la administración del Banco por seis años; comprarían a 60 pesos el quintal de quina Calisaya, y a 35 y 30 las clases inferiores, exportando 4.000 quintales de aquélla y 3.000 de éstas. Al fisco le pagarían 25 y 14 pesos de impuesto, respectivamente, sumando en junto 142.000 pesos anuales, pagaderos por duodécimas partes, corriendo el contrato desde abril de 1850 por seis años prorrogables hasta diez.

Los extraordinarios precios imprudentemente señalados por el Banco de Quina en razón de ser Bolivia la monopolizadora del producto, el cual no se había descubierto aún en parte alguna, determinaron una superproducción desde el primer año, excediendo a la cantidad fijada para los dos primeros años y parte del tercero. A fin de evitar las graves consecuencias de esta superproducción, el gobierno prohibió el corte de cascarilla durante tres años, y el congreso de 1851 desaprobó el contrato Aramayo y ordenó la fundación del Banco de Quina por cuenta fiscal. Y mientras se estableciera el nuevo Banco, se aprobó otro contrato con Blaye & Cº, para continuar los embarques de la quina sobrante del extinguido Banco, y

se acordó a los deudores del fisco la facilidad de pagar sus obligaciones en cascarilla.

No fué próspera la situación de los nuevos contratistas, en cuya virtud se rescindió el contrato, y se fundó por fin el Banco Nacional de Quina el año 1853 sobre las mismas bases del contrato Aramayo, prohibiéndose el corte de la quina hasta 1857. Poco duró este régimen y no dió resultado favorable al Estado, a pesar de que el mismo ministro de hacienda Hernández tomó a su cargo la dirección del establecimiento.

A fines de 1855 se hizo un nuevo contrato con la firma Caso y Huici, que quiso rescindir al siguiente año, por la depreciación del producto en Europa a causa de la fuerte competencia que comenzó a ejercer Colombia, en cuyos bosques se descubrió en gran cantidad la quina, si bien no de igual calidad que la Calisaya boliviana, en cambio más barata en su explotación y en sus fletes. Se rebajaron a 55, 40 y 35 pesos las diversas clases del artículo, y a 18 pesos el polvo, hasta que en 1858, a causa de una mayor competencia de Colombia, que hizo insostenible el monopolio fiscal, terminó el contrato Caso Huici y comenzó el régimen del comercio libre decretado por el Dictador Linares.

Con la firma Myers Bland y Cº, se contrató la explotación de las huaneras de Paquica, que no eran bien reputadas por la calidad de su producto, inferior al de San Francisco, que la misma firma tenía en explotación, mediante contrato hecho con Gibbs hijos.

El contrato comprendió la exportación de 14.000 toneladas a razón de 5 pesos tonelada. Las primeras 4.000 serían forzosas y su importe se pagaría una mitad al contado y los otros diez mil pesos a seis meses plazo.

En caso de ser conveniente la exportación de las diez mil toneladas de opción, su valor se pagaría la mitad en Cobija y la otra mitad se abonaría a la cuenta del gobierno conforme a lo convenido por la huanera de San Francisco.

IV

El elemento extranjero no simpatizaba con la presidencia de Belzu, y aun se dijo que en los diversos levantamientos revolucionarios de 1849, muchos comerciantes habían ayudado con suministros de dineros y vituallas a las fuerzas rebeldes. Cierta o exagerada la especie, dió lugar a fuertes recriminaciones en más de un documento oficial, y a amenazas de mayor gravedad que llegaron a condensarse en un supremo decreto, en cuya virtud ningún almacén por mayor de efectos extranjeros podía establecerse sino en Cobija, y los existentes debían cerrarse a los 100 días de la fecha del decreto. Para abrir un almacén de comercio se requería ser boliviano.

Al año siguiente (mayo de 1850) fué derogado el decreto y reemplazado por otro que declaró que el comercio por menor era derecho exclusivo de los bolivianos, y que los extranjeros podían comerciar sólo por mayor matriculándose previamente, conforme con los tratados vigentes, y a falta de ellos, según las

franquicias que se diesen a los bolivianos en el país de cuyo súbdito se tratara.

Le parecieron caros al gobierno los impuestos aduaneros creados por el anterior, y que además fomentaban el contrabando. Se hizo un nuevo arancel para las importaciones por tierra con las siguientes cuotas:

30% Ropa hecha, calzado de hombre, sillas de montar, sombreros, etc.;

20% Relojes, perfumes, naipes, calzado de mujer y muebles;

15% Efectos de lana, seda, lino, brocado y tisú;

12% Artículos de algodón, excepto el tocuyo que pagaría el 40%;

8% Artículos de loza, vidrio y quincallería;

6% El valor de la hechura de las joyas.

Fueron declarados libres las máquinos y herramientas, el azogue y demás artículos destinados a la industria.

Los licores debían regirse conforme al tratado suscrito con el Perú, esto es, igualdad de régimen impositivo.

Para las importaciones por Cobija se hizo también otro arancel, como era de práctica, gravando con 20% la ropa hecha y el tocuyo, con 18% los licores, con 10% los muebles y perfumes, con 8% los artículos de seda, lino y lana, con 5% los tejidos de algodón fuera del tocuyo, y con el 3% la loza, cristalería y las joyas. Para compensar esta tarifa liberal, se votaron derechos específicos elevados sobre los artículos similares de la industria nacional.

Habiéndose constatado que las importaciones por Cobija disminuían considerablemente, el gobierno trató de protegerlas permitiendo que un tercio de los derechos de aduana se pague en bonos del descuento militar, y una mitad de los de exportación de plata y oro en los mismos valores.

Los pesos fuertes fueron gravados con 6%, y el oro no amonedado con 3%.

El ministro Bustillo decretó un nuevo arancel de derechos de aduana, consignando los avalúos que habían variado desde 1844. La nomenclatura comercial fué dividida en siete secciones, a saber: Algodones, Lana, Lencería, Sedas, Especería, Mercería y Drogas.

Las aduanas interiores fueron suprimidas por ley de 1846, que centralizó los despachos aduaneros en La Paz, Oruro y Cobija. No obstánte, Belzu para complacer al pueblo de Cochabamba, restableció la aduana de esa ciudad; pero tuvo que suprimirla a poco (1850) en vista del contrabando que se hacía en el largo trayecto de la costa a la plaza de consumo.

Los impuestos internos que pagaban los licores fueron suprimidos por ley de 3 de octubre de 1851 con el propósito de favorecer la industria nacional.

En la breve y agitada administración del general Córdova nada se hizo en materia aduanera, excepción hecha de la suspensión de los derechos específicos que se cobraban en Cobija sobre los similares de la industria nacional, a los que se gravó con un recargo del 20%.

V

Como todo lo que hizo el ministro Bustillo en materia financiera, su decreto monetario de 1849 es de una importancia especial, atenta la solución del problema económico a que se contrajo.

En el tratado de 1848 se convino con el Perú que no se emitirían monedas inferiores a 10 dineros 20 granos. Mas, como desde el año 1830 se habían lanzado a la circulación importantes sumas en piezas de 8 dineros, el caso a resolver era en extremo delicado. Si se prohibía la emisión de esta moneda, tenía lógicamente que proveerse a su depreciación, y, por tanto, a la conversión del circulante con un 26% de pérdida para el Estado. Si, por el contrario, se suspendía la acuñación de los pesos fuertes, se quitaba al país su única riqueza de retorno internacional y se faltaba al tratado con el Perú. Además, los hechos venían probando de tiempo atrás, que la diferencia entre la moneda sencilla y el fuerte, fomentaba el contrabando de ésta y dejaba al país a merced de la plata feble.

La unificación monetaria era, pues, urgente, y le cupo plantearla al ministro Bustillo en los términos de su importante decreto de 6 de octubre de 1849, cuyos considerandos merecen extractarse.

«Que existen en el país—decía Bustillo—dos monedas iguales en valor y diferentes en precio intrínseco, sirviendo la una de 8 dineros para la circulación interna, y la otra de 10 dineros 20 granos para pagar las obligaciones del comercio de ultramar como mercadería de exportación clandestina;

«Que corriendo ambas monedas a la par, es manifiesto el quebranto que sufre el país con el cambio de la fuerte con la sencilla y la extracción de aquélla;

«Que la desigualdad real de estas monedas ha abierto el contrabando de pastas de plata, pagándose su valor con moneda sencilla, y que el medio eficaz de evitar el comercio clandestino consiste en aumentar el precio de las pastas en rescate, dando a la plata el nuevo valor que ha asumido, como resultado preciso no sólo de su escasa producción, mucho costo y gran demanda en el mercado del mundo, sino también de la calidad y valor intrínseco de la moneda de pago circulante;

«Que la de 8 dineros emitida desde 1830 en cantidades considerables, es de hecho la única moneda, habiendo producido por su larga circulación todos los efectos económicos, y que un hecho importante, irremediable y consumado como éste, no puede dejar de aceptarse sin perturbar nuevamente el equilibrio de los valores y causar confusión, sobresalto, pérdidas y perjuicios en las transacciones y contratos;

«Que la falta de circulación de la enorme suma que se acuña en fuertes, es perjudicial a la industria y al comercio, y que el mejor medio de restituir a la circulación esta masa, es poner su valor en armonía con el de la única moneda que está en posesión de regular el mercado interior, siendo además esta igualación de valores, una medida eficaz para evitar la extracción, el atesoramiento y otros inconvenientes».

Con fundamentos tan claros se decretó la emisión de la nueva moneda de 10 dineros 20 granos con

peso de 400 granos, valiendo exactamente 8 reales. Y el precio de rescate de las pastas, se elevó a 10 pesos por marco de 12 dineros.

Así habría quedado solucionado el problema de la unificación monetaria, pero desgraciadamente no se llevó a la práctica el citado decreto de 1849.

Cuando sobrevinieron las hostilidades peruanas de 1853, y fué su consecuencia inmediata la interdicción comercial decretada ese año, el gobierno volvió a autorizar la emisión de los pesos fuertes para pagar el comercio con Chile por Cobija, y más tarde se ordenó la acuñación de la moneda fraccionaria con igual milésimo de fino y tipo que la fuerte. Empero, el decreto monetario de Bustillo quedó como un valioso antecedente administrativo.

A fin de evitar las falsificaciones de moneda y la circulación de piezas de ley y peso inferiores a los vigentes desde 1830, se estableció en Sucre una oficina general de ensayes, encargada de comprobar si la moneda de oro tenía 21 quilates y 542 granos, el peso fuerte 10 dineros 20 granos con 542 granos ponderales, y el tostón 8 dineros y 270 granos.

Para acuñar el oro y la plata se ordenó el establecimiento de una Casa de Moneda en La Paz por decreto de marzo de 1851, confirmado por ley de la convención nacional del mismo año, habiéndose señalado para su funcionamiento un local de la calle Recreo perteneciente al ramo de instrucción.

La acuñación monetaria desde 1840 a 1859 tuvo el siguiente desarrollo: (1)

AÑOS.	ORO.	PLATA FUERTE.	MONEDA FEBLE
En 1840	$ 230.384	$ 2.086.172	$ 514.335
« 1841	« 163.336	« 1.396.550	« 917.456
« 1842	« 179.928	« 1.255.705	« 1.166.531,4
« 1843	« 134.912	« 1.126.428	« 1.001.963
« 1844	« 75.888	« 921.204,4	« 1.094.341
« 1845	« 53.584	« 1.620.516,4	« 299.395,4
« 1846	« 84.864	« 1.043.842,4	« 363.744,4
« 1847	« 55.624	« 586.270,4	« 1.316.599
« 1848	« 00.000	« 770.683	« 1.266.478,6
« 1849	« 11.720	« 671.074,4	« 947.270
« 1850	« 00.000	« 771.671,5	« 1.248.224,4
« 1851	«	(No hay datos)	
« 1852	« 62.946	« 499.851,5	« 1.990.061
« 1853	« 112.189	« 95.930	« 2.549.599,5
« 1854	« 107.327	« 49.384,4	« 2.396.600
« 1855	« 29.084	« 63.401,2	« 2.345.246,2
« 1856	« 38.959	« 26.949,2	« 2.634.077,5
« 1857	« 16.917	« 3.458	« 2.634.550
« 1858	«	« 23.547,4	« 2.378.743
« 1859	«	« 68.701,2	« 774.711

En cuanto a la industria minera, se hizo poco por protegerla o no se hizo más de lo que la rutina ha aconsejado a todos los gobiernos.

Se acordó vender el azogue a precio de costo, y como éste bajase desde 1852 en proporción considerable, bajó a su vez a 9 $ el precio oficial de las pastas de plata, que, como se ha visto, el decreto monetario del año 1849 lo hizo subir a 10 $.

Durante el anterior gobierno se había proyectado sustituir el monopolio de las pastas de plata con el régimen del comercio libre, extinguiendo la Casa de Moneda y el Banco de Rescates. Estaba de tal modo arraigado el monopolio de metales en el criterio de los industriales de esa época, que el gobierno se vió precisado a tranquilizar la opinión pública, haciendo solemnes declaraciones en sentido de que estaba muy lejos de su espíritu el cambiar el régimen existente. Y para hacer más elocuentes sus demostraciones, confirió una medalla de oro al escritor que desde las columnas de «El Eco» de Potosí había atacado victoriosamente el proyecto de comercio libre, que fué calificado de insensato.

Data de esta misma época la institución de la cuarta estaca de las minas de plata en favor del tesoro de instrucción. El recurso podía ser muy importante, pues en cada grupo minero de tres estacas se asociaba por ministerio de la ley al Estado con una cuarta estaca; de modo que ésta tenía que valorizarse forzosamente por la acción del minero dedicada al laboreo de sus pertenencias. Pero las deficiencias administrativas de la época, la falta de capitales y de capacidad económica y técnica en el gobierno, esterilizaron este recurso, que no dió lugar sino a enojosas controversias o a negociaciones poco acertadas.

El Estado es el menos apto para la industria minera. Así lo han comprendido la mayoría de los Estados modernos, y por eso han entregado a la acción privada la explotación de su riqueza metalífera.

Siguió en auge el contrabando. No había poder

capaz de detenerlo, pues las fuerzas financieras y económicas que lo determinaban, eran superiores a la acción fiscal. Moneda depreciada y monopolio de compra y exportación a bajo precio, tenían que producir necesariamente el fraude. El gobierno decretó penas severas, señalando entre otras la confiscación de la mina y el comiso de las pastas.

Las penas, mientras más severas, son menos eficaces, porque sólo tienen la virtud de aguzar más el ingenio humano aplicado al fraude fiscal. Más que en las penas, el secreto de la represión del contrabando está en los procedimientos. Y éstos nunca fueron tomados en cuenta.

El impuesto al cobre data de 1851, en que se votó con aplicación a fondos municipales de la provincia de Inquisivi, a razón de 2 reales sobre quintal de barrilla y de 3 reales sobre la barra. Como resultase elevado este gravamen, se lo redujo un año después a ½ real y 1 real, respectivamente.

La industria del estaño comenzó a preocupar al gobierno; pero su acción proteccionista, muy razonable en principio, resultó perjudicial en la práctica. Se trataba de fomentar la fundición del estaño en Bolivia, para lo que el gobierno decretó que desde el 1º de enero de 1853 quedaba prohibida, bajo pena de comiso, la exportación de la barrilla, permitiéndose únicamente la del estaño metálico.

«La exportación de la barrilla, decía el decreto, perjudica al país porque le priva de los beneficios y utilidades que resultan de la elaboración del estaño

metálico y de su venta al extranjero en barras en vez de la materia prima».

Realmente es así; pero la manera de proteger la industria metalúrgica no consistía en prohibir la exportación de la materia prima, sino en fomentar el establecimiento de fundiciones económicas y perfectas, lo que no era dable conseguir en aquellos tiempos o lo fué en limitadísima escala, como no lo es actualmente, o a lo menos constituye hoy mismo un problema tan complejo y trascendental que su solución requiere el empleo de grandes energías de todo género.

La fundición del estaño en Bolivia, entrevista el año 1852 como una conveniencia indiscutible, sería la evolución económica más importante a que pudiera llegar la minería boliviana.

Dentro del orden natural de las cosas, es una evolución lógica a que necesariamente marcha el país, pasando de la simple elaboración mecánica de la materia prima, a la alta industria metalúrgica.

Empero, son tan grandes los obstáculos que se oponen a la realización del pensamiento iniciado en 1852, que sólo la acción del Estado combinada con la de una poderosa sociedad industrial, sería capaz de conducirlo a buen término (1).

A fin de acumular el oro necesario a la acuñación de moneda, fué prohibida la exportación del oro

---

(1) Sobre las 40.000 toneladas anuales que exporta Bolivia en barrillas de estaño del 60 %, quedan en Europa más de un millón de libras esterlinas por gastos de fundición, fuera del 40 % de flete falso que se paga por el transporte de tierras y residuos.

A la legislatura de 1915 se presentó una propuesta para establecer hornos de fundición eléctrica, que no llegó a considerarse. Un sindicato americano trata de establecer por su cuenta esta industria.

no manufacturado, y el Banco de Rescates subió en 4 reales el precio de compra.

Sin embargo, los datos de la época no manifiestan haberse acuñado el oro en cantidad apreciable. Bajo el imperio de la moneda feble, toda otra especie metálica estaba desahuciada.

VI

El crédito público que hasta entonces había tenido vida efímera, acabó por justificar la frase consagrada por un publicista boliviano: «el crédito no tiene crédito».

El Congreso de 1850 por ley de 7 de octubre, reconoció como legítimos los intereses devengados hasta abril de 1851. Empero, redujo los intereses al 3%, lo que concluyó por desprestigiar los billetes del crédito público y los vales de posterior emisión.

Sobre los 2.181.216 pesos que quedaron en circulación como saldo de los billetes emitidos por el gobierno Ballivián, el congreso votó 3% de intereses y 1% de amortización, o sean 87.235 pesos, situando su pago preferente, por mitad, en los fondos de la cascarilla y de la moneda.

En cuanto a los billetes flotantes del primer credito público, de los vales de empréstito de 1828 y de las letras de asignación militar, el congreso prometió cambiarlos con vales de nueva emisión al 3%.

Del mismo modo, los bonos del descuento temporal a los empleados, podían a voluntad de éstos trocarse por los nuevos vales con un aumento del 50% en calidad de indemnización por el quebranto.

Las iniciativas del congreso, no obstante de haberse dado el golpe de gracia al naciente crédito fiscal, con la arbitraria reducción de los intereses, quedaron a mayor abundamiento simplemente escritas. El presupuesto para 1851 votado con un superávit apreciable, falló en sus cálculos, y dió lugar a que el gobierno declarara en suspenso el pago de los intereses y amortización de los billetes del crédito.

El gran aliciente de estos papeles era la posibilidad de comprar con ellos bienes fiscales a la par; mas el gobierno, velando por el patrimonio nacional sin importarle nada lo del crédito del Estado, prohibió la venta de bienes rústicos en aquellos valores. La enajenación de los bienes nacionales, según el decreto del gobierno, había ocasionado la pérdida de una mitad de los capitales; y además hacía cuatro años que no se pagaban intereses sobre los billetes del crédito, y aunque comenzaran a pagarse, ellos habían sido reducidos al 3%.

Como se ve, el gobierno era el primero en desacreditar los valores fiscales.

VII

El presupuesto votado por el congreso de 1850, calculó los ingresos en..... $ 2.093.016
y los gastos en..... « 1.919.984
con un superávit de..... ..... $ 173.032

Las rentas principales fueron calculadas del modo siguiente:

Aduanas, inclusive coca y cascarilla.....	$	582.299
Contribución indigenal.....	«	919.000
Id. sobre capitales.....	«	9.929
Utilidad en la moneda.....	«	200.000
Diezmos.....	«	163.673
Primicias	«	7.475
Banco de Rescate..	«	9.794
Exportación de pesos fuertes.....	«	18.000
Contribución de sueldos.....	«	54.000
Descuento de guerra	«	57.000
Papel sellado.....	«	25.000
Impuesto sobre productos nacionales.....	«	27.282
Varios..	«	19.564
Total de ingresos.....	$	2.093.016

El presupuesto del ejército fué fijado en 868.000 pesos. Los 87.238 pesos votados para el crédito público quedaron nominales. Lo demás del presupuesto se redujo al pago de empleados públicos.

Durante el gobierno de Belzu y de su sucesor Córdova, el régimen financiero se desenvolvió conforme al presupuesto de 1851.

Merece anotarse la implantación de la «alcabala de enajenaciones» por el gobierno Córdova, con la tasa del 2% sobre la transferencia de los bienes inmuebles.

Este impuesto fué muy resistido. Los enemigos del gobierno lo combatieron atribuyéndole los caracteres más odiosos.

Decíase que el gobierno había resucitado la alcabala de Felipe II, y que ese impuesto importaba la

destrucción de la riqueza privada porque atacaba al capital mismo.

Sin embargo, el impuesto sobre la riqueza adquirida, es uno de los más legítimos.

Junto con la alcabala de enajenaciones, se restableció el impuesto sobre herencias indirectas con la tasa del 5%.

Por lo demás, pocos progresos tuvo el régimen financiero durante los gobiernos de Belzu y Córdova.

El restablecimiento de la Comisaría de Guerra, recurso de todos gobiernos de hecho amagados por las oposiciones armadas, mantuvo en desorden la hacienda pública.

VIII

La formación del censo general de la República en 1854, dió lugar a las más extrañas acusaciones contra el gobierno del general Belzu. Díjose entonces que se había ordenado el levantamiento de esa operación en la noche, para hacer pasar un grueso contrabando de cascarilla. No se comprobó la especie ni hubo acusación concreta sobre el particular.

El censo de 1854, arrojó la cifra de 2.326.126 habitantes distribuídos del modo siguiente:

Blancos y mestizos.....	634.345
Indígenas	931.781
Bárbaros	760,000
Total.....	2.326.126

Excluyendo los bárbaros, la cifra de la población fué de 1.566.126 habitantes.

Desde los orígenes de la República, el crecimiento vegetativo de la población tuvo el siguiente desarrollo:

	POBLACION.	CRECIMIENTO.
1825.....	997.427	
1846.....	1.373.890.....	37,7%.
1854.....	1.566.126.....	14%.

Si esta proporción hubiera sido constante, la cifra de 1914 habría debido pasar de tres millones de habitantes.

CAPITULO II

EL DICTADOR LINARES

I.—Saneamiento financiero.—Reducción de sueldos.—Centralización administrativa.—Crédito nacional.
II.—Derecho presupuestal.— Sus bases fundamentales.— Caja Central de Pagamentos.—Reglas de liquidación financial.— El presupuesto de 1860.
III.—El decreto monetario de Frías.—Supresión de la Casa de Moneda de La Paz.—El precio de la plata.—La represión del contrabando y el monopolio del azogue.—Libre exportación de barrilla.—La propiedad de las salinas.
IV.—Proyecto de empréstito por £. 1.000.000.—Sus bases y su aplicación.—Del Desaguadero al Pacífico.
V —Legislación industrial.—La quina y el tocuyo.—Interdicción con el Perú.

I

Después de la relajación administrativa de los anteriores gobiernos, la dictadura del doctor Linares fué como un cauterio de hierro. Gobierno vigoroso, centralista, altamente inspirado, consciente de su misión histórica de saneamiento financiero, puso mano firme y experta en el manejo de la cosa pública.

El presupuesto de gastos había crecido mucho. Comenzó el Dr. Linares por hacer una poda enér-

gica de las frondosidades que había alimentado el favor presidencial para premiar adeptos y satisfacer complacencias. Fueron rebajados los sueldos en una proporción considerable, empezando por el del presidente de la república que se fijó en 18.000 pesos de 30.000 a que había subido. Los sueldos ministeriales fueron reducidos a 4.000 pesos, y con las economías de los cuatro ministerios, se creó una quinta cartera de fomento para el manejo de las industrias, del comercio y de las obras públicas.

Para hacer más eficaz la acción del gobierno, fué dividida la república en 32 jefaturas directamente dependientes del poder central, y en dos distritos mineros debidamente centralizados en Potosí y Oruro. Se creó la Cámara de Minería, que era el poder representativo del gremio, con atribuciones amplias para promover el fomento industrial y la policía minera.

Durante los anteriores gobiernos se había dilapidado el patrimonio nacional, vendiendo los bienes del Estado y adjudicando graciosamente las tierras baldías. El gobierno suspendió toda adjudicación.

Pasaban 10 años que las deudas fiscales estaban en mora, el crédito del Estado había desaparecido y no se sabía el monto de la deuda. Se creó una comisión liquidadora cuyas conclusiones servirían de base para movilizar el grueso pasivo de la Nación.

II

Siguiendo el espíritu de orden, de economía y de corrección que desde sus momentos iniciales desenvol-

vió la Dictadura, el primer presupuesto formulado conforme a las reducciones de sueldos decretados a fines de 1857, alcanzó a 1.201.497 pesos, suma correspondiente a la gestión de 1859. Al mismo tiempo, el ministro D. Tomás Frías formuló la bases fundamentales del derecho presupuestal. Según el decreto de 1859, nadie podía ordenar pagos, sino el secretario del despacho a cuyo ramo correspondía la erogación. Nadie podía decretar pagos no reconocidos en el presupuesto, y ningún dinero podía sacarse más allá del monto presupuesto. En caso de faltar fondos, sólo el Consejo de Ministros estaba facultado para señalarlos, abriendo nuevos créditos en el presupuesto.

Sobre reglas tan importantes, el servicio financial se regularizó considerablemente.

Al año siguiente se fundó la «Caja Central de Pagamentos», que tuvo por objeto centralizar las rentas nacionales, señalando las atribuciones subalternas de las cajas departamentales. Estas debían recaudar los impuestos de su distrito y pagar los servicios reconocidos en el presupuesto. Todo excedente debían remesar a la Caja Central, a la que además correspondían las recaudaciones aduaneras de La Paz, Oruro y Cobija y las utilidades del Banco de Rescates y Casa de Moneda.

Estaba dado el primer paso, el más importante sin duda, hacia la regularización fiscal en reemplazo del desorden y de la falta de unidad que había caracterizado las finanzas de los anteriores gobiernos.

En el decreto de 1860, se dió mayor extensión

a las reglas esenciales para el manejo del presupuesto, agregando el principio de que el crédito abierto en un capítulo no podía aplicarse a otros, y que los sobrantes o ahorros debían disponerse en consejo de gabinete o quedar en caja para la nueva gestión.

Merecen también citarse las reglas dictadas para la liquidación financial de cada gestión económica.

En cuanto a los ingresos, la liquidación debía comprender la avaluación de cada ramo de ingresos, lo devengado sobre el total, lo recaudado y el saldo por recaudar.

Los egresos debían comprobar los créditos autorizados, lo devengado sobre ellos, lo pagado y el saldo por pagar.

Esta liquidación debía hacerse hasta el mes de mayo de la gestión siguiente y someterse después al examen y glosa del Tribunal Nacional de Valores. Con el dictamen de esta corporación, debía pasarse la cuenta a la Representación Nacional, como un antecedente indispensable del nuevo presupuesto.

Estos mismos principios sirvieron para la facción de la ley financial de 1872, formando la base del derecho presupuestal boliviano.

Para la gestión económica de 1860 se formuló el siguiente presupuesto:

Gastos.....	$	2.339.704,1
Rentas..	«	2.224.286,5
Déficit	$	115.417,4

Las rentas fueron calculadas como sigue:

Contribución indigenal.....	$	812.890
Aduanas nacionales.....	»	209.423
Aduanas interiores.....	»	216.496
Diezmos y primicias.....	»	326.736
Impuestos sobre sueldos eclesiásticos y militares.....	»	11.498
Impuestos sobre compraventas.....	»	15.955
Impuestos sobre predios	»	13.483
Mercados.....	»	23.891
Impuestos indirectos.....	»	78.627
Papel sellado.....	»	25.108
Peaje e internación de ganado.	»	31.522
Arrendamientos.....	»	16.739
Productos de huaneras	»	15.000
Casa de moneda y Banco de Rescates.....	»	421.330
Patentes y pasaportes.....	»	5.055
Multas y varios.....	»	533,5
Total.....	$	2.224·286,5

El presupuesto de gastos estaba dividido en dos partes: servicio nacional con 1.163.905, y servicio local o departamental con 1.175, 398, formando el total de 2.339.704.1.

El ejército absorvía 967.661 pesos y constaba de 1.500 hombres distribuídos en 3 batallones, dos regimientos de caballería, un escuadrón y una brigada de caballería.

El pre del soldado era de 16 $ mensuales, o sean 4 rs. ½ diarios.

BIBLIOTECA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Fuera del servicio nacional, la instrucción tenía su tesoro propio alcanzando a 221.930 pesos distribuídos por departamentos. Sus principales rentas eran la participación en los diezmos, el impuesto sobre harinas, la internación de libros, los réditos y censos, arrendamientos de bienes propios y las pensiones y derechos universitarios.

La administración de correos tenía también fondos propios y se regía mediante presupuestos especiales.

III

El decreto monetario de 1859 formulado por el ministro Frías, es un progreso más en orden al saneamiento de la moneda nacional. Muchas de las disposiciones de 1840 habían quedado en desuso. Además, el reglamento de 1849 expedido por Bustillo en conformidad al tratado con el Perú, no había llegado a ejecutarse, de modo que el fraude monetario iniciado durante el gobierno de Santa Cruz, persistía como una calamidad pública.

«Los grandes males ocasionados por esta moneda—decía el ministro Frías refiriéndose a la del año 30—se han consumado sólo en virtud del secreto con que fueron introducidos».

Se ordenó que en ejecución del decreto de 1849 se emitan monedas de 10 dineros 20 granos, y que para conservar la relación con la moneda feble de 8 dineros, los pesos fuertes sólo tengan 400 granos ponderales.

Los antiguos pesos fuertes de 452 granos, de

cuño español o nacional, debían seguir pagando el 6% de exportación, siendo libre la de los pesos de 400 granos. Aquellos derechos podían pagarse en bonos del descuento de guerra o en los vales del empréstito militar voluntario que cubrió el ejército en 1858, dejando la cuarta parte de sus haberes como una ayuda al gobierno que trataba de reorganizar el país (1).

No habiendo llegado a tener ninguna utilidad la Casa de Moneda de La Paz, fué decretado su cierre en octubre de 1859. Los rescates de plata habían disminuído, y no dejaba cuenta la acuñación de la nueva moneda en esta ciudad.

El precio oficial de la plata subió a 10 pesos, de 9 que era anteriormente. Este aumento debía pagarse durante los primeros seis meses en billetes del crédito público, los que servirían a su vez para comprar el azogue.

El contrabando de pastas de plata motivó varios decretos del Dictador. Su acción se contrajo particularmente a la fijación de los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad de los defraudadores del Estado. Es inútil aumentar la severidad de las penas, decía uno de los decretos del año 1859, cuando faltan los procedimientos.

Empero, como ni éstos tuvieran eficacia, el go-

(1) En virtud del decreto de 1859, se emitieron los tostones Frías de 200 granos con ley de 10 dinero 20 granos. La cantidad acuñada alcanzó a $ 4.728.773, 4 reales.

bierno decretó el monopolio de la importación y venta del azogue. Las ventas debían hacerse bajo fianza de que el minero entregaría al Banco de Rescates una cantidad de plata equivalente a la amalgamación que se obtendría del azogue vendido. Fué fácil en principio calcular la cantidad de mercurio necesario para la elaboración de un marco de plata, pero en la práctica tropesó con obstáculos insuperables de que se hizo cargo el gobierno del general Achá para cancelar el monopolio del azogue el año 1861.

La prohibición de exportar barrilla de estaño, decretada por el general Belzu, no favoreció la elaboración del metal. Reconociendo el Dictador que muchos minerales no podían beneficiarse económicamente en el país por falta de establecimientos especiales, cuya fundación no era tampoco factible, declaró libre la exportación de barrillas de cobre, plomo y estaño, creando el impuesto de estadística de un centavo por quintal de minerales no concentrados y de dos centavos por la barrilla.

Una importante declaración hizo el gobierno sobre la propiedad de las salinas de Mojos, Chiquitos, Tarija y demás depósitos existentes en el país, en sentido de que pertenecían al dominio del Estado y debían, en tal virtud, darse en arrendamiento, excepto las salinas explotadas en común por los habitantes de una comarca, las que se mantendrían en comunidad.

La extracción de las salinas de Tarija se gravó con un real por carga.

IV

Con el pensamiento de emprender obras de grande aliento, el Dictador proyectó la contratación de un empréstito externo por un millón de libras esterlinas, a cuyo efecto impartió instrucciones al encargado de negocios de Bolivia en Francia e Inglaterra.

La operación debía hacerse al 80% mínimum con 6% de interés y 2% de amortización y una comisión del 5% sobre el monto del servicio anual.

Quedarían afectados al empréstito los rendimientos de las aduanas de La Paz, Oruro y Cobija y el producto del huano y de la quina, o bien las utilidades de la Casa de Moneda y del Banco de Rescates, fuera de la garantía subsidiara de todas las rentas nacionales.

Además, se afectarían las empresas mismas a cuyo establecimiento se destinaba el producto del empréstito. Y como pudiera recelarse de que alguna revolución o guerra suspendiera el pago puntual de los intereses y amortización, el gobierno tendría permanentemente depositados en el Banco de Inglaterra los fondos necesarios para cubrir el 8% del servicio anual, los que se reemplazarían una vez terminado el conflicto y sin perjuicio de seguir atendiéndose el pago ordinario del empréstito.

Esta importante operación se hallaba destinada a los siguientes objetos:

£ 20.000 para el capital del Banco de Rescates a fin de dar mayor impulso a la minería.

Deducida esta suma, el grueso del empréstito se emplearía en la canalización del río Desaguadero y en

la construcción de una «vía de junción o comunicación de este canal con la costa del mar Pacífico, que según las investigaciones científicas que se harán, resultare más conveniente».

El sobrante se destinaría a la creación de un banco de crédito hipotecario.

La operación estaba bien concebida y perfectamente planteada. Era de esperar que llegara a contratarse el empréstito proyectado, tanto por la importancia y seriedad de las garantías ofrecidas, cuanto por la clase de empresas, plenamente reproductivas y de alta conveniencia económica, a que se destinaban los fondos.

Por desgracia, a poco de haberse decretado la contratación del empréstito, el golpe de Estado de 1861 derrocó al Dictador, y su proyecto quedó escrito atestiguando sólo la amplitud de miras del Gobierno de Septiembre.

La junción del Desaguadero con el mar, mediante la prolongación del canal desde el lago de Poopó, fué sin duda un pensamiento audaz, más genial que práctico. Doce años atrás había expuesto una idea parecida el señor José María Dalence, proyectando la junción del Desaguadero con las cabeceras del Pilcomayo.

V

En materia de legislación industrial, el gobierno de Linares ha dejado los importantes decretos de 8 de marzo de 1858 sobre privilegios de invención y de 8 de marzo de 1860 relativo a organización de sociedades anónimas. Ambos decretos han reglado hasta

nuestros días el desarrollo jurídico de las industrias y de las sociedades, haciendo honor a los talentos y al espíritu de previsión del ilustre Dictador.

La industria de la quina no hizo sino seguir la decadencia iniciada por la competencia de los embarques de Colombia. Rescindido el contrato Blayde Quevedo & Cº firmado el año 1855, se ingresó al régimen del comercio libre con el 25% de impuesto *ad valorem*, que semestralmente debía rebajarse a razón de 4% hasta llegar al 10%. Mantenida esta última tasa, se remató su recaudación en doce mil pesos, que no eran sino la décima parte de lo que había llegado a obtenerse el año 1848, en que el monopolio de la cascarilla produjo 119.500 pesos.

Se hicieron tentativas infructuosas para la elaboración del sulfato de quinina, a cuyo efecto se concedió un privilegio de diez años.

Sólo el gobierno del Dr. Linares no tuvo su arancel propio para la exacción de los derechos aduaneros. Sin duda porque consideraba perjudicial a los intereses del comercio y del Estado el frecuente cambio de las bases impositivas, se concretó a mantener el regimen establecido.

La cuestión del tocuyo y la interdicción con el Perú, fueron las únicas novedades aduaneras de la Dictadura.

En cuanto a lo primero, el impuesto prohibitivo del 40% que para favorecer los telares no existentes se había votado durante el gobierno Belzu, se redujo

al 15 ½% en las aduanas de La Paz y Oruro, y al 12 ½% en la de Cobija.

El impuesto del 40%, sobre los tocuyos según los considerandos del decreto de 1858, no había tenido otro resultado que fomentar el contrabando.

Entre otros privilegios que otorgó el gobierno, figura uno por diez años para la importación de máquinas de tejer tocuyo.

La interdicción con el Perú, fué motivada por las hostilidades de ese gobierno que pedía satisfacciones de una incursión en territorio peruano que hiciera el general Belzu con ocasión de su famoso «paseo de valientes» a Copacabana, y reclamaba fuertes indemnizaciones por la moneda feble que el gobierno había seguido emitiendo después del tratado de 1849.

No duró mucho tiempo la interdicción comercial (marzo a octubre de 1860), porque era más perjudicial a Bolivia que al Perú, por lo que sólo se mantuvo la interdicción diplomática.

CAPITULO III

DURANTE EL GOBIERNO DE ACHA

I.—Continuación del «Programa de Septiembre».—Supresión de la Caja Central.—Descentralización financiera.—Alcabala de enajenaciones.—Supresión del monopolio del azogue.—Impuesto a la sal, al azúcar &.—Protección de la chinchilla.—Premios industriales.

II.—Régimen agrario.—El perfeccionamiento de la propiedad del indio.—Venta de terrenos sobrantes.—Supresión de los diezmos.—Establecimiento del catastro.

III.—La invasión chilena en 1863.—Ley monetaria de la Asamblea Nacional.—Creación del «boliviano» de 100 centavos.—Monedas de oro y cobre.—Impuestos sobre barras y barrillas de cobre y estaño.

IV.—Banco Hipotecario.—Fracaso de la escuela de agricultura de Cochabamba.—Amortización de bonos en licitación.—Las primeras estampillas postales.

V.—Régimen aduanero.—El arancel fiscalista de 1864.—Gravamen de los productos argentinos.—Recaudaciones de Cobija.

VI.—Presupuesto de 1865.—El servicio de guerra.

I

El golpe de estado que derrocó al Dictador Linares y constituyó el gobierno del Triunvirato, al que sucedió el general Achá, invocó haberse maleado el programa de la revolución de septiembre, que tuvo

por objeto la regeneración del país después de los desaciertos y despilfarros del anterior régimen.

No hubo realmente cambio en la orientación política, dirigida antes y después del Triunvirato a la reconstitución del país y la moralización administrativa. Lo que hubo fué simplemente la eliminación del hombre fuerte y dominador que había resuelto hacer de la dictadura el instrumento para tallar una nacionalidad progresista y moral.

Con la eliminación del Dictador hubo cambio de método, pero los principios regeneradores invocados en septiembre de 1857, permanecieron los mismos.

La Dictadura, como un régimen de transición después del «populacherismo» de Belzu, fué en cierto modo una necesidad de orden público; mas, la persona del Dictador era una amenaza de perpetuación y un obstáculo insuperable para el avance institucional de la República.

Eliminado Linares, su centralismo perdió terreno. La acción del nuevo gobierno protegió las autonomías locales, devolviendo a los departamentos la independencia financiera que les había restado la Caja Central de Pagamentos, y reforzando a las Municipalidades con la adjudicación de importantes fondos propios. A la centralización de la dictadura, sucedió por contraste reactivo una descentralización completa.

La Caja de Pagamentos fué suprimida a raíz del golpe de Estado, alegándose que había sido mal acogida por la opinión pública, que reclamaba la restitución a las cajas departamentales de la facultad

de recaudación y pago de los servicios nacional y local de cada distrito.

Una ley de 1855 atribuyó a las provincias la recaudación de varios arbitrios locales de patentes, alcabalas, pesas y medidas, etc. La Asamblea Nacional de 1861 adjudicó dichos fondos a las municipalidades, con más el impuesto adicional del 2% sobre internación de licores por Cobija y del 3% por las aduanas de La Paz y Oruro. Se completó esta reforma con la de 1864 que adjudicó a las municipalidades los fondos de beneficencia, higiene y ornato, con lo que el régimen communal adquirió una autonomía mayor, que más tarde había de dar dificultades al gobierno y oponer tenaz resistencia al despotismo de Melgarejo.

Con aplauso general fué abolido el impuesto sobre transferencia de bienes inmuebles, conocido bajo el nombre de «alcabala de compra-venta», que gravaba con el 2% las transacciones a título oneroso.

No había dado buenos resultados el monopolio del azogue destinado a combatir el contrabando de pastas; porque si bien era fácil calcular en principio el monto de la producción argentífera por determinada cantidad de aquel agente de amalgamación, ofrecía muchos inconvenientes en la práctica, y, sobre todo, atacaba la liberta industrial haciendo odioso el monopolio de las pastas de plata. Además, es sabido que las medidas más eficaces para evitar el fraude, son las menos gratas al espíritu de lucro. Se puede legislar todo lo que se quiera para reprimir el contrabando, a sola condición de que las medidas adop-

tadas no lo hagan imposible. En tal caso, la opinión de los interesados se levanta airada invocando los principios de libertad, de secreto profesional y de garantías constitucionales, para oponerse a los llamados «avances del fiscalismo».

El impuesto a la sal de Tarija y las declaraciones que sobre la propiedad de las salinas hizo el Dictador proclamando que ellas pertenecían al dominio del Estado, tampoco fueron del agrado de los interesados. El Triunvirato derogó el impuesto y guardó prudente reserva acerca de la situación jurídica de las salinas.

Quedaron suprimidas las antiguas contribuciones que pesaban sobre el azúcar de Santa Cruz, manteniéndose únicamente para fondos de la catedral, el impuesto de 2 reales por cabeza de ganado destinado al consumo. En cambio, se gravó la extracción de suela con 2 reales por lonja, y la de la cera con 1 real por arroba, y la internación de tejidos del Beni con 2 reales por bulto, y la del ganado mular con 1 $ por cabeza.

No eran, sin duda, recomendables las bases de los nuevos impuestos, aunque los antiguos, cobrados en especie, fueron más onerosos.

El gobierno decidió proteger la conservación y propagación de la chinchilla, prohibiendo la caza por cinco años, método simple que otros gobiernos habían empleado también, pero sin resultado alguno. La prohibición de caza por tal o cual número de años, no ha sido eficaz en ninguna época, no sólo por razón de la imposibilidad de hacer efectiva la prohibi-

ción en parajes desiertos y con fronteras abiertas, sino porque una vez suspendida la prohibición, el exterminio de los pequeños roedores se hace con más furor como para resarcirse de las ganancias no tenidas durante la veda, aprovechando los altos precios marcados por la rareza artificial del valioso producto.

Otros medios industriales reclama la propagación y explotación racional de la chinchilla, que ningún gobierno ha sabido establecer. Del mismo modo, la cría de la alpaca y la domesticación de la vicuña, son problemas que no aparecen debidamente planteados desde la época del coloniaje, en que el estanco de la lana de vicuña fué un paso hacia el aprovechamiento industrial de esta riqueza.

El gobierno del general Achá permitió la exportación de una pequeña partida de alpacas por hacer honor a una concesión que había otorgado a un Mr. Wilson el gobierno del general Belzu. Posteriormente, la asamblea de 1863 prohibió en lo absoluto la exportación de dichos animales.

El gobierno destinó cinco mil pesos para premiar los mejores artefactos en miniatura o tamaño normal, exhibidos por la industria paceña con motivo de las ferias populares de *alacitas*.

También destinó otra suma pequeña para una exposición industrial de Santa Cruz.

No deben verse en estas liberalidades el propósito de fomentar las industrias, sino más bien el deseo de halagar a los pueblos sin un fin práctico y sincero.

II

Casi todos los gobiernos han dictado disposiciones variadas para resolver la cuestión agraria y la condición jurídica y social de los indígenas poseedores de tierras llamadas de comunidad.

En medio de las contradicciones y diversidad de criterios en que ha fluctuado la legislación agraria, merece citarse el importante decreto de 28 de febrero de 1863, que es el que mejor comprendió la mente de los decretos dictatoriales de Trujillo y el Cuzco expedidos por el Libertador Bolívar los años 1824 y 1825, proclamando el derecho de propiedad de los indígenas y la abolición del tributo.

Los considerandos de aquel decreto, suscrito por el ministro de hacienda del general Achá, D. Melchor Urquidi, contienen una exposición completa de los antecedentes legales de la materia y llegan a conclusiones de una justicia perfecta, las que sirvieron después de base para las leyes definitivas de 1874 y 1880.

Bolívar ordenó la distribución de las tierras a razón de un topo de 5 mil varas cuadradas en los lugares regados y el doble en los estériles, de modo que nadie quedara sin su correspondiente propiedad territorial. Dificultades de orden material y técnico, impidieron la ejecución del decreto bolivariano, suspendiéndose la distribución de tierras y la venta de los sobrantes, mientras estudiarse mejor su repartimiento y el número de indígenas a quienes debía beneficiarse.

El decreto de 28 de septiembre de 1831 reconociendo el principio del derecho de propiedad de los indígenas, ordenó se les otorguen los títulos correspon-

dientes a los que tuvieran posesión de más de diez años, y mandó la facción de nuevas revisitas anulando las que se habían hecho anteriormente en condiciones sumamente imperfectas.

Tampoco llegó a ejecutarse el decreto del año 31.

No obstante la existencia de tan importantes disposiciones, los decretos de 1838 y 1842, contrariando los principios fundamentales del decreto bolivariano, mantuvieron en situación precraria la posesión de los indígenas, estableciendo, el primero, la sucesión por derecho de primogenitura y con preferencia a los varones; y el segundo, declarando que el Estado tenía el dominio eminente de las tierras y que los indígenas eran simples enfiteutas o dueños sólo del dominio útil, en cuya virtud pagaban la contribución indigenal al dueño del dominio directo.

Fuera de estas disposiciones, se había introducido el desorden en la posesión de las tierras. Muchas estaban ocupadas por los blancos y mestizos sin título legal, pues las habían usurpado, ya a los indígenas o ya al Estado, apoderándose de grandes extensiones territoriales.

El decreto de 1863, para corregir estos abusos y poner en vigor los principios proclamados el año 1825, declaró que era llegado el tiempo de elevar a los indígenas a la categoría de propietarios de las tierras que «les pertenecían por la naturaleza y por la ley», haciendo cesar la injusticia española, y que los sobrantes debían adjudicarse a los indígenas sin tierras, vendiéndose las que aun quedaran una vez hecha la repartición.

Al influjo de estos principios de justicia y de perfecta legalidad, se puso en vigencia el decreto del Cuzco de 4 de julio de 1825, ordenándose la distribución en favor de todo indígena sin tierra, de los llamados forasteros o agregados, a razón de 2 topos o sean 4 mil varas cuadradas en los parajes regados, y de 8 mil varas o 4 topos en los terrenos temporales. El decreto del Cuzco fijaba en un topo de 5 mil varas la unidad agraria, y el decreto de 1863 redujo a dos topos de dos mil varas cada uno.

En cuanto a los indígenas contribuyentes, se les declaró propietarios de las tierras que poseían por más de diez años conforme al decreto de 1831, fijándose para cada uno la extensión de 3 topos, o sean 6 mil varas cuadradas, en los lugares pingües y regados, y el doble en los que no lo fueran.

En los terrenos de Yungas, la unidad se fijó en dos «catos» para cada indígena.

Mientras se votase el nuevo impuesto territorial, los indígenas originarios o contribuyentes, seguirían pagando los mismos derechos con que estaban gravados, y sólo la mitad de éstos los forasteros y agregados.

El derecho de propiedad tenía una limitación consistente en no poder ser vendidas las tierras adjudicadas, mientras que sus propietarios no supieran leer y escribir.

Hecha la distribución de tieras mediante revisita que se practicaría en un término de 4 a 6 meses, incluyéndose en la distribución las propiedades usurpadas por los blancos y mestizos, se procedería a ven-

der los terrenos sobrantes en subasta pública, cuyo precio podría pagarse en dinero, bonos del descuento de guerra y sueldos devengados (1), aceptándose éstos a la par.

De los terrenos sobrantes debían segregarse en cada cantón 3 fanegadas en los lugares pingües y el doble en los estériles, para escuela de varones, y una extensión igual para otra de mujeres, obligándose a los indígenas a trabajar locales espaciosos y mandar a los niños a la escuela bajo pena de multa.

También se obligó a los indígenas a construir en los terrenos que se les adjudicasen, viviendas espaciosas y aereadas.

El producto de la venta de tierras sobrantes, se destinó para pagar los sueldos devengados y salvar al tesoro de la bancarrota a que lo habían conducido las revoluciones.

Este importante decreto quedó simplemente como una bella promesa. El Congreso extraordinario de ese mismo año lo derogó, postergando la distribución para mejores días.

La Asamble Nacional de 1861 por ley de 1º de julio, suprimió la contribución de diezmos y primicias por ser contraria a la justicia y al desarrollo de la agricultura. En reemplazo de dicha contribución, se creó el impuesto territorial, para cuyo establecimiento debía formarse el catastro de las propiedades mediante comisiones organizadas por funcionarios nombrados por el Ejecutivo y por las municipalidades.

---

(1)—El gobierno debía más de 10 meses de sueldos, y el tesoro agotado por las revoluciones, estaba próximo a la bancarrota.

El impuesto se fijó en la proporción de cinco por mil del valor venal de las propiedades.

Quedaron exceptuados de la ley del catastro los departamentos de La Paz y Santa Cruz, donde seguirían cobrándose los impuestos vigentes.

III

La Asamblea extraordinaria de 1863, expresamente convocada para decidir la conducta del país al frente de la invasión chilena que se apoderó de las huaneras de Mejillones avaluadas en más de setenta millones de pesos, se ocupó también en la fijación de la ley monetaria para poner orden al desbarajuste que venía desde 1830 y que motivaba las protestas del Perú por los quebrantos que la moneda feble causaba a la economía de sus departamentos del Sud.

En cuanto al asunto principal de la convocatoria, la Asamblea afrontó con altivez y serenidad el peligro bélico creado por la invasión chilena, autorizando al Ejecutivo a declarar la guerra si por los medios pacíficos no quedaban reparados los derechos y la dignidad de la Patria.

Tocante a la cuestión monetaria, la ley dictada con fecha 29 de junio por la histórica Asamblea de 1863, abarcó la solución de la reforma y del saneamiento con una concepción clara y justa de la materia, introduciendo por primera vez el sistema métrico decimal en la clasificación y ley de las especies monetarias.

El *boliviano* de plata de 100 centavos, en lugar del peso fuerte de 272 maravedís, fué adoptado como la unidad monetaria de la Nación.

Habría cinco clases de moneda de plata, a saber:

I.—«Boliviano» o peso fuerte, con peso ponderal de 500 granos del marco castellano.

II.—«Medio boliviano» con 250 granos.

III.—«Tomín» con 100 granos.

IV.—«Décimo de boliviano» o real, con 50 granos.

V.—«Medio real» con 25 granos.

La ley de las nuevas piezas se fijó en 900 milésimos.

Dividido el «boliviano» en 100 centavos, cada centavo sería representado por una moneda de cobre.

La tolerancia en el feble o el fuerte, se señaló en 3 milésimos, individual o colectivamente tomadas las piezas.

Entre el «boliviano» de 500 granos y ley de 900 milésimos, y el «peso» antiguo de 400 granos a ley de 10 dineros 20 granos, se estableció la relación exacta de 4 a 5 o sea de 80 a 100, de modo que el «peso» valía 80 centavos del «boliviano».

La misma proporción se estableció entre la nueva moneda y los antiguos tostones de 8 dineros.

Fué clasificada en cinco clases la moneda de oro con ley de 900 milésimos en vez de los antiguos quilates.

La «onza» de 500 granos, la «media onza» de 250 granos, el «doble escudo» o «cuatro» de 100 granos y el «escudo» y «medio escudo» de 50 granos y 25 granos, respectivamente.

De esta manera, cada «onza» de oro valía 17 y ½ bolivianos plata, y el «escudo» un boliviano 75 centavos.

La tolerancia se fijó en un milésimo en el fuerte o el feble.

El cuño se designó del modo siguiente:

Anverso: las armas de la República.

Reverso: una corona formada por dos ramas de laurel y olivo, y al centro el valor de la moneda. En el exergo superior el lema: «La unión es la fuerza».

Cordón: en alto relieve: «Bolivia Libre e Independiente—1825».

Las monedas de cobre serían de un centavo y de dos, con las armas de la República en el anverso, y la corona de laurel y olivo en el reverso, llevando el valor y el año en el centro.

A partir del 1º de enero de 1864 se ordenó la emisión de la nueva moneda sólo en piezas de un boliviano, quinto de boliviano, décimo y vigésimo, a fin de que el pueblo no sufriera violencia con el sistema adoptado.

El Banco de Rescates pagaría 8 bolivianos 60 centavos por marco de plata a ley suprema, y la Casa de Moneda pagaría al Banco Bs. 8,18 el marco de 917 milésimos, lo que importaba para éste una ganancia de 30 centavos por marco.

El defecto de la ley monetaria de 1863 estuvo en no haber adoptado en toda su amplitud el sistema métrico decimal, señalando al boliviano el peso de 25 gramos que correspondían a los 500 granos del marco castellano.

La moneda de oro se clasificó por onzas, medias onzas, cuartos y escudos, contrariando el propósito de unificación métrica en que se inspiró la Asamblea.

El gobierno votó el impuesto sobre el cobre exportado del Litoral a razón un real el quintal de barrilla y de dos reales el de barra.

La Asamblea de 1864 modificó este impuesto señalando un real al cobre metálico y dos reales a la barrilla y los ejes, y destinó el producto a obras de mejora del puerto de Cobija, su fortificación y la construcción de un camino carril al interior.

El estaño fué gravado con un real la barra y con medio real la barrilla.

IV

Con el propósita de fomentar la agricultura, el gobierno proyectó la fundación de un Banco Hipotecario en Cochabamba buscando una combinación más ingeniosa que práctica.

Las rentas del Monasterio de Santa Clara, deducidos 21.000 pesos para sus gastos ordinarios, debían servir de base al establecimiento del crédito agrícola.

El Banco haría préstamos hipotecarios sólo a las empresas agrícolas por un máximum de cinco años y por una suma no mayor a dos mil pesos con 6% de interés anual, debiendo celebrarse los contratos por el ecónomo del monasterio, el decano de la municipalidad y el fiscal.

No llegó a establecerse el banco proyectado.

La escuela de agricultura fundada en Cochabamba por ley de la Asamblea nacional de 1861, en la casa quinta donada por el filántropo español D. Francisco de Viedma, fué suprimida después de tres años

de esfuerzos inútiles por conseguir algún provecho en favor del mejoramiento agrícola. Los alumnos que carecían de preparación para seguir los cursos de agronomía, escasearon mucho, y los pocos que quedaron en la escuela a fines de 1864, tuvieron que desertar en masa para librarse de un aprendizaje penoso, y considerado de problemática aplicación provechosa en aquella época.

Para amortizar los bonos del descuento de guerra de 1860 y 1861, se destinó la suma de 40.000 pesos trimestrales, que las aduanas de La Paz, Oruro y Cobija debían entregar en los tesoros de La Paz y Sucre, donde los interesados harían propuestas en pliego cerrado indicando el precio de la amortización de sus bonos. La junta de amortización aceptaría las propuestas más bajas hasta el monto de los 40.000 pesos del fondo asignado al servicio.

No eran todavía usadas las estampillas de correo para el franqueo de las cartas. Corresponde al gobierno del general Achá la creación de los primeros sellos postales el año 1863, con tipos de 1 real, 1 real ½ y 2 reales.

Puesta en licitación la nueva renta, no alcanzó sino a 17.000 pesos.

Esta iniciativa fué desenvuelta en el gobierno de Melgarejo, como se verá en el capítulo correspondiente.

V

Desde el año 1856 no se había hecho una reforma sustancial en el régimen aduanero. El gobierno

dictó un nuevo arancel el año 1864, manteniendo la tarifa diferencial para las internaciones por Cobija, como se verá a continuación por el resumen de los principales artículos:

	ADUANAS DE LA PAZ Y ORURO.	ADUANA DE COBIJA.
Joyas, libros impresos, ámbar, azogue, &.....	3%	3%
Aceites, bacalao, añil, pianos, &.....	10%	6%
Efectos de algodón, tocuyo y demás artículos no clasificados.....	16%	9%
Artículos de seda, lino, lana, calzado, cueros y pieles, cristalería y loza, joyería falsa, perfumería, ropa cosida, talabartería, conservas, tabaco, sombreros, fósforos, velas..	20%	13%
Licores en general.....	20%	20%

Este arancel desechando el proteccionismo de los anteriores, fué inspirado por un fiscalismo sincero. Las altas tasas de 1844 y el prohibicionismo absoluto de ciertos artículos, no habían hecho sino fomentar el contrabando, sin influir en la prosperidad de ninguna industria nacional.

Los artículos argentinos se internaban libres de derechos hasta 1864, en que fueron gravados con el

15% en razón de que los productos bolivianos habían sufrido igual tratamiento en la Argentina; pero los indígenas de la frontera no se sometieron al impuesto y prefirieron abandonar el pequeño tráfico, por lo que el gobierno se vió precisado a liberar la internación de la sal, la bayeta, las carnes secas y el ganado lanar.

En cambio, el ganado caballar y mular fué gravado con 2 $ 4 reales por cabeza.

Se entregó al interés privado la vigilancia de las internaciones por Cobija, contratándose una inspección que se encargaba de evitar el contrabando a condición de percibir una mitad de los derechos que superasen a la suma de 125.000 pesos.

VIII

La Asamblea Nacional de 1864 votó para la gestión del año entrante el siguiente presupuesto:

Gasto nacional.....	$	1.173.498
Gasto local.....	«	1.332.117
	$	2.505.615

Los ingresos fueron calculados en $ 2.136.808 y procedían de los siguientes ramos:

Contribución indigenal.....	$	867.244
Aduanas nacionales.....	»	295.000
Aduanas interiores.....	»	215.129
Impuestos sobre la cascarilla	»	45.500
Diezmos.....	»	269.338
	$	1.692.211

	$	1.692.211
Primicias	»	35.128
Contribución sobre predios...	»	13.426
Diversos impuestos indirectos.....	»	43.070
Papel sellado.....	»	31.150
Papel de títulos.....	»	2.700
Peaje e impuesto sobre ganado.....	»	29.620
Utilidad de la Casa de Moneda.....	»	260.000
Contribución sobre la lista eclesiástica	»	5.000
Penas pecuniarias y eventuales	»	5.840
Censos activos..	»	663
Total.....	$	2.136.808

El servicio de guerra absorve 929.291 pesos, o sea el 43,48% de los ingresos, no obstante de que el ejército permanente, inclusive columnas municipales, sólo alcanza a 1.400 hombres.

Para el pago de los militares sueltos, jubilados e inválidos, se consignó la partida de 251.000 pesos, lo que en realidad hizo subir al 43,48% el servicio de guerra.

CAPITULO IV

LAS FINANZAS DE MELGAREJO

(1ª PARTE)

I.—Consideraciones generales sobre el «sexenio».
II.—Relaciones internacionales.—Tratado con el Perú.—Subvención de Arica.—Tratado con Chile.—La comunidad de Mejillones.—Tratado con el Brasil.—La navegación fluvial.—Libre comercio con la Argentina.
III.—La cuestión monetaria.—«Pesos Melgarejo»—El monto de lo acuñado.—La moneda sencilla de Torretti.—Compra de la maquinaria a vapor.—Pena de muerte contra los monederos falsos.—Proyecto de conversión de la moneda feble.—Las dos combinaciones financieras de Torretti.—La reforma monetaria de Lastra.—Disminución de pastas de plata.—Impuestos y privilegios.
IV.—Los recursos ordinarios del gobierno.—Patentes civiles.—Impuestes al café, al tabaco y a las lanas.—Creación de los timbres de transacción.—Nuevo plan rentístico de 1868.—Abolición de los diezmos.—El presupuesto de 1869-1870.

I

Entre la guerra de secesión de Estados Unidos y la guerra franco-prusiana, hubo una gran actividad económica en el mundo. Era justamente el período próspero intermediario entre las dos crisis comerciales de 1864 y 1873.

A la natural influencia que ejerció ese período en

la marcha económica de los países nuevos de esta parte de América, se unieron factores locales de primer orden, contribuyendo a dar mayor importancia a su desarrollo.

La explotación del huano había creado para el Perú una situación de opulencia fantástica. Bolivia no sólo aprovechaba de la atracción de capitales que ejercía la república vecina con sus contratos de huano, sus empréstitos cuantiosos y sus rumbosidades de todo género, sino que, a su vez, poseía riquezas extraordinarias en minerales y huanos que también atraían a negociantes y capitalistas ávidos de rápidas fortunas.

El descubrimiento de las huaneras de Mejillones que despertó la codicia chilena y trajo la primera invasión al Litoral boliviano, acentuó en forma decisiva la actividad económica de la época.

A los modestos contratos del año 1842, siguieron las grandes negociaciones de Myers Bland & Cº, Gibbs, López Gama, Armand,Meiggs, etc , etc., y vinieron después, en otra esfera, las proposiciones de Church, Piper, Torretti, los contratos de ferrocarriles, las concesiones bancarias, los empréstitos de La Chambre, Concha y Toro, los privilegios de Durrels y demás combinaciones financieras.

Esta grande actividad económica, nueva en el país, coincidió, por desgracia, con el gobierno menos capacitado para encauzarla y obtener de ella los mayores beneficios en favor del progreso nacional.

No parece sino que adrede se hubiera colocado

a la cabeza de la República precisamente a Melgarejo, para malbaratar todas las fuentes de riqueza que en aquel momento brotaban espontáneas del privilegiado suelo boliviano.

Era cuando más se necesitaba de la nerviosidad progresista de Ballivián, o de la ambiciosa testarudez de Santa Cruz, o de la rigidez despectiva y avasalladora de Linares.

Achá con su tranquilidad de espíritu y su ecuanimidad de buen señor, se habría visto tal vez abrumado por el peso de la situación.

Mas, con Melgarejo ocurrió justamente lo contrario. El fué quien abrumó a la situación.....

Mucha parte de la actividad financiera del «sexenio» se debió, sin duda, a la extraña psicología del gobierno, que no a causas económicas fundamentales. Los aventureros del negocio fácil y espléndido vinieron atraídos por las prodigalidades de un gobierno de opereta, con quien era fácil tentar las más audaces combinaciones. Sólo así se explican negocios y propuestas que no se presentarían en una situación normal y por gentes que se estiman.

Las tiranías ofrecen campo ancho para las especulaciones, y no hay régimen tiránico que no tenga sus favoritos.

Hay dos fuerzas diametralmente opuestas que aparecen obrando en todos los actos del gobierno de Melgarejo. Por un lado es el progreso moderno que impone sus métodos, sus grandes empresas, sus combinaciones audaces. Por otra parte, es la acción del medio, la situación de fuerza, la rudeza del soldado,

la extravagancia cerebral, que determinan y caracterizan los actos.

Y de esta doble solicitación de fuerzas, se derivan en lo económico y financiero los errores más estupendos, las especulaciones más dudosas y también las más acertadas combinaciones.

No hay nada pequeño durante el período que vamos a estudiar en su aspecto financiero. Es el período más raro, menos estudiado y más contradictorio. Los errores son garrafales: no los hay pequeños; las audacias son temerarias: no las hay menores. Todo parece agrandado y deformado como en una noche de fiebre.

Hay contradicciones como éstas:

Se decreta la pena de muerte contra los monederos falsos, y es el gobierno quien impunemente falsifica la moneda nacional.

Se quiere mejorar la acuñación monetaria, adquiriendo maquinarias modernas, y se contrata con un especulador que propone acuñar moneda de curso forzoso con la mitad de la ley corriente para regalar después la maquinaria al Estado.

Se trata de fomentar el progreso agrícola del país, y se confiscan los bienes de los indígenas para venderlos en baratillo a los amigos del gobierno.

Hay temeridades como éstas:

Se nombra ministro de hacienda al ciudadano chileno D. Aniceto Vergara Albano, y como el buen sentido aconsejara la renuncia, se le nombra Ministro Plenipotenciario en Chile para que negocie un empréstito .....

A Meiggs se le hace dueño de todas las riquezas del Litoral en cambio de un empréstito de cuatro millones de pesos que podía entregar en obligaciones suscritas por él mismo.

A Piper se le promete la cuarta parte de la Nación para que colonice, y se le concede el privilegio de navegación de todos los ríos.

De otro lado, existen, aunque pocas, medidas acertadas como éstas:

Se autoriza en condiciones satisfactorias el establecimiento de los primeros bancos de emisión y de hipotecas.

Se implanta el sistema métrico decimal.

Se adoptan nuevas bases rentísticas.

Se decreta la reforma monetaria en términos racionales y definitivos.

Y, por último, en medio de una aparente opulencia, el gobierno nunca pudo cubrir los sueldos. Alguna vez los pagó en remate público, y vivió descontando el porvenir.

A su caída el país quedó en la quiebra más espantosa.

Esta quiebra quiso reparar la Asamblea de 1871. Ballivián puso después todo su noble empeño; pero vino Daza, y la quiebra fué liquidada sólo en 1879 por mano de Chile.

II

Las dificultades del régimen aduanero hicieron concebir al gobierno del general Achá la conveniencia de situar la recaudación en el puerto de Arica. El Perú que no deseaba otra cosa para mantener la

prosperidad de sus departamentos del Sud, evitando la desviación del comercio boliviano por Cobija, convino fácilmente en la negociación, la que se suscribió en Lima a 5 de septiembre de 1864 bajo las siguientes cláusulas principales:

Se reconocieron ambas repúblicas la más amplia y absoluta libertad de comercio para sus productos naturales e industriales. Los de procedencia extranjera se internarían también a Bolivia libres de todo derecho.

El tránsito por Arica se declaró completamente libre, con exclusión de los derechos de pontazgo y peaje.

Los artículos extranjeros importados para Bolivia pagarían los derechos de aduana al Perú conforme a su arancel, quedando de propiedad de esta república el monto de lo recaudado.

Bolivia implantaría en la aduana de Cobija el arancel peruano con la rebaja de la tercera parte de los derechos.

En cambio de estas concesiones, el Perú abonaría a Bolivia, en calidad de subvención anual, la suma de 450.000 pesos pagaderos en Tacna o Arica por mensualidades de 37.500 pesos.

Serían libres de derechos de importación las máquinas, herramientas, instrumentos, acero y hierro en bruto.

La duración del tratado se señaló en cinco años contados desde su ratificación.

Este tratado fué aprobado y puesto en vigencia el año 1865, habiéndose cumplido lealmente sus estipulaciones.

Salta a simple vista que la combinación era inconveniente para Bolivia, si bien facilitaba su recaudación asegurándole un rendimiento fijo y permanente.

Desde este punto de vista nada había que observar. Las aduanas nacionales e interiores estaban calculadas en 510.000 pesos de rendimiento anual. Descontada la oficina de Cobija, que más o menos podía producir 80.000 pesos, el monto entregado a la recaudación peruana no alcanzaba sino a 430.000 pesos. En cambio el Perú ofrecía 450.000 pesos libres de cuidados y de gastos de recaudación.

Empero, desde otro punto de vista, no era dable desconocer lo perjudicial del pacto.

Descontando la parte de limitación de soberanía nacional que se imponía Bolivia al entregar su renta más típica a una nación extraña, cuyos aranceles aceptaba también para otras aduanas, había los siguientes perjuicios materiales:

En primer lugar, la libre internación de productos peruanos era la muerte de la industria nacional, a tal punto que Bolivia no pudo gravar ni los licores de aquella procedencia que, merced a esta protección eficaz y excluyente, dieron fin con la industria alcoholera del país.

En segundo lugar, la imposición de derechos peruanos en Cobija, imposibilitaba la política de atracción comercial de que tanto se habían preocupado los gobiernos anteriores. Arica tenía que ser el gran centro comercial, quedando abandonada a su propia y mezquina suerte la única playa boliviana, en los precisos momentos en que se descubrían sus grandes riquezas.

Ningún tratado fué más contrario a los intereses comerciales y políticos de Bolivia, que el de la centralización aduanera en Arica.

Su tentadora facilidad de asegurar recursos financieros para un fisco en bancarrota, influyó sin duda para que el año 1870 se renovaran sus principales cláusulas empeoradas en la cuantía de la subvención, que se redujo a 405.000 pesos anuales, y en el régimen aduanero de Cobija, donde no podían rebajarse los derechos más allá de la tercera parte del arancel peruano.

El conflicto creado por la ocupación chilena de Mejillones a que la dignidad boliviana respondió con el *casus-belli* afrontado por la Asamblea de 1863, se resolvió durante el gobierno de Melgarejo mediante el tratado de 1866, cuyas estipulaciones financieras merecen anotarse como antecedentes necesarios al estudio de las negociaciones de empréstitos, ferrocarriles, huanos, salitres, minas, etc., que se relacionan con el Litoral boliviano de 1879.

Fijado el paralelo 24° como el límite que en adelante separaría a las repúblicas de Bolivia y Chile, se estableció «no obstante la división territorial estipulada», la repartición, por mitad, de los productos provenientes de la explotación del huano de Mejillones y de los demás depósitos que se descubrieren en el territorio comprendido entre los grados 23 y 25, como también los derechos de exportación de minerales cobrados en el territorio citado.

Se obligó Bolivia a habilitar el puerto de Meji-

llones, por donde se exportarían libres de derechos los productos del territorio comprendido entre los 24° y 25°, y se internarían en la misma forma los productos chilenos.

De las recaudaciones líquidas de la aduana de Mejillones, se deduciría un 10% para indemnizar a los industriales perjudicados por la suspensión de trabajos que decretó el gobierno de Chile en febrero de 1863. La indemnización fué fijada en 80.000 pesos.

No interesa a la índole de este trabajo el recordar los antecedentes y los medios de que la diplomacia chilena se valió para obtener ese tratado, que ciertamente no hace honor a los que en él cifraron un éxito. La historia política se ha encargado de calificar ese pacto, y un notable escritor chileno, el señor Valdés Vergara, hablando del gobernante boliviano a quien cupo la triste celebridad de aprobarlo, dice lo siguiente: «Melgarejo fué un gobernante de carnaval, cuyos actos harían reir si, a veces, no hubiesen sido sangrientos, y si el escenario de ellos no hubiera sido un pueblo desgraciado, muy digno de mejor suerte.

«Pues bien, el gobierno de Chile hizo de ese tiranuelo grotezco su aliado personal, con él pactó el tratado de límites de 1866 y ante él acreditó un Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, que pronto fué su confidente y su amigo. Cuando este diplomático puso término a su misión de ministro de Chile en Bolivia, Melgarejo tuvo la peregrina idea, propia de su cerebro descompuesto, de nombrarle ministro de hacienda, y como él no aceptara este cargo, le acreditó en el carácter de Enviado Extraordinario y Mi-

nistro Plenipotenciario de Bolivia en Chile. Y ¡admírese hoy el país!, el gobierno de Chile, prestándose a ser actor en la comedia, recibió a ese personaje chileno en tal carácter y siguió tratando con él de nuestras cuestiones con Bolivia». (1)

Al gobierno de Melgarejo corresponde también la celebración del primer tratado de límites y comercio con el imperio del Brasil. Suscrito en La Paz el 27 de marzo de 1867, fué aprobado por ley de 17 de septiembre de 1868.

Sus principales estipulaciones que pueden interesar a la historia económica y financiera de Bolivia, consisten en lo siguiente:

Ambos países se reconocen el libre tránsito, y el Brasil permite, como concesión especial, que sean libres para el comercio y navegación mercante de Bolivia, las aguas de los ríos navegables hacia el Atlántico, concediendo Bolivia en reciprocidad la libre navegación de todos sus ríos.

Mientras que de un lado se permitía el derecho de pasaje al mar, del otro se abrían todas las puertas sin restricción.

La navegación del alto Madera, a partir de las cachuelas de San Antonio, sólo debía permitirse a las dos naciones contratantes.

El Brasil se comprometía a conceder a Bolivia el uso del camino que llegara a formar desde la primera cachuela del Madera hasta la de San Antonio.

---

(1)—*El Mercurio* de Santiago, 25 de agosto de 1911, citado en el libro «La Guerra de 1879» por Alberto Gutiérrez.

En cambio de estas célebres concesiones, Bolivia cedió sus derechos territoriales en más de 100.000 kilómetros cuadrados.

Con la República Argentina se suscribió el tratado de comercio y navegación el 9 de julio de 1868, que fué aprobado en diciembre de 1869.

Sobre la base de la reciprocidad perfecta y la libre concurrencia industrial, se reconocieron el libre tránsito del comercio nacional y extranjero por los puertos marítimos y fluviales, por las vías terrestres y por las férreas que llegaren a establecerse, «sin más gravámenes que los muy módicos de almacenaje, pontazgo y peaje».

Se pactó la libre navegación del Plata y sus afluentes, sin otras contribuciones que las que cada país impusiere a sus propios buques.

La introducción por tierra de artículos nacionales o extranjeros, debía hacerse con sujeción a los impuestos establecidos en cada estado.

Cada país nombraría un empleado que ejerza las funciones de vista en las aduanas donde se despachen mercaderías para el consumo o de tránsito, a fin de que se hagan las certificaciones o reconocimientos necesarios a garantizar el tráfico comercial.

Este tratado no ha sido hasta hoy renovado, y siguen virtualmente rigiendo sus estipulaciones.

III

Apesar de las numerosas tentativas de saneamiento monetario hechas desde 1848, no se había lle-

gado a ningún resultado práctico, y el país seguía víctima de la moneda feble. Esta situación se agravó en extremo durante el gobierno de Melgarejo, en que se acuñaron las medallas de 400 granos de peso y 8 dineros de ley.

«Con motivo de la rebelión del 25 de mayo de 1865, que acabó con la victoria de Viacha el 24 de enero de 1866, el Dr. Jorge Oblitas, jefe superior del Sud, mandó acuñar la antigua moneda feble de 400 granos, con la denominación de «pesos Melgarejo», a fin de hacer frente a las imperiosas necesidades de ese momento de crisis política y monetaria. La secretaría general de Estado de Melgarejo, por orden suprema de 3 de junio del mismo año, suspendió la acuñación de dicha moneda y prometió recogerla en breve, penetrándose de los graves inconvenientes que su circulación ofrecía al comercio y crédito de Bolivia.

«Cinco meses después, el 12 de noviembre de 1866, se declaró la depreciación oficial del «Melgarejo» al valor de seis reales, acordándose cubrir la diferencia con vales del crédito público, a cuyo fin se organizaron comisiones encargadas de inscribir el monto del feble circulante». (1)

La depreciación sólo comprendió los pesos, quedando con su valor nominal los «tostones de dos caras» y los tomines o pesetas, por razón de que estas monedas fraccionarias no interesaban sino a la circulación interna.

Las comisiones nombradas funcionaron simultá-

(1)—Casto Rojas.—«Cuestiones Económicas y Financieras».—1909.

neamente el 31 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 p. m. y otorgaron vales por el 25% de los pesos presentados.

En lo sucesivo, según el decreto de 12 de noviembre de 1866, no se emitirían sino las piezas señaladas por la ley de 29 de junio de 1863, obligándose el gobierno a reintegrar la diferencia de la depreciación del «Melgarejo».

Alcanzaron a 83.000 pesos los vales emitidos para cubrir la depreciación, lo que sólo correspondía a 332.000 «Melgarejos» que se presentaron al censo monetario de 1866.

La amortización de los citados vales se hizo en muy pequeña escala. A la caída de Melgarejo, quedaban 75.000 pesos en manos del público.

No obstante las promesas del decreto de 1866 y el importante reglamento monetario de 1869 que reformando la ley de 1863 estableció la unidad del «boliviano» con múltiples y submúltiples decimales, continuó la acuñación de los tostones y pesetas de 8 dineros con una profusión de que dan testimonio las siguientes cifras:

Se amonedaron 1.060.653 marcos de plata con un valor nominal de 12.200.000 pesos y un valor intrínseco de 9.117.000, lo que arroja una utilidad de más de tres millones de pesos durante el gobierno de Melgarejo.

No sin razón decía Morales en su mensaje a la Asamblea de 1871: «La moneda nacional ha sido falsificada: el comercio ya ha sufrido sus fatales conse-

cuencias; el crédito nacional está comprometido y se hace necesario dictar una providencia definitiva para la conversión de ese circulante que es la vergüenza de Bolivia».

Aquí cabe referir la célebre propuesta de Clemente Torretti para la acuñación de moneda sencilla, aceptada por decreto de 7 de febrero de 1867.

He aquí las bases principales del negocio:

Se autorizaba a Torretti para instalar una maquinaria a vapor en La Paz y acuñar en piezas sencillas la cantidad de 50.000 marcos de plata en el término de tres años, dándose para el efecto el privilegio de rescatar las pastas necesarias en Oruro, La Paz y Mejillones (Corocoro).

Las piezas acuñadas serían «tomines» de 100 granos de peso, reales de 50 granos y ½ reales con 25 granos.

La ley de la nueva moneda sería de 6 dineros, es decir, 500 milésimos fino. No había necesidad de darle mayor fino, porque según el decreto se trataba de moneda sencilla destinada a las transacciones internas únicamente, en cuya virtud el gobierno decretaba su curso forzoso.

En cambio de esta concesión, el gobierno tenía derecho a un 8% de utilidad y a la maquinaria que íntegramente se adjudicaría al Estado una vez terminada la acuñación.

Puesta en cifras la célebre contrata Torretti, arroja los siguientes resultados:

COSTO DE ACUÑACIÓN

50.000 marcos de piña a Bs. 8,50.....	Bs.	425.000
Costo de acuñación, el 5%.....	«	21.250
Costo de la maquinaria, calculado (1)..	«	65.000
Total del costo.....	Bs.	511.250

PRODUCTO DE LA ACUÑACIÓN

Con 50.000 marcos de plata fina, o sean 100.000 marcos a ley de 6 dineros, debía acuñarse el valor nominal de..... ..... Bs. 921.600

Deducidos costo de acuñación y maquinaria.....	«	511.250
quedaba una utilidad líquida de.....	Bs.	410.350
Correspondiendo al gobierno el 8% o sean	«	32.820
resultaba para el contratista el saldo de	Bs.	377.530

Según estos cálculos, mientras que el Estado recibía 97.820 bolivianos, importe del 8% y de la maquinaria, el contratista Torretti ganaba 377.530 bolivianos en tres años.

Era demasiado arriesgada la operación, porque ante el cálculo más simple resaltaba la enormidad del negocio, que por otra parte iba a pesar sobre las clases más desvalidas de la sociedad, encareciendo los consumos en la misma proporción en que se depreciaba la nueva moneda de curso forzoso.

---

(1)—El señor Ernesto O. Ruck contrató con el gobierno del general Achá la adquisición de una maquinaria a vapor por 65.000 pesos, corriendo de su cuenta el pago de los operarios contratados en Europa calculados en 5.000 pesos.

Esta reflexión de buen sentido se impuso, sin duda, en el espíritu de Torretti, quien receló de su propuesta e introdujo una modificación, solicitando, al mismo tiempo, que a falta de Cónsul italiano interviniera el de Prusia para asegurar la legitimidad de sus derechos. La modificación consistía en que suspendiéndose por cualquier causa la acuñación de la moneda, el gobierno se obligaba a comprarle la maquinaria por el precio de factura y reconocerle los gastos impendidos en su traslación.

No resultaron inútiles las previsiones de Torretti. La Asamblea de 1868 ordenó la rescición del contrato y autorizó la compra de la maquinaria en 200.000 pesos, con lo que el contratista realizó siempre una ganancia estupenda, aunque no en la cuantía de su primitiva combinación.

El presidente Morales, dando cuenta a la Asamblea de 1871 acerca de la maquinaria adquirida en tan dudosas condiciones, decía: «La maquinaria de la Moneda de Potosí ha sufrido una innovación de trascendencia y funesta para el país».

Y el Dr. Casimiro Corral, secretario general del gobierno de la revolución, informaba a su vez: «La bondad de la maquinaria se asegura que no corresponde al valor que representa, pues que con él se habrían podido obtener tres maquinarias de mejores condiciones».

La imperfecta acuñación de la moneda «Melgarejo» y su bajísima ley (666 milésimos), dieron ancho campo a la falsificación dentro y fuera del país.

Para evitar el fraude que hacía competencia a la falsificación fiscal, el gobierno decretó a raíz de la contrata Torretti la pena de muerte para los monederos falsos, agregando que renunciaba a usar del derecho de gracia, en cuya virtud los jueces debían mandar ejecutar la pena capital sin elevar el proceso ante el Ejecutivo.

El país no podía vivir más tiempo en medio al desastre monetario que le aniquilaba.

Se hizo cargo de esta situación la Asamblea de 1868, que por ley reservada de 11 de septiembre autorizó la conversión de la moneda feble con moneda de buena ley. El quebranto de la conversión, esto es el 25%, corría de cuenta del Estado, debiendo cobrarse al público únicamente el 5% como gasto de acuñación de las nuevas piezas.

Para llevar a cabo la operación, el gobierno contrataría un empréstito por la suma necesaria con garantía de los productos de Mejillones y de la subvención aduanera de Arica deducidos los 160.008 pesos destinados al servicio del empréstito de Chile.

Una vez asegurado el éxito de la operación se promulgaría la ley y se reglamentaría la conversión.

La ley fué promulgada el 6 de diciembre de 1869, en virtud de haberse concluído la negociación del empréstito con Enrique Meiggs el 29 de noviembre del mismo año.

Esta operación, contratada por cuatro millones de pesos en las desastrosas condiciones que se verán en el capítulo siguiente, dió lugar al contrato de con-

versión de la moneda feble suscrita con Clemente Torretti, que hizo una nueva tentativa de grueso negocio.

La primitiva propuesta presentada a principios de 1870, consistía en que Torretti compraría toda la moneda feble reducida a barras de 330 marcos cada una, pagando Bs. 8,80 por marco a la ley suprema, adjudicándosele gratuitamente el cobre de la liga.

Para pagar el impuesto de las barras, Torretti haría venir oro sellado sin pagar derechos, corriendo además de cuenta del gobierno el pago de fletes, seguro marítimo y demás gastos de conducción.

A fin de hacer inmediatamente realizable la operación, el gobierno tendría dispuesta la cantidad necesaria para cubrir el 25% de quebranto de la moneda feble.

Hallándose en tramitación esta propuesta, presentó Torretti nuevas bases, que fueron aceptadas por el gobierno y merecieron después, en 3 de octubre de 1870, la aprobación definitiva del Congreso de Oruro.

He aquí las nuevas bases:

El gobierno pagaría dos millones y medio de pesos fuertes al contratista por la diferencia del feble al fuerte y por los gastos de transporte, empleados etc., etc., que demandasen las operaciones de la conversión.

Comenzarían éstas, sesenta días después de entregados los dos y medio millones y durarían por el improrrogable término de cuatro meses.

La conversión se haría de toda la moneda feble

circulante, pero la emitida de 1830 a 1857 sólo se convertiría en los primeros treinta días.

En cambio de la feble, se entregaría a los tenedores pesos bolivianos de buena ley, cobrándoles el 5% por gastos de acuñación.

La moneda feble convertida se reacuñaría en la Moneda de Potosí, con el aditamento de la plata necesaria para exaltar su ley.

El contratista internaría las pastas de plata y se obligaría además al Sr. Durrels, que gozaba de un privilegio de exportación de metales de Tolapampa, Tomave y Coroma, para que durante cuatro meses interne su producción a la Casa de Potosí, prorrogándosele por igual tiempo el privilegio.

El excedente de moneda feble, que por falta de plata fina no llegara a reacuñarse, se exportaría con guía libre por el contratista.

La remuneración aparente de Torretti consistía en lo siguiente:

1º—El 5% de gasto de acuñación cobrado a los tenedores de la moneda feble;

2º—El beneficio que resultare de las pastas internadas para exaltar la ley de la feble;

3º—El exceso de la liga de cobre;

4º—La libre exportación de la plata que no llegare a reacuñarse por falta de pastas nuevas para aumentar su ley.

El gobierno hubiera podido hacer la conversión con el mismo mecanismo y en mejores condiciones.

No había ninguna razón para entregar a Torretti una operación en que sin correr el más peque-

ño riesgo y con los capitales del Estado, tenía todas las ventajas para hacer un negocio estupendo.

Sólo el 5% de acuñación representaba medio millón de bolivianos, de los que deducido el costo real de la operación, quedaban para el contratista más de 88.000 bolivianos, pues la Casa de Moneda, pagados todos sus gastos, ganaba Bs. 0,75 por marco emitiendo moneda de buena ley (1).

La internación de pastas y su beneficio, calculando sólo en 40.000 marcos destinados a realzar la ley, iba a producir cuando menos una utilidad de treinta mil bolivianos.

Agregando las demás ventajas, el monto de las ganancias visibles del contratista podía calcularse en unos ciento cincuenta mil bolivianos.

Esto en el supuesto de que los dos millones y medio de bolivianos se hubieran empleado íntegramente en la conversión, o lo que es lo mismo que en los cuatro meses improrrogables se hubieran presentado los seis millones de moneda feble en que se calculaba la circulación. Cada millón que dejara de presentarse a la conversión importaba una ganancia de 250.000 bolivianos partibles por mitad con el gobierno. Y lo más probable era que en los cuatro meses no se hubieran convertido ni 4 millones de pesos.

Una última ventaja ofrecida por Torretti. Se comprometía a mandar acuñar por su cuenta 100.000 pesos en moneda de vellón de cobre y níquel y poner-

(1)—Este 5% se declaró que correspondía al Estado, pero Torretti en cambio no debía pagar sino 1% por la reacuñación.

la gratis en Cobija para que el gobierno la mande traer.

La contrata Torretti quedó sin efecto por expresa declaración del gobierno que derrocó a Melgarejo, tanto por no haberse realizado el empréstito Meiggs, cuanto porque fueron declarados nulos los actos de aquella dominación.

El gobierno de Melgarejo dictó el año 1869 su importante decreto monetario, que puede considerarse como la reforma más completa que se haya expedido en la materia.

Los reglamentos de 1848, de 1859 y de 1863, fueron sucesivamente pasos muy avanzados hacia la regularización monetaria y al establecimiento de un sistema más compatible con la economía moderna; pero ninguno de ellos encaró el problema en toda su integridad, ni lo resolvió bajo un plan uniforme y definitivo.

Corresponde al ministro Sr. Manuel de la Lastra haber echado las bases del nuevo sistema, fundándolo por entero en el métrico decimal, que el decreto de 1863 no lo adoptó sino en parte, dejando en lo demás subsistente el sistema español.

El supremo decreto de 12 de octubre de 1869 adoptó por unidad monetaria el «boliviano» de plata con peso de 25 gramos y 900 milésimos fino, teniendo 35 milímetros de diámetro.

De este punto de partida fijó los submúltiplos en medios bolivianos, quintos de boliviano, décimos y vigésimos, con la misma ley y el peso proporcional correspondientes a la unidad monetaria.

La tolerancia en la ley fué mantenida en tres milésimos para todas las piezas, y en el peso ponderal se estableció la siguiente proporción: 3 miligramos en el boliviano, 5 en el medio boliviano, 6 en el quinto y 8 en el décimo y medio décimo.

Se decretaron cinco clases de monedas de oro de 900 milésimos de ley, en la forma siguiente:

De 20	bolivianos	con	32,258	gramos.
De 10	id.	«	16,129	«
De 5	id.	«	8,064	«
De 2	id.	«	3,226	«
De 1	id.	«	1,613	«

La tolerancia en la ley se señaló en dos milésimos. En el peso, se fijó la escala proporcional que sigue: 1 miligramo en la pieza de 20 bolivianos, 2 en la de 10 bolivianos, 2 ½ en la de 5 bolivianos, 3 en la de 2 bolivianos y 4 en la de 1 boliviano.

Fueron adoptadas como monedas de vellón, piezas de cobre y níquel de 2, 1 y ½ centavos.

En cuanto a los tipos y leyendas, las armas de la República en el anverso, con la leyenda de «República Boliviana» y once estrellas en el exergo inferior; y la corona de laurel y encina en el reverso con el valor de la pieza al centro, el lema «la unión es la fuerza» en el exergo superior y las demás indicaciones de fino, peso y año, fueron reconocidos por el decreto del año 1869, tanto para las piezas de plata como para las de oro.

La nueva maquinaria de amonedación a vapor, no hizo posible poner ninguna leyenda en el cordón, por lo que se adoptó simplemente el estriado.

Quedó prohibida la exportación de oro no amonedado y se fijó el valor oficial en 612 bolivianos por kilogramo de oro fino.

La plata fué avaluada en Bs. 38,50 el kilo por el que antes sólo se pagaba Bs. 38,10.

En la circular con que el ministro Lastra hizo conocer el nuevo decreto monetario, manifestó que el país se hallaba desde hace 40 años bajo la presión continua de una contribución indirecta a consecuencia de la mala moneda, y que era indispensable acometer la reforma adoptando por completo las fórmulas del sistema métrico decimal.

La nueva moneda debía implantarse desde 1870, pero los acontecimientos posteriores y la caída de Melgarejo, trasladaron al nuevo gobierno la solución del importante problema.

El rescate de pastas de plata siguió practicándose por el Banco de Rescates de Potosí, que durante el gobierno de Melgarejo alcanzó a 707.351 marcos, o sea un promedio anual de 141.470 marcos de internación.

Por contrata particular se fundaron sucursales de rescate en Tupiza, Cotagaita, Ocurí y otros asientos mineros.

Lo que debilitó considerablemente la internación de pastas fué la concesión de privilegios de libre exportación en favor de varios individuos, entre ellos el señor Durrels.

La disminución de pastas de plata encareció el cambio por la mayor demanda de letras que el comer-

cio hizo a falta de retornos metálicos. Y como los exportadores privilegiados eran los únicos giradores, especulaban doblemente ganando en las pastas y en el cambio.

Al principio de su gobierno (1865), Melgarejo votó un impuesto general del 2% sobre la exportación del cobre. Mas, oyendo las representaciones que le hicieron los industriales de Corocoro con motivo de un viaje que hizo allí, canceló todo impuesto a partir de 1866.

Las patentes mineras fueron fijadas en 4 pesos mensuales por cada grupo de 1 a 3 estacas en trabajo, y en 2 pesos para las minas simplemente amparadas.

Bastaba el trascurso de un mes para el despueble de la mina que no hubiese sido amparada con el pago mensual correspondiente.

Se concedieron privilegios de 10 años a varios individuos para la explotación del petróleo en Tarija y otros lugares, para la de borato y azogue en los Chichas; pero ninguno de estos privilegios se formalizó.

IV

Siempre estaba urgido el gobierno. La falta de orden más que la falta de recursos, lo ponían en continuos apuros de dinero.

Fuera de los recursos extraordinarios de que echó mano con una amplitud exorbitante como se verá en el siguiente capítulo, votó varios impuestos de los que merecen citarse, por su novedad, los siguientes:

Nadie podía ejercer los derechos civiles sin haber pagado previamente la patente anual de un boliviano. Era una capitación forzosa.

Los licores fueron gravados con 4 $ el quintal, pero el gobierno cayó en cuenta que el tratado con el Perú los declaraba libres y tuvo que cancelar el impuesto.

Se gravó el expendio de tabaco con 4 reales por arroba, y los cueros vacunos con 12 reales cada uno si eran de toro, y con 8 reales los demás.

Los toques de campana no podían hacerse sino mediante pago de 5 $ de patente por cada 5 minutos, bajo penas severas.

Con el nombre de impuesto patriótico se elevó al 8% el que gravaba la internación de ganado argentino.

La lana de alpaca fué gravada con 2 pesos el quintal, y con un peso la de oveja.

El café pagaba 50 centavos por arroba.

Empero, la gran novedad rentística del gobierno Melgarejo fué la creación de las estampillas y de los timbres de transacción.

Los sellos postales, ya ensayados por el gobierno de Achá, se implantaron en mejores condiciones.

Los de transacción recientemente creados, abarcaron todos los actos y contratos de la vida civil.

Debían llevar timbre de 10 centavos, los contratos privados hasta mil bolivianos, agregando otros diez centavos por cada mil excedente.

Las letras de cambio, las pólizas de aduana, los boletos de pasaje marítimo, las pólizas de seguro, cada copia fotográfica, los pagarés por cada mil pe.

sos, etc., etc., estaban gravados con el timbre de 10 centavos.

Los boletos de espectáculos debían pagar 50 centavos si eran de palco y 5 centavos las simples entradas.

Los bancos de emisión estaban gravados con el doble del impuesto de los pagarés sobre el mayor monto de su emisión anual, exceptuándose los cheques que eran libres.

Se dió una extensión considerable al nuevo impuesto, lo que motivó muchas resistencias.

El congreso de 1868, al que se debe el establecimiento del sistema métrico decimal y también la venta de las tierras de origen, creó un nuevo plan rentístico formado de los siguientes recursos:

Contribución personal directa a razón de 2 bolivianos por todo individuo de 21 años de edad hasta 55 años inclusive.

Contribución indigenal de 4 Bs. por persona, quedando en cambio eximidos los indígenas del pago de derechos procesales y uso del papel sellado.

Contribución predial a razón del 3 por mil sobre el valor venal de las propiedades rústicas y del 1 por mil sobre las urbanas.

Abolición de la contribución territorial.

Abolición de los impuestos sobre frutos, llamados diezmos, primicias y veintenas.

Abolición de los impuestos sobre el café, el tabaco y la coca.

Reducción del impuesto sobre timbres de transacción que debía hacer el gobierno.

Para el establecimiento de las contribuciones personal y predial, debían levantarse empadronamientos y catastros. Entre tanto quedarían vigentes los antiguos impuestos.

El gobierno se preocupó de poner en ejecución la nueva ley, y reglamentó la facción del censo y del catastro, organizando comisiones especiales.

Para el bienio de 1869—1870 se votó el primer presupuesto del gobierno de Melgarejo, pues los anteriores se habían regido con simples autorizaciones sobre el presupuesto de 1865.

Los ingresos fueron calculados en..... Bs. 2.190.888,18
y los egresos en..... » 2.854.666,02

El déficit anual de..... Bs. 663.777,84
debía cubrirse en los dos años con un empréstito externo autorizado por dos millones de bolivianos.

El déficit del bienio 1871—1872 que alcanzó a 1.053.085 debía cubrirse en la misma forma.

CAPITULO V

LAS FINANZAS DE MELGAREJO

(2ª PARTE)

I.—El caos financiero.
II.—Las grandes negociaciones de la época.—Los cupos forzosos.—La Comisaría de Guerra y la Caja Central.—La misión financiera de Vergara Albano.—Empréstito Concha y Toro.—Contrato Luciano Arman.—Empréstito de la Chambre & Cº.—Las negociaciones de López Gama.—Empréstito Meiggs y negocio de huanos.—Los orígenes de la «Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta».
III.—La empresa Church.—La propuesta Piper & Cº.—Navegación del Pilcomayo.
IV.—La venta de las tierras de comunidad.—El monto de los remates.—Los errores de la Asamblea de 1868 en orden al problema social y agrario.—Venta de la finca de Cliza.
V.—«Banco Boliviano».—«Crédito Hipotecario de Bolivia».
VI.—La liquidación de la bancarrota.

I

No hay nada más complicado que las finanzas de un régimen de fuerza. Es por eso que las del gobierno de Melgarejo, son las menos fáciles de estudiar y coordinar.

«No esperéis encontrar datos seguros—decía el mensaje del presidente Morales a la Asamblea de

1871—del modo cómo se administraron las rentas públicas: los archivos, los libros y las cuentas, son un verdadero caos; parece que sistemáticamente se hubiese desarreglado. Lo único que puedo asegurar-os es que he encontrado al país con una deuda de más de cuatro millones, con un déficit interior que pasa de dos millones, con todas las rentas consumidas con un año de anticipación, sin fondos los tesoros y comprometido el crédito público por compromisos onerosos: el agiotismo fué elevado a sistema oficial; las propiedades del Estado han sido vendidas con lesión enormísima, y hasta la propiedad particular fué arrebatada y usurpada».

Don Casimiro Corral, secretario general del gobierno, agregaba en su memoria presentada ante el mismo congreso:

«Hace largos años que los ministros han venido a este augusto recinto a presentar a los legisladores las cifras del déficit creciente del presupuesto; pero ninguno de ellos ha venido como yo a declarar la hacienda pública en una verdadera bancarrota; porque he encontrado todos los impuestos y contribuciones consumidos con un año de adelanto; porque todos los presupuestos de dos años están insolutos; porque Bolivia, que jamás debía al extranjero, ha quedado con una exorbitante deuda; y porque el país está envuelto en un cúmulo de reclamaciones pecuniarias».

Es esta situación que vamos a procurar describir en sus grandes líneas, desentrañando los negocios de la época y el criterio de los hombres que maneja-

ron la finanza boliviana, como cerebro y acción intelectual de Melgarejo.

En sí Melgarejo no era, sin duda, ni mejor ni peor que los demás caudillos militares de su tiempo. Era más bien la síntesis extravagante de todos ellos, con más audacia, con más temeridad, con mayor convencimiento de que tenía que componer el mundo. Era un maniático de grandeza épica, y como tal tenía arranques generosos, acciones nobilísimas que, muchas veces, a fuerza de agrandarse, caían en lo grotezco, y, otras veces, del ridículo y de la caricatura, pasaban al cuadro de horror y de sangre.

El ambiente político infectado por el militarismo y el populacherismo de anteriores épocas, fué seguramente propicio al desarrollo de un sistema que compendiaba ambas extravagancias en una fórmula mayor. Sólo así se explica cómo hombres de reconocida capacidad, espíritus cultivados, lejos de encerrar en un manicomio a esa especie de insano para salvar al país de sus extravagancias, prefirieron servirle y formaron la acción intelectual de su gobierno.

Esa acción pudo y debió ser eficaz al país. Melgarejo, como todo maniático de grandeza, era dócil a las sugestiones en sentido de lo grande y de lo bueno. Era una fuerza bruta cabal a su tiempo, que encaminada sin sugestiones malsanas ni cálculos menguados, habría sido eficiente al progreso material.

¿Lo fué?—La historia política dice que no. Veamos lo que la historia financiera puede suministrarnos para juzgar a los hombres que fueron cerebro y acción intelectual del tirano.

II

Al día siguiente del golpe audaz que le hizo dueño de la República, decretó Melgarejo su primer empréstito forzoso en Cochabamba. Varios vecinos pudientes fueron apresados mientras pagaran los cupos señalados, y la municipalidad fué intimada para entregar algunos fondos. Como el tesorero resistiese, se decretó la supresión del ayuntamiento y el traspaso de su tesoro a la comisaría de guerra.

Después de esta primera cuota forzosa, que no afectó sino a contadas personas de ajena filiación política a la «causa de diciembre», se votó un empréstito general de cuota forzosa a razón de cinco pesos, que debían pagarse a las 24 horas de proclamado el bando en las ciudades y en todas las villas y cantones del departamento de Cochabamba.

El empréstito debía pagarse por toda familia, por todo establecimiento público, por todo empleado, por todo eclesiástico, por todo individuo solo, recibiendo en cambio el vale que dejara constancia de la entrega.

También se admitían sumas mayores de la cuota fijada en calidad de donativo patriótico, y estaban exceptuados de pagarla los que habían satisfecho el empréstito anterior.

En caso de resistencia, el cupo sería doble, sin perjuicio de la acción coactiva.

Nombrado comisario de guerra el coronel Juan José Clavijo, la exacción se hizo con la mayor severidad, habiendo alcanzado a la suma de 640.550 pesos con los que el gobierno se movilizó sobre La Paz.

Igual procedimiento se observó más tarde en Potosí, asignándose el 10% de interés sólo a los comerciantes.

La comisaría de guerra organizada en Cochabamba, pasó a cargo de D. Juan Manuel Crespo.

La discrecionalidad caracterizó el régimen de las cajas militares, de cuyo manejo nunca se rindió cuenta.

Después de la batalla de Letanías, se creó la Caja Central encomendando su manejo a D. Juan Mariano Soruco, que tampo rindió cuentas y fugó más tarde a Tacna.

En reemplazo de Soruco fué nombrado Manuel Ortuño, cuya gestión se señaló menos todavía por el orden y la corrección.

A la Caja Central habían ingresado, en calidad de recursos extraordinarios, unos doce millones de pesos provenientes de empréstitos externos e internos, fondos remitidos por el Banco de Rescates y la Casa de Moneda, entregas de los tesoros departamentales, etc., etc., figurando gruesas partidas de erogación por intereses, descuentos, pago de comisiones confidenciales, agentes financieros y diplomáticos y hasta cuentas particulares (1).

Algunos de los empréstitos y negocios ingresados en la Caja Central, se relacionan con las principales operaciones financieras del gobierno como se verá a continuación.

---

(1)—«Entre los comprobantes presentados por éste (el tesorero Ortuño), se encuentran cuentas particulares pasadas a la célebre doña Juana Sánchez por distintos comerciantes, cuyas órdenes de pago libradas por el respectivo Ministro y rubricadas por Melgarejo, os mostrarán hasta dónde alcanza la inmoralidad y cinismo de aquel incalificable gobierno». (Memoria del Secretario General de la Revolución, D. Casimiro Corral).

Por decreto de 19 de junio de 1867 fué organizado el gabinete, habiéndose nombrado Ministro de Hacienda al diplomático chileno D. Aniceto Vergara Albano que acababa de terminar su misión ante el gobierno boliviano.

«El H. ciudadano chileno D. Aniceto Vergara Albano—dice el decreto—que por el artículo 2º del supremo decreto de 18 de marzo de 1866, puede gozar de los mismos derechos que los bolivianos, y por el 1º del de 23 de julio del propio año, es declarado Gran Ciudadano de Bolivia y Benemérito a la Causa Americana, condecorado por el Presidente Provisorio con una medalla de honor guarnecida de brillantes, *queda nombrado Ministro de Hacienda*».

El agraciado tuvo el buen sentido de no aceptar el portafolio designado, pero no vaciló en hacerse cargo de la Legación de Bolivia en Santiago, en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.

La principal misión del Sr. Vergara Albano, fué financiera. Negoció en Santiago con el Banco Garantizador de Valores, representado por el señor Concha y Toro, un empréstito por el valor nominal de 1.333.400 pesos al 75%, emitiendo en nombre de Bolivia, con hipoteca de todos sus bienes y la garantía especial de los productos de Mejillones, los célebres bonos de 1868, que ganaban 8% de intereses y 4% de amortización

La comisión del negocio se fijó en 5% y la de amortización en 1%. Además, los banqueros tenían la comisión del 2% sobre la cobranza de las letras de

la Aduana de Oruro con cuya subvención se atendía el empréstito.

El pago del servicio anual de 160.008 pesos, se hizo después con la subvención aduanera de Arica.

Este empréstito destinado en su mayor parte a pagar el servicio de guerra, se agotó con una rapidez desesperante para las necesidades del gobierno, cada vez mayores y más premiosas. Se había hecho la emisión en enero de 1868, y antes de concluído el semestre, el gobierno dictaba su decreto de 1º de junio, anunciando al país que se hallaba consumada la quiebra de la Nación y que el empréstito chileno no había bastado para cubrir las obligaciones del servicio ordinario.

El empréstito Concha y Toro tuvo la siguiente aplicación:

Ejército Nacional	$	115.768
Sueldos civiles	«	424.949
Asamblea Nacional	«	43.328
Banco de Rescates	«	8.000
Caminos y subvención a Haviland	«	35.400
Prima al negociador Vergara Albano	«	20.000
Préstamos y paño para el ejército	«	192.547
Intereses del empréstito	«	160.008
Total	$	1.000.000

Agotados estos fondos, el gobierno ordenó que se expidan certificados de liquidación por el importe de los sueldos devengados y que se presenten propuestas en pliego cerrado ante la junta de amortización para el pagó de los haberes, debiendo pagarse las propuestas más bajas hasta la suma de 150.000 pesos que tenía disponibles la Caja Central.

Como los devengados alcanzaban a una gruesa cantidad, los fondos destinados a la amortización no respondían sino a una mínima parte, por lo que se ordenó que los certificados de liquidación de haberes devengados, se acepten en pago de los bienes fiscales vendidos, en la proporción de las tres cuartas partes del precio de remate, pagándose en dinero el resto.

Ni así pudo hacerse frente a la bancarrota. El gobierno se vió obligado a solicitar el pago adelantado de la contribución indigenal, rebajando un año, el último de su servicio, a los indígenas contribuyentes, de modo que estos dejarían de pagar a los 49 años de edad en vez de seguir pagando hasta los 50 que era el límite legal para la exención.

Una de las primeras negociaciones de venta de huano que hizo el gobierno de Melgarejo, fué con la casa Luciano Arman & Cº de Burdeos por 200.000 pesos oro chileno, conforme al tratado de 1866.

En el acta protocolizada que se labró en la cancillería chilena acerca de la garantía del empréstito Concha y Toro, el negociador boliviano, señor Vergara Albano, decía que «deseaba su gobierno (el de Bolivia) conceder entre otras garantías, la facultad de que el

de Chile percibiese el total producto de los derechos de exportación de metales y valor del huano del territorio de Mejillones que hoy se encuentra sujeto al contrato celebrado con el Sr. D. Luciano Arman, a fin de que la parte que de esos productos corresponde a Bolivia sea entregada por el gobierno de Chile al Banco Garantizador. De esta manera, continuó el señor Vergara Albano, se dará una garantía más inmediata a los tenedores de bonos, y el gobierno de Bolivia evitará en parte el movimiento de fondos para atender al servicio del empréstito».

El contrato se hizo por la extracción de..... 1.000.500 toneladas de huano, correspondiendo..... 250.000 pesos oro a Bolivia y otra suma igual a Chile en virtud de la comunidad de Mejillones establecida por el tratado de 1866.

En un importante folleto publicado en Tacna por el Dr. Mariano Donato Muñoz, para vindicarse de los cargos que hizo pesar sobre él y el gobierno de Melgarejo el secretario general del gobierno de la revolución, Dr. Casimiro Corral, se encuentran los siguientes detalles acerca de esta negociación:

«En este contrato, que no fué ajustado por mí, como dice el Sr. Corral, sino por el Sr. D. Juan Ramón Muñoz Cabrera, agente diplomático de Bolivia en Chile, según está publicado a fojas 169 de los anexos, a mi memoria del año 68, no alcanzó la anticipación a la suma de 250.000 pesos, en oro chileno, sino solamente a 200.000 pesos,en esta forma: 100.000 pesos en oro chileno, y 100.000 pesos en letras sobre

París, como lo comprueba el artículo 13 del mismo contrato, que dice así:

«Artículo trece. D. Luciano Arman se obliga anticipar al gobierno de Bolivia la cantidad de doscientos mil pesos ($ 200.000) por cuenta del valor que dicho gobierno debe recibir según el presente contrato. Estos 200.000 pesos serán entregados en la forma siguiente: cien mil pesos ($ 100.000) en letras pagaderas en Chile el 17 de diciembre del año actual, y los cien mil pesos restantes en letras de D. Luciano Arman sobre París, pagaderas el 15 de febrero del año próximo de 1867, o sobre Valparaíso (a elección del gobierno de Bolivia) pagaderas el 30 de marzo del mismo año».

«Resulta, pues, que el Sr. Corral aumenta en 50.000 pesos la anticipación de los 200.000, confundiendo acaso las dos partidas de a 125.000 pesos febles, cada una, que se encuentran en los estados de las memorias a la Asamblea del 68; pero nótese que en esos documentos está llevada la cuenta en febles y no en bolivianos o moneda fuerte.

«Hay más todavía. El Sr. Riviére no entregó los primeros cien mil pesos en moneda sino en una letra al 17 de diciembre de 1866, a cargo del honorable Sr. ministro de hacienda de Chile, con cuya aceptación fué descontada y pagada en cóndores de oro por el «Banco Nacional de Santiago», por cuya razón figuran 125.000 febles en el estado de la Caja Central correspondiente al año 66, habiéndose aumentado en 5.300 pesos *por premio obtenido sobre dichos cóndores* en Bolivia, como se expresa en la siguiente parti-

da del mismo estado, de que ni mención hace el Sr. Corral, seguramente porque este aumento en vez de satisfacer su objeto de desopinarme, manifiesta de mi parte un exceso de delicadeza que le contraría su siniestro plan.

«Los segundos cien mil pesos en letras sobre París se realizaron por el Banco de los Sres. Ossa y Cª, de Santiago de Chile, según arreglo hecho por el Sr. Muñoz Cabrera; es por esa causa que figuran los otros 125.000 febles en el estado de 1867, época de su realización y abono a la Caja Central, conforme a la cuenta particular que rindió el expresado Sr. Muñoz Cabrera». (1)

El año 1866 se celebró el empréstito La Chambre & Cº en Lima por el valor nominal de un millón de pesos.

El secretario general D. Mariano Donato Muñoz informó acerca de esta operación al Congreso de 1868, presentando una razón demostrativa.

Según la memoria de D. Casimiro Corral «aparece que el empréstito quedó reducido para el Estado a 351.228 pesos, habiendo desaparecido entre el tipo de colocación, intereses, comisiones, etc., la suma de 648.772». Es aun más grave la revelación del señor Corral cuando asegura que en los ingresos y egresos de la Caja Central de 1866, sólo aparecen 371.747 pesos como producto líquido del empréstito.

Del folleto arriba citado tomamos la defensa del Dr. Muñoz, que dice así:

(1) «La Memoria del Sr. Casimiro Corral a la Asamblea Constituyente de Bolivia en 1871».—por Mariano Donato Muñoz.—Tacna.—1871.

«La razón o «Cuadro demostrativo», a que se refiere el señor Corral y que impreso acompañé a mi memoria presentada a la Asamblea de 1868, contiene cuantos detalles puede desearse acerca de este empréstito y su inversión, según la cuenta documentada del señor D. Santiago Soruco, que lo negoció en 1865, la del señor Don Juan Ramón Muñoz Cabrera, inclusa en ella, y los estados de la Caja Central de aquella época, suscritos por el señor Don Juan Mariano Soruco, que también aparecen impresos entre los anexos a mi memoria.

«Lejos de extrañar el señor Corral que yo no hubiera tenido inconveniente en librar a la estampa esa razón demostrativa, que hoy reproduzco, debiera ver en la misma prolijidad con que se detallaron sus pormenores, la escrupulosa delicadeza con que la sometí a la Asamblea de 1868, entre cuyos diputados se encontraba el señor Santiago Soruco.

«Debe tenerse también presente que cuando el señor Soruco contrató este empréstito, el primero que se negoció para Bolivia, carecía ésta de crédito exterior, y sus circunstancias de anarquía interior la colocaban todavía bajo condiciones menos favorables para obtener un préstamo más ventajoso.

«El norte se hallaba a órdenes del coronel Arguedas; el centro a las del general Sanjinés: parte del sud obedecía al coronel Flores; y el general Melgarejo, que había dividido las fuerzas de su ejército entre Oruro y el resto del sud, se ocupaba de ir pacificando los pueblos sublevados.

«En una palabra, la guerra civil se había propa-

gado por todos los ámbitos de la República de Bolivia; y por lo que respecta a la del Perú, cuya subvención aduanera debía hacer frente al servicio del empréstito, disputábanse el mando de ella entre el señor general Pezet y el señor coronel Prado; lo que alejaba aún más las facilidades que, en otras circunstancias, habría podido ofrecer la negociación, como el simple descuento de las letras aduaneras u otra transacción análoga; pero en la época a que se refiere este empréstito, el señor Soruco tuvo que vencer las más serias dificultades hasta para recabar la aceptación de esas letras que, sin este requisito, carecían de todo valor legal.

«No menos apremiantes eran las circunstaucias del Director de la Caja Central del Ejército, para negociar fondos en el interior mediante el giro de letras sobre este empréstito. Testigos de ello y actores a la vez, son la mayor parte de los comerciantes de Potosí y de Sucre, que proporcionaron fondos en cambio de esas letras; pero ¿con qué utilidad? Con los fuertes descuentos y premios que (en vez de abonarlos como sucede en una época normal) exigían en garantía de los riesgos que corrían dentro y fuera de Bolivia, exponiéndose tal vez a perder su dinero si el general Melgarejo no conseguía comprimir las facciones, o si el nuevo gobernante del Perú llegaba a desconocer los arreglos de su antecesor, en que estaba basado el empréstito.

«Fué, pues, bajo tales y tan desfavorables circunstancias que la anterior administración aceptó el empréstito, como el único recurso que le quedaba para

la pacificación de la República, que era presa de las ambiciones y de los círculos reaccionarios más antagonistas.

«Felizmente está vivo el negociador de ese empréstito y puede el actual gobierno pedirle cuantas explicaciones tenga por conveniente: el señor Soruco no rehusará satisfacerlas por su propio decoro y buen nombre.

«Por lo que a mí toca, declaro de una vez—*que si hubo lealtad y delicadeza en el señor Soruco al contratar el empréstito, es suya toda la honra; así como si le probasen que hubo fraude o abuso, suya y exclusivamente suya sería también la responsabilidad.*

«Ahora, por lo que respecta a las personas que intervinieron en su manejo e inversión, el «Cuadro demostrativo» las señala por sus propios nombres y apellidos: cada una que conteste en la parte que le toque. Yo no negocié ni manejé esos fondos, no corrí tampoco con su aplicación; lo que me pone a cubierto de toda responsabilidad y de merecer las sarcásticas frases del señor Corral.

«He aquí ese cuadro, literalmente copiado del 5º anexo a mi memoria del 68:

«CUADRO DEL EMPRÉSTITO

negociado en Lima por el señor Santiago Soruco, agente confidencial del gobierno, con los señores Tomás La Chambre y Cª: tipo convenido el 70 por ciento; interés 8 por ciento anual; y comisión de agencia 13 por ciento.

«Valor del empréstito..... $ 1.000.000

A DEDUCIR

Por el tipo pactado el 70%.....	$ 300.000	
Por comisión de agencia al 13%..	« 130.000	
Por interés sobre 585.100.000 saldo de números, que es lo mismo sobre el fondo de 1.000.000 $ el 8% anual desde 20 de octubre de 1865 hasta 31 de octubre de 1868.....	« 130.022	560.022
Producto neto del empréstito entregado por los Sres. Tomás La-Chambre y Cª.....	«	439.978
Se deduce más, por gastos hechos por el Agente Confidencial por diferentes premios de corretaje el 8 ⅞ % sobre el fondo de 1.000.000 $.....	«	88.750
Cargo total contra el Agente Confidencial.....	«	351.228

Datos según cuenta documentada rendida por él

Por lo pagado por una letra de la secretaría general a favor del señor Jorge E. Williams.....	$	30.500
Por remesa al Prefecto de Cobija D. Juan Ramón Muñoz Cabrera.....	«	100.000
A la vuelta.....	$	130.500

De la vuelta.....	$	130.500
Por flete marítimo y demás gastos de la anterior remesa.....	«	981
Por remesa al señor D. Juan D. Campbell, de Tacna.....	«	162.000
Por entrega a los siguientes:		
Al señor Camilo E. Estruch para su regreso a Bolivia.....	«	1.200
A la señora de D. Juan Forrastal por indicación del señor Cónsul de Tacna (Dr. Mariano Montero) con referencia a una carta de su Excelencia.....	«	264,50
A Don José Montenegro por gastos de ida y vuelta de Lima a Tacna, donde fué con objeto de poner el resto de los fondos a disposición del señor Cónsul Dr. Montero.....	«	247
Al Sr. Cónsul de Tacna Dr. Mariano Montero.....	«	49.735,50
A D. Mariano Robledo, apoderado del coronel Luis Lozada y diez individuos más, a quienes las autoridades revolucionarias de Cobija desterraron al puerto de Caldera.....	«	300
Por saldo existente en un suplemento que hizo el señor Santiago Soruco a don Nicanor Arana en Lima, por razones que expone en su oficio de 3 de marzo de 1866.....	«	6.000
	$	351.228

Cuadro demostrativo de la cuenta del Sr. Santiago Soruco.

Por las partidas que aparecen en ella, marcadas con la letra A.....	$	39.490,50
Por 20.470 $ 25 centavos procedentes de la cuenta rendida por el Prefecto de Cobija don Juan Ramón Muñoz Cabrera, de los 100.000 $ que recibió y que se halla aprobada: las partidas referentes son las siguientes:		
Por gastos de viaje a los señores Forrastal y Marcó, para la conducción de 35.000 $ en letras a Sucre y Potosí..	«	500
Por flete marítimo del vapor «Valparaíso» y gratificación a su capitán...	«	3.000
Por lo pagado a don Guillermo W. Haviland a cuenta de sueldos devengados del Cónsul Dr. Mariano Montero..	«	2.000
Por lo dado al mismo Dr. Montero para gastos extraordinarios.....	«	500
Por id. al mismo para objetos del servicio público.....	«	4.000
Por lo remitido al señor general Agustín -Morales, Cónsul en Arequipa, a cuenta de sus sueldos.....	«	1.010
Por lo pagado al Vicecónsul en Arica D. Eugenio Pacheco, a cuenta de sus sueldos	«	400
Por id. al señor Juan Forrastal, capi-		
A la vuelta.....	$	50.900,50

De la vuelta.....	$	50.900,50
tán del puerto de Tocopilla, a cuenta de sus sueldos..	«	360
Por lo abonado a los señores Hainsworth y Cª, a cuenta de una letra de 1.500 pesos.....	«	1.100
Por 4.000 pesos que tomaron los revolucionarios de Cobija.....	«	4.000
Por seis meses 18 días de sueldos devengados en el año de 1865, por el Prefecto de Cobija D. Juan Ramón Muñoz Cabrera.....	«	2.200,25
Por gastos del mismo señor Muñoz Cabrera en su viaje a Lima, en comisión	«	500
Por socorros que el mismo señor Muñoz Cabrera dió a los empleados de Cobija que emigraron a Tacna y otros gastos	«	900
	$	59.960,75
Por la letra girada en favor del señor Ernesto O. Rück a cuenta de la primera armada de su contrata para la maquinaria de amonedación.....	«	20.000
Por diferentes sumas que se han empozado en la Caja Central, por varias letras giradas por el Gobierno.....	«	271.267,25
Total	$	351.228

Ministerio de Gobierno.—La Paz, a 31 de julio de 1868.—Vº Bº El Ministro de Gobierno y Justicia.—Muñoz.—El Oficial Mayor.—*Rufino Tovar*».

El nombre de López Gama, como el de Meiggs, se halla vinculado a las finanzas ruinosas de Bolivia desde la época de Melgarejo, y ha pasado hasta nuestros días en medio de la celebridad internacional del asunto Alsop, cuyo origen y causahabiente, es justamente el citado López Gama.

Este había obtenido del prefecto de Cobija, mediante contrato de 28 de abril de 1866, el derecho de exportar 100.000 toneladas de huano, anticipando 100.000 pesos que debían pagarse con el producto de los primeros embarques y con el interés del 9%.

Casi al mismo tiempo el gobierno celebró el contrato Arman por un millón de toneladas, y recibió de manos del representante de esta firma, el barón Arnous de La Riviére, la suma de 100.000 pesos oro.

López Gama reclamó ante el gobierno por el perjuicio que le ocasionaba la exclusiva concedida a la casa Arman e hizo cargo de una fuerte indemnización.

El secretario general señor Muñoz, comisionado en el Litoral el año 1867, arregló la reclamación concediendo a López Gama, en pago de su anticipo, el derecho de exportar 50.000 toneladas de huano (1).

No terminó allí el negocio. Pocos días después, el comisionado solicitó un préstamo de 50.000 pesos, que López Gama se apresuró a concederle obteniendo el 12% de intereses y el privilegio de explotar las huaneras de Mejillones comprendidas entre el parale-

(1)—Calculando sólo a 5 pesos tonelada como el huano de Paquica, importaban 250.000 pesos.

lo 24° y el límite de las concesiones hechas a la casa Arman por el término de 30 años prorrogables por otros 30 años, pagando 5 pesos 6 reales por tonelada de registro en ciertas regiones, y 8 pesos 4 reales en otras de mejor calidad.

Tampo terminó allí el negocio. En pago a «sus servicios, trabajos y sacrificios», pidió la libre exportación de 100.000 toneladas de huano, gracia que le fué otorgada por el personero del gobierno.

Según estos arreglos, quedó extinguida la primitiva obligación contraída por el prefecto de Cobija; pero en cambio nacieron estas otras más onerosas que la primitiva:

1ª—Deuda de 50.000 pesos al 12%;

2ª—Libre exportación de 150.000 toneladas de huano;

3ª—Privilegio de exportación por 30 años prorrogables por otro plazo igual.

A la caída de Melgarejo, fueron declarados nulos sus actos, pero no podían menos que reconocerse, en lo justo y equitativo, las obligaciones contraídas. En tal virtud se celebró con López Gama la transacción de 1872, reconociéndole su derecho al valor de 150.000 toneladas de huano, o sean 1.087.500 pesos al precio medio de 7 pesos 2 reales.

¿Cuál fué el pensamiento del señor Muñoz al otorgar las concesiones a López Gama? ¿Fué el deseo patriótico de atajar los avances chilenos, poniendo al lado de la explotación común de Arman, los derechos exclusivos de una firma respetable? ¿Fué sim-

plemente el propósito de obtener recursos para salvar la bancarrota del fisco?

Suponiendo que ambas cosas hubieran influído en el espíritu del negociador, ambas resultaron fallidas. Ni López Gama tenía influencia financiera alguna y estaba más bien vinculado con capitalistas chilenos, ni la operación en sí misma resultaba conveniente.

El Sr. Muñoz explica su conducta del modo siguiente:

«Los *mil pesos febles* que el Sr. D. Pedro López Gama adelantó por su contrata de 28 de abril de 1866, ingresaron en la Caja Central, como consta del estado o cuadro de ese año, acompañado a mi memoria; lo que aleja de mi persona todo reproche de parte del Sr. Corral.

«Si por su contrata de 5 de agosto de 1867, que equivocadamente dice el Sr. Corral 2 de agosto, hizo el Sr. López Gama un empréstito de *cincuenta mil pesos febles*, como adelanto de las que tenía vigentes sobre explotación y exportación de huanos, ampliadas por la de dicha fecha, esa suma aparece también en el cuadro número 8º, de la memoria del Sr. Lastra a la Asamblea de 1868.

«Entonces ¿cuál es *la avidez de Muñoz para proporcionarse fondos*, de que habla el Sr. Corral cuado dice que, conociéndola el Sr. López Gama, era natural que aprovechase de esa ocasión favorable para una nueva especulación?

«¿Solicité ese adelanto en provecho mío?—No, por cierto. Recibí aquella suma *en letras* giradas por las

casas de los S. S. «Artola e hijos» y «Dorado hermanos» de Cobija, donde yo me encontraba, y las remití al Sr. Dr. Manuel de la Lastra, que a la sazón era Prefecto de Potosí, quien las había realizado en dicha ciudad y la de Sucre, y remitió su producto a la Caja Central, situada en La Paz, donde residía el Gobierno.

«¿En qué consiste, pues, la *avidez* que con tanta liberalidad me atribuye el Sr. Corral? ¿En buscar recursos para atender al servicio administrativo de la Nación?

«Oh! Entonces nadie puede tener más avidez que la que ha ostentado el Sr. Corral durante la última revolución y después de ella, puesto que sin darse por satisfecho con los recursos fiscales, ha puesto en rigurosa prisión a señoras, caballeros y niños, y ejercido sobre ellos las más crueles y bárbaras violencias para arrancarles dinero en cambio de su libertad personal, como lo manifestaré en el curso de esta contestación.

«Si cree el Sr. Corral que otorgué al Sr. López Gama una remuneración superior al servicio que prestó al fisco con el adelanto, créalo; poco me supone su juicio personal apasionado; pero todo hombre imparcial y justo verá con menos asombro mi conducta oficial que la suya; por que en verdad, si el Estado tiene urgencia de fondos, más natural es que sacrifique algo de sus propios recursos en vez de sacrificar familias particulares, que jamás abusaron, pero ni intervinieron en el manejo de los dineros fiscales.

«Téngase, además, presente que no sólo en la ad-

ministración pasada sino también en las anteriores de Linares y de Achá, se han obtenido del Sr. López Gama anticipaciones de fondos, acordándole adjudicaciones y privilegios de importancia, en que ha apoyado constantemente sus reclamaciones de indemnización.

«El Ministerio Frías, fundándose en que «*no permitiendo las exigencias del erario* que según la práctica seguida otras veces se remitan a la Contaduría General para su examen informativo (las propuestas de Ossa y López Gama), convocaba a la comisión permanente del Consejo de Estado para considerarlas y *aceptar* la más conveniente, *a fin de que el erario nacional recibiese el auxilio de esos ingresos con la prontitud que reclamaban sus urgencias*».

«Aceptada, en efecto, la del Sr. D. José Santos Ossa, en acuerdo del día 20 de julio de 1858, «concediéndole permiso *para trabajar en los depósitos o cobaderas de huano, descubiertos o que se descubrieren en adelante en las costas de Bolivia*, y para exportar treinta mil toneladas», la administración Linares percibió un adelanto de *cincuenta mil pesos*.

«El Ministerio Carvajal aceptó también en 15 de abril de 1862, una segunda propuesta del Sr. Pedro López Gama (a quien traspasó sus derechos el Sr. Ossa) *adjudicándole la exclusiva extracción del huano en las costas de la República*, en la cantidad de otras treinta mil toneladas, mediante la anticipación de *sesenta mil pesos*, en cuenta corriente y al *interés recíproco de doce por ciento anual*: suma que recibió la administración Achá.

«El reclamo del Sr. López Gama sobre indemnización está, pues, basado en esas concesiones que claramente le adjudicaron el privilegio o monopolio «*para trabajar en los depósitos o cobaderas de huano, descubiertos o que se descubrieren en adelante en las costas de Bolivia*», según Frías; y según Carbajal, «*la exclusiva extracción del huano de las costas de la República*».

«Notorias son sus diferentes «Protestas» por daños y perjuicios, como lo son las reclamaciones que, en la administración Achá, dirigió el Ministerio Bustillo al de Relaciones Exteriores de Chile con ocasión de los derechos alegados por López Gama, sosteniéndolos en nombre de la Soberanía de Bolivia.

«Después de esto sobrevino el arreglo de límites entre ambos Estados y la aceptación colectiva de la contrata de Arman para la explotación y exportación de huanos de las cobaderas de Mejillones.

«Razón tiene el señor Corral en afirmar que *esta concesión vino a interrumpir la del señor Gama, y que con tal motivo interpuso su demanda de indemnización de daños y perjuicios;* pero está equivocado en creer que la promovió solamente por julio de 1867, siendo así que la iniciativa de sus reclamos partió del 7 de octubre de 1862, (en que *pidió amparo de posesión* al Juez Instructor de Cobija y lo obtuvo por sentencia judicial de 28 del mismo mes y año), a consecuencia de la explotación de huano que comenzaron a efectuar en Mejillones, los chilenos D. Matías Torres y D. Juan López. Fué entonces que el Gobierno de Bolivia formuló la reclamación diplomática

de 23 de marzo de 1863, datada en Oruro, y las demás que se refieren a este grave asunto.

«Posteriormente y como he dicho ya, cuando Bolivia y Chile, de común acuerdo, aceptaron la propuesta de Arman, el señor López Gama formalizó sus «Protestas» ante ambos gobiernos, sin perjuicio de haberla presentado también ante la Prefectura de Cobija con fecha 20 de septiembre de 1866; esto es, ocho días después de haberse ajustado y concluído aquella contrata en Santiago el 12 del propio mes y año.

«Desde entonces no ha cesado López Gama de instar por la indemnización a que justamente se creía con derecho, como parece reconocerlo aún el mismo señor Corral; pero en todos los casos, fundándola en las concesiones de los gobiernos de Linares y Achá, cuyos decretos he copiado antes, y apoyándose siempre en la magnitud de los daños y perjuicios que se le habían irrogado por inmediato resultado de la contrata con Arman, que, según se expresa López Gama, vulneró sus derechos adquiridos y cruzó, por decirlo así, sus espectativas de legítimas y cuantiosas ganancias.

«De manera que sus gestiones por julio de 1867, no han sido las primeras ni tampoco las últimas que ha entablado sobre indemnización; porque, sin embargo de las concesiones que le otorgué en 19 de julio y 5 de agosto de 1867, ha continuado sosteniendo sus derechos con motivo de la nueva contrata que ambos gobiernos celebraron con el señor Enrique Meiggs por diciembre de 1868.

«Téngase también en consideración la calidad y circunstancias de esas concesiones que parten de principios distintos y proceden de diversas causas. Por la de 19 de julio se le acordó la indemnización de cincuenta mil toneladas del huano que extrajera en virtud de sus contratas subsistentes, demasiado perjudicadas ya hasta entonces; pero entendiéndose que las cobaderas comprendidas en el litoral que le estaba adjudicado, eran las únicas resposables a ella; mientras que por la de 5 de agosto, fundada en sus nuevos compromisos de anticipación de fondos y de exploración de otras cobaderas, así como reconociendo sus perseverantes esfuerzos por conservar esa parte de la riqueza nacional, cuyo descubrimiento en Mejillones se debía también a sus sacrificios personales y pecuniarios, se le concedió la libre exportación de cien mil toneladas de los huanos descubiertos o que en adelante se descubrieren al norte o al sud de Mejillones hasta el paralelo 24 de latitud meridional, fuera de la área territorial adjudicada al señor Luciano Arman, y para cuando termine su contrata con Bolivia y Chile, de 12 de septiembre de 1866, salvándose al señor López Gama la facultad de arreglarse sobre el particular con dicho empresario, de la manera y en la forma que tuvieren a bien convenir, en el caso de no tener éxito la exploración aludida por el reclamante.

«¿Y cuánto tiempo debió durar la empresa de Arman según los términos y condiciones de su contrata?—Cualquiera que se tome el trabajo de hacer el cómputo del tiempo en razón de las toneladas de huano que estaba comprometido a exportar anualmente,

se convencerá de que eran indispensables 38 años. Estoy seguro de que muchos no han fijado siquiera su consideración en esta circunstancia ni en otras muchas que dejo referidas, para poder juzgar con imparcialidad acerca de mis actos.

«Tal fué el límite de mis concesiones. Mas, con motivo de la posterior contrata con el Sr. Meiggs y a fin de conciliar en lo posible los intereses de los dos contratistas, que iban a ponerse en abierta colisión, el gobierno, en acuerdo pleno de Gabinete y con intervención del Sr. D. Eusebio Lillo, apoderado del Sr. Meiggs, hizo justicia al Sr. López Gama en su decreto de 15 de febrero de 1869, en los términos siguientes: «Que estando el gobierno de Bolivia comprometido con el Sr. López Gama para permitirle la explotación y exportación de huanos, en la cantidad de ciento cincuenta mil toneladas de registro, le concede el derecho de explotarlas de la área de Mejillones, sin perjuicio de la contrata del Sr. Meiggs, reconociendo el gobierno de Bolivia en el de Chile el derecho que, en justa compensación, tiene para disponer libremente de igual cantidad de toneladas de registro sin otro requisito que el de darle conocimiento».

«Al otorgar el gobierno de Bolivia esta concesión, estuvo en su perfecto derecho a virtud de la segunda cláusula del artículo 3º de la contrata de 12 de septiembre de 1866, que dice:—«Los gobiernos de Bolivia y de Chile se reservan la libertad de celebrar nuevos contratos, o de disponer como lo tengan a bien de los huanos y minerales que se hallan fuera del territorio designado». Se refiere a la empresa Arman, cuya área

territorial fué señalada de una manera taxativa en la primera cláusula de dicho artículo.

«Terminaré haciendo conocer el resultado de mis actos con relación a este asunto.

«Como el Sr. Corral ha trascrito los principales términos de la autorización suprema que se me confirió para llenar mi comisión de estado en Cobija, dejo de copiarla textualmente; pero, habiendo omitido hacer otro tanto con la nota de aprobación de mis actos, como debió hacerlo si es que obraba con imparcialidad, juzgo oportuno registrarla: es del tenor siguiente:

«Ministerio de Hacienda.—La Paz, octubre 31 de 1867.

«A. S. G. el Prefecto del Departamento de Cobija.

«Señor.—Cuando S. G. el ministro Dr. Mariano Donato Muñoz marchó a ese puerto el 30 de junio último, en comisión de estado, fué premunido de amplias facultades para hacer en ese departamento los arreglos que creyere convenientes en todos los ramos de la administración pública, como se comunicó a V. G. en nota oficial de aquella fecha; sus actos, por consiguiente, no necesitan aprobación de S. E. el Jefe Supremo del Estado, que justamente depositó su plena confianza en el patriotismo, probidad y acreditado tino de su honorable primer ministro. Mas, habiéndola solicitado por delicadeza el expresado Sr. ministro en interés de su propio decoro, me ha ordenado S. E. el Presidente provisorio de la República asegurar a V. G. que presta gustoso su más plena aproba-

ción a todos y cada uno de los actos y medidas que ha adoptado en ese departamento el Sr. ministro Muñoz, tanto en el arreglo del personal de los empleados, *como también en las concesiones de privilegio e indemización que ha acordado al laborioso y antiguo contratista de la explotación de huanos en nuestro Litoral D. Pedro López Gama,* igualmente que en las demás disposiciones políticas y administrativas que comunicó a V. G. para el mejor servicio público y para la inalterable conservación del orden en ese departamento.

«V. G. se servirá trascribir la presente declaratoria a quienes corresponda.

«Dios guarde a V. G.—Rúbrica de S. E.

Manuel de la Lastra».

«Véase, pues, si extralimité las funciones de mi comisión, o si después de haber obrado con autorización amplia, recabé todavía del supremo gobierno la más cumplida y competente ratificación de mis actos.

«Igual aprobación recibí con respecto a mi comportamiento en Cobija sobre el negociado del empréstito propuesto por el Sr. H. Arnous de Riviére y que *no tuve a bien aceptarlo* por las razones y motivos que constan de los documentos oficiales consignados en el folleto publicado en La Paz por octubre del 67, que *desmienten*, una vez más, *la avidez* que me atribuye el Sr. Corral.

«He aquí la nota del Sr. Ministro Revollo, encargado en esa fecha del despacho de hacienda:

«Ministerio de Instrucción Pública.—La Paz, septiembre 21 de 1867.

«A. S. G. el Ministro de Estado Dr. D. Mariano Donato Muñoz.

«Señor Ministro:

«He tenido el honor de dar conocimiento al Supremo Jefe del Estado, de la comunicación oficial de V. G. fecha 17 del presente, y de los documentos justificativos que, bajo los Nos. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º, se ha servido acompañar a la mencionada comunicación, cuyo objeto es dar al gobierno nacional parte circunstanciada del resultado de la comisión que se encargó a V. G. en 30 de junio último, para la realización del empréstito francés.

«S. E. el Presidente provisorio de la República, enterado de aquella y de los documentos que le acompañan, ha tenido a bien aprobar la conducta de V. G., y me ha prevenido expresarle la satisfacción que le ha causado el acertado y buen uso que V. G. hubo hecho de los poderes con que el gobierno le munió para tan delicado asunto. El gobierno nacional y la patria toda, deben a V. G., señor ministro, un voto de gratitud por la firmeza y energía con que ha tenido a bien rechazar tan gravosas y deshonrosas condiciones impuestas al país por el Sr. Riviére.

«Asímismo el Supremo Jefe del Estado ha dispuesto la publicación de aquellos documentos, a fin de que la opinión pública se entere de la conducta patriótica de V. G. que, no obstante el deplorable estado de la hacienda fiscal, ha rehusado comprometer el

crédito y la dignidad nacional, lo mismo que el buen nombre del gobierno.

«Con tal motivo, y ofreciendo a V. G. los sentimientos de mi personal estimación y marcado aprecio, tengo el honor de suscribirme de V. G. atento servidor.—Rúbrica de S. E.

«*Angel Remigio Revollo*».

«¿Es *ávido* el ministro que rechaza un empréstito por estimar onerosas sus condiciones? Y suponiendo que lo fuese ¿qué le importaría, en tal caso, el gravamen del país en cambio de su lucro personal?»

El congreso de 1868 autorizó al gobierno para contratar un empréstito de dos millones de pesos destinados a cubrir el déficit del presupuesto en el bienio 1869—1870.

El mismo congreso, por ley reservada de 11 de septiembre del citado año, que se promulgó con fecha 6 de diciembre de 1869, autorizó la contratación de otro empréstito por suma indeterminada y con objeto de convertir la moneda feble. Según los cálculos que sirvieron de base a la propuesta de Torretti, la conversión necesitaba más de dos y medio millones de bolivianos.

Para hacer frente a estos dos servicios—el déficit y la conversión—el gobierno contrató con D. Enrique Meiggs, otro nombre vinculado a las desgracias financieras del Litoral, un empréstito por cuatro millones de bolivianos.

La negociación, concluída el 29 de noviembre

de 1869, era compleja, y comprendía al mismo tiempo que el empréstito, una extensa operación sobre el huano.

Meiggs tomaba a firme el empréstito boliviano al 85% con el interés del 8% y el 2% de amortización acumulativa, y se comprometía a cubrir su importe en cuatro armadas, deduciendo además el 2½% de comisión sobre éstas.

La primera armada debía ser de Bs. 2.500.000. En caso de que Meiggs no hubiera podido entregar esta suma en dinero, lo haría hasta el monto de dos millones en pagarés u obligaciones suscritas a orden del Banco Boliviano, endosadas por éste al Gobierno, quien a su vez las lanzaría a la circulación con endoses al portador.

Las obligaciones serían de 100, 50, 20, 10 y 5 bolivianos que ganarían el interés del 8% a partir del 1º de enero de 1870 hasta su amortizació que se haría en tres años.

Entre tanto, Bolivia seguiría haciendo el servicio del empréstito depositando en la casa Ossa y Cº de Santiago las siguientes sumas:

210.000 pesos procedentes de la subvención aduanera de Arica;

90.000 pesos producto de quince mil toneladas anuales de huano que exportaría Meiggs;

100.000 pesos que este mismo anticiparía anualmente para cubrir el monto del servicio anual que era de 400.000 pesos.

La casa Ossa cobraría 1% de comisión por el servicio de intereses y ½% por la amortización.

El gobierno debía pagar el costo de la impresión de los bonos del Estado y de las obligaciones de Meiggs.

En cuanto al huano, Meiggs obtuvo el derecho de explotarlo en toda la zona comprendida entre los grados 23 y 25, pagando 6 pesos por tonelada hasta completar a un millón de toneladas.

También se le otorgó el derecho de explotar todos los minerales de Mejillones y de trabajar ferrocarriles, quedando prohibido el gobierno de otorgar otras concesiones ferroviarias durante cinco años.

Además, fué constituído en agente financiero de Bolivia en Chile.

El congreso de Oruro por ley de 5 de septiembre de 1870 introdujo varias modificaciones a este contrato, en cuya virtud se celebró en Lima el arreglo *ad referendum* suscrito entre D. Juan Francisco Velarde y el contratista Meiggs, rescindiendo el primitivo contrato y fijando nuevas bases de las que las principales fueron acordadas del modo siguiente:

1ª—Devolución a Meiggs de un millón de pesos ya pagados a cuenta del empréstito, con más los intereses corridos;

2ª—Pago de daños y perjuicios ocasionados por la rescición y por el contrato Arman, fijándose en 800.000 pesos la indemnización;

3ª—Vigencia del contrato de 1870 sobre explotación de huanos;

4ª—Pago de los 1.800.000 pesos en el término de un año, con más intereses, aplicándose con prefe-

rencia a esta deuda los fondos que el gobierno de Bolivia obtuviera de las riquezas de Mejillones;

5ª—Traspaso a Bolivia de todos los documentos de crédito que tuviera Meiggs contra Arman, y de todas las propiedades raíces del citado Meiggs destinadas a la explotación del huano.

Este arreglo fué aprobado por el congreso de 1872, pero sus emergencias no concluyeron sino después de la guerra del Pacífico, junto con las demás obligaciones referentes al Litoral boliviano, como se verá en su oportunidad.

La «Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta» tuvo también sus orígenes en la época de Melgarejo, en que sin orden ni método tan pronto se hacía una adjudicación como se la olvidaba para crear nuevos derechos.

No fué éste, sin embargo, el caso de la «Compañía de Salitres», que más tarde jugó el triste rol de precipitar la guerra de 1879.

En fecha 2 de septiembre de 1868 obtuvo D. José Santos Ossa (era tan fácil obtener entonce) el privilegio de explotar y exportar *ilimitadamente* los depósitos de salitre descubiertos y que se descubriesen en el Litoral, por cuenta de la «Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama». Era una nueva riqueza llamada a complicar más la situación.

Fueron transferidos estos derechos a los señores Milbourn Clark & Cº, que habían comenzado la explotación y el beneficio del salitre, empleando importantes capitales en el negocio.

Declarados nulos los actos de Melgarejo, se presentaron aquéllos pidiendo el reconocimiento de sus derechos. El gobierno de 1872 no pudo menos que reconocerlos en parte, reduciendo la primitiva concesión a términos razonables y equitativos.

Más tarde, organizada la «Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta» sobre la base de los derechos de la casa Milbourn Clark & Cº, se presentaron nuevas dificultades con motivo de la construcción por cuenta fiscal del ferrocarril de Mejillones. Zanjado el incidente por medio de un nuevo arreglo en 1873, se originó en 1878 el célebre incidente de los «diez centavos» que precipitó la guerra.

Sirvan estas rápidas notas, que serán desarrolladas con mayor amplitud en el capítulo correspondiente, para marcar los orígenes de la concesión salitrera de Ossa, que tan triste influencia llegó a tener en la suerte del país.

III

Dejando ya los negocios del huano y del salitre, corresponde referir los de navegación y colonización que se presentaron al gobierno de Melgarejo.

Por un extraño contraste de la suerte, las empresas más atrevidas se originaron en aquella época y fueron tratadas por el gobierno menos habilitado para darles conveniente dirección.

El coronel americano señor Jorge E. Church propuso al gobierno la organización de una compañía de navegación a vapor de los ríos de Bolivia tributarios del Madera, con un capital nominal de un millón de

dólares, que podía ser aumentado según las necesidades de la empresa.

La sociedad que se organizaría en los Estados Unidos o en Europa, se llamaría «Compañía Nacional de Navegación Boliviana».

Como para hacer factible la libre comunicación fluvial por el Madera y el Amazonas al Atlántico, era necesario salvar las cachuelas o rompientes que interrumpen la navegación en la zona brasileña, Bolivia se comprometía a negociar con el Brasil el derecho de canalizar las cachuelas o formar canales laterales y abrir caminos desde Santo Antonio a la cachuela Madera.

Se concedían tierras fiscales a la Compañía a razón de una milla en las poblaciones existentes y de dos leguas cuadradas en los puertos que se fundasen.

Un premio de 10.000 pesos fuertes se pagaría a la Compañía el día que surcase el primer vapor por las aguas del Mamoré.

La Compañía gozaría por 25 años, a partir de la autorización otorgada por el Brasil del derecho de canalizar las cachuelas, de la exclusiva de navegar los afluentes del Madera.

Las exportaciones serían libres, y las importaciones durante los primeros 10 años, sólo podrían gravarse con la mitad de los derechos vigentes en Cobija, y después de ese plazo se gravarían con un tercio menos de tales derechos hasta los 25 años del privilegio concedido.

Por la navegación del Madera cobraría la Compañía el derecho de 50 centavos por tonelada de re-

gistro, debiendo recabarse para este cobro la autorización del Brasil. Si pasados los 25 años no se hubiese amortizado el capital empleado en la canalización, seguiría cobrándose el derecho de tonelaje.

Para la conservación del canal, la Compañía fijaría un derecho de pasaje.

La Compañía quedaba autorizada a establecer canales, caminos, ferrocarriles, entre los puertos y las poblaciones interiores, conforme a los contratos que se celebrasen.

El 5% de sus ganancias destinaría para la mejora de los caminos de la región.

Durante los primeros cinco años del tráfico, los fletes no serían mayores a los 2/3 de los usuales en Bolivia, y en lo sucesivo no pasarían de la mitad.

El domicilio de la Compañía sería Norte América.

Firmada la concesión el 27 de agosto de 1866, el coronel Church logró obtener el apoyo del gobierno de Estados Unidos y formó la Compañía; pero no pudo avanzar nada en la parte financiera sin conseguir antes algunas modificaciones en el contrato primitivo, y sobre todo la autorización para negociar a nombre de Bolivia un empréstito por dos millones de libras destinadas a la obra.

Obtuvo Church cuanto quiso.

No habiendo podido conseguir capitales, pedía para interesarlos el derecho de recaudar para la Compañía las ¾ partes de los impuestos de internación, el de emitir bonos y el de construir más bien un ferrocarril que canalizar las cachuelas, si acaso el Brasil se negaba a autorizar la canalización.

Aceptadas las modificaciones el 7 de diciembre de 1869, se firmó el 22 del mismo un nuevo documento llamado «Bases para el empréstito», que en realidad fué el objetivo esencial que Mr. Church venía persiguiendo.

La Compañía por él organizada, era una sociedad *ad honorem* y «no tenía en la práctica más capital real que las pocas monedas de cobre necesarias para comprar un cuaderno de dos peniques y una media resma de papel, con lo que el dinero de los tenedores de bonos (del empréstito) estaba de una y otra manera destinado a ellos, o en otras palabras a su iniciador. (1)

El gobierno de Bolivia convino en dar su crédito a la Compañía de Navegación, para la contratación de un empréstito de dos millones de libras, hipotecando al pago de los intereses y amortización, el saldo de los derechos aduaneros del Madera, deducidas las ¾ partes que pertenecían a la Compañía, y las ganancias líquidas que ésta obtuviera en el tráfico.

Del producto neto del empréstito, el 83% correspondería a la Compañía para las construcciones acordadas y la adquisición de vapores, correspondiendo el 17% al gobierno, a fin de que se pagara con el mismo capital emprestado el servicio de los intereses.

Con estas concesiones y debidamente acreditado como Agente Financiero de Bolivia en Europa, se lanzó Mr. Church a Europa en pos de los millones deseados.

El desarrollo más interesante de este negocio

(1)—El *Times* de Londres de 31 de mayo de 1879.

siguió después de la caída de Melgarejo, sobrevino la ruina, se sustanció un famoso pleito ante la justicia londinense, y todo quedó envuelto en el torbellino de un escándalo financiero.

Lo veremos más adelante.

Mr. Piper secundando los planes del coronel Church, completándolos mejor dicho, propuso al gobierno la formación de una gran compañía de colonización que abarcaba la cuarta parte de la República, desde los 14° sobre el río Iténez a la región del Chimoré y de aquí hasta los principales afluentes del Beni. Era más grande que el «falansterio» de la Compañía Belga de 1844.

Se otorgaba a la Compañía Piper la libre y exclusiva navegación de todos los ríos comprendidos en la concesión, la liberación de derechos durante 10 años, el derecho de emitir papel moneda de curso voluntario y el de apropiarse después de 25 años de todas las tierras que llegaran a colonizarse en ese tiempo.

Cada cinco años pondría la Compañía mil familias mínimum. Por cada familia excedente pagaría Bolivia el premio de 50 $.

Otorgada la concesión el 10 de julio de 1869, sus posteriores gestiones fueron acogidas con entusiasmo por el gobierno de Morales; pero todo quedó en nada.

En más modestas condiciones se presentó al gobierno y obtuvo de él, D. Orestes Mendoza, el derecho de navegar el Pilcomayo hasta Magariños, donde iría una fuerza de línea a recibirlo. Mendoza levantaría

un mapa de su exploración y tendría derecho a 10.000 pesos de premio una vez realizada su carrera hasta Magariños. Además, se le concederían tierras y el privilegio de 25 años para la navegación del Pilcomayo.

IV

El atentado más grave se infirió durante el gobierno del general Melgarejo a la propiedad de los indígenas comunarios.

Como se recordará, el decreto de 1863 (1), expedido por el gobierno del general Achá, había puesto en vigencia el decreto del Libertador declarando a los indígenas dueños absolutos de las tierras por ellos poseídas, en virtud «de la naturaleza y de la ley». La Asamblea de ese mismo año derogó el decreto presidencial, postergando para otra oportunidad el repartimiento de las tierras y la venta de los sobrantes.

En esta situación se hallaba la cuestión agraria, cuando el gobierno del general Melgarejo expidió su primer decreto en marzo de 1866 declarando «propietarios con dominio pleno a los indígenas que *poseen los terrenos del Estado*».

Consecuente con esta declaración que consideraba a los indígenas como simples poseedores de las tierras del Estado, se ordenó en el citado decreto que cada indígena obtenga del gobierno el título de su propiedad particular previo abono de una cantidad que no baje de 25 pesos ni sea mayor a 100 pesos, según los datos de una apreciación pericial.

El indígena que en 60 días del decreto no hubie-

(1)—Véase Capítulo III, página 236.

se recabado el título de propiedad, sería privado de la posesión, y se pondrían en remate público las tierras no amparadas.

Algunos días después, se dictó un nuevo decreto (abril de 1866) ordenando se comparen los datos de la revisita de 1843 con los del empadronamiento vigente, a fin de descubrir las sayañas poseídas indebidamente por los blancos y mestizos, y se vendan en remate público, especialmente las de Yungas, declarándose dueño del dominio útil al poseedor de la sayaña y como tal con derecho a una parte del precio del remate.

Fué más lejos la Asamblea de 1868, que por ley de 28 de septiembre declaró que las tierras de comunidad eran de propiedad del Estado y que en tal virtud debía procederse a venderlas en subasta pública para amortizar la deuda interna y atender los gastos del servicio nacional. El gobierno mandaría levantar planos y tasaciones, y el precio podía pagarse en valores fiscales.

Como en concepto de la ley de 1868 los indígenas pagaban la contribución, en calidad de enfiteutas o arrendatarios de las tierras del Estado, quedaba abolida dicha contribución, puesto que el señor del dominio eminente recobraba sus propiedades y las vendía al mejor postor.

Las tierras sobrantes del remate debían arrendarse, y no habiendo interesados, entregarse a sus antiguos poseedores en arrendamiento forzoso con el canon del 4% de su tasación.

Se aprobaron las ventas de terrenos poseídos

por blancos y mestizos hechas en virtud del decreto de 1866; pero los contratos llamados «compensativos» o sea el amparo de posesión que hicieron los indígenas pagando entre 25 y 100 pesos para recabar sus títulos, fueron considerados como simples arrendamientos por cinco años, pasados los cuales volverían las tierras al dominio del Estado para ser vendidas en subasta pública.

Los terrenos de comunidad poseídos por los blancos o mestizos, se ventilarían ante la justicia ordinaria, adoptándose como principio de derecho la posesión de 10 años que fundaba el título de propiedad de la manera más perfecta.

El gobierno se apresuró a ejecutar la ley, reglamentándola detalladamente para el verificativo de las tasaciones y planos, y señaló las formalidades del remate. Los tasadores debían cobrar 12 pesos por cada operación, más un 2% sobre el precio del remate, emolumentos ambos pagaderos por el que obtuviese la buena pro.

Durante el año 1869 se hizo la dilapidación más lastimosa de las tierras de comunidad, cuya subasta hasta el 31 de diciembre alcanzó a Bs. 856.550, de los que sólo Bs. 177.537 se pagaron en dinero y la mayor cantidad, esto es, 679.013 bolivianos fueron pagados en papeles fiscales.

Al año siguiente continuaron las ventas alcanzando a un valor nominal de Bs. 352.892,59.

Sumadas ambas cifras, las comunidades fueron vendidas por un total de Bs. 1.209.892,29.

Esta gran expoliación fué cohonestada en la

asamblea de 1868 por el principio del dominio eminente del Estado subrogatario del derecho de conquista de la corona de España, y por el propósito de fomentar el progreso agrícola del país, quitando al indio la sayaña mal cultivada para ponerla en manos más expertas y progresistas; pero en el hecho el único agricultor seguía siendo el indio, y el comprador, blanco o mestizo, no hacía sino veces de señor del dominio eminente.

El errado concepto que se tiene de la capacidad económica del indio, ha originado esas y otras expoliaciones que han perjudicado la riqueza pública y privada.

Se olvida a menudo que el indio es un factor económico de primer orden. Es el que más produce y el que menos consume. Esto sólo bastaría para asignarle el rol que merece en la vida económica de la Nación.

Es verdad que el progreso material de los pueblos no sólo se mide por el monto de su producción, sino también de sus consumos. Los países que más consumen en trigo, tejidos, hierro y carbón, son los de mayor desarrollo económico, porque estos consumos son correlativos de una producción mayor.

Pero, dentro de lo relativo de la economía boliviana, si el indígena no es un gran factor de consumos ultramarinos, lo es en grado normal de objetos de alimentación y tejidos.

El indígena como agricultor, como minero, como albañil, como simple obrero en todas las esferas de la actividad, es el gran productor boliviano.

Para incorporarlo a la actividad económica moderna, no era la expoliación de sus tierras el medio señalado; porque, con esta lógica, al blanco y al mestizo habría que despojarles también, y quizá con más fundamento en la mayoría de los casos, de la posesión de las tierras tenidas por ellos y mandadas cultivar con igual rutina mediante los mismos indígenas.

Justamente el camino de la regeneración y del fomento agrícola, estaba en consolidar la propiedad del indígena, en individualizar su derecho, en elevarlo de la categoría de colono y de pongo, a la de propietario y ciudadano.

El funesto error de los hombres de la Asamblea de 1869—no de Melgarejo ni de su gobierno—estuvo, pues, no tanto en la injusticia y la violencia de la expoliación de tierras poseídas desde la época incaíca, sino en la mala comprensión del problema social y agrario.

En la lista de desaciertos de la época, merece citarse la orden de venta de la finca que posee en Cliza el monasterio de Santa Clara de Cochabamba. Es una gran propiedad avaluada en cerca de de un millón de pesos, que Melgarejo ordenó su enajenación en remate público, debiendo pagarse a las monjas el valor de sus respectivas dotes.

La orden expedida el año 1866, no llegó a ejecutarse. (1)

---

(1)—La finca de Cliza ha sido últimamente fraccionada en 16 fincas con un valor de Bs. 863.902,08

V

Después de la primera tentativa hecha en 1834 para establecer un «Banco de Circulación» y del proyectado en la época del general Ballivián, bajo la denominación de «Banco de Coca», que fuera de monopolizar este artículo fué autorizado para negociar en préstamos y depósitos, no se formalizó hasta 1867 ninguna propuesta para el establecimiento de una institución de crédito.

D. Eusebio Lillo obtuvo con fecha 24 de enero del citado año 1867, la autorización y el privilegio para establecer un banco de emisión, depósitos, descuentos y préstamos, bajo la denominación de «Banco Boliviano» domiciliado en La Paz y con un capital de un millón de bolivianos divididos en 1.000 acciones de a 1.000 bolivianos cada una, comprometiéndose el gobierno a suscribir 100 acciones bajo la garantía de los productos fiscales del Litoral y especialmente de las covaderas de Mejillones.

Fué fijado en 15 años el privilegio de exclusiva del banco, cuyos billetes al portador se aceptarían como moneda corriente por las oficinas públicas.

Se estableció el «Banco Boliviano» en La Paz, elevó su capital a dos millones de bolivianos el año 1869, habiendo renunciado el gobierno a las 100 acciones suscritas.

Data de la misma época—22 de julio de 1869—la fundación del primer banco hipotecario bajo la denominación de «Crédito Hipotecario de Bolivia», mediante autorización conferida a los señores Lorenzo Claro y Enrique Meiggs.

Estas dos instituciones de crédito marcan en realidad el origen del régimen bancario en Bolivia, pues las tentativas de la época de Santa Cruz y Ballivián, y el proyecto de Banco Hipotecario de Cochabamba, durante el gobierno del general Achá, sobre la base de las rentas del monasterio de Santa Clara, no fueron sino aspiraciones mal definidas.

VI

Las diversas obligaciones internas y externas contraídas en la época de Melgarejo, pasaron de diez millones de bolivianos de los que descontados el empréstito La Chambre, la negociación Arman y parte de los empréstitos departamentales amortizados con la venta de tierras, quedaron pendientes las siguientes sumas:

OBLIGACIONES EXTERNAS

Empréstito Concha y Toro..	Bs. 1.333.400	
Indemnización y empréstito Meiggs.....	« 1.800.000	
Negociación y préstamo López Gama.....	« 200.000	3.333.400

OBLIGACIONES INTERNAS

Venta de tierras de comunidad	Bs. 1.209.442	
Empréstitos departamentales	« 200.000	1.409.442
Al frente.....	Bs.	4.742.842

Del frente.....	Bs.		4.742.842
Vales de la moneda «Melgarejo».....	Bs.	75.003	
Vales de forraje.....	«	24.000	
Sueldos devengados.....	«	708.831	
Pensiones y montepíos.....	«	1.842.247	2.650.081
			7.392.923
Agregando el déficit del presupuesto de 1871–2.....	Bs.		1.053.085
el total del pasivo alcanzó a	Bs.		8.446.008

Excluyendo el empréstito Concha y Toro, que estaba en curso normal de amortización, quedaban Bs. 7.112.608 de deuda interna y externa exigible, a cuyo pago debía proveer de inmediato el país.

Para hacer frente a tan grueso pasivo, no bastaban los recursos ordinarios, que, sobre ser diminutos, habían sido torpemente comprometidos con recaudaciones anticipadas por más de un año.

Aparte de esto, la moneda feble consumía el organismo nacional como una gangrena implacable. Si de pronto no se atendía a un saneamiento radical, seguiría a la bancarrota del Estado, la quiebra de la riqueza privada.

Tal era la situación al día siguiente del 15 de enero de 1871. Y a pesar de los nobles empeños de las asambleas de ese año y de 1872, y de las patrióticas previsiones de Frías y Ballivián, la gangrena

continuó minando el organismo político y económico, hasta llegar fatalmente a la terrible crisis de 1879.

Sólo con cauterio de fuego y sangre, podía extirparse el virus incubado desde muy lejanas épocas.

CAPITULO VI

REPARANDO EL DESASTRE

I.—Los métodos revolucionarios.
II.—Reivindicación de las tierras de comunidad.—Suspensión de la venta de tierras baldías.
III.—Arreglo Velarde-Meiggs.—El empérstito Church.—Transacción Milbourn Clark & Cº.—Ferrocarril Mejillones—Caracoles.—Ferrocarril a Tacna.
IV.—Legislación monetaria de 1872.—La moneda sencilla de 23 gramos.—Conversión de la feble.—Supresión del monopolio de pastas.—Monto de la acuñación de plata.
V.—Empréstito de £2.000.000.—El derecho presupuestal.—La ley financial de 1872.—Descentralización rentística.—Vigencia del presupuesto de 1864.—Varios impuestos.—Junta visitadora de hacienda.

I

Todas las revoluciones han obrado de idéntica manera. Existe indudablemente un método político tradicional para el ejercicio de eso que pudiera llamarse «derecho público revolucionario», que los países hispano-americanos lo han ejercitado con una frecuencia deplorable.

En todos los levantamientos armados, la misma fórmula de investidura provisoria «por la volun-

BIBLIOTECA DEL BANCO
CENTRAL DE RESERVA

tad espontánea de los pueblos», igual organización política del gobierno con una secretaría general y una comisaría de guerra, idénticos medios para obtener recursos, ya de parte del gobierno o ya de los revolucionarios.

Se descuentan los sueldos o no se pagan sencillamente. Se levantan empréstitos forzosos, votándolos en exorbitantes cuotas sobre los enemigos políticos, y se estrecha en un puesto de guardia a los tenedores de fondos públicos para que entreguen el último centavo, propio o ajeno, bajo pena de la vida.

Después, vienen los decretos marciales, la declaratoria del gobierno contra los revolucionarios y de éstos contra aquél, poniéndose mutuamente fuera de la ley, e hipotecando los bienes de unos y de otros para responder a los asaltos de la propiedad privada o de las arcas fiscales.

Triunfante la revolución, los rumbos políticos se cambian comenzando por los impuestos, suprimiendo algunos o modificándolos; se siguen por los métodos de percepción, por el arqueo y corte de cuentas «a la fecha gloriosa» para fijar responsabilidades y manejar con pureza pristina los dineros del pueblo.—Cese la Comisaría de Guerra, ríndanse las cuentas, los libros son públicos, la acción popular está expedita, se califiquen los perjuicios, se otorguen por ellos vales, se concedan premios y montepíos.—Tales son, en compendio, las medidas financieras y administrativas de todas las revoluciones.

La que derrocó a Melgarejo, siguió los mismos métodos.

Prescindiendo de los vejámenes a las señoras de los enemigos políticos, de las que se obtuvieron 50.000 pesos de una parte y 30.000 de otra, la revolución triunfante ordenó el secuestro de los bienes de Melgarejo y sus ministros, organizó comisiones investigadoras, mandó formar procesos ante las municipalidades, cuyos veredictos se acumularon para su presentación a la asamblea.

En un orden más general, prohibió la acuñación de la moneda feble e hizo destruir a golpe de comba 17 troqueles de dicha moneda.

Fué suprimido el impuesto de cueros en La Paz, y se declaró en vigencia provisional el último presupuesto del gobierno Achá (1864), y el de 1861 para el servicio de instrucción.

Después de estas medidas de primera intención, el gobierno convocó a una asamblea extraordinaria que tomó a su cargo la patriótica tarea de reconstituir el país.

II

Una de las primeras leyes de la Asamblea de 1871, respondiendo al clamor general y a los principios de justicia, fué la de 31 de julio sobre terrenos de comunidad.

Según las definiciones de dicha ley, son y han sido propiedad de los indígenas los terrenos de origen y las comunidades, quedando por tanto anuladas, como atentatorias al derecho de propiedad, las ventas y adjudicaciones hechas bajo la dominación de Melgarejo.

Como una declaración lisa y llana del derecho de propiedad sin estatuir nada tocante a la situación de los compradores de buena fe, iba a producir un trastorno evidente, la ley les reconoció el derecho que tenían a la indemnización, de parte del Estado, por el precio de compra en dinero, o en valores fiduciarios, si en ellos se hizo el pago. Asímismo se reconoció a los indígenas que hubieran hecho la consolidación de sus tierras, el derecho a recobrar el precio indebidamente pagado.

No tenían derecho al reembolso los funcionarios públicos que hubiesen adquirido tierras con pagos simulados o con fondos fiscales, los que hubiesen sido eximidos del precio por Melgarejo, y los que visiblemente hubiesen obtenido dichas tierras con dineros dilapidados a la hacienda pública.

En cuanto a los terrenos sobrantes y baldíos, se declaró la nulidad de las ventas, si en su adjudicación no se hubieran observado las leyes anteriores a 1864.

La asamblea del año siguiente (1872) que fué sin duda la que echó las bases esenciales de la reorganización nacional, dispuso que los indígenas contribuyentes sin tierras quedasen eximidos del tributo una vez que supieran leer y escribir. Buena era la ley en principio, pero reconocía y consagraba la injusticia que desde la época española venía pesando sobre la raza indígena a la que se cobraba un doble impuesto: a los que tenían tierras, la contribución indigenal con relación a sus tierras y a sus personas, y a los que carecían de tierras, simplemente el tributo sin

más razón que la que invocó la corona de España en señal de sometimiento y vasallaje de los indígenas al monarca conquistador.

Más fuerza que los principios de justicia tuvo la fuerza de las circunstancias en que se hallaba la hacienda pública.

Ratificada por el nuevo gobierno la autorización al coronel Church para contratar un empréstito y comenzar las obras del ferrocarril del Madera, hubo una gran ansiedad por acaparar las tierras del Mamoré y toda la región que iba a ser favorecida por la Compañía de Navegación. Con muy prudente consejo, el gobierno del coronel Morales suspendió las adjudicaciones mientras se expidieran nuevos reglamentos para el régimen de la tierra fiscal.

III

Entre los desgraciados negocios que dejó la dominación de Melgarejo, fueron considerados por la Asamblea de 1871 los emergentes del empréstito Meiggs por cuatro millones y la venta de huanos, que hubo de rescindirse *ad referendum* conforme a las modificaciones aprobadas por el congreso de Oruro de 1870 (1). La rescición Velarde–Meiggs fué aprobada, reconociéndose en consecuencia la nueva obligación por 1.800.000 pesos fuertes, así como las demás cláusulas del citado contrato Velarde.

Fueron ratificadas las concesiones hechas al coronel Church, del mismo modo que las gestiones rea-

(1)—Véase Capítulo V, página 307.

lizadas por éste en Londres para la contratación del empréstito por medio de la casa Emilio Erlanger & Cª.

El 16 de octubre de 1872 el gobierno comunicó al país con patriótica complacencia, la realización del citado empréstito, anunciando al mismo tiempo la próxima iniciación de los trabajos del ferrocarril. El empréstito se había emitido por £ 1.700.000 al 68% con el 6% de intereses y el 2% de amortización, habiéndolo tomado a firme la expresada casa Erlanger & Cº.

Los fondos se depositaron en el Banco de Londres para su inversión, según lo dispuesto por el gobierno de Bolivia, lo cual se verificó del modo siguiente:

El 83% del producto neto debía entregarse a la Compañía Nacional de Nevegación, correspondiendo al gobierno el 17% restante.

La Compañía de Navegación había organizado otra entidad llamada Compañía Constructora del Ferrocarril, a cuyo nombre se depositó el 73% del empréstito como un fondo especial destinado a la obra del ferrocarril.

De esta manera, los fondos negociados, deducción hecha de gastos y comisiones usuales, se distribuyeron en la siguiente proporción:

73% para la Compañía Constructora.
10% para la Compañía de Navegación.
17% para el Gobierno de Bolivia. (1)

---

(1)—El El empréstito al 68%, produjo £ 1.156.000; deducida la comisión del 6 1/2 %, (£ 110.500), quedó el saldo líquido de £ 1.045.500. De esta suma correspondieron £ 867.765 a Church, y £ 177.735 a Bolivia, que fueron empleadas en pago de intereses.

Esta operación, conocida con el nombre de «Empréstito de 1872», tuvo un desenlace funesto para el crédito boliviano. La empresa Church fracasó, y Bolivia fué víctima de su confianza y de su entusiasmo por una obra grande y de vital importancia para el porvenir de la hoya amazónica.

El gobierno organizó los territorios del Mamoré, directamente comprometidos a la influencia de la empresa Church, en un distrito territorial, nombrando a D. Miguel Suárez Arana para representarlo ante la empresa en calidad de jefe político y militar con residencia en el pueblo de Exaltación.

Como se ha visto en el capítulo precedente, el Sr. J. Santos Ossa, por la Sociedad Explotadora de Atacama, había obtenido del gobierno de Melgarejo un privilegio ilimitado para explotar y exportar las salitreras descubiertas o que se descubriesen en el Litoral. Traspasado el privilegio a la firma Milbourn Clark & Cº, que había iniciado los trabajos con el empleo de importantes capitales, el gobierno del coronel Morales ratificó la concesión circunscribiéndola de la manera siguiente:

Teniendo por base el paralelo 24° de latitud Sud, se formaría un paralelogramo con 15 leguas de altura y 25 leguas de ancho, en el cual la casa Milbourn Clark & Cº tendría la libre elaboración y exportación de salitres por el término de 15 años, y el derecho exclusivo de construir los ferrocarriles que fuesen necesarios.

En la misma época (1872) el gobierno contrató con los señores José Manuel Braun, Marcial Martínez, Carlos Wattson y Enrique Meiggs, la consrtucción del ferrocarril de Mejillones a Caracoles por cuenta fiscal.

Esta obra excluía virtualmente cualesquiera otras concesiones particulares, tales como la de Bordes y Cº, y con mayor razón la de Milbourn Clark y Cº, cuyas exclusivas eran simplemente locales. Aquí nació la primera dificultad con los Milbourn.

El ferrocarril Mejillones–Caracoles, se contrató sobre las siguientes bases:

Se pagarían las obras con bonos del Estado emitidos al 80%, los cuales ganarían 7 ½% de intereses y 2% de amortización acumulativa.

El precio del ferrocarril por milla se fijó en 40.000 pesos.

Si los bonos del Estado fuesen colocados por los contratistas a más del 90%, la diferencia sería partible por mitad con el gobierno.

El servicio de los bonos estaba garantizado con el producto del ferrocarril y con la de la exportación de pastas y minerales de plata del Litoral, a cuyo fin el Banco Nacional de Bolivia, que serviría de agencia financiera en Valparaíso, nombraría dos interventores pagados por el gobierno para que recauden los derechos de exportación y los rendimientos del ferrocarril.

En caso de no bastar estos recursos para el servicio de los bonos, el gobierno estaba obligado a depositar los fondos necesarios, o autorizar al Banco la exportación de pastas en cantidad suficiente para cubrir el déficit.

El Banco cobraría ½% de comisión por el servicio de amortización y 1% por el de intereses.

La obra comenzó en las condiciones estipuladas, pero su desarrollo financiero fué un nuevo desastre para Bolivia, que no pudo hacer frente a las obligaciones contraídas, ni los contratistas supieron llenar sus compromisos.

También el año 1872 se autorizó a los señores Harnsworth y Cº la construcción del ferrocarril de La Paz a Tacna. Los concesionarios se comprometieron a organizar una sociedad denominada «Compañía del Ferrocarril de la frontera del Perú a La Paz». El gobierno se obligó a garantizar el 7% sobre un capital de doce millones de pesos fuertes (£ 2.400.000) durante 25 años. El 45% de los productos del ferrocarril se consideraría como gasto de explotación y el 55% se aplicaría al pago de los intereses, los que se reembolsarían después al gobierno cuando los rendimientos fuesen superiores al 7% garantizado.

La obra no pasó de un simple proyecto.

IV

La Asamblea de 1871 revalidó las leyes monetarias de 1863 y 1868 con una novedad que después ha sido régimen permanente en la acuñación de la plata. Adoptado el «boliviano» de 25 gramos de peso y 900 milésimos de fino, como unidad monetaria, con los submúltiplos de 20,10 y 5 centavos de la misma ley, se autorizó a la Casa de Moneda a emitir 500.000 bolivianos en plata sencilla con 8% de tolerancia en el peso ponderal, de modo que las piezas de

20 centavos sólo tendrían 4,60 gramos de peso, en vez de 5 gramos justos, las de 10 centavos 2,30 gramos, y las de 5 centavos 1,15 gramos, en lugar de 2,50 y 1,25 que respectivamente correspondían a la unidad monetaria.

La moneda sencilla estaba destinada sólo a las transacciones internas, en cuya virtud no afectaría al comercio externo.

Así habría sido, a no dudarlo, si la acuñación se hubiese limitado al medio millón autorizado, y si por lo demás hubieran seguido emitiéndose los «bolivianos» de 25 gramos para regular el mercado de los cambios internacionales.

En la práctica, la unidad monetaria quedó reducida a 23 gramos, apesar de que la Asamblea de 1872, que dictó la ley definitiva de la moneda nacional, reconoció como unidad el peso boliviano de 25 gramos, como se verá a continuación.

Por ley de 24 de noviembre, la citada Asamblea fijó las nuevas características de la moneda, reconociendo implícitamente el bimetalismo, aunque en el hecho la plata tuvo el rol exclusivo de patrón monetario.

He aquí el cuadro de la moneda de 1872:

	Nombre	Valor	Peso en gramos	Ley	Tolerancia en el peso	Tolerancia en la ley
Oro	Bolívar	10 Bs.	16,129	900	2 miligramos	1 milésimo
«	½ Bolívar	5 «	8,065	«	2 ¼ «	1 «
«	Escudo	2 «	3,225	«	2 ⅞ «	1 «
Plata	Boliviano	100 cts.	25,000	«	3 «	3 «
«	½ boliviano	50 «	12,500	«	5 «	3 «
«	Peseta	20 «	5,000	«	6 «	3 «
«	Real	10 «	2,500	«	7 «	3 «
«	½ real	05 «	1,250	«	10 «	3 «
Cobre		01 «				

Los tipos, con ligeras diferencias, fueron los mismos usuales, debiendo llevar las monedas de oro el busto del Libertador «a la heroíca».

Se prohibió la emisión de moneda sencilla al 31 de diciembre de 1872, aunque a esa fecha no estuviese emitida la suma de 500.000 bolivianos autorizada por la ley de 1871.

Empero, cuando comenzare la libre exportación de las pastas de plata, que en breve había de ocurrir, quedaría autorizada la acuñación de un millón de bolivianos en moneda sencilla de 23 gramos.

Era, en suma, una transacción entre el peso fuerte y la moneda feble, dejando al comercio la libertad de exportar las pastas para saldar sus compromisos internacionales.

El problema de la conversión de la moneda feble fué resuelto por la Asamblea de 1872, asignándose a este servicio un millón de bolivianos provenientes del empréstito externo autorizado por la Asamblea del año anterior. Si la suma asignada fuese insuficiente, se señalarían más tarde otros recursos.

La ejecución de esta ley dió lugar al contrato celebrado por el gobierno del Dr. Frías con el Banco Nacional el año 1873, que no llegó a realizarse.

El año 1870 marca en la historia económica y financiera del mundo, el origen de la caída de la plata.

Alemania adoptó el patrón de oro y desde entonces quedó decretada la depreciación del metal blanco.

En 1872 las cotizaciones de Londres tuvieron aún cifras altas de 60 ½ y 61 peniques por onza troy.

A fines de ese año comenzó a bajar, y en 1873 el precio ya era menos de 59 peniques.

La repercusión de este fenómeno en Bolivia fué insensible al principio.

El cambio que había fluctuado entre 48 y 46 peniques, comenzó a bajar marcando sucesivamente cotizaciones de 45 a 40 peniques.

En 1872 la Casa de Moneda tuvo que paralizar sus trabajos por falta de pastas, cuyo tráfico clandestino aumentó considerablemente.

Se prohibió la exportación de pastas que no fuesen vendidas por la Casa de Moneda, pagándose el impuesto del 4%. El precio oficial de la plata se fijó en Bs. 39,06 por kilogramo fino, debiendo establecerse oficinas de rescate en La Paz y Oruro.

Comenzó a decaer la minería, y el gobierno tuvo que refundir el Banco de Rescates de Potosí en la Casa de Moneda, ya que la disminución de pastas hacía innecesario el mantenimiento de aquella oficina.

La Asamblea de 1872 se vió forzada a declarar el comercio libre de la plata, a partir del 1º de julio de 1873, votando el impuesto de 50 centavos sobre marco de piña y declarando cancelados los privilegios existentes.

Era una solución obligada.

Después de 328 años de monopolio, la plata iniciaba su comercio libre obedeciendo los inflexibles mandatos de la ley económica, antes que los de la Asamblea de 1872.

En el período comprendido entre 1860 a 1870,

la acuñación de la moneda de plata siguió el curso que se anota a continuación:

AÑOS	PLATA FUERTE (1)	MONEDA FEBLE (2)
1860	$ 2.359.547,1	
1861	» 2.113.642,3	
1862	» 2.272.349,1	
1863	» 2.326.153,3	
1864 (3)	Bs. 1.899.914,85	
1865	» 1.469.589,40	Bs. 239.930,80
1866	» 884.359,70	» 1.158.716,30
1867	» 1.704.102,10	» 488.660
1868	» 722.310	» 1.887.421
1869	» 260.004	» 1.652.907,90
1870	» 766.629,20	» 396.206.

V

La Asamblea de 1871 autorizó la negociación de un empréstito por dos millones de libras esterlinas destinadas a la amortización de la moneda feble, a la indemnización de los compradores de terrenos de comunidad, al pago de los gastos y perjuicios de la revolución, a la amortización de la deuda Meiggs y del empréstito Concha y Toro y a la liquidación de la deuda interna flotante.

Como fondos de garantía se afectaron el huano y los minerales del Litoral.

Para la liquidación de la deuda interna se creó

(1)—Ley 10 dineros 20 granos.
(2)—Ley 8 dineros.
(3)—Ley métrica de 900 milésimos.

una comisión encargada de calificar los derechos de los reclamantes, y se ordenó que las amortizaciones se hagan por licitación.

No llegó a realizarse esta importante operación financiera, tanto porque a la misma época se gestionaba el empréstito Church, cuanto porque los congresos posteriores se mostraron contrarios a esta clase de negociaciones.

Empero, se reglamentó la liquidación de la deuda interna, clasificándose en cuatro grandes capítulos; a saber.

I Deuda española; II Deuda patriótica; III Déficit acumulado; IV Indemnizaciones y perjuicios de la guerra civil.

El derecho presupuestal que durante los gobiernos de Linares y Achá había quedado claramente definido con la adopción de bases fundamentales para el manejo y liquidación del presupuesto, llegó a tomar forma definitiva en la importante ley financial de 21 de noviembre de 1872, que ha presidido hasta nuestros días el régimen financiero de la República.

La citada ley, en contraposición al centralismo de Linares e inspirándose en las célebres campañas parlamentarias de Lucas Mendoza de la Tapia, tendientes al establecimiento del sistema de gobierno federal, proclamó como base de las finanzas nacionales la descentralización rentística.

No surgió la forma federativa como régimen de gobierno, pero todas sus inspiraciones descentralizadoras triunfaron en las leyes orgánicas de la Asamblea de 1872.

Los recursos públicos fueron divididos en nacionales, departamentales y municipales.

Se definieron como recursos nacionales, los derechos de aduana, las utilidades de la moneda, los derechos sobre pastas y minerales, el producto del papel sellado, las contribuciones sobre sueldos militares y eclesiásticos, el peaje y el impuesto sobre el ganado, los títulos de los empleados, los productos del huano, el salitre, el bórax y demás riquezas inorgánicas del Litoral, el producto de la venta de tierras, y, en caso de déficit, las subvenciones departamentales.

Fueron declarados recursos municipales, los antiguos fondos de provincias (patentes, sisa, pesas y medidas, etc.) adjudicados en 1864, y los de establecimientos de caridad y beneficencia, así como los fondos especiales del ramo de instrucción afectados exclusivamente a este servicio.

Los recursos no comprendidos en los nacionales y municipales, se adjudicaron a los tesoros departamentales, debiendo determinarse dichos recursos en el presupuesto local de cada distrito.

Los recursos nacionales se destinaron al pago del legislativo, del gobierno nacional, corte suprema y tribunal de valores, servicio diplomático y comisiones de carácter nacional, ejército, deudas y subvenciones a los departamentos.

Los fondos departamentales se aplicarían al pago del servicio local, administrados por el respectivo tesoro, bajo la dirección e inspección del ejecutivo y la vigilancia de la municipalidad. Los fondos so-

brantes se destinarían a obras de utilidad pública de acuerdo entre el prefecto y la municipalidad con aprobación del gobierno.

Un presupuesto especial determinaría concretamente los recursos municipales adjudicados, debiendo reputarse de este carácter todos los no comprendidos en los servicios nacional y departamentales.

Los fondos de instrucción serían administrados por los concejos municipales de acuerdo con los jefes de la instrucción departamental. Los presupuestos se elevarían ante el gobierno para su inclusión en el presupuesto general y su presentación a la asamblea ordinaria.

La contabilidad sería reglada por la ley financial, no pudiendo llevarse otras cuentas que las designadas por los capítulos o grandes divisiones del presupuesto.

Se adoptaron reglas precisas para la liquidación anual del presupuesto, la que se verificaría con sujeción a los siguientes cuadros:

INGRESOS:

1º—Evaluación de cada ramo de ingresos;

2º—Lo devengado por el Estado sobre cada ramo;

3º—El monto de lo recaudado;

4º—El saldo por recaudar.

EGRESOS:

1º—Monto de los créditos autorizados por el presupuesto;

2º—Lo devengado por cada acreedor;

3º—Lo pagado a cada uno de éstos;

4º—El saldo por pagar.

Para la liquidación definitiva del presupuesto, quedarían abiertos los libros hasta el último día de febrero siguiente de la gestión.

Los cuadros de liquidación serían verificados en el ministerio de hacienda durante el mes de abril y se remitirían después al tribunal general de valores para su comprobación y confrontación.

La administración financiera se dividió en dos grandes reparticiones: la *dirección general de contabilidad* y la *pagaduría nacional.*

La primera se encargaría de llevar la cuenta general, de administrar los fondos y de pagar los servicios girando letras sobre las oficinas o casas donde se encuentren los fondos.

La pagaduría nacional tendría a su cargo los recursos fiscales y con ellos pagaría las letras o vales girados por la dirección de contabilidad, de modo que no haría otros pagos que los de giros de la alta administración, ni llevaría otra cuenta que la de caja, pasando un balance diario al ministerio de hacienda.

Así quedaron, clara y definitivamente fijadas las bases orgánicas del régimen financial con especificación de recursos, afectación de pagos, reglas de liquidación por el sistema de ejercicio económico y división fundamental de las funciones administrativas y pagadoras.

En cuanto a las garantías del presupuesto, fueron revalidadas y ampliadas las que se expidieron en la época de Linares bajo las inspiraciones de D. Tomás Frías, en quien debe verse al autor del régimen financiero vigente.

Son dignos de anotarse los principios generales consagrados por la citada ley de 1872:

El presupuesto es la ley financial del estado.

El presidente de la República y los ministros de Estado, son los ordenadores de pagos.

No podrá librarse orden de pago para servicios no comprendidos en la ley financial.

Los prefectos son ordenadores delegados de pagos destinados al servicio local ordinario.

Los créditos abiertos no son debidos sino cuando han sido devengados mediante servicios prestados con arreglo a la ley.

Los créditos abiertos por un presupuesto no pueden emplearse en otros servicios, sino con las formalidades de ley.

La omisión de un crédito no importa derogación.

Todo pago ilegal es de responsabilidad del pagador.

Como se ve, las reglas fundamentales del estatuto financial, están basadas en los principios más avanzados del derecho presupuestal moderno.

Cabe, sin embargo, hacer dos reparos a la ley de 1872: su descentralización extremada y su falta de reglas para fenecer definitivamente la gestión.

Lo primero fué obra de las ideas federalistas, y ha producido más males que beneficios. La autono-

mía financiera de las municipalidades en la forma absoluta consagrada por la ley de 1872, es contraria a la unidad de las fianzas nacionales. No se sabe actualmente dónde concluye el poder rentístico de los municipios y hasta dónde tiene derecho la administración central para evitar la fijación de impuestos municipales. De ahí resultan contradicciones insalvables. Se desea, verbi gracia, proteger un producto nacional, suprimiendo los impuestos que lo gravan y otorgando primas a la producción. Toda la política desenvuelta en tal sentido, puede quedar anulada por las ordenanzas municipales que tienen ilimitado derecho a gravar los productos de su circunscripción. No son pocos los casos de protección fiscal que quedan anulados por este medio. Muchas veces la introducción libre de artículos extranjeros, lo es sólo en nombre, porque las municipalidades se encargan de imponerles derechos más fuertes que los aduaneros.

Si bien la ley financial de 1872 prescribe la liquidación del presupuesto al 28 de febrero siguiente al año económico, queda indefinidamente abierto con las interminables cuentas de acreedores de gestiones pasadas y deudores y recaudaciones pendientes. De aquí resulta que sobre los créditos abiertos por un presupuesto de años atrás, se pueden ordenar pagos hoy mismo con imputación a fondos de esa misma gestión.

Se hace preciso dictar reglas complementarias para dar a la liquidación financial de febrero el carácter definitivo que debe tener, señalando la forma de arrastrar o fenecer los saldos y el modo de proveer al

pago ulterior de las obligaciones pendientes, ya pasándolas a la deuda interna o ya a los créditos del presupuesto para la nueva gestión, fijando al mismo tiempo las reglas y condiciones para la prescripción de la obligación financial.

Por lo demás, la ley de 1872, modificada por disposiciones posteriores, con la centralización de varios servicios departamentales, como los de policías y administración de justicia, es una de las más avanzadas en su género.

Uno de los primeros cuidados del gobierno de Morales, fué poner en vigencia el presupuesto de 1864 que la Asamblea de 1871 confirmó autorizando al gobierno para agregarle los servicios necesarios a la administración del Litoral.

Los recursos fueron los mismos que regían a la caída de Achá.

El impuesto de timbres quedó derogado, manteniéndose sólo los sellos de correos.

El papel sellado se remató por 31.010 pesos.

Se votó el impuesto de 4 pesos sobre la exportación de cascarilla, rebajándose a la mitad para el comercio por el Amazonas.

Deseoso el gobierno de mostrar la pureza de su administración, organizó juntas visitadoras de hacienda, encargadas de inspeccionar mensualmente los tesoros, firmando sus balances y concurriendo a los arqueos de caja.

Las juntas visitadoras se organizaron con un vocal de la corte superior, un munícipe, un canónigo,

un cura, un ciudadano, el fiscal del distrito y un contador.

Es la medida más disparatada que ha podido inspirar la revolución triunfante, por uno de esos fenómenos reactivos tan frecuentes, que hacen pasar de un extremo al otro.

CAPITULO VII

FRIAS Y BALLIVIAN

I.—Apreciaciones de conjunto.
II.—Tratado de aduanas con el Perú.—Tratado de 1874 con Chile.—Quebranto de la renta aduanera del Litoral.
III.—Transacciones y nuevos contratos con López Gama.—Alsop & Cº—Crédito Valdeavellano y Cº—Contrato Wattson.—Meiggs y el ferrocarril de Mejillones.
IV.—El fracaso de la empresa Church.—Previsiones a posteriori.—El contrato secreto de Meiggs.
V.—La transacción con la «Compañía de Salítres».—«Empresa Nacional en el Paraguay».—La navegación del Desaguadero.
VI.—Comercio libre de la plata.—Impuesto proporcional.—Patentes mineras.—Conversión de la moneda feble.—Empréstito interno.
VII.—Ley de exvinculación de tierras.—Impuesto predial por repartimiento.—Varios impuestos.—El presupuesto de 1873-1874.—Deuda externa.

I

Después de la administración del general Ballivián hasta la guerra del Pacífico, el país no tuvo sino dos momentos de buen sentido: la dictadura del Dr. Linares, seguida del legalismo de Achá, y la rápida administración de D. Adolfo Ballivián.

Con Melgarejo se agotaron las mayores extravagancias, de las que habían de derivarse para el porvenir las más serias complicaciones financieras e internacionales.

Morales, en quien veía el pueblo al salvador de las instituciones—su «segundo Libertador» como se le llamaba,—pasó por el poder como un ambicioso torpe y vulgar. El pudo haberse llenado de gloria à muy poco esfuerzo; pero el poder no fué propicio a la serenidad de su criterio. Le extravió la ambición, y cayó ante el concepto público de manera lamentable, antes que un drama privado lo eliminara de la vida. La ley del contraste, después de la dominación de Melgarejo, le tenía allanado el camino; pero el héroe del 15 de enero probó que tenía más aptitudes para crearse obstáculos, que para seguir por los caminos fáciles del bien y del buen sentido.

Las Asambleas de 1871 y 1872, no obstante las torpezas de Morales, llenaron su misión con patriotismo, iniciando la regeneración nacional; pero faltó un hombre que hiciera fructificar esa obra tan bien intencionada.

El interinato del Dr. Frías a la muerte de Morales, no tuvo la menor importancia, a no ser por el rendido sometimiento a la ley, que en todos sus actos mostró el viejo Magistrado. Pocos bríos ya quedaban al hábil y acendrado Ministro de Linares, para echarse encima la enorme tarea de salvar un país que fatalmente iba a la bancarrota. A toda prisa convocó los colegios electorales, y entregó el mando supremo a D. Adolfo Ballivián.

Surge la figura simpática del joven presidente como una promesa de días mejores. El sabe bien que el país va al desastre. Pone todo su patriotismo, toda la fuerza de su espíritu generoso, para salvarlo. El país no lo comprende. Dos congresos seguidos le niegan los subsidios que pide para liquidar la bancarrota de la hacienda y para oponer a la amenaza de la guerra, la previsión bélica necesaria a neutralizarla, o a arrostrarla resueltamente. Muere Ballivián antes de un año de su investidura, y sigue la fatalidad su loca carrera hacia el abismo.

Vuelve al poder el Dr. Frías: un nuevo interinato, vacío de iniciativas, legalista como siempre, pero incapaz de un viraje resuelto para salvar los rumbos peligrosos.

Viene en seguida Daza como la síntesis de toda aquella situación maleada. Con él se completa el siclo fatal, concluye el proceso desgraciado de un pueblo en formación; con él se liquidan los errores pasados.

II

Desahuciado por el Perú el tratado de comercio y aduanas de 1864, que estableció la aduana común de Arica, con 450.000 pesos febles o sean 360.000 soles de subvención en favor de Bolivia, se suscribió otro el de 23 de julio de 1870 sobre las mismas bases, aumentando a 506.250 pesos febles ($ 405.000) la subvención, y disponiendo que las internaciones por Cobija se rijan por el arancel peruano con una rebaja que, en ningún caso, había de exceder a la tercera

parte de dicho arancel. El aumento de subvención se debió a haberse elevado en un 25% los derechos del arancel peruano.

Mostró grande empeño Bolivia por continuar el régimen aduanero iniciado en 1864, y no vaciló en aceptar el empeoramiento de la situación de Cobija.

Con Chile, después de muy enojosas dificultades, se suscribió el tratado de 1874 en reemplazo del de 1866.

Mantenido el límite en el paralelo 24°, los depósitos de huano existentes entre éste y el 23°, debían ser partibles por mitad.

Los derechos de exportación sobre minerales procedente de la citada zona, no excederían las cuotas existentes; y las personas, industrias y capitales chilenos, no tendrían otras contribuciones que las vigentes en la fecha del tratado, estipulación que duraría por el plazo de 25 años.

Los productos naturales de Chile importados por el Litoral boliviano dentro de los paralelos 23° y 24°, quedarían libres de todo derecho, del mismo modo que los productos bolivianos importados al Litoral chileno dentro de los paralelos 24° y 25°.

Bolivia se obligaba a habilitar permanentemente los puertos de Mejillones y Antofagasta.

Por el tratado complementario de 21 de julio de 1875, se explicó que la comunidad de la explotación del huano se refería a la zona comprendida entre los paralelos 23° y 25°, y no sólo a la de los paralelos 23° y 24° como aparecía del tratado principal.

La recaudación de la aduana de Cobija iba en constante disminución. El gobierno de D. Adolfo Ballivián dispuso en 1873 la licitación de esa renta, medida que fué aplazada indefinidamente.

No sólo influía en el quebranto de la renta de Cobija y de las demás aduanas del Litoral, el hecho de hallarse alejadas de la acción inmediata del gobierno, sino que el tratado con el Perú, centralizando la mayor parte del comercio boliviano en Arica, reducía naturalmente las importaciones por los puertos nacionales.

En 1875 se organizó una comisión especial encargada de formular un reglamento de aduanas para el servicio del Litoral.

III

Las concesiones de huano hechas a D. Pedro López Gama en 1867, fueron transigidas en 1872, reconociéndole el derecho al valor de 150.000 toneladas a razón de 7 pesos 2 reales, o sean 1.087.500 pesos.

El origen de esta obligación, como se ha visto en el capítulo V, página 293, fué el anticipo de 100.000 pesos dados al prefecto de Cobija por el expresado López Gama a cuenta de un contrato de huanos que quedó interrumpido por la negociación Arman, y otro anticipo de 50.000 pesos hecho al comisionado del gobierno del general Melgarejo, señor Muñoz, a cuenta de un nuevo contrato que a su vez quedó sin efecto por las negociaciones de Meiggs y la anulación de los actos de aquel gobierno.

En pago de ambas obligaciones, se reconoció al

expresado señor López Gama la suma de 1.087.500 pesos, cuyo pago se haría con el 25% del producto neto de las estaca–minas del Litoral, las que a partir del 1º de abril iban a ponerse en licitación. Si se retardase el pago no obstante de hallarse en explotación la estaca–mina de Caracoles, el gobierno reconocería el interés del 8%. Mas, si el mismo López Gama fuera el licitador de los trabajos, no habría lugar a los intereses estipulados.

Hecha la licitación, fueron adjudicadas las estaca–minas al mismo proponente López Gama, bajo las siguientes condiciones:

Se hacía cargo del trabajo de todas las pertenencias del Estado en el Litoral, poniendo el capital necesario para su explotación.

En garantía de la propuesta afectaba su crédito de 1.087.500 pesos y además un empréstito por..... 1.250.000 pesos que se comprometía entregar al Estado al 8% de intereses, 6% de amortización y 1% de comisión. A los tres meses del contrato pagaría la primera armada del empréstito, fijada en 250.000 pesos. La segunda armada por 500.000 pesos se entregaría tres meses después de la primera, y los últimos 500.000 pesos a los seis meses siguientes.

Las utilidades de la explotación minera se partirían por mitad, aplicándose la parte del Estado a la amortización de la deuda procedente del huano, y el resto al pago del interés y amortización del nuevo empréstito, quedando a orden del gobierno el saldo que resultare.

El contrato duraría por 50 años.

A poco de haberse suscrito el contrato de abril de 1873, se suscitó una seria dificultad .López Gama alegaba que tenía derecho a todas las estaca–minas descubiertas o por descubrirse, y el gobierno sostenía que la negociación sólo comprendía las que al 1º de abril correspondían al Estado en virtud de sus títulos de propiedad, que lo eran las actas de registro y concesión consignadas en el libro registro de Cobija. El caso se sometió a arbitraje, el cual fué adverso al gobierno.

Empero, la negociación de las estaca–minas quedó interrumpida.

En 1875 se presentó al gobierno el señor Juan Wheelwrigth, socio y representante de la casa Alsop & Cº de Valparaíso en liquidación, a cuyo favor habían sido cedidos los derechos de López Gama. Se celebró un nuevo arreglo, reconociendo a la citada casa cesionaria el capital primitivo de Bs. 870.000, o sean 1.087.500 pesos, con el interés del 8% a partir de la fecha del arreglo (18 de diciembre de 1875), en atención a que no tenían culpa los señores Alsop & Cº de las faltas de explotación de las minas fiscales, que habían entorpecido el pago de su crédito.

Las estaca–minas continuarían afectas al pago de la obligación, y el gobierno aplicaría a ella cualquier ingreso extraordinario que llegase a percibir.

El pago de los 70.000 Bs. de intereses se haría por trimestres vencidos en la tesorería de Cobija.

Sin perjuicio de este arreglo se dejó librada a la voluntad de los cesionarios de López Gama el derecho de tomar por su cuenta la explotación de las estaca-

minas para aplicar su producto al pago del capital e intereses estipulados.

Tomando por base esta última concesión, se suscribió al año siguiente (24 de diciembre de 1876), bajo la administración del general Daza, un nuevo y definitivo arreglo combinado con la explotación de estaca-minas fiscales.

Se reconoció el capital de Bs. 835.000 con el interés del 5% no capitalizable, debiendo amortizarse con las letras giradas trimestralmente sobre el mayor rendimiento que se obtuviese de la subvención aduanera de Arica fijada en 400.000 pesos, o con los excedentes que resultaren sobre esta misma suma, hecha la recaudación directa por la aduana del Norte.

El gobierno gestionaba en aquel momento el desahucio del tratado de aduanas con el Perú y se prometía obtener una participación mayor en las recaudaciones de Arica, o restablecer el régimen aduanero de Bolivia.

Al mismo servicio de amortización e intereses, se afectó el 40% de las utilidades de las estaca-minas del Litoral, con excepción de la «Flor del Desierto» y otra estaca más, escogida por los concesionarios, cuya aplicación se haría del modo siguiente:

El 50% de la «Flor del Desierto» y el 40% de la estaca escogida, se destinarían al pago de los intereses devengados, anteriores al 18 de diciembre de 1875, liquidados en Bs. 170.000, y a los posteriormente corridos hasta el 31 de diciembre de 1876, fijados en Bs. 70.000.

Se estipuló que, en caso de producir poco o no

producir nada las estacas afectadas al pago de los intereses devengados, «quedarían definitivamente cancelados este cargo y toda reclamación por dichos intereses devengados».

Con la casa Valdeavellano & Cº, se contrató en Lima un crédito de 500.000 soles pagaderos por semestres de 75.000 soles con 8% de intereses anuales y 5% de comisión semestral. El pago de esta obligación, contraída en 1873 para las necesidades urgentes del Estado y adquisiciones bélicas, se situó en la subvención de la aduana de Arica mediante letras giradas.

El extracto de la cuenta de inversión de este préstamo, arroja los siguientes detalles:

Entregas de Veldeavellano:

1872	30 de mayo.....	$ 250.000
«	30 de junio.....	« 250.000
	Total	$ 500.000

EGRESOS

Gastos del ejército, ministerios y erogaciones nacionales.....	$ 55.878
Varias deudas.....	« 49.275,26
En la Legación de Lima.....	« 90.000
Remesa a Tacna.....	« 270.623,34
Gastos de negociación, sueldos, &..	« 34.223,40
Total	$ 500.000,00

La liquidación final de Valdeavellano, dió el siguiente resultado:

Por capital.....	$ 500.000
Intereses.....	« 77.000
Comisión.....	« 96.250
Total.....	$ 673.250

El reembolso se hizo en siete semestres, habiendo quedado cancelada la obligación el año 1878.

El ferrocarril en construcción Mejillones–Caracoles, era una caga superior a la capacidad financiera de la Nación. A fin de hacer frente a las obligaciones contraídas y asegurar el porvenir de la obra, el gobierno firmó con D. Carlos Wattson en 1873, un contrato para la administración del ferrocarril y la recaudación de los derechos de exportación de metales del Litoral destinados al servicio de los bonos de construcción.

Wattson entregaría el monto de lo recaudado al Banco Nacional de Bolivia en Valparaíso para atender el servicio de un capital que no pasase de seis y medio millones de bolivianos. El excedente, una vez pagado el servicio, sería divisible por mitad con el gobierno.

Las mejoras y adquisición de materiales para el ferrocarril, se pagarían con los productos del tráfico, y no alcanzando éstos, las sumas erogadas por el contratista se reputarían préstamos al 7 ½%.

Si para conciliar los derechos alegados por la «Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta» se permitiese que ésta extienda su ferrocarril hasta las Salinas, se estipularía una participación del 10% en

las utilidades del tráfico, correspondiendo 7 ½% al contratista Wattson.

Con este contrato creía el gobierno haber resuelto el problema del servicio de los bonos del ferrocarril; pero, por desgracia, no fué así. El contrato quedó sin ejecutarse, y el gobierno carecía de suficientes recursos para hacer el servicio de los bonos, cuyo monto ya pasaba de dos millones de bolivianos al 7 ½ % de intereses y 2% de amortización.

Los contratistas del ferrocarril, a su vez, habían descuidado totalmente la obra, sin duda porque no veían facilidad para la cotización de los nuevos bonos que se emitirían en pago de las construcciones, y no poseían capital propio para pagarlas de su cuenta.

La Asamblea de 1874 autorizó al gobierno para atender con preferencia al pago de los bonos y vigilar e impulsar las obras, y permitió además la construcción de otros ferrocarriles en el Litoral.

Lo que menos se necesitaba en aquellos momentos era una ley. Bastantes autorizaciones tenía el gobierno: de lo que carecía era de recursos efectivos, que los congresos de 1873 y 1874 negaron señalarlos hasta para servicios mucho más sagrados y previsores.

En julio de 1875 se presentó D. José Manuel Braun, apoderado de D. Enrique Meiggs, anunciando que la compañía constructora del ferrocarril había transferido a éste el contrato de 1872, y que en tal virtud proponía hacerse cargo de la recaudación de los derechos de pastas y minerales del Litoral y servir de agente financiero en Valparaíso para pagar los intereses de los bonos, sin cuya condición no podrían

reanudarse los trabajos, ya que estaban desacreditados los títulos bolivianos imposibilitando nuevas operaciones.

El gobierno debía reconocer a la empresa constructora, por concepto de los bonos emitidos, las siguientes sumas:

Intereses al 30 de junio de 1874, sobre Bs. 2.087.500	Bs.	78.281,25
Intereses al 31 de diciembre de 1874, sobre » 2.123.500	»	79.631,25
Intereses al 30 de junio de 1875, sobre » 2.190.000	»	82.125.—
	Bs.	240.037,50
Intereses penales sobre o devengado en 30 de junio de 1874 al 7 1/2%	»	5.871,09
Intereses penales al 31 de diciembre	»	2.986,17
Total	Bs.	248.894,76

Esta suma, más 30.000 bolivianos procedentes de los derechos de exportación de pastas, formando un total de Bs. 279.896,76, se pagaría con el interés del 7 ½%, destinándose a su servicio los excedentes de las pastas de plata una vez servidos los bonos del ferrocarril.

Parecía que con este nuevo contrato iba a quedar regularizada la situación de los bonos y proseguirían los trabajos del ferrocarril. Mas, no fué así. Meiggs siguió cobrando puntualmente los derechos de exportación, pero no reanudó la obra y recogió más bien los pocos materiales que quedaban en la línea.

En 1877 el gobierno del general Daza tuvo que verse precisado a declarar la rescición del contrato por falta de cumplimiento de parte de Meiggs. Las obras quedaron definitivamente abandonadas, el fracaso más completo envolvió la negociación de los bo-

nos, y más tarde, en vísperas de guerra con Chile, el gobierno arrendó aquel ferrocarril, que había hecho concebir tantas esperanzas, por la suma de 800 bolivianos anuales a un señor Bascuñán.

IV

El arreglo de 1875 sobre el ferrocarril de Mejillones fué vinculado, a fines de ese mismo año, a las desgraciadas emergencias del empréstito Church, en la forma y condiciones que se verán más adelante.

Ante todo cabe referir la suerte de la empresa del Madera.

Como se sabe (1), el 83% del empréstito de £ 1.700.000 levantado en Londres el año 1872 por medio de la casa Erlanger, se destinó a la Compañía Nacional de Navegación, la que a su vez traspasó el 73% a la Compañía del Ferrocarril del Madera, debiendo mantenerse depositados los fondos para su inversión paulatina en las obras.

Puesta en actividad la ejecución del ferrocarril, se suscribió un primer contrato por £ 600.000, el cual fué rescindido por las dificultades con que tropezaron los contratistas, después de haber remitido gran parte del material a Santo Antonio.

Dos contratos más se suscribieron que igualmente quedaron sin efecto.

La obra realmente no era imposible, pero se necesitaban muchos más fondos para llevarla al cabo. Las £ 700.000 depositadas en el Banco de Inglaterra, resultaban escasas ante la magnitud de la em-

(1)—Véase página 328

presa, la cual, por otra parte, ofrecía graves dudas acerca de la corrección de su manejo.

Por ley de 25 de noviembre de 1874, la Asamblea Nacional ordenó al gobierno que requiera a la Compañía de Navegación para que concurra al pago del capital adicional necesario a la conclusión de la obra, con fondos negociados de su cuenta. Hasta entonces la Compañía no había aportado un solo *farthing* según después se comprobó judicialmente en Londres. Era una negociación de millones nominales y en el hecho no había otra cosa real que el empréstito contratado bajo la firma del gobierno de Bolivia, sobre cuya credulidad y excesiva confianza se había especulado de una manera indigna.

Al mismo tiempo, ordenó la Asamblea que se constituya un agente financiero en Londres con encargo especial de transigir los pleitos que se hubieran suscitado,—pues los tenedores de bonos habían pedido la devolución de los fondos que se hallaban depositados en el Banco de Inglaterra—y con poderes amplios para reconstituir los contratos, otorgando nuevas escrituras en las que se haría constar principalmente las garantías que debían prestarse por la Compañía de Navegación o por los nuevos contratistas para la construcción del ferrocarril; la forma en que debía servirse el empréstito, la responsabilidad de las compañías en caso de no realizarse la obra, el término en el que debían comenzar y acabar los trabajos, la hipoteca de los productos del ferrocarril y de la Compañía de Navegación para amortizar el empréstito de 1872.

En verdad, todo este lujo de previsión, al comienzo de las célebres concesiones y bases financieras del coronel Church, habría asegurado el éxito de la empresa o siquiera resguardado el crédito de Bolivia. Mas, dictadas las previsiones después de consumado el fraude, no iban a servir sino para evitar que el fracaso fuera mayor.

Se nombraron sucesivamente varios agentes financieros, y mientras en Londres se ejercitaba su acción, ante el gobierno de Bolivia se presentó con carácter reservado una propuesta de parte de los señores Enrique y Juan G. Meiggs, la cual se tramitó y aceptó con igual carácter de reserva, en 10 de diciembre de 1875.

La propuesta de los señores Meiggs tenía por objeto esencial la posesión de las £ 700.000 depositadas en el Banco de Londres y destinadas a la construcción del ferrocarril del Madera.

El gobierno autorizó a los proponentes «para que negocien con los tenedores de bonos la sustracción de los fondos depositados en el Banco de Londres», a fin de que se empleen en las siguientes inversiones:

1º—Cancelación de la deuda al Banco Garantizador de Valores en Chile (empréstito Concha y Toro).

2º—Arreglo conveniente de los compromisos pendientes con la compañía explotadora del huano (contrato Velarde–Meiggs traspasado a Derteano). (1)

---

(1)—Según el citado arreglo Velarde-Meiggs, éste tenía derecho de explotar 200.000 toneladas de huano de Mejillones por partidas no menores de 30.000 toneladas al año, pagando el precio de 10 bolivianos por tonelada, o sean Bs. 300.000. Igual suma correspondía a Chile por otras 30.000 toneladas de la misma zona, en

3º—Pago de la suma reconocida a Meiggs por los devengados del ferrocarril de Mejillones y los intereses de los bonos por el semestre corrido.

4º—El resto se aplicaría a la amortización de los bonos de Mejillones al 50% de su valor nominal.

Una parte de este sobrante se emplearía en comprar materiales para el mismo ferrocarril y su importe devolvería Meiggs en los citados bonos al 50%.

Para llegar a estos resultados se proponían adquirir la mayor cantidad de bonos del empréstito Church, y se comprometían obtener en una junta general de tenedores, la rebaja de los intereses al 3% y la suspensión de la amortización por dos años.

De las utilidades obtenidas en las operaciones bursátiles, se daría una tercera parte al gobierno.

Si las exigencias de Bolivia decidiesen al gobierno del Brasil a prestar su garantía para la adquisición del capital que faltaba para impulsar a las Compañías de Navegación y del Ferrocarril, el gobierno daría orden a su representante en Río de Janeiro para que se lo haga saber a D. Juan G. Meiggs por cable a Londres, a fin de que puedan comprarse la mayor parte de los bonos, los cuales reportarían una alza considerable por la intervención del Brasil.

---

virtud del tratado de comunidad. La expresada suma de Bs. 300.000 servía para pagar los intereses y amortización de la deuda de Bs. 1.800.000 al 12 % anual que se reconoció en el citado arreglo Velarde-Meiggs. D. Dionisio Derteano obtuvo los derechos y acciones de Meiggs, y explotó las huaneras de Mejillones, empresa que se llamó «Negociación Huano de Mejillones».

Derteano cobraba, además de los intereses estipulados, un 1 ½% trimestral de apertura y renovación de crédito, o sean en junto 18% de intereses y comisión! Bajo estas condiciones, el producto del huano no alcanzaba sino para cubrir los intereses, y nada o muy poco quedaba para la amortización. Al 31 de diciembre de 1876, el saldo deudor era de Bs. 1.576.766,87, y apenas tenían que exportarse 35.000 toneladas de huano para completar a las 200.000 contratadas.

Las ganancias de esta operación bursátil serían divididas por partes iguales, aplicándose al pago de los intereses devengados de Mejilloues la parte correspondiente al gobierno.

Además, los señores Meiggs podrían sacar grandes utilidades en la amortización del empréstito del Banco Garantizador, pagándolo con sus propios bonos que se cotizaban al 82%, y también en la compra del crédito de la Compañía de huano de Mejillones con una rebaja de 400.000 bolivianos.

Las ganancias así obtenidas, lo mismo que las del cambio sobre Londres, serían también divisibles.

Estas tentadoras combinaciones fueron aceptadas por el gobierno, con la modificación de que todas las ganancias serían divisibles por mitad. Se trasmitieron a Londres y Río de Janeiro las instrucciones del caso, y los señores Meiggs se pusieron en actividad.

A poco cayó el gobierno del Dr. Frías bajo cuya administración se hizo el acuerdo secreto de diciembre de 1875, y posteriormente, en 1877, el ministro D. Manuel Ignacio Salvatierra, celebró el contrato definitivo con el representante de los tenedores de bonos, Sr. Ricardo R. Harris, en cuya virtud quedó Bolivia libre de toda responsabilidad en el célebre empréstito Church.

V

En noviembre de 1873 el gobierno hizo una transacción con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta que años atrás había obtenido una ex-

tensa y gratuita concesión de salitres. (1) Esta se redujo a las estacas que explotaba bajo la denominación de «Salar del Carmen» y la parte de los yacimientos de Salinas que quedase comprendida dentro del paralelogramo de la primitiva concesión Milbourn. Además, tendría la Compañía derecho a 50 estacas fuera de dicho paralelogramo.

En cuanto al ferrocarril, se le reconoció el derecho de trabajar de Antofagasta al centro de sus explotaciones, pudiendo empalmar con un tercer riel en Salinas a la línea principal del ferrocarril de Mejillones.

La Compañía, por las 50 estacas situadas fuera del paralelogramo Milbourn, pagaría la patente anual de Bs. 40 como cuota invariable por estaca.

Durante 15 años tendría la libre explotación y exportación del salitre por Antofagasta, y gozarían de igual liberación sus importaciones de materiales y artículos destinados a la elaboración del salitre.

En cambio de estas concesiones, Bolivia no reportaba ninguna ventaja. Era una concesión absolutamente gratuita, una de esas liberalidades de Melgarejo, que por favor iba reduciéndolas la Compañía de Salitres a 15 años de privilegio y a una enorme extensión de terrenos salitreros.

El congreso de 1878 aprobó la transacción, fijando el impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado.

La Compañía protestó, pidió el apoyo de Chile y vino la ocupación del Litoral, de que habrá oportunidad de hablar en el capítulo IX.

(1)—Véanse páginas 308 y 329.

El infatigable explorador D. Miguel Suárez Arana, obtuvo en 1875 una importante concesión para colonizar y navegar los ríos del Oriente boliviano, organizando al efecto la «Empresa Nacional en el Paraguay».

El empresario propuso la construcción de un camino carretero de la ciudad de Santa Cruz a un punto conveniente sobre el río Paraguay, donde se fundaría un puerto con el nombre del proponente y se establecería una línea de navegación al Plata.

La concesión duraría 40 años.

Se erigiría el distrito del Otuquis para la administración de la zona.

Otro camino iría por Lagunillas al Yzozo.

El Sr. Suárez Arana tendría en compensación tierras baldías, exclusiva de navegación, derechos de aduana y otras concesiones durante los citados 40 años.

La navegación del Desaguadero que preocupaba mucho al país en aquella época, tuvo un nuevo proponente en el Sr. Daniel Yoacham, a quien se le concedió el derecho de canalizar el río en cambio de una exclusiva de navegación por 50 años.

Caducó la concesión, que después fué adjudicada por 20 años al Sr. Sotomayor gerente, de la empresa minera de Corocoro, a quien se le otorgó el derecho de cobrar un impuesto de tonelaje. No tuvo mejor resultado la nueva concesión.

VI

El comercio libre de la plata que debía comen-

zar en julio de 1873, fué favorecido de antemano por el gobierno, permitiéndose la exportación de pastas compradas en la Casa de Moneda sin gravamen alguno.

En cambio la plata sellada debía pagar el 4% de impuesto de exportación.

La ley de 8 de octubre de 1872 que declaró el comercio libre de la plata, fué reglamentada por el gobierno del Sr. Ballivián y puesta en vigencia el 1º de julio con los siguientes impuestos:

Plata piña, 50 centavos por marco.

Minerales de plata el 6% sobre avalúos fijados según la cantidad de marcos fino por cajón, de modo que los metales pobres hasta 50 marcos por cajón sólo pagaban 12 centavos por marco, y proporcionalmente hasta 1.000 marcos cajón, que reconocía el impuesto de 54 centavos marco.

Este primer ensayo no dió buen resultado, por lo que se adoptó una nueva escala en la siguiente forma:

De 1 a 50 marcos	por	cajón	0,18	cts.
De 51 a 80 marcos	»	»	0,20	»
De 81 a 120	»	»	0,40	»
De 121 a 140	»	»	0,42	»
De 141 a 180	»	»	0,44	»
De 181 a 300	»	»	0,46	»
De 301 adelante	»	»	0,48	»

Se entendía por cajón la medida usual de 64 quintales, que después se redujo a 50 quintales.

Las patentes ds minas se fijaron en 2 bolivianos mensuales por cada estaca en explotación, y un

boliviano si se trataba de minas en simple amparo. Anteriormente regía el impuesto de Bs. 4 mensual por grupos de 1 a 3 estacas.

A la primera presidencia del Dr. Frías se debe el importante reglamento de sustancias inorgánicas de 31 de diciembre de 1872 que adoptó la estaca como unidad de adjudicación. Dicha medida en filones era de 400 metros de largo por 25 de ancho, y en mantos o capas de 800 m x 800 m.

La patente anual de sustancias inorgánicas en filones, se señaló en 20 Bs. por estaca, y en Bs. 25 por estaca la de mantos o capas.

En la misma forma, las estacas salitreras debían pagar Bs. 30 en filones, y Bs. 40 en mantos.

En conformidad a la autorización dada por la Asamblea de 1872, el gobierno suscribió un contrato con el Banco Nacional de Bolivia para la conversión de la moneda feble de Melgarejo.

La conversión se haría a la par con billetes bancarios, a cuyo fin se aumentaría su emisión hasta la cantidad necesaria.

El gobierno vendería al Banco la moneda feble convertida, al precio que se fijase posteriormente, o le encargaría la venta por cuenta fiscal pagándole 1% de comisión.

Para hacer frente a la conversión, el gobierno depositaría en el Banco la suma de un millón de bolivianos conforme a la ley del empréstito (1872).

El Banco ganaría una comisión progresiva en-

tre el 4% y el 2% según que el monto de la conversión fuese de dos millones o pasase de 4 millones.

El gobierno dictó los reglamentos del caso, pero no se realizó la conversión porque el empréstito no fué contratado.

A las reiteradas instancias del gobierno Ballivián, que propuso un importante plan financiero para convertir las deudas externas y atender a la defensa del país, apenas pudo acceder la Asamblea de 1.873 autorizando la negociación de un empréstito por £ 1.000.000, derogando la anterior autorización por £ 2.000.000. Ni ésta ni aquélla pudieron realizarse apesar de que se ofrecían en hipoteca las más saneadas rentas del Litoral.

Ballivián murió con el hondo pesar de no haber podido modificar la situación financiera del país y no haber podido preparar su defensa ante la amenaza chilena, que inevitablemente iba a la guerra.

D. Tomás Frías atingido por las penurias del tesoro, trató de salvar la bancarrota, lanzando un empréstito interno de cuota forzosa por 200.000 bolivianos.

Su decreto fué una queja amarga ante la Nación y una especie de solicitación de la caridad pública. La Asamblea no había asignado fondos para saldar el déficit de más de un millón y medio de bolivianos, y por el contrario había votado nuevos créditos que imposibilitaban la administración.

El modesto empréstito nacional del Dr. Frías al 12% de interés, fué repartido del modo siguiente:

La Paz	Bs.	50.000
Cochabamba	«	40.000
Oruro	«	10.000
Potosí	«	45.000
Sucre	«	25.000
Cobija	«	20.000
Santa Cruz	«	6.000
Tarija	«	4.000
Total	Bs.	200.000

VII

La Asamblea Nacional de 1874 expidió la importante ley llamada de exvinculación de tierras de origen, declarando el derecho de propiedad absoluto de los indígenas en sus respectivas posesiones.

En reemplazo de la contribución indigenal se cobraría la territorial, tomando por base las cuotas vigentes.

Se extenderían los títulos de propiedad en un papel especial de 10 centavos, cuyo producto sería destinado al ramo de instrucción.

La misma Asamblea dictó la ley del impuesto predial directo para los departamentos de Cochabamba y Tarija, en reemplazo de los diezmos, primicias y de la contribución indigenal.

El impuesto se fijaría por repartimientos quinquenales, comenzando el año 1875 con la suma de Bs. 180.000 que se distribuirían por provincias y cantones mediante cuotas señaladas por las municipalidades.

En Tarija el monto a repartir se fijó en 22.000 bolivianos.

No podía ser más defectuosa la ley, que adoptaba como base impositiva el sistema injusto y rutinario del repartimiento.

Siguiendo el espíritu descentralizador de la ley financial de 1872, se adjudicaron importantes recursos a las municipalidades, de donde en gran manera procedían las penurias del tesoro nacional.

Se votó un impuesto de 2% sobre las utilidades de las sociedades anónimas.

La exportación de ganado fué gravada con 6 Bs. por cabeza.

Fuera de 2 $ que pagaban los buques mercantes por derecho de rol y otros 2 $ por papel de licencia, se votó el impuesto de 5 centavos por tonelada de registro bajo la denominación de derecho de puerto y faro.

El presupuesto de 1873–4 rigió durante los gobiernos de Ballivián y Frías. Sus rentas fueron calculadas en Bs. 2.929.573,85 de los que correspondían 1.846.844 a ingresos nacionales, detallados en la siguiente forma:

Aduana del Litoral.....	Bs.	250.000
Subvención de Arica	«	405.000
Casa de Moneda.....	«	193.696
Huanos del Litoral.....	«	300.000
Papel sellado.....	«	24.000
A la vuelta.....	Bs.	1.172.696

De la vuelta.....	Bs.	1.172.696
Impuesto sobre el ganado.....	«	20.880
Papel de títulos.....	«	3.260
Producto del 17 % del empréstito Church deducidos intereses por un año.....	«	650.000
Total.....	Bs.	1.846.844

Los egresos fueron calculados en Bs. 4.825.361,37 arrojando un déficit de Bs. 1.895.787,52.

Este grueso déficit provenía principalmente del servicio de la deuda externa vigente y de la proyectada por £ 2.000.000 conforme a la autorización de 1872.

La deuda vigente exigía las sumas que se anotan a continuación.

Empréstito Church.....	£	160.000
Comisión 1%.....	«	16.000
Cambio calculado.....	«	10.000
Total	£	186.000
Al cambio de 48 d.....	Bs.	932.800
Enrique Meiggs.		
s|. Bs. 1.814.679,38 al 8%.....	«	145.174,35
Concha y Toro.		
Servicio	Bs.	160.008
Comisión	«	1.600
Comisión de recaudación.....	«	3.200
Al frente.....	Bs.	1.077.974,35

Del frente.....		Bs. 1.077.974,35
Premio de Lima a Chile 5%	« 8.000 «	172.808
Valdeavellano y Cº		
Servicio, apertura y renovación de crédito	«	90.000
Total.....		Bs. 1.340.782,35

Hecho el empréstito proyectado, se convertirían las deudas Meiggs, Concha y Toro y Valdeavellano, en cuyo caso el servicio de la deuda externa exigiría las siguientes sumas:

Empréstito Church.....	Bs.	932.800
Id. proyectado.....	«	932.800
Total.....		Bs. 1.865.600

Como este ampréstito no se realizó, el déficit quedó reducido a Bs. 1.370.969,87. Empero, fué aumentado con nuevos créditos, los que hicieron subir el déficit para 1875 a más de 1.500.000 bolivianos, suma que quiso salvar el Dr. Frías con el empréstito forzoso proyectado por Bs. 200.000.

CAPITULO VIII

DURANTE EL GOBIERNO DE DAZA

I.—El ministro Salvatierra.—Depreciación violenta de la moneda feble.—Pérdidas que se reputan ganancias.—Definitiva liquidación del empréstito Church.—Cuentas de Derteano y Alsop.—Salitreras del Toco.—Rescición del contrato ferroviario de Mejillones.—Deuda pública a fines de 1877.

II.—Licitación del huano.—Huanchaca y el empréstito chileno.—Estudios del ferrocarril del Litoral.—Concesión del ferrocarril a Chililaya.—Empréstito para puerto Suárez.—Asuntos bancarios.

III.—La moneda sencilla.—Impuestos de exportación de pastas.—Medidas para evitar la crisis monetaria.

IV.—Desahucio del tratado de comercio y aduanas con el Perú.—El tratado de 1878.—La primera reglamentación aduanera.—Derechos «ad-valorem» y específicos.—El pastaje en la puna de Atacama.—Impuesto a la barrilla de cobre.—La serie de calamidades públicas.

I

En octubre de 1875 organizó el general Daza su primer gabinete. D. Manuel Ignacio Salvatierra se hizo cargo de la cartera de hacienda e industria. En su nota de aceptación, decía el nuevo ministro: «No es este un alarde de valor (el haber aceptado la cartera) que sin duda es necesario para arrostrar el

desaliento que inspira la deficiente y angustiosa situación del erario. Es sencillamente un acto de abnegación».

Y en la memoria que presentó al congreso de 1877, glosaba su nota de aceptación manifestando que el patriotismo y público interés que lo fortalecían para afrontar la crisis, no eran bastantes a combatir el mal. «Debía contar—agregaba—con el caudal de conocimientos, necesario para poder determinarlo en perfecta síntesis con sus causas, antecedentes y resultados; y creo que, sin faltar a la modestia, con la que se avienen mejor las lucubraciones que ocupan al hombre pensador en el retiro y en el silencio, puedo suponer que ese caudal no me sea extraño, como fruto de la observación y del estudio atento y perseverante de una inteligencia aleccionada por una larga práctica en los negocios públicos, guiada por la fe en el bien y exenta de las sombras de la vanidad y de las preocupaciones del empirismo, o de la moda».

«Así, pues,—redondeaba su discurso el Dr. Salvatierra—con la independencia de carácter y de pensamiento, natural en mí, comencé mis tareas, apartándome del camino que los utopistas creen especial y no es más que el trillado de las decepciones».

Después de pintar los extravíos políticos exclamaba:

«¡Cosa extraña! A Melgarejo se le increpaba, y con sobrada razón, el haber abierto la puerta a los derroches mediante los empréstitos. Se le reprobaron todos sus actos; y se le siguió imitando y aun excediendo en lo que más se le censuraba!»

Un cuadro de conjunto trazado con el énfasis habitual en el Sr. Salvatierra, mostraba la situación de bancarrota en los siguientes términos:

«La deuda de los empréstitos por sí sola tenía esclavizada a Bolivia por indefinida serie de años; la interna de actualidad por servicios inmediatos y por préstamos del Banco, era cuantiosa y urgente; los contratos inconsiderados de ferrocarril y otras empresas y obligaciones, venían a elevar la cifra de la deuda a un asombroso grado; los ingresos fiscales estaban hipotecados y trasmitidos de antemano a la deuda de empréstitos en su mayor parte, y consumidos todos los restantes. El cáncer de la mala moneda agravaba la situación y completaba el conflicto. El mal había llegado a su último grado; era incurable: la crisis no debía ser sino funesta».

La pintura era cabal, y el ministro estimaba que era menester contar con mucho valor y gran fuerza de voluntad para hacer frente a la situación. «Sin jactancia, me asistían ese valor y esa fuerza», manifestaba con aplomo el informante. «Con ellos—agregaba—y valido de mi experiencia en la casi universalidad de los negocios, cuya clara luz desde el retiro de mi domicilio me había guiado en el estudio patogenésico del mal, he tenido la fortuna de acertar en los medios de combatirlos; y me cabe la satisfacción de anunciaros que se ha conseguido este objeto. La crisis ha pasado; se resolvió de una manera saludable. El país se halla libre del mal; convalece y va en rápido paso a su completo restablecimiento. Vais a ver cómo se ha operado esta transformación».

Apenas habrá otro ministro que se expida en tales términos y se presente al congreso con la grata noticia de haber curado a esa eterna enferma que se llama hacienda pública.

El Dr. Salvatierra había terminado la lectura de su memoria en medio al aplauso frenético de los diputados, que sobre tablas patentizaron su entusiasmo aprobando la siguiente ley:

«Artículo único. Atento el mérito que se revela en la memoria que acaba de leer el H. Ministro de Hacienda e Industria, Dr. Manuel Ignacio Salvatierra, se le acuerda *un voto de honor y confianza* (1).

---

(1)—«Pero no es esto sólo—agrega un cronista de la época—el señor Salvatierra después de haber recibido el más alto galardón a que puede aspirar un hombre en su carrera pública, fué el objeto de los más entusiastas brindis en el banquete con que, en el mismo día, obsequió el Jefe Supremo del Estado a los representantes del pueblo.

«Allí se escuchó, entre las expansiones del más vivo entusiasmo y perfecta cordialidad, el acento del eminente bardo paceño, D. Ricardo Bustamante, en el soneto improvisado que tenemos la complacencia de dar a la estampa, con el brindis que precedió a su lectura. Helos aquí:

«Dejadme olvidar, señores, por breve instante, el serio carácter que inviste mi persona, no de *primer* diputado por cierto, sino de *último* entre los que esta ciudad eligió para la Asamblea.

«Tal excusa solicito porque llevado de mi flaqueza conocida (de coplero el más viejo de La Paz) suelo confiar a la rima, la expresión de mis entusiasmos. Hoy día experimenté uno muy vivo, cuando terminó la lectura pública de su memoria ministerial el digno señor Salvatierra.

«De regreso a mi alojamiento, tracé a la lijera un *soneto* que voy a leeros, y cuyo primer concepto arranca de los últimos contenidos en aquel documento importante, por cuyo tenor sabemos que Bolivia, sumida bajo el peso de una deuda inmensa, cuenta ya con que su obligación al crédito extranjero, se halla reducida a no más de dos millones, caso venturosísimo para la patria, debido al honrado Ministro a quien dedico mis rimados renglones, incorrectos sin duda por haber sido, como véis, improvisados».

«*Homenaje de admiración al Ministro de Hacienda, Sr. Dr. Manuel Ignacio Salvatierra.*

SONETO

Si: comenzamos una nueva vida
Tras larga serie de infecundos años,
En que torpe ambición con sus amaños
Abrió en la patria muy profunda herida.

Estos entusiasmos se debieron principalmente a la liquidación del desgraciado empréstito Church, y a la depreciación de la moneda de Melgarejo y a varias medidas de buena administración con que se había logrado reducir el monto de algunos servicios onerosos.

La labor financiera del ministro laureado en orden a la conversión de la moneda feble, se redujo a revivir el decreto de Melgarejo, de 12 de noviembre de 1866, que depreció en un 25% los pesos de 8 dineros de ley reintegrando con vales la diferencia.

En 1877 se procedió de idéntica manera: los tostones y tomines «Melgarejo» quedaron de súbito reducidos en su valor a las tres cuartas partes, es decir, a treinta y quince centavos, respectivamente. El quebranto del 25% se pagaría, como en 1866, con vales del crédito público, a cuyo fin, al cuarto día del decreto de depreciación, debían presentarse los interesados a entregar la moneda «Melgarejo» que tuvieran, ante las comisiones creadas en las capitales de departamento y provincias. Dichas comisiones funcionarían un solo día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de

---

Hoy vuestra voz al porvenir convida
Con la esperanza de cesar los daños
Y que, en pos de tan recios desengaños,
Ya cobre el pueblo su salud perdida.

A vos se os debe con verdad tal obra,
Hábil Ministro, honrado ciudadano:
Por vos la patria su esplendor recobra
Que su crédito alzáis con diestra mano;
Pues de ver acabamos que en vos sobra
La virtud del patriota y del cristiano.

La Paz, noviembre 20 de 1877.

R. Bustamante.

Prólogo de la Memoria de Hacienda—1877.

la tarde, anotando y devolviendo la moneda presentada.

Los vales de la depreciación servirían para pagar la quinta parte de los derechos de aduana en Cobija y los de exportación de metales del interior en la misma proporción.

Fueron comprendidos en la depreciación los billetes del Banco Nacional que representaban el valor de la moneda feble.

Dada la precipitación con que se llevó a cabo el decreto Salvatierra, no podía menos que esperarse poca afluencia de interesados ante las mesas inscriptoras de la depreciación. Además, la natural desconfianza de las gentes del pueblo, tenía que retraer a muchos poseedores de la moneda depreciada por el temor de que ella no fuese devuelta. También era motivo de restricción, quizá el más serio, la prohibición de presentar sumas menores de 50 pesos. Los que no tenían el mínimum completo debían juntarse con otros hasta formar la suma fijada. Los habitantes de los cantones y comarcas, no podían materialmente beneficiar del decreto por la distancia a las capitales y el breve plazo señalado para la operación.

En estas condiciones, los resultados no eran dudosos.

Apenas se presentaron 1.200.000 pesos en moneda de plata y en billetes, por cuyo 25% se emitieron Bs. 300.000 en vales del crédito público; pero se hizo una curiosa compensación de depreciaciones con el Banco, de donde en apariencia resultaba el gobierno con una ganancia considerable que se aplicó al

pago de la deuda a dicho Banco y quedó todavía un saldo apreciable a favor.

He aquí cómo se procedió en la compensación:

El Banco Nacional en cuenta corriente con el Gobierno.

	DEBE	HABER
A depreciación de Bs. 1.507.019,80 en billetes en circulación	Bs. 376.754,95	
Por depreciación de Bs. 507.177,23 en moneda feble depositada en el Banco		Bs. 126.794,30
Por saldo a igualar		« 249.960,65
	Bs. 376.754,95	Bs. 376.754,95
A saldo a favor del gobierno.....	Bs. 249.960,65	

Si este saldo se hubiera aplicado al pago de los Bs. 300.000 en vales emitidos por la depreciación de la moneda y de los billetes, sólo habrían quedado, según el ministro Salvatierra, Bs. 50.039,35 como único gravamen contra el fisco.

Pero el gobierno prefirió pagar con el citado saldo de..... ..... Bs. 249.960,65
una deuda al Banco por..... « 216.150,49

lo que le reportó el saldo líquido de... Bs. 33.810,16 que se pasó a la Casa de Moneda para acrecentar su capital.

El Dr. Salvatierra hacía sus cálculos sobre estas bases y concluía que la operación, en suma, no gravaba al fisco sino en Bs. 50.039, pero que por atender deudas bancarias onerosas se había preferido dejar en circulación los 300.000 bolivianos en vales.

La realidad era bien distinta.

Lo único que se hacía era especular con el pueblo.

En efecto: Habían Bs. 1.507.019,80 en billetes circulantes cuyo 25% de depreciación arrojaba Bs. 376.754,95. El gobierno se hizo cargo de esta suma para pagarla a los tenedores de los billetes, cobrándosela de antemano al Banco. El Banco pagó religiosamente su depreciación en la siguiente forma:

Con 25% de la moneda feble que tenía en sus arcas	Bs.	126.794,30
Con la deuda que le reconocía el gobierno	«	216.150,49
Saldo entregado a la Casa de Moneda	«	33.810,16
Igual a la depreciación de sus billetes	Bs.	376.754,95

Hasta aquí todo está en orden.

Ahora bien: ¿cómo pagó el gobierno a los tenedores de billetes la suma que había recibido del Banco para hacer frente a la depreciación de los billetes? De ninguna manera. Las comisiones inscribieron la moneda feble y los billetes, y en junto la depreciación del 25% apenas alcanzó a Bs. 300.000, por los que se emitieron los vales.

Es decir, que el total de las monedas y los billetes que el público presentó a las oficinas fiscales,

fué inferior al monto de la depreciación de los billetes únicamente, que el gobierna cobró de antemano al Banco, y que éste pagó sobre la cifra de su arqueo, no sobre la realidad de la presentación de tales billetes por los tenedores.

De esta sencilla manera, el gobierno consumó una gruesa especulación. Pagó con 300.000 bolivianos en vales, la enorme depreciación del 25% de plata y billetes que constituían toda la circulación del país, y recibió en cambio Bs. 376.754,95 que procediendo honestamente debía haber aplicado al pago íntegro de los billetes circulantes, lo que no se hizo.

La pretendida ganancia del fisco en esta forma debía sumarse por millones, pero tal ganancia no era sino la confiscación de la riqueza pública.

En efecto, según los cálculos que desde la época de Melgarejo se hacían, la moneda feble circulante pasaba de diez millones de bolivianos (1), por lo que se había fijado en dos y medio millones el monto de la depreciación. Reduciendo sólo a la mitad el cálculo se tendría:

Depreciación de 5 millones en plata.....	Bs. 1.250.000
Depreciación de 1.507.019 en billetes...	« 376.754
Total de la depreciación.....	Bs. 1.626.754
Y como el gobierno acababa de «cortar el nudo gordiano» de la depreciación emitiendo vales por.....	« 300.000
quedaba una utilidad líquida de.....	Bs. 1.326.754

(1)—Véase Capítulo IV, párrafo III, página 258.

A estos extremos conducía la lógica del ministro Sr. Salvatierra. Lo que en realidad era pérdida de capitales nacionales, se reputaba por él como una ganancia inopinada.

Lo único honesto y justo era convertir la moneda feble con moneda de buena ley y obligar al Banco a proceder de igual manera con sus billetes. La depreciación lisa y llana con la promesa de vales circunscritos a términos perentorios y súbitos, no podía menos que ser un atentado contra la riqueza nacional y una indigna especulación con los ahorros del pueblo.

Y el señor Salvatierra fué laureado por la Asamblea de 1877 (1).

Otra combinación financiera celebrada con más razón que la precedente, fué la liquidación del empréstito Church.

El gobierno había constituído en Londres varias agencias financieras para terminar este desgraciado negocio. Ninguna tuvo resultado plausible. Entre tanto, se seguía un pleito ruidoso sobre la posesión de las £ 700.000 depositadas en el Banco de Londres y destinadas a la construcción del ferrocarril Madera-Mamoré. Tres empresas constructoras habían fracasado sucesivamente. Los fondos resultaban escasos, y la Compañía de Navegación era una simple ficción financiera que carecía en lo absoluto de

(1)—Monto de la moneda feble emitida desde 1830:

De 1830 a 1857—«Bolivar» y «arbolito»	$ 29.892.777
De 1858 a 1859—Tostones Frías	» 4.728.773,4
D 1865 a 1869—Melgarejo	» 6.794.006
	$ 41.415.556,4

capital y de crédito. En estas condiciones, aun cuando se hiciera el ferrocarril, sería un mal negocio, porque de nada serviría una obra en el desierto. El ferrocarril apenas era un medio para desarrollar la empresa de navegación y colonización. Y si ésta no tenía fondos ni estaba dispuesta a llevar adelante sus planes, era una locura comprometer gruesos capitales para salvar las cachuelas. «Nadie que no estuviese en «Bedlam» (casa de locos) querría aceptar ahora una acción como obsequio», decía el procurador general de la alta corte de Londres, refiriéndose al descrédito a que había llegado la Compañía del coronel Church.

Dicha Compañía y su filial la del Ferrocarril, pretendían recoger el citado depósito, para lo que habían suscrito un nuevo contrato de construcción, real o simulado, con los señores Collins. Los tenedores de bonos veían en esto un peligro para la seguridad de sus fondos, y se opusieron a la entrega. En estas condiciones, la actitud de Bolivia, quien en realidad, como contratadora del empréstito, tenía derecho a aquel depósito, debía ser decisiva.

El comité de bonos constituyó un representante en La Paz, el señor Ricardo Reader Harris, quien propuso un nuevo contrato para garantizar el empréstito acordando algunas rebajas de capital e intereses. El ministro señor Salvatierra le planteó llanamente la absoluta liberación de Bolivia y el traspaso de sus acciones y derechos sobre el depósito al comité de tenedores de bonos. La proposición fué aceptada *ad-referendum* y se ratificó después, quedando

Bolivia de esta manera libre del enorme peso del empréstito Church.

Con estos nuevos títulos el comité de tenedores de bonos obtuvo la entrega del depósito de £ 700.000, y Bolivia fué declarada libre de toda responsabilidad.

El gobierno anunció al país la grata nueva, mediante una solemne proclama firmada por el general Daza y su gabinete.

D. Dionisio Derteano que representaba los derechos de Meiggs para la explotación del huano de Mejillones, cobraba al gobierno de Bolivia el interés del 12% y la comisión del 1 ½% trimestral por renovación de crédito, sumando en junto 18% anual sobre una deuda que pasaba de un millón y medio de pesos fuertes.

El Ministro Salvatierra hizo notar la enormidad de la tasa y obtuvo su reducción al 12%, con lo que el fondo de amortización creció en más de cincuenta mil bolivianos semestrales.

Se debe también al citado ministro la transacción definitiva con Juan Wheelwrigth, representante de la casa Alsop & Cº, que a su vez lo era del crédito López Gama.

El capital se redujo a Bs. 835.000 y los intereses se fijaron en 5% anual no capitalizable. Para su pago fueron comprometidos los excedentes de la subvención aduanera de Arica, quedando libres los impuestos sobre salitres y barrilla que anteriormente se habían afectado a este servicio.

El contrato de arrendamiento de las salitreras del Toco en favor de Juan S. Meiggs se perfeccionó bajo el mismo ministerio, habiéndose obtenido Bs. 70.000 de venta anual.

Es digna de aplauso la actitud que asumió el gobierno bajo las inspiraciones del Dr. Salvatierra para declarar rescindido el contrato del ferrocarril de Mejillones. El contratista Meiggs no cumplió sus deberes; se concretó a cobrar los derechos de exportación, dejando abandonada la obra.

De la suma de Bs. 14.945.539 a que ascendían las deudas interna y externa, a fines de 1876, se había llegado por los arbitrios del señor Salvatierra a la siguiente consoladora reducción:

Deuda externa al 31 de diciembre de 1877:

Empréstito Concha y Toro.....	Bs.	537.388,26
Deuda Meiggs (Derteano).....	»	1.462.976,89
	Bs.	2.000.365,15
Deuda interna.....	»	557.443,74
Banco de Antofagasta.....	»	44.981,03
Total.....	Bs.	2.602.789,92

II

Debiendo fenecer en 1878 el contrato de extracción de huano, los gobiernos de Bolivia y Chile hicieron la convocatoria de licitación para la venta de 400.000 toneladas procedentes de los grados 23 y 25. Como en el contrato Meiggs traspasado a Derteano, el

mínimum de explotación mensual sería de cinco mil toneladas, con pagos anticipados por trimestres. La base mínima del precio sería diez pesos fuertes por tonelada.

La Compañía Huanchaca propuso al gobierno hacerse cargo del servicio del empréstito Concha y Toro o Garantizador de Valores, hasta cancelarlo totalmente en diez años.

Emplearía en la operación el producto de los derechos de exportación sobre sus pastas de plata, obligándose en cambio, el gobierno, a no elevar el impuesto de un boliviano por marco durante los diez años y a no licitar su recaudación por el mismo tiempo.

La Compañía podría internar sus pastas a la Casa de Moneda o exportarlas directamente, obligándose empero a internar, en todo caso, cuatro mil marcos mensuales a dicha Casa al precio de Bs. 10,10 el marco de 985 milésimos de ley.

Daba en calidad de anticipo Bs. 100.000 al 12% de intereses, suma que iría amortizándose con los saldos del impuesto de pastas una vez pagado el servicio del empréstito Concha y Toro.

Quedó formalizado el contrato, en cuya virtud Bolivia dejó de preocuparse del servicio de dicho empréstito.

D. Aniceto Arce lanzó la iniciativa de trabajar un ferrocarril del Litoral a La Paz. El gobierno le autorizó a emplear los saldos del contrato de la Com-

pañía Huanchaca para pagar los gastos que demandasen los estudios de dicha obra.

Retirada la propuesta de los señores Speedie y Wheelwrigth para trabajar un ferrocarril de La Paz a Chililaya, fué aprobada la del Sr. Ricardo Reader Harris con privilegio de 50 años, cobro de muellaje en el puerto y compensación de terrenos en Yungas y Larecaja, sin garantía de intereses.

D. Miguel Suárez Arana había realizado una importante explotación para desarrollar su «Empresa Nacional en el Paraguay». Quedó fundado Puerto Suárez en la Bahía Cáceres; pero se necesitaban capitales para continuar la obra colonizadora. Se solicitó y obtuvo autorización para contratar un empréstito de Bs. 50.000 con garantía de los ingresos de las aduanas de Puerto Suárez y La Gahiba.

El Banco Nacional de Bolivia obtuvo autorización para separarse del Consolidado de Chile y constituirse en entidad jurídica distinta y netamente boliviana.

Bajo el nombre de «Banco de Piedad» y «Banco Agrícola» se propusieron dos establecimiento en La Paz y Cochabamba, respectivamente, sin que ninguno hubiera llegado a formalizarse.

III

Después de la grave depreciación de la moneda feble hecha por el ministro Salvatierra, se ordenó la acuñación de moneda sencilla de 23 gramos de peso ponderal y 900 milésimos, a cuyo fin los mineros fue-

ron obligados a internar a la Moneda la cuarta parte de su producción de pastas al precio de Bs. 10,10 para aumentar el medio circulante.

La exportación de plata sellada fué gravada con el 12%, y se amenazó a los mineros con el establecimiento del estanco si persistían en no introducir la cantidad necesaria de pastas a la Moneda.

No tuvieron eco las órdenes del gobierno. La escasez de circulante era cada vez mayor. Mientras que por una parte se extraía la poca moneda que había en el país, de otra disminuía o era nula la acuñación de la Casa de Potosí. En estas circunstancias se prohibió la exportación de plata sellada a causa de no haberse introducido las pastas necesarias para aumentar su *stock*, y se autorizó la emisión de monedas de níquel o cobre en piezas de 1 y 2 centavos hasta la suma de 200.000 bolivianos.

La prohibición fué fácilmente burlada, ya por el contrabándo directo de la moneda, o ya por su refundición en barras que se exportaban libremente pagando 1 boliviano por marco.

Comenzaron a introducirse las pastas y quedó levantada la prohibición, poniéndose en vigencia el impuesto del 12% sobre la plata amonedada y el de 1 boliviano por marco de pastas.

Este impuesto se recaudó por licitaciones regionales bajo muy buenas condiciones. El gravamen recaía sobre la producción y no sobre la exportación, de modo que los licitadores constituían sus recaudadores en los mismos asientos mineros.

Con este sistema el producto de pastas alcanzó a Bs. 386.164 anuales.

La Casa de Moneda carecía de condiciones para emitir moneda fuerte, o sea «bolivianos» de 25 gramos. La maquinaria comprada a Torretti no estaba preparada sino para las piezas sencillas. Por esta razón y la de que el comercio no necesitaba exportar plata sellada, teniendo el comercio libre de pastas, se prohibió la acuñación de las piezas de 25 gramos. El gobierno se hacía esta reflexión: si el costo de la moneda es de 7% y el impuesto 12%, o sean 19% en junto (Bs. 1,73 por marco), no debe convenir al comerciante pagar en moneda sellada sus compromisos internacionales, cuando puede hacerlo en plata piña cuya exportación sólo cuesta 1 boliviano el marco.

El gobierno no se fijaba en que el contrabando podía anular no sólo la diferencia sino la totalidad del impuesto mismo.

Una práctica peligrosa se había establecido en Cochabamba bajo pretexto de facilitar la circulación en las pequeñas transacciones. Varias casas habían emitido moneda de vellón con el nombre de «señas» que comenzaron a circular profusamente. Expidió el gobierno severas y oportunas medidas, prohibiendo en lo absoluto el empleo de señas o fichas, y mandó convertir las que se habían puesto en circulación.

IV

La cuestión aduanera con el Perú fué abordada desde los primeros momentos por el gobierno del ge-

neral Daza. Su secretario, el Dr. Jorge Oblitas, desahució el tratado de comercio y aduanas de 1870, a fin de abrir nuevas negociaciones que aumentaran la subvención de Bs. 405.000 que reconocía la aduana de Arica, o se recobrara la independencia aduanera restableciéndose las oficinas nacionales de La Paz y Oruro.

Después de largas gestiones, el plenipotenciario boliviano D. Zoilo Flores, suscribió el 15 de octubre de 1878 el tratado de comercio y aduanas que en enero del siguiente año se complementó con un protocolo.

El nuevo pacto adoptó el sistema de libre tránsito por Arica y Mollendo para las importaciones y exportaciones de Bolivia, y declaró la libertad del comercio recíproco de ambos países en cuanto a sus productos naturales, industriales y manufacturados.

En compensación de los servicios y facilidades prestados por el Perú al comercio internacional boliviano mediante sus aduanas, muelles, empleados y obras públicas, se reconoció por todo gravamen un derecho de 4% sobre el avalúo de las mercaderías importadas para el consumo de Bolivia, exceptuándose las máquinas y herramientas, los instrumentos, el acero en bruto, las armas para el ejército y las prensas y tipos para imprenta.

Pasados setenta días de depósito, las mercaderías en tránsito pagarían el almacenaje establecido para las destinadas al consumo del Perú.

La libre internación de productos peruanos y recíprocamente de los bolivianos, no comprendía los im-

puestos municipales, que era potestativo el establecerlos, excepción hecha de los rones o alcoholes peruanos, los que sólo tendrían como único impuesto el de 50 centavos por galón.

Se establecieron las agencias aduaneras de Arica y Mollendo para el aforo de las mercaderías conforme a los aranceles bolivianos, los que no debían ser más bajos que los peruanos de 1873.

En el protocolo de enero de 1879 se subió al 5% la participación del Perú como derecho de tránsito, y se hicieron algunas aclaraciones procedimentales para evitar el contrabando.

El tratado del 78 es un paso más hacia el libre tránsito y la independencia aduanera; pero la compensación acordada al Perú fué enorme; 5% *advalorem* representaba en muchos artículos casi el doble del impuesto boliviano (libros, joyas, etc.). Bolivia tuvo que rebajar sus derechos en la misma proporción.

Se restablecieron las aduanas de La Paz y Oruro por administración directa mientras se llamara a licitación. Entraba en los planes financieros del gobierno la licitación de todas las rentas para interesar el lucro privado en la mejora de la recaudación.

Con el mismo criterio se acordó la licitación de las aduanas de Tupiza y del Litoral.

Recobrada la independencia aduanera por el lado del Perú, se adoptó para el régimen general de las aduanas nacionales el importante reglamento de 29 de septiembre de 1878.

Es este un código completo de aduanas, el pri-

mero que ha tenido la República. Fué elaborado por una comisión mixta de comerciantes nacionales y extranjeros, organizada en Cobija por el gobierno del Dr. Frías el año 1875.

Sus importantes disposiciones orgánicas, penales y procedimentales, fueron completadas con una tarifa de derechos específicos y *ad valorem*, uniforme para todas las aduanas nacionales.

Los derechos *ad valorem* fueron fijados en la siguiente proporción:

3% Joyas, libros impresos, relojes.

10% Aceites, pescado salado, planchas de zinc y hierro.

20% Encajes de todas clases, hilados de seda, lana y algodón, tejidos en general.

25% Calzado de jebe, cueros, cristalería y loza, perfumería, joyería falsa, sillas ordinarias para sentarse.

30% Baules, maletas, pañetes, bayetas, calzado de cuero, camisas, pastas y galletas, artículos de talabartería, muebles, ropa hecha, sombreros.

Los derechos específicos fueron fijados como sigue:

Aceite de olivos.....	Bs.	1.—	la arroba.
Aguardiente.....	«	2.—	docena de botellas.
Arroz.....	«	1.60	el quintal.
Azúcar.....	«	1·20	«
Cacao.....	«	1.60	«
Café	«	4.—	«
Harina.....	«	1.60	«
Jabón	«	3.20	«

Manteca.....	Bs.	9.—	«
Tabaco	«	16 —	«
Cigarros.....	«	0.50	«
Trigo	«	0 60 fanega de 135 libras.	
Mantequilla.....	«	0.10 libra.	
Cerveza	«	1.— la docena.	
Licores y mistelas.....	«	2.—	«
Vinos de Champagne...	«	3.20	«
Vinos de Borgoña, Oporto, Vermouth	«	2.—	«
Otros vinos.....	«	1.—	«

Libres de derechos los animales vivos, el acero, el carbón, el cemento, las maderas sin labrar, las carnes frescas y saladas, las frutas frescas, etc.

Conforme a los tratados vigentes, fueron considerados libres todos los artículos peruanos y chilenos, excepto los alcoholes peruanos que conforme al tratado de 1878 estaban gravados con 50 centavos por galón.

Este comercio libre de productos chilenos y peruanos, invariablemente establecido desde los orígenes de la República, ha sido en gran parte la causa de la ruina industrial del país.

El gobierno del general Daza no se distinguió por la creación de nuevos impuestos fuera del derecho de pastaje en la frontera de Antofagasta con la Argentina, esto es en la célebre puna de Atacama que fué tan discutida con motivo de la cuestión de límites entre Chile y aquella República. Se fijó el pastaje en

50 centavos mensuales por cabeza de ganado mayor y 20 centavos por ganado menor, y se gravó con 20 centavos la carga de sal exportada a la Argentina.

Fuera de esto, la barrilla de cobre en toda la República, fué gravada con 25 centavos por quintal, quedando canceladas las patentes que pesaban sobre las minas cupríferas. Más tarde fueron declaradas libres por 5 años las barrillas de cobre del Litoral entre el río Loa y la punta de Chacaya.

El reglamento de juicios coactivos, de 18 de enero de 1877, obra del ministro de hacienda Sr. Salvatierra, marca un evidente progreso en el régimen hacendario.

La extremada descentralización financiera de 1872, dió lugar a más de un conflicto con las municipalidades, especialmente con las de Cochabamba, Sucre y Potosí, que fueron enjuiciadas. La de Cochabamba fué suprimida el año 1877 «por anárquica» y por no haber querido dar un empréstito que el gobierno le pidió.

En aquel año las rentas fiscales atravezaban por el momento más agudo de la crisis a que hacía tan elocuentes alusiones el ministro Salvatierra. El congreso convocado tuvo que suspenderse por falta de fondos. Los perjuicios que causó en el Litoral el terremoto de 9 de mayo del mismo año, obligaron a muchas erogaciones extraordinarias para reparar los edificios fiscales y acudir a los damnificados.

Desde el terremoto de 1877 las calamidades públicas se sucedieron con una persistencia implacable.

El año 1878 hubo una extraordinaria sequía que vino acompañada de la peste, que asoló las poblaciones del interior. A la peste siguió el hambre de 1879, que vino a su vez acompañada con la última calamidad: la guerra.

CAPITULO IX

HAMBRE Y GUERRA

I.—La peste y la carestía de 1878-1879 —Recursos para conjurar el hambre.—Los sueldos del ejército en 1878.
II.—La causa ocasional de la guerra con Chile.—Antecedentes de la «Compañía de Salitres».—Ocupación bélica de Antofagasta.—Las rentas fiscales del Litoral.
III.—La acción financiera del gobierno ante el conflicto.—El secuestro bélico —Descuento de guerra.—Empréstito forzoso.—Préstamo del Banco Nacional.—Impuestos adicionales.
IV.—El Consejo de Ministros.—Acción nula —Protocolo de subsidios con el Perú.
V.—Rentas y gastos nacionales de 1825 a 1879.

I

Una prolongada sequía en 1804 arrasó los sembrados y trajo consigo el hambre y la peste que asolaron las comarcas alto-peruanas, ocasionando una considerable reducción en los padrones de la «mita».

El año 1826 vino otra calamidad, pero de menor importancia, que felizmente pasó sin causar mayores estragos.

Las fiebres perniciosas que el año 1854 apare-

cieron en la provincia de Larecaja y en algunas comarcas de La Paz, tuvieron también alguna gravedad, pero por suerte fueron localizadas y dominadas mediante oportunos auxilios (1).

Pero no hay memoria en los anales de las desgracias públicas, de una calamidad más grande que la que en 1878 y 1879 flajeló al país con la sequía, la peste y el hambre, y fué seguidamente completada con la guerra.

El año 1878 hubo una absoluta suspensión de lluvias. Esto que en todas partes es por sí sola una calamidad, lo fué más en Bolivia, cuya agricultura rutinaria está por entero subordinada a la acción natural del tiempo, sin canales de riego ni represas de agua que pudieran almacenarla para suplir en los años malos las deficiencias del cielo.

Aquel año no había brotado ni una yerba en los campos. Un cielo vacío, extrañamente diáfano, se retrataba tristemente en los sembrados resecos y polvorientos. La semilla depositada en el surco había muerto tostada por un sol de infierno, que parecía iba a hacer saltar la tierra como un petardo.

A la sequía siguieron las pestes. Las pestes coincidieron con el agotamiento de los pocos comestibles rezagados de la anterior cosecha. Consumido el último grano, inclusive el que se había logrado «dessembrar» de los campos, el pueblo se vió materialmente sin qué comer.

El país carecía de medios modernos de comuni-

(1)—La comisión médica informó que habían muerto más de 30.000 indios y que se trataba de una epidemia de fiebre amarilla.

cación para poderse proveer fácil y económicamente de los artículos de primera necesidad en los países vecinos. Además, el pueblo no contaba con ahorros, acostumbrado a vivir al día con la cosecha del año, o a derrochar en una noche el chancelo de la quincena en la mina.

El país que más sufrió con esta calamidad fué Cochabamba, por lo mismo de ser un país totalmente agrícola. Los campesinos se agolparon en masa a las poblaciones en busca de pan. «En los primeros días de enero, fueron recogidos de las calles de Cochabamba más de 200 cadáveres de gente que pereció por hambre». Los que no habían muerto en sus ranchos iban a morir en las ciudades y en los pueblos, o se marchaban a otras regiones en busca del pan que no hallaban en las suyas.

Largas y famélicas caravanas tomaron el camino de la pampa salitrera, de aquella «Camiña» de la leyenda popular, para no volver más a la tierra de los antepasados, que por una crueldad implacable del cielo, negaba hasta el más mísero sustento al labriego.

El «granero del AltoPerú» quedaba así sin grano y sin gente.

¿En cuánto pudieran cifrarse las pérdidas del *año terrible*? ¿Cuánta riqueza desapareció por la súbita paralización de la agricultura y la destrucción de la ganadería?

La emigración y la mortandad dejaron abandonados los campos y vacíos los talleres.—¿Cuánta energía productiva, cuánta suma de capital-hombre quedó así destruído?

Triste tarea sería ésta de inventariar las desgracias nacionales y buscar su significación económica, sin un fin práctico y provechoso. No menos triste será, sin duda, conocer el modo cómo afrontaron los poderes públicos aquella calamidad; pero, a lo menos, el mostrar lo que hicieron o no hicieron, será motivo de saludable enseñanza y servirá al mismo tiempo para invocar la justicia histórica sobre la conducta de los hombres en cuyas manos estuvo la suerte del pueblo en 1879.

¿Qué hicieron esos hombres?

Agotada la caridad privada, imposible ya de sostenerse por sí sola la situación, sin un auxilio extraordinario, las municipalidades de Oruro, Sucre y Cochabamba ensayaron en su reducida esfera de acción financiera, el empleo de algunos recursos.

Las de La Paz y Oruro pidieron al gobierno la libre internación de harinas a sus distritos. El gobierno atendió la solicitud.

El vecindario de Sucre había reunido 35.000 bolivianos para comprar harinas de Chile y venderlas a precio de costo al pueblo. También fué concedida la gracia de su libre internación.

El ayuntamiento de Cochabamba votó por una sola vez, en 1878, un impuesto extraordinario sobre la renta de sus habitantes con una cuota graduable entre 50 centavos y 20 bolivianos. Aprobada la imposición por el gobierno, su ejecución no dió el resultado que reclamaban las circunstancias.

Ya en 1879, cuando la mendicidad había aumentado a tal punto que el orden social estaba ame-

nazado, y la peste había convertido en hospitales las calles de la ciudad y de los pueblos, el concejo municipal votó una ordenanza creando la «Caja de Beneficencia Pública» y destinando a ella los fondos de instrucción y la integridad de las rentas municipales, que, por otra parte, no eran muy considerables. Las escuelas fueron cerradas, los servicios urbanos se redujeron a lo estrictamente necesario. Todos los fondos se emplearon en el establecimiento de casas para la alimentación gratuita del pueblo, y se distribuyeron subsidios a las provincias.

En previsión del porvenir, se decretó la expropiación de la quinta parte de las cosechas venideras, muy problemáticas por cierto, y para pagarlas se proyectó un empréstito forzoso por 50.000 bolivianos, que debían amortizarse con la venta de las mismas cosechas.

La ordenanza municipal para evitar las escandalosas especulaciones que se habían hecho con los víveres, prohibió, bajo pena de comiso, las ventas por mayor de las próximas cosechas. Declaró, al mismo tiempo, que los dueños de fincas tenían la obligación de alimentar a sus colonos y estaban en el deber de recogerlos, a fin de evitar que afluyan a las ciudades para dedicarse a la mendicidad. El gobierno desaprobó ambas disposiciones por respeto al derecho de propiedad y en homenaje a las libertades consagradas por la Carta Magna!

No hizo más el gobierno.

El pueblo fué abandonado a su propia suerte, y se le dejó perecer miserablemente.

Rodeaban al gobierno hombres de reconocida capacidad y de comprobado civismo. Sin embargo, no aparece que éstos hubieran hecho algo eficaz para combatir la calamidad, como no aparece tampoco que en seguida hicieran gran cosa para afrontar debidamente la guerra con Chile.

Poco antes de estallar la guerra, se reformó el presupuesto del ejército.

El pre del soldado que hizo las guerras de la independencia y de la confederación, no pasó de un real diario, fuera de una pequeña gratificación que se daba mensualmente «para barba». Sucesivamente fué elevado a medida que crecían las exigencias de la vida y disminuía el valor de la moneda sencilla. Hasta el año 1878, el soldado sólo tenía 30 centavos diarios, los que ese año se elevaron a 50 centavos y una pequeña fracción, formando la suma de Bs. 15,80 mensuales. Los soldados de preferencia, ganaban 80 centavos más por mes.

Los sueldos de los generales, jefes y oficiales fueron fijados del modo siguiente:

Mayor general.....	Bs.	466,66
General de división.....	«	333,33
Id. « brigada.....	«	266,66
Coronel.....	«	206.—
Teniente coronel.....	«	142.—
Comandante.....	«	126.—
Sargento Mayor.....	«	102.—
Capitán.....	«	68.—

Teniente 1º.....	«	58.—
Id. 2º.....	«	53.—
Subteniente.....	«	48.—

II

Es tiempo ya de reconstituir la historia completa de la «Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta», que fué la causa ocasional de la guerra de 1879. En el curso de esta reseña histórica se han hecho varias referencias a dicha Compañía, siguiendo el orden cronológico de su desarrollo.

Por el gobierno de Melgarejo, de cuya época se derivan las calamidades políticas y financieras del país, se había acordado un extraño privilegio (2 de septiembre de 1868), a título puramente gracioso, a un ciudadano chileno, el Sr. D. José Santos Ossa, que representaba además la «Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama», para beneficiar y exportar durante 15 años el salitre descubierto y que se descubriese en el Litoral boliviano. Obtuvo conjuntamente el privilegio de construir los ferrocarriles que estimare convenientes la sociedad.

La Asamblea de 1871 declaró nulos los actos del gobierno dictatorial de Melgarejo y sin valor las concesiones otorgadas con faltamiento a las leyes vigentes. Los que creyeran tener derecho debían hacerlo valer ante la justicia ordinaria.

La «Sociedad Exploradora de Atacama» había transferido sus derechos a la cas Milbourn Clark & Cº, de Valparaíso, la que no revalidó en tiempo hábil su concesión, motivando la declaratoria de caducidad que expidió el gobierno en enero de 1872.

Después de varias gestiones que hizo el representante de los subrogatarios, D. Domingo Arteaga Alemparte, el gobierno trató de definir la situación jurídica y territorial del privilegio, por medio de la suprema resolución de abril de 1872, reduciéndolo a términos razonables y equitativos. La concesión tendría por base el paralelo 24°, sobre el que se medirían 15 leguas de altura y 25 leguas de fondo.

En la misma época el gobierno resolvió construir por cuenta del Estado, el ferrocarril de Mejillones a Caracoles, y declaró que ningún privilegio privado podía prevalecer al frente de un interés nacional. No obstante, la «Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta» no consideraba apreciable la declaratoria del gobierno y siguió trabajando el ferrocarril que había resuelto extender a lo largo de las salitreras.

«No habría procedido de otro modo en un territorio poseído por salvajes», decía D. Marcial Martínez, que era uno de los concesionarios para trabajar por cuenta del Estado el ferrocarril de Mejillones a Caracoles.

Tanto por la cuestión del ferrocarril cuanto porque no estimaba bien servidos sus intereses con el enorme paralelogramo a que se refería la resolución de 1872, fué comisionado D. Belisario Peró para tentar un nuevo arreglo, a fin de extender las concesiones de la Compañía hacia importantes yacimientos de salitre que quedaban fuera de los límites anteriormente señalados. El gobierno fué autorizado por la Asamblea para transigir con cargo de aprobación legislativa.

Así se originó la transacción de 27 de noviembre de 1873 cuyas bases esenciales fueron fijadas del modo siguiente:

En vez del paralelogramo de 1872, la concesión quedó reducida al Salar del Carmen y a la parte de las Salinas que quedaban dentro de dicho paralelogramo. Además, se le adjudicaron 50 estacas (800m. x 800m. cada estaca) fuera de las citadas Salinas. Hasta este punto tendría derecho de trabajar su ferrocarril privado y empalmaría con el del Estado poniéndole un tercer riel.

D. Belisario Peró había ofrecido espontáneamente la participación de un 10% en las utilidades de la Compañía.

La transacción se sometió al congreso de 1874 que no tuvo tiempo de estudiarla. El año siguiente fué de graves contrariedades para el gobierno del Dr. Frías, que tuvo que debelar varias revoluciones que suspendieron la reunión del congreso, hasta que en 1876 fué derrocado por el general Daza, cuyo primer congreso, reunido a fines de 1877, tomó conocimiento de la transacción, y la aprobó por ley de 14 de febrero de 1878, estableciendo en lugar de la participación del 10% que había ofrecido espontáneamente el representante de la Compañía, el derecho de 10 centavos por quintal de salitre exportado, toda vez que las utilidades de una empresa son siempre difíciles de fijar.

«Pero entre la oferta hecha por la Compañía anónima y la ley que imponía la ligera contribución

antes citada, la distancia era muy grande: los favores habían sido obtenidos y olvidados» (1).

Chile se hizo cargo de la defensa de los intereses de la Compañía anónima y fundó su reclamación diplomática en el art. 4º del tratado de 1874, alegando que no podían imponerse nuevos gravámenes a los capitalistas e industriales chilenos, y amenazó con romper el citado pacto si Bolivia no derogaba el referido impuesto de los 10 centavos. Inútiles fueron las alegaciones de la cancillería boliviana fundadas en que no se trataba de un impuesto de carácter general sino de una condición de orden privado que debía surtir sus efectos entre dos partes contratantes, cuya transacción se había sometido a la aprobación legislativa para su validez, y que en tal virtud cualesquiera contestaciones que surgieran de dicha aprobación, no pertenecían sino al derecho común y salían por tanto de la esfera diplomática. Además, se había hecho notar que aun en el supuesto de que fuera pertinente el artículo 4º del tratado, no podía sostenerse, formalmente, que eran chilenos los capitales e industrias de la «Compañía de Salitres», pues siendo ella una sociedad anónima inscrita en Bolivia para la explotación de sus salitres y teniendo títulos al portador, la cuestión de nacionalidad de capitales no era fundada. «En efecto—anota Caivano en su Historia de la Guerra de América—la Compañía anónima de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, organizada completamente según el sistema inglés, se fundó con

(1)—Caivano.—«Historia de la Guerra de América».

un capital de tres millones de pesos por los señores Edwards y Gibbs—de la América del Norte el primero y de Inglaterra el segundo. Unicamente en 1879, cuando ya había comenzado la guerra, el capital de la sociedad había sido aumentado con dos millones más, que se dividieron en acciones para venderlas al público. Estos datos los obtuvimos de un distinguido personaje chileno, que fué durante largo tiempo Ministro de Hacienda en aquella Nación».

El gobierno en fecha 17 de diciembre de 1878, daba instrucciones al prefecto del Litoral para la ejecución de la ley de febrero, explicando su actitud del modo siguiente:

«Suspendida su ejecución por el reclamo diplomático que dirigió al gobierno el Sr. Encargado de Negocios de la República de Chile, no se ha podido arribar a acuerdo alguno en las diferentes conferencias que ha tenido lugar y aun después de la contestación formal dada a la reclamación; y en esta virtud, el Sr. Presidente de la República, oyendo al Consejo de Ministros, me ordena decir a Ud. que haga efectivo el mencionado impuesto desde la promulgación de la ley.

«El gobierno ha tenido en consideración—sigue el documento oficial—que uno de sus deberes ineludibles, consignado en el art. 89 atribución 5ª de la Constitución del Estado, es ejecutar y hacer cumplir las leyes; y no habría podido permitirse la suspensión definitiva de la citada de 27 de noviembre, sin incurrir en una grave responsabilidad, defraudando recursos fiscales que la ley ha creado y que cada vez

se hacen más necesarios por el desequilibrio de la hacienda pública, causado por la quiebra en la contribución indigenal, en los diezmos y otros ramos.

«Por esta consideración primordial—concluye la nota—y otras que militan en apoyo de la legitimidad con que la Asamblea aprobó la transacción con la modificación del impuesto, se ha decidido el señor Presidente de la República a dar a Ud. la orden indicada que espera será fielmente cumplida.—DAZA.—*Serapio Reyes Ortiz*».

El Sr. Hisk, apoderado de la Compañía, usó de un raro recurso de protesta ante el Notario, y alegó después la falta de notificación personal con la ley.

Ante la protesta de la Compañía, el gobierno obrando con una lógica inflexible—talvez con más lógica que tino—declaró rescindido el contrato de 1873.—La Compañía ha protestado contra la ley aprobatoria de la transacción—razonaba el gobierno en su resolución de 1º de febrero de 1879—lo que importa la ruptura de la transacción y retrotrae las cosas al estado de 1871, es decir, a la anulación de las concesiones graciosas e ilegales de Melgarejo.

Agregaba que «para la validez de la transacción, que es una enorme y gratuita adjudicación», era necesaria la aprobación legislativa, y habiendo sido ella destruída por la protesta, quedaba rescindida y sin efecto la convención de 27 de noviembre de 1873.

La Compañía no respondió por sí. La escuadra chilena se movilizó el 12 de febrero de su apostadero de Caldera. «Cincuenta horas más tarde (14 de febrero de 1879), la ley chilena imperaba en aquella

región, colocando bajo su amparo los intereses chilenos y extranjeros, sin derramar una gota de sangre.....» (1).

Las rentas fiscales del Litoral que quedaron anuladas para Bolivia a consecuencia de la ocupación del ejército chileno, subían a 924.100 bolivianos distribuídos del modo siguiente:

Aduanas del Litoral.....	Bs. 300.000
Productos del huano.....	» 300.000
Exportación de metales de plata.....	» 200.000
Salitreras del Toco.....	» 120.000
Patentes sobre salitreras.....	» 4.100
	Bs. 924.100

Estas sumas fueron calculadas por el presupuesto de 1878.

III

El 26 de febrero comunicó el gobierno a la Nación la noticia de la toma de Antofagasta por la escuadra chilena. Dos días después (1º de marzo), se ordenó el secuestro bélico de las propiedades muebles e inmuebles de todos los chilenos, concediéndose a éstos 10 días de plazo para abandonar el país.

Las minas de empresa chilena no debían quedar interrumpidas en su explotación. El gobierno nombró administradores fiscales para continuar los trabajos ordinarios, y dispuso se pasen al Tesoro Nacional las ganancias líquidas de la explotación.

(1)—Manifiesto diplomático de Chile.—18 de febrero de 1879.

«El embargo—estatuía el decreto—se declarará confiscación siempre que el género de hostilidades chilenas requiera una retaliación enérgica».

Además, se declaró sin valor toda transferencia hecha después del 8 de noviembre de 1878 en que Chile había roto el tratado de 1874.

El decreto del embargo bélico invocaba como fundamento el derecho de represalia, pues Chile se había apoderado violentamente de las riquezas del Litoral boliviano, consumando un despojo a mano armada contra todo principio del derecho de gentes.

El secuestro comprendió los minerales de Corocoro, Socavón de la Virgen de Oruro y acciones chilenas de la Compañía Huanchaca.

Los minerales de Corocoro en el momento del secuestro, tenían unos 42.000 quintales de barrilla del 70%, cuya venta produjo más o menos 320.000 bolivianos. Mediante un contrato de habilitación celebrado con Otto Richter, ingresaron al Tesoro Nacional Bs. 33.102,25 hasta el 28 de marzo de 1880.

El Socavón de la Virgen reconocía un fuerte pasivo que no hizo sino aumentar durante la explotación por cuenta fiscal.

Alcanzaban a 1.135 las acciones chilenas en la Compañía Huanchaca. De julio a noviembre pagó la Compañía Bs. 68.160 por dividendos correspondientes a dichas acciones, obligándose para lo sucesivo a entregar Bs. 11.350 mensuales.

Desde las primeras épocas de la República, el descuento de guerra ha sido el recurso más expedito

de que han echado mano todos los gobiernos. Siguiendo la práctica establecida, el gobierno lo decretó en la siguiente escala:

Sueldos de 300 a 800 bolivianos, 10%.
De Bs. 800 a Bs. 2.000..... 20%.
« « 2.000 « « 5.000..... 25%.
« « 5.000 adelante ..... 33%.

Se votó además un empréstito forzoso por Bs. 1.000.000 al 6%, repartible en cupones proporcionados a la renta de los ciudadanos, quedando exentos los que no tuvieran más de Bs. 300 anuales.

El repartimiento se hizo en la siguiente proporción:

La Paz.....	Bs.	350.000
Oruro.....	«	120.000
Chuquisaca.....	«	130.000
Cochabamba.....	«	160.000
Potosí.....	«	200.000
Tarija.....	«	30.000
Santa Cruz.....	«	10.000
Total.....	Bs.	1.000.000

La recaudación de este empréstito dió lugar a muchas resistencias por el estado económico en que se hallaba la Nación. Sólo el departamento de Santa Cruz cubrió su cuota con un superávit de Bs. 189. Los demás departamentos hicieron reclamaciones sobre los cupos, subiendo éstas a Bs. 256.614,01. Descontado este déficit, sólo alcanzó la recaudación a Bs. 436.053,42, desde marzo de 1879 a mayo de 1880.

Fué torpemente manejado y desperdiciado este recurso. No se procedió con método en el repartimiento ni en la percepción, a tal punto que en muchas partes se ignoraba el monto del cupo forzoso. Las cuentas fueron un caos. Varias no se rindieron; «pues en muchos departamentos—decía el informe presentado a la Convención de 1880—no se saben las sumas votadas, ni quienes sean las personas encargadas de la cobranza, ni de las sumas recaudadas, ni dónde hubieran sido depositadas. Tal sucede por ejemplo en el departamento de La Paz».

Así no podía hacerse la guerra.

El único recurso efectivo con que contó el gobierno fué el préstamo de Bs. 600.000 contraído en el Banco Nacional de Bolivia al 12% de interés y cuya amortización debía hacerse con los derechos de minerales de Huanchaca y Guadalupe.

Al 4 de abril en que se hizo la operación, entregó el Banco la suma de Bs. 400.000, y el resto se comprometió pagar a los dos meses.

La liquidación de abril de 1880 arrojó la suma de Bs. 546.176,49.

Se votó un impuesto adicional de 20 centavos sobre cesto de coca para el fondo de guerra. El remáte arrojó por este concepto la suma de Bs. 36.480.

Se destinó también al fondo de guerra el recargo del 5% sobre internación de mercaderías, ya que los derechos aduaneros debían cobrarse en el Perú.

Los fondos de instrucción se centralizaron para el mismo objeto, y quedó suprimida la instrucción oficial.

Con estos recursos, mezquinos en verdad y de lenta y problemática realización los más de ellos, se puso en campaña el general Daza, que había logrado elevar a 4.500 hombres los 1.200 que formaban el ejército de línea. Si los recursos eran escasos y hasta miserables, los pertrechos de guerra, equipo y vituallas, dejaban mucho que desear. (1)

El ejército debía marchar por Puno, para lo que se contrató con D. Guillermo Speedie la traslación dándosele un anticipo de 100.000 bolivianos y unos 10.000 bolivianos para la construcción de un telégrafo de Chililaya a La Paz. Como fué cambiado el itinerario, aquellos fondos no se emplearon en la movilización, y su falta de oportuno reintegro fué más sentida en esos momentos de angustia.

IV

Quedó en La Paz el gobierno encargado al Consejo de Ministros compuesto apenas de dos miembros. El ministro Reyes Ortiz estaba en Lima, y una vez terminada su misión diplomática, tenía que servir de secretario general a Daza. El de guerra general Jo-

---

(1)—He aquí un cálculo de los recursos extraordinarios con que se movilizó el pequeño ejército de 1879 y se sostuvo hasta mayo de 1880:

Venta de minerales de Corocoro	Bs.	320.000
Acciones de Huanchaca	«	68.160
Descuento de sueldos	«	45.000
Empréstito forzoso	«	436.000
Préstamo del Banco	«	600.000
Recargo aduanero	«	85.000
« coca	«	36.480
Fondos de instrucción	«	83.700
Total	Bs.	1.674.340

fré, fué con el ejército en calidad de Jefe de Estado Mayor. D. Eulogio Doria Medina, ministro de hacienda, viajó al interior para hacer algunos arreglos financieros. Sólo quedaron de gobierno D. Pedro José de Guerra en calidad de Presidente del Consejo, que poco después falleció, y D. Julio Méndez, ministro de instrucción pública y justicia.

Daza en campaña no tenía un comité de defensa nacional que pudiera constituir el nervio de la guerra.

Santa Cruz contó a retaguardia con la infatigable labor de su vicepresidente, el Dr. D. Mariano Enrique Calvo, y de su ministro de hacienda, D. José María de Lara.

Ballivián hizo la campaña de 1842, dejando encomendada la acción militar y financiera del gobierno, al general Pérez de Urdininea y a D. Hilarión Fernández, su ministro de hacienda.

Mas, el capitán general de 1879 no contaba con esas ventajas. En aquellos momentos en que no debía pensarse sino en la salvación de la patria, acumulando recursos y organizando tropas, el gobierno dictaba su importante reglamentación del derecho de propiedad literaria y pasaba sesudas circulares a las prefecturas distribuyéndoles el trabajo para la formación de un código de policía rural.....

Estaba para literatura y códigos rurales el país.

Entre tanto, el ministro D. Serapio Reyes Ortiz firmaba en Lima, después de declarado el *casus-fœderis*, el protocolo de subsidios para el sostenimiento de la guerra, con fecha 15 de abril de 1879.

Bolivia en dicho protocolo se obligaba «a indemnizar al Perú, los gastos que le ocasione la guerra que le ha declarado el gobierno de Chile a consecuencia de su alianza con ella; entendiéndose por tales gastos, los extraordinarios de movilización de su ejército y armada, los de organización, sostenimiento y movilización de la fuerza extraordinaria de mar y tierra, los de compra de armamentos y buques para el ejército o la escuadra; así como el valor de los buques y armamentos perdidos».

El 50% de los derechos de aduana que debían cobrarse en Arica y Mollendo de las mercaderías destinadas a Bolivia, se aplicaba a los gastos de guerra del Perú cuya indemnización reconocía Bolivia. El otro 50% debía también aplicarse por el Perú al pago de los gastos que le ocasionare la alimentación del ejército boliviano.

El 7 de mayo se suscribió un protocolo adicional obligándose el Perú a dar en calidad de préstamo sin intereses, cien mil soles mensuales mientras dure la guerra con Chile.

Sólo una situación desesperada pudo haber autorizado el protocolo de abril, que obligaba a Bolivia al pago de todos los gastos de guerra, propios y ajenos, y colocaba a la República aliada en condiciones económicamente ventajosas, pero también señaladamente desiguales e injustas.

Ese protocolo se modificó el 17 de junio reduciéndose a la mitad de los gastos hechos, la obligación que reconocía Bolivia para indemnizarlos al Perú.

V

De 1825 a 1879, el desarrollo de los recursos fiscales fué insignificante. El país entregado a continuas revueltas que esterilizaron las más importantes reformas hacendarias, no avanzó mucho en su organización financiera ni en el crecimiento de la riqueza pública y privada.

He aquí un cuadro de los ingresos y egresos nacionales de ese período, que no necesita comentario:

	INGRESOS	EGRESOS
1825	$ 1.500.000	1.800.000
1826 a 1829	« 2.000.000	2.349.763
1830	« 1.537.702	1.537.702
1833 a 1835	« 2.033.577,3 ½	2.033.577,3 ½
1840 a 1841	« 1.810.253,5 ½	1.810.253,5 ½
1845 a 1846	« 1.977.139	2.076.505
1847 a 1848	« 2.131.298	2.293.979
1850 a 1857	« 2.093.016	1.919.984
1860	« 2.224.286,5	2.339.704,1
1865	« 2.136.808	2.505.615
1869 a 1870	Bs.2.190.888,18	2.854.666,02
1872	« 2.136.808	2.505.615
1873 a 1874	« 2.929.573,85	4.825.361,37
1878 a 1879	« 1.870.383	1.870.383

La República comenzó su vida con recursos calculados en 1.500.000 pesos. Al terminar los primeros cincuenta años estaba más o menos en las mismas cifras, con gran aumento de obligaciones internas y externas.

INDICE

BIBLIOTECA DEL BANCO
CENTRAL DE BOLIVIA

INDICE

PÁGINAS

Prólogo..... V
Introducción 1

PRIMERA PARTE

LAS FINANZAS COLONIALES

Capítulo I.—*Del Comunismo a la Esclavitud*..... 7

El régimen agrario del Tahuantinsuyo.—Rescate de Atahuallpa.—Las primeras monedas.—Repartimientos, encomiendas y tercios de la corona.

Capítulo II.—*La Minería y el Régimen Monetario.* 13

Carácter precario y forzado de la obra colonizadora.—Descubrimiento de las minas de Potosí.—La «mita» y los «mingas».—Los quintos de oro y plata.—Las «huacas» o tesoros.—El derecho de Cobos.—«Banco de San Carlos».—La Casa de Moneda.—Derecho de señoreaje y costo de acuñación.—El monto de la producción de la plata.

Capítulo III.—*Régimen social y agrario*..... 28

La evolución de la propiedad rural.—La agricultura y la trata de negros.—Caciques, curacas y comunarios.—Composición con la Corona de España.—La tasa y el tributo.—Jamemes, jatunrunas y otras cargas personales.—Los laureados de Carlos III.—Diezmos y veintenas.—Capellanías, censos y mayorazgos.

Capítulo IV.—*El Comercio y los Monopolios*..... 39

Régimen monopolista.—La «Casa de contratación de Sevilla».—Almojarifazgo y derecho de aduanas.—Avería de la Armada, tonelaje y almirantazgo.—Consulado de Comercio.—Estancos de plata, azogue, tabaco, lana de vicuña, solimán, naipes, etc.—Apertura del comercio inglés.—Resumen del comercio de Potosí el año 1603.

Capítulo V.—*El sistema tributario*..... 51

El derecho patrimonial de la corona.—Alcabala y unión de armas.—Papel sellado.—Ventas y renunciación de oficios, y juros de heredad y vitalicios.—Medias annatas, sínodos, espolios, etc.—Bula de la Cruzada.—Temporalidades.—Una síntesis del sistema tributario del coloniaje.

Capítulo VI.—*La Administración financiera*..... 61

El caos del coloniaje.—Jerarquía funcionaria y derecho presupuestal.—Rentas de la corona y del clero.—Algunas cifras.—En vísperas de la revolución de Mayo.—Durante la guerra de los quince años.—¿Cuánto costaron las guerras de la independencia?

SEGUNDA PARTE

ORGANIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LA REPÚBLICA

Capítulo I.—*La Asamblea Nacional de 1825*..... 73

Al declararse la independencia.—La moneda de la «República Bolívar».—Monto de lo acuñado hasta 1830.—El primer empréstito.—Los primeros recursos.—La población el año 1825.

Capítulo II.—*La obra de Bolívar, Sucre y el Congreso de 1826*..... 81

I.—El derecho de propiedad de los indígenas y la abolición del tributo.—Obstáculos opuestos a la reforma.—Repartimiento de tierras en Santa Cruz.

II.—Orígenes del derecho financiero.—Impuesto directo sobre las rentas.—La contribución personal y sus resistencias.—Nuevas bases tributarias.—Patentes comerciales, industriales, profesionales y suntuarias.—El fracaso del nuevo sistema impositivo.

III.—Crédito público.—Emisión de billetes de la renta nacional del 6%.—Indemnizaciones de guerra.—Vales del empréstito de 1826.—Gratificación al ejército libertador.—Reconocimiento de la Deuda española y consolidación de la Deuda patriótica.

IV.—La minería.—Negociación de las minas del Estado.—Rebaja de los derechos metálicos.—Protección al azogue, estaño y cobre.—Oficinas de rescate de minerales.

V.—Régimen aduanero.—Habilitación del puerto La Mar.—Los primeros derechos «ad valorem».—Represión del contrabando.—Corredores de comercio.

VI.—El primer presupuesto de la República.—La contaduría general.—Centralización de los diezmos.—Fondos de instrucción y beneficencia.—Papel sellado y oficina de hipotecas.—El servicio de guerra.

Capítulo II.—*El Gobierno de Santa Cruz*..... 110

I.—Preparando el porvenir.—Hacia la independencia económica.—Fomento del puerto de Cobija.—Primas a la exportación.

II.—Política comercial.—Aranceles proteccionistas.—Derechos de alcabala.—La tarifa mínima de Cobija.—Habilitación de vías comerciales.—El tratado de Arequipa.—Comunidad aduanera de Arica.—Tratado de comercio con Francia.

III.—La minería.—Reducción y supresión de los diezmos y «derecho de Cobos».—Reenganche de trabajadores.—Oficinas de rescate de metales.—Tarifas oficiales para el oro y la plata.—Impuestos de exportación.

IV.—La moneda.—Acuñación del oro.—Los «corbatones» de 1830.—Graves consecuencias del fraude monetario.—Monto de la acuñación de la moneda feble.

V.—Fomento industrial.—Los telares de Cochabamba y Mojos.—Ineficacia de la protección fiscal.—Premios industriales.—Monopolio de la cascarilla.—Prohibición de la caza de chinchilla.

VI.—El primer Banco de circulación y descuento.—Banco de Refacciones.—La Caja de Montepíos.

VII.—La cuestión agraria.—Irrigación de Cochabamba.—Venta del dominio fiscal.—Extinción de vinculaciones.

VIII.—Presupuesto para 1835.—Equivalencia militar con el Perú.—Descuentos de guerra.—Deuda de la confederación.—Impuesto sobre herencias.—Apreciación de la obra financiera de Santa Cruz.

Capítulo IV.—*Durante la Restauración*..... 146

I.—El nacionalismo.

II.—Política comercial.—Proteccionismo y prohibicionismo.—Los nuevos aranceles.—Fomento de Cobija.—Los fraudes aduaneros y la «balanza comercial».

III.—Relaciones con el Perú.—La desaprobación del pacto del Cuzco.—El tratado de 1840.

IV.—Impuesto a la cascarilla.—Presupuesto para 1841.

Capítulo V.—*Después de Ingavi*..... 154

I.—Política internacional.—La invasión al Perú.—Esterilidad de los esfuerzos de Ballivián.—Paz de Puno.—El tratado de 1848.—Libre tránsito.

II—.El militarismo.—Creación de colonias militares.—Recursos para la reforma militar.—Caja de Ahorros.—Comisaría de Guerra.

III.—El huano, la cascarilla y la coca.—Los contratos del huano.—Banco de Rescates de la Cascarilla.—Licitación de la exclusiva.—El Banco de la Coca.

IV.—Política aduanera.—Los aranceles proteccionistas.—El tratamiento del algodón, de los fósforos y de la pólvora.

V.—La producción de plata.—Rebaja especial del impuesto.—Reorganización de los Bancos de Rescate.—El contrabando de pastas.

VI.—La reglamentación de la moneda.—Características monetarias del Reglamento Torrico de 1848.
VII.—Fomento industrial.—Hacia el Oriente.—La compañía belga.—Organización de un «falansterio».—Navegación del Pilcomayo.—La cuestión del puerto.—Del Desaguadero al Pilcomayo.—Mojos industrial—La decadencia fabril.—Monto de la producción nacional.—Tocuyo, jabón, pólvora, vidrio, &, &.—El proceso del fracaso industrial del país.
VIII.—Crédito público.—La renta del 6%.—Venta de bienes fiscales.—Caja Civil de Ahorros.
IX.—Progresos del derecho presupuestal.—Fondos de instrucción.—Varios impuestos.—El Presupuesto para 1845-46.—Las cifras de 1848.—Ley de impuestos que motiva una revolución.

TERCERA PARTE

DE BELZU A DAZA

Capítulo I.—*Belzu y Córdova*..... 189

I.—Relaciones con el Perú.—Alrededor de Arica.—El tratado de 1848.—La deuda peruana.—Interdicción comercial.
II.—Fomento industrial.—Navegación del Beni, Mamoré, Pilcomayo y Bermejo.—La proclamación del principio de libertad fluvial.—El «populacherismo».—Su perniciosa influencia.
III.—El negocio de la cascarilla.—Banco de Quina.—La propuesta Aramayo.—Competencia colombiana.—Contrato Myers & Cª sobre huano.
IV.—Comercio y aduanas.—Contra los comerciantes extranjeros.—Nuevo arancel de aduanas.—Derechos específicos.
V.—El decreto monetario de Bustillo.—Hacia la unificación del circulante.—Casa de Moneda en La Paz.—Protección a la minería.—El impuesto al cobre.—Prohibición de exportar barrilla de estaño.—El problema de la industria metalúrgica.
VI.—Depreciación de los billetes del Crédito público.—Rebaja de intereses.—Suspensión de pagos.
VII.—El presupuesto de 1850.—Alcabala de enajenaciones e impuestos sobre herencias.
VIII.—Las cifras del censo de 1854.—Proporción del crecimiento vegetativo de la población.

Capítulo II.—*El Dictador Linares*..... 219

I.—Saneamiento financiero.—Reducción de sueldos.—Centralización administrativa.—Crédito nacional.
II.—Derecho presupuestal.—Sus bases fundamentales.—Caja Central de pagamentos.—Reglas de liquidación financial.—El presupuesto de 1860.
III.—El decreto monetario de Frías.—Supresión de la Casa de Moneda de La Paz.—El precio de la plata.—La represión del contrabando y el monopolio del azogue.—Libre exportación de barrilla.—La propiedad de las salinas.
IV.—Proyecto de empréstito de £. 1.000.000.—Sus bases y su aplicación.—Del Desaguadero al Pacífico.
V.—Legislación industrial.—La quina y el tocuyo.—Interdicción con el Perú.

Capítulo III.—*Durante el Gobierno de Achá*..... 231

I.—Continuación del «Programa de Septiembre».—Supresión de la Caja Central.—Descentralización financiera.—Alcabala de enajenaciones. —Supresión del monopolio del azogue.—Impuesto a la sal, al azúcar, &.—Protección a la chinchilla.—Premios industriales.
II.—Régimen agrario.—El perfeccionamiento de la propiedad del indio.—Venta de terrenos sobrantes.—Supresión de los diezmos.—Establecimiento del catastro.
III.—La invasión chilena de 1863.—Ley monetaria de la Asamblea Nacional.—Creación del «boliviano» de 100 centavos.—Monedas de oro y cobre.—Impuestos sobre barras y barrillas de cobre y estaño.
IV—Banco Hipotecario.—Fracaso de la escuela de agricultura de Cochabamba.—Amortización de bonos en licitación.—Las primeras estampillas postales.
V.—Régimen aduanero.—El arancel fiscalista de 1864.—Gravamen de los productos argentinos.—Recaudaciones de Cobija.
VI.—Presupuesto de 1865.—El servicio de guerra.

Capítulo IV.—*Las finanzas de Melgarejo* (1ª parte) 248

I.—Consideraciones generales sobre el «sexenio».
II.—Relaciones internacionales.—Tratado con el Perú.—Subvención de Arica.—Tratado con Chile.—La comunidad de Mejillones.—Tratado con el Brasil.—La navegación fluvial.—Libre comercio con la Argentina.
III.—La cuestión monetaria.—«Pesos Melgarejo».—El monto de lo acuñado.—La moneda sencilla de Torretti.—Compra de la maquinaria a vapor.—Pena de muerte contra los monederos falsos.—Proyecto de conversión de la moneda feble.—Las dos combinaciones financieras de Torretti.—La reforma monetaria de Lastra.—Disminución de pastas de plata.—Impuestos y privilegios.
IV.—Los recursos ordinarios del gobierno.—Patentes civiles.—Impuestos al café, al tabaco y a las lanas.—Creación de los timbres de transacción.—Nuevo plan rentístico de 1868.—Abolición de los diezmos. —El presupuesto de 1869-1870.

Capítulo V.—*Las finanazas de Melgarejo* (2ª parte) 275

I.—El caos financiero.
II.—Las grandes negociaciones de la época.—Los cupos forzosos.—La Comisaría de Guerra y la Caja Central.—La misión financiera de Vergara Albano.—Empréstito Concha y Toro.—Contrato Luciano Arman.—Empréstito de La Chambre & Cº—Las negociaciones de López Gama.—Empréstito Meiggs y negocio de huanos.—Los orígenes de la «Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta».
III.—La empresa Church.—La propuesta Piper & Cº—Navegación del Pilcomayo.
IV.—La venta de las tierras de comunidad.—El monto de los remates.—Los errores de la Asamblea de 1868 en orden al problema social y agrario.—Venta de la finca de Cliza.
V.—«Banco Boliviano».—«Crédito Hipotecario de Bolivia».
VI.—La liquidación de la bancarrota.

Capítulo VI.—*Reparando el Desastre*..... 323

I.—Los métodos revolucionarios.
II.—Reivindicación de las tierras de comunidad.—Suspensión de la venta de tierras baldías.
III.—Arregio Velarde-Meiggs.—El empréstito Church.—Transacción Milbourn Clark & Cº—Ferrocarril Mejillones-Caracoles.—Ferrocarril a Tacna.
IV.—Legislación monetaria de 1872.—La moneda sencilla de 23 gramos.—Conversión de la feble.—Supresión del monopolio de pastas.—Monto de la acuñación de plata.
V.—Empréstito de £. 2.000.000.—El derecho presupuestal.—La ley financial de 1872.—Descentralización rentística.—Vigencia del presupuesto de 1864.—Varios impuestos.—Junta visitadora de hacienda.

Capítulo VII.—*Frías y Ballivián*..... 344

I.—Apreciaciones de conjunto.
II.—Tratado de aduanas con el Perú.—Tratado de 1874 con Chile.—Quebranto de la renta aduanera del Litoral.
III.—Transacciones y nuevos contratos con López Gama.—Alsop & Cº—Crédito Valdeavellano y Cº—Contrato Wattson.—Meiggs y el ferrocarril de Mejillones.
IV.—El fracaso de la empresa Church.—Previsiones a posteriori.—El contrato secreto de Meiggs.
V.—La transacción con la «Compañía de Salitres».—«Empresa Nacional en el Paraguay».—La navegación del Desaguadero.
VI.—Comercio libre de la plata.—Impuesto proporcional.—Patentes mineras.—Conversión de la moneda feble.—Empréstito interno.
VII.—Ley de exvinculación de tierras.—Impuesto predial por repartimiento.—Varios impuestos.—El presupuesto de 1873-74.—Deuda externa.

Capítulo VIII.—*Durante el Gobierno de Daza*.... 370

I.—El ministro Salvatierra.—Depreciación violenta de la moneda feble.—Pérdidas que se reputan ganancias.—Definitiva liquidación del empréstito Church.—Cuentas de Derteano y Alsop.—Salitreras del Toco.—Rescición del contrato ferroviario de Mejillones.—Deuda pública a fines de 1877.
II.—Licitación del huano.—Huanchaca y el empréstito chileno.—Estudios del ferrocarril del Litoral.—Concesión del ferrocarril a Chililaya.—Empréstito para puerto Suárez.—Asuntos bancarios.
III.—La moneda sencilla.—Impuestos de exportación de pastas.—Medidas para evitar la crisis monetaria.
IV.—Desahucio del tratado de comercio y aduanas con el Perú.—El tratado de 1878.—La primera reglamentación aduanera.—Derechos «ad valorem» y específicos.—El pastaje en la puna de Atacama.—Impuesto a la barrilla de cobre.—La serie de calamidades públicas.

Capítulo III.—*Hambre y Guerra*..... 393

I.—La peste y la carestía de 1878-1879.—Recursos para conjurar el hambre.—Los sueldos del ejército en 1878.
II.—La causa ocasional de la guerra con Chile.—Antecedentes de la «Compañía de Salitres».—Ocupación bélica de Antofagasta.—Las rentas fiscales del Litoral.

III.—La acción financiera del gobierno ante el conflicto.—El secuestro bélico.—Descuento de guerra.—Empréstito forzoso.—Préstamo del Banco Nacional.—Impuestos adicionales.

IV.—El Consejo de Ministros.—Acción nula.—Protocolo de subsidios con el Perú.

V.—Rentas y gastos nacionales de 1825 a 1879.

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Biblioteca
7-8-87
7 45 p.m.
J. Calderón